



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y
SEGUNDA INSTANCIA SOBRE ROBO AGRAVADO, EN
EL EXPEDIENTE N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01,
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE –
CHICLAYO. 2016**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

AUTOR

BACH. ODILO PERALTA FLORES

ASESORA

ABOG. SONIA NANCY DÍAZ DÍAZ

CHICLAYO – PERÚ

2016

JURADO EVALUADOR DE TESIS

Abog. Hernán Cabrera Montalvo

Presidente

Mgtr. Carlos Ticona Pari

Secretario

Mgtr. Oscar Bengamín Sánchez

Miembro

Abog. Sonia Nancy Díaz Díaz

Asesora

AGRADECIMIENTO

A Dios, por la sabiduría y el entendimiento para culminar mi carrera de manera exitosa.

Odilo Peralta Flores.

DEDICATORIA

A mi querida esposa Victoria, por ser mi motor, por darme las fuerzas en los momentos buenos y en los no tan buenos, por ser mi soporte en este camino que decidí seguir, porque todo esto es por ella.

A mis hijos Carlos y Yenny, por su confianza depositada en mí, y porque el cumplimiento de mis metas son también las tuyas; y a mis adorados nietos Roger Eduardo, Carlos Daniel y Rodrigo Sebastián, que esta meta cumplida sea la inspiración para su superación personal.

Odilo Peralta Flores

RESUMEN

La investigación tuvo como problema: ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre, robo agravado según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo, 2016? , el objetivo fue determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta; mientras que, de la sentencia de segunda instancia: muy alta, muy alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de ambas sentencias, fueron de rango muy alta, respectivamente.

Palabras clave: calidad, motivación, rango, sentencia y robo agravado.

ABSTRACT

The research was the problem: What is the quality of the judgments of first and second instance on, aggravated robbery under relevant regulatory, doctrinal and jurisprudential parameters, file No. 3110-2011-48-1706-JR-PE- 01 of the Judicial District of Lambayeque - Chiclayo, 2016? The objective was to determine the quality of judgments under study. It is of type, quantitative and qualitative, descriptive exploratory level, not experimental, retrospective and cross-sectional design. The unit of analysis was a court record, selected by convenience sampling; to collect data observation techniques and content analysis were used; and as a checklist instrument, validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the exhibition, preamble and operative part belonging to: the judgment of first instance were rank: very high, high and very high; while the second instance judgment: very high, high and very high. It was concluded that the quality of both judgments were very high, respectively range.

Keywords: quality, motivation, rank, and aggravated robbery sentence.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Jurado evaluador de tesis	ii
Agradecimiento.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Resumen.....	v
Abstract.....	vi
Índice general.....	vii
Índice de cuadros de resultados	xiii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA.....	7
2.1. ANTECEDENTES.....	7
2.2. BASES TEÓRICAS.....	12
2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas, generales relacionadas con las sentencias en estudio.....	12
2.2.1.1. Garantías Constitucionales del Proceso Penal	12
2.2.1.1.1. Garantías generales	12
2.2.1.1.1.1. Principio de Presunción de Inocencia	12
2.2.1.1.1.2. Principio del Derecho de Defensa.....	13
2.2.1.1.1.3. Principio del debido proceso.....	14
2.2.1.1.1.4. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	15
2.2.1.1.2. Garantías de la Jurisdicción	16
2.2.1.1.2.1. Unidad y exclusividad de la jurisdicción	16
2.2.1.1.2.2. Juez legal o predeterminado por la ley	18
2.2.1.1.2.3. Imparcialidad e independencia judicial	19
2.2.1.1.3. Garantías procedimentales	21
2.2.1.1.3.1. Garantía de la no incriminación	21
2.2.1.1.3.2. Derecho a un proceso sin dilaciones	22
2.2.1.1.3.3. La garantía de la cosa juzgada.....	22
2.2.1.1.3.4. La publicidad de los juicios	23
2.2.1.1.3.5. La garantía de la instancia plural	25

2.2.1.1.3.6. La garantía de la igualdad de armas.....	25
2.2.1.1.3.7. La garantía de la motivación	26
2.2.1.1.3.8. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes	27
2.2.1.2. El Derecho Penal y El Ejercicio Del Ius Puniendi.....	28
2.2.1.3. La jurisdicción	30
2.2.1.3.1. Conceptos	30
2.2.1.3.2. Elementos	31
2.2.1.4. La competencia.....	31
2.2.1.4.1. Conceptos	31
2.2.1.4.2. La regulación de la competencia en materia penal	32
2.2.1.4.3. Determinación de la competencia en el caso en estudio	36
2.2.1.5. La acción penal.....	37
2.2.1.5.1. Conceptos	37
2.2.1.5.2. Clases de acción penal	38
2.2.1.5.3. Características del derecho de acción	38
2.2.1.5.4. Titularidad en el ejercicio de la acción penal	39
2.2.1.5.5. Regulación de la acción penal.....	41
2.2.1.6. El Proceso Penal	41
2.2.1.6.1. Conceptos.....	41
2.2.1.6.2. Clases de proceso penal	42
2.2.1.6.3. Principios aplicables al proceso penal	43
2.2.1.6.3.1. Principio de legalidad	44
2.2.1.6.3.2. Principio de lesividad.....	45
2.2.1.6.3.3. Principio de culpabilidad penal.....	46
2.2.1.6.3.4. Principio de proporcionalidad de la pena	47
2.2.1.6.3.5. Principio acusatorio	48
2.2.1.6.3.6. Principio de correlación entre acusación y sentencia.....	50
2.2.1.6.4. Finalidad del proceso penal	51
2.2.1.6.5. Clases de proceso penal	52
2.2.1.6.5.1. Antes de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal.....	52
2.2.1.6.5.1.1. El proceso penal sumario.....	52
2.2.1.6.5.1.2. El proceso penal ordinario.....	53

2.2.1.6.5.2. Características del proceso penal sumario y ordinario.....	53
2.2.1.6.5.3. Los procesos penales en el Nuevo Código Procesal Penal.....	54
2.2.1.6.5.4. Identificación del proceso penal en el caso en estudio.....	55
2.2.1.7. Los sujetos procesales	55
2.2.1.7.1. El Ministerio Público	55
2.2.1.7.1.1. Conceptos	55
2.2.1.7.1.2. Atribuciones del Ministerio Público	55
2.2.1.7.2. El Juez penal.....	56
2.2.1.7.2.1 Conceptos de juez.....	56
2.2.1.7.2.2. Órganos jurisdiccionales en materia penal	56
2.2.1.7.3. El imputado	57
2.2.1.7.3.1. Conceptos	57
2.2.1.7.3.2. Derechos del imputado	57
2.2.1.7.4. El abogado defensor	59
2.2.1.7.4.1. Conceptos	59
2.2.1.7.4.2. Requisitos, impedimentos, deberes y derechos	59
2.2.1.7.4.3. El defensor de oficio	61
2.2.1.7.5. El agraviado.....	61
2.2.1.7.5.1. Conceptos	61
2.2.1.7.5.2. Intervención del agraviado en el proceso.....	62
2.2.1.7.5.3. Constitución en parte civil	62
2.2.1.8. Las medidas coercitivas.....	62
2.2.1.8.1. Conceptos.....	62
2.2.1.8.2. Principios para su aplicación.....	62
2.2.1.8.3. Clasificación de las medidas coercitivas.....	64
2.2.1.9. La prueba	68
2.2.1.9.1. Conceptos	68
2.2.1.9.2. El objeto de la prueba	69
2.2.1.9.3. La valoración de la prueba.....	70
2.2.1.9.4. El sistema de la sana crítica o de la apreciación razonada.....	71
2.2.1.9.5. Principios de la valoración probatoria.....	70
2.2.1.9.5.1. Principio de unidad de la prueba.....	72

2.2.1.9.5.2. Principio de la comunidad de la prueba	72
2.2.1.9.5.3. Principio de la autonomía de la prueba	72
2.2.1.9.5.4. Principio de la carga de la prueba.....	72
2.2.1.9.6. Etapas de la valoración de la prueba	72
2.2.1.9.6.1. Valoración individual de la prueba	73
2.2.1.9.6.1.1. La apreciación de la prueba.....	73
2.2.1.9.6.1.2. Juicio de incorporación legal.....	73
2.2.1.9.6.1.3. Juicio de fiabilidad probatoria	73
2.2.1.9.6.1.4. Interpretación de la prueba	74
2.2.1.9.6.1.5. Juicio de verosimilitud	75
2.2.1.9.6.1.6. Comprobación entre los hechos probados y los hechos alegados	76
2.2.1.9.6.2. Valoración conjunta de las pruebas individuales.....	76
2.2.1.9.6.2.1. La reconstrucción del hecho probado	77
2.2.1.9.6.2.2. Razonamiento conjunto.....	77
2.2.1.9.7. Los medios probatorios actuados en el proceso judicial.....	78
2.2.1.9.7.1. La testimonial	78
2.2.1.9.7.2. Pericias	82
2.2.1.9.7.3. Documentos.....	84
2.2.1.10. La sentencia	86
2.2.1.10.1. Etimología	86
2.2.1.10.2. Conceptos.....	86
2.2.1.10.3. La sentencia penal	87
2.2.1.10.4. La motivación de la sentencia.....	88
2.2.1.10.4.1. La motivación como justificación de la decisión.....	89
2.2.1.10.4.2. La motivación como actividad	89
2.2.1.10.4.3. La motivación como discurso.....	89
2.2.1.10.5. La función de la motivación en la sentencia.....	90
2.2.1.10.6. La motivación como justificación interna y externa de la decisión	91
2.2.1.10.7. La construcción probatoria en la sentencia.....	92
2.2.1.10.8. La construcción jurídica en la sentencia.....	93
2.2.1.10.9. La motivación del razonamiento judicial	94
2.2.1.10.10. Estructura y contenido de la sentencia	94

2.2.1.10.11. Parámetros de la sentencia de primera instancia.....	101
2.2.1.10.11.1. De la parte expositiva.....	101
2.2.1.10.11.2. De la parte considerativa.....	104
2.2.1.10.11.3. De la parte resolutive.....	139
2.2.1.10.12. Parámetros de la sentencia de segunda instancia.....	144
2.2.1.10.12.1. De la parte expositiva.....	144
2.2.1.10.12.2. De la parte considerativa.....	146
2.2.1.10.12.3. De la parte resolutive	155
2.2.1.11. Medios impugnatorios en el proceso penal.....	148
2.2.1.11.1. Conceptos.....	148
2.2.1.11.2. Fundamentos normativos del derecho a impugnar.....	149
2.2.1.11.3. Finalidad de los medios impugnatorios	149
2.2.1.11.4. Los recursos impugnatorios en el proceso penal peruano.....	150
2.2.1.11.4.1. Los medios impugnatorios según el Nuevo Código Procesal Penal	150
2.2.1.11.4.1.1. El recurso de reposición.....	151
2.2.1.11.4.1.2. El recurso de apelación.....	151
2.2.1.11.4.1.3. El recurso de casación.....	152
2.2.1.11.4.1.4. El recurso de queja.....	154
2.2.1.11.5. Formalidades para la presentación de los recursos.....	154
2.2.1.11.6. Medio impugnatorio utilizado en el proceso judicial en estudio.....	154
2.2.2. Desarrollo de instituciones jurídicas, específicas relacionadas con el(os)	
delito(s) sancionado en las sentencias en estudio.....	155
2.2.2.1. Identificación del delito sancionado en las sentencias en estudio	155
2.2.2.2. Ubicación del(os) delitos) en el Código Penal.....	155
2.2.2.3. Desarrollo de contenidos estrictamente relacionados con el delito.....	155
2.2.2.4. El delito de robo agravado.....	172
2.2.2.5. El delito de robo agravado en la sentencia en estudio	182
2.3. MARCO CONCEPTUAL	185
III. METODOLOGÍA	188
3.1. Tipo y nivel de la investigación.....	188
3.2. Diseño de investigación	190
3.3. Unidad de análisis.....	191

3.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores	192
3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos	194
3.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos	195
3.7. Matriz de consistencia lógica.....	197
3.8. Principios éticos.....	200
3.9. Hipótesis.	200
IV. RESULTADOS.....	201
4.1. Resultados	201
4.2. Análisis de resultados	279
V. CONCLUSIONES.....	289
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	294

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia empírica del objeto de estudio: sentencias de primera y segunda instancia del expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01.....	304
Anexo 2. Definición y operacionalización de la variable e indicadores.....	342
Anexo 3. Instrumento de recojo de datos	348
Anexo 4. Procedimiento de recolección, organización, calificación de datos y determinación de la variable.....	358
Anexo5. Declaración de compromiso ético.....	371

INDICE DE CUADROS DE RESULTADOS

Resultados parciales de la sentencia de primera instancia	
Cuadro 1. Calidad de la parte expositiva	201
Cuadro 2. Calidad de la parte considerativa	222
Cuadro 3. Calidad de la parte resolutive	248
Resultados parciales de la sentencia de segunda instancia	
Cuadro 4. Calidad de la parte expositiva	251
Cuadro 5. Calidad de la parte considerativa	259
Cuadro 6. Calidad de la parte resolutive	272
Resultados consolidados de las sentencias en estudio	
Cuadro 7. Calidad de la sentencia de 1ra. Instancia	275
Cuadro 8. Calidad de la sentencia de 2da. Instancia.	277

I. INTRODUCCION

La administración de justicia es una labor que corresponde al Estado, está prevista para atender los conflictos que surjan entre sus integrantes, es una labor que contribuye en la construcción de la seguridad jurídica, la construcción de la paz social y el bienestar común; en ese propósito se enfrenta a una serie de obstáculos que comprometen su transparencia y la confianza que se debe tener.

Para comprender al fenómeno de la Administración de Justicia, requiere ser contextualizada, porque está latente en todos los sistemas judiciales del mundo, comprende tanto a países de mayor estabilidad política y desarrollo económico, como a aquellos que se encuentran en desarrollo; se trata de un problema real y universal (Sánchez, 2004).

En el contexto internacional

La reforma de la administración de justicia supone, en muchas ocasiones, cambiar el rol del juez en el proceso. Estos cambios surgen por lo general de las nuevas normas procesales, pero en algunos casos es posible también cambiar la frecuencia, intensidad, impacto y forma de intervención de los jueces, modificando algunas pautas sobre el manejo de los casos y el flujo de la información en la oficina judicial, y lograr con ello un mayor control del proceso. (Carlos G. 2011)

Para Pimentel (2013) Presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), la administración de justicia, no obstante los avances conseguidos en los últimos años; aún, se muestra como una organización lenta y congestionada, que no marcha en sintonía con la sociedad y los servicios que ellos solicitan. Los progresos alcanzados no han satisfecho a los ciudadanos, que continúan pensando que la justicia avanza a un ritmo lento que otros ámbitos de las administraciones públicas y demandan un servicio que optimice la inversión pública en justicia y a la vez sea impecable, eficaz y transparente.

En Venezuela a partir de la década de los noventa con las llamadas reformas de segunda generación del Estado, orientadas bajo el proceso de reestructuración de la economía, la modernización del poder judicial ha sido señalada como uno de los ámbitos

institucionales del aparato público que se debe transformar en pro de una eficiente internacionalización de la producción (Hausman, 1997).

La Administración de Justicia en la República Bolivariana y Venezolana visto es el conjunto de actividades por las cuales el Poder Judicial, en ejercicio de su jurisdicción (atribución de administrar justicia en nombre del Estado), resuelve conflictos jurídicos, mediante la aplicación de las normas jurídicas. Orientándose hacia el valor supremo de la justicia, actividad cumplida exclusiva y excluyentemente por sus órganos jurisdiccionales, tales como la Corte Suprema, Salas y Juzgados de todas las especialidades y niveles, cualquiera que sea su ubicación en el territorio nacional y que integran el Poder Judicial. (Abrego, 1997)

Tiene como finalidad que a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, garantizar la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional.

El tomar en cuenta los derechos humanos como una variable de suma importancia para el mantenimiento de los sistemas democráticos tiene a su vez razones históricas. La caída del comunismo en Europa del Este y el fin de los regímenes dictatoriales en América Latina dejó al desnudo a la democracia realmente existente, obligándola a justificarse más por los méritos propios que por los defectos ajenos (Lechner, 1996). En este sentido, la perfectibilidad de la democracia pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En el ámbito peruano:

En el Perú, la carga de la Corte Suprema se debe a que “los abogados se han acostumbrado a que cada vez que pierden un juicio [en segunda y última instancia] apelan a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, para encontrar una nueva vía para discutir el tema, o incluso para justificar ante sus clientes haber perdido un juicio”, señala Miriam Pinares, jueza superior de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Tales apelaciones no sólo incrementan la carga procesal, sino que también incrementan la carga laboral de los jueces, pues deben dedicar parte de su tiempo a contestar tales denuncias, puesto que la Academia de la Magistratura

contabiliza tales apelaciones para decidir su ratificación o no, agrega Pinares. (CADE, 2014)

Lo que expresa el marco constitucional y normativo actual sobre la independencia judicial no es, sin embargo, más que la punta del iceberg de una problemática institucional, política y social mucho más grave, la cual ha venido marcando fuertemente la labor de la administración de justicia peruana durante los últimos años.

Precisamente, a partir de la década del noventa el sistema judicial fue objeto –y lo sigue siendo– de una evaluación constante por parte de diferentes organismos, tanto internacionales como nacionales, sobre la situación de su independencia y del respeto que mantiene en relación con otros estándares de justicia y con el debido proceso. Esta supervisión coincidió, como es obvio, con el inicio de la aplicación de un conjunto de mecanismos, promovidos por el gobierno fujimorista, dirigidos a someter y poner bajos sus órdenes al Poder Judicial y al conjunto de organismos del sistema de justicia; muchos de estos mecanismos estuvieron encubiertos bajo un proceso de reforma judicial, o justificados por la violencia política o la inseguridad ciudadana. (Vargas, 2003)

Por su parte, la Academia de la Magistratura (AMAG), publicó el Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales elaborado por Ricardo León Pastor (2008), un experto en metodología. Se trata de un documento, donde se observa un conjunto de criterios para elaborar resoluciones judiciales; sin embargo no se sabe si la aplican o no, y en todo caso, de qué forma ha mejorado a revertir la percepción que los peruanos tienen de la Administración de Justicia.

En el ámbito del Distrito Judicial de Lambayeque

En Lambayeque, hasta setiembre del 2016, más de 2,000 casos de violencia familiar atendió la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la mayoría de ellos agresiones psicológicas, seguidas de maltrato físico, informó la presidenta del citado órgano jurisdiccional, Ana Salés del Castillo. Tras sostener una reunión con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, con la finalidad de informar sobre los avances del trabajo en materia de familia y la nueva Ley N° 30364 de Violencia Familiar en el Distrito Judicial de Lambayeque, la magistrada detalló que los casos de maltrato psicológico sumaron 1,056 denuncias, seguido de maltrato físico-psicológico (710

casos), agresión física (436), maltrato económico y patrimonial (5) y agresión sexual (2 casos).

Destacó también que esa corte emitió 2,308 medidas de protección desde la vigencia de la citada ley, el 24 de noviembre del 2015, hasta el 30 de junio de este año, De igual manera, dijo que al Ministerio Público se derivaron 1,539 expedientes por violencia.

“Los órganos jurisdiccionales con competencia en violencia familiar, entre juzgados especializados de familia, mixtos y civiles, suman 16, mientras que los juzgados de paz letrados totalizan 19”, anotó. (Agencia de Noticias Andina, 15/9/2016)

Efectos de la problemática de la administración de justicia, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

El perfil de la administración de justicia en diversos contextos, surtió efectos en la universidad, propició las inquietudes investigativas, reforzó preferencias y priorización de los temas, que se concretó en la creación de la línea de investigación titulada: “*Análisis de Sentencias de Procesos Culminados en los Distritos Judiciales del Perú, en Función de la Mejora Continua de la Calidad de las Decisiones Judiciales*” (ULADECH, 2013), por ésta razón para ejecutar la línea de investigación y obtener investigaciones individuales, que conforman la línea de investigación se utilizan procesos judiciales documentados (expedientes), la selección de cada uno, se realiza usando el método no probabilístico sujeto a técnicas de conveniencia.

El presente trabajo es una investigación individual derivado de la línea de investigación de la carrera profesional, para su elaboración se utilizó el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01 del Distrito Judicial de Lambayeque; el órgano jurisdiccional de origen pertenece a la ciudad de Chiclayo; comprende un proceso penal.

La sentencia de primera instancia fue expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo que condenó a la persona de “B” por el delito de robo agravado en agravio de “A” a una pena privativa de Lambayeque de trece años afectiva, asimismo, pagar una reparación civil de un mil nuevos soles a favor del agraviado.

Por su parte el sentenciado impugnó la sentencia de primera instancia, en el recurso impugnatorio expresa ser inocente y solicita ser absuelto; esto motivó la intervención de

la Segunda Sala Penal de Apelaciones cuya decisión fue confirmar la sentencia condenatoria, expedida, en primera instancia. Finalmente, computando plazos relevantes, desde la formalización de la denuncia hasta la expedición de la sentencia de segunda instancia, el proceso judicial se resolvió luego de un año y siete días, aproximadamente.

De otro lado, la descripción de la realidad general, la presentación de la línea de investigación y, el perfil del proceso penal, facilitaron la formulación del enunciado del problema de investigación:

¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01 del Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo, 2016?

Para resolver el problema planteado se estableció un objetivo general.

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01 del Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo, 2016.

Igualmente para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos:

Respecto a la sentencia de primera instancia

1. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.
2. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho, la pena y la reparación civil.
3. Determinar la calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.

Respecto de la sentencia de segunda instancia

4. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.
5. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho, la pena y la reparación civil.
6. Determinar la calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.

La presente investigación se justifica, porque los resultados servirán para, incentivar el ejercicio de la función jurisdiccional responsable en tanto que los representantes de los órganos jurisdiccionales tendrán mayor cuidado al momento de aplicar los criterios teóricos y normativos para cada concreto, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de la administración de justicia y por ende a mejorar la imagen del Poder Judicial.

La investigación es de interés para los responsables de la función jurisdiccional y los usuarios de la administración de justicia, sirve para motivar a las autoridades, profesionales y estudiantes de la carrera de derecho. Tiene dos finalidades, una inmediata que consiste en la construcción del conocimiento jurídico articulando la teoría y la práctica, y otra mediata orientada a contribuir a la mejora continua de las decisiones judiciales en la administración de Justicia en el Perú, a partir del análisis de las sentencias; Su valor metodológico se evidencia en el procedimiento que se aplicará para analizar las sentencias en el desarrollo del presente proyecto dentro de las asignaturas de tesis y responder a la pregunta de investigación norma constitucional.

El marco normativo de rango constitucional que respalda la realización de la presente investigación se encuentra previsto en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, porque establece como un derecho el análisis y críticas de las resoluciones judiciales.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES

Arenas & Ramírez (2009) en Cuba investigaron: “La argumentación jurídica en la sentencia”, y arribó a las siguientes conclusiones a) Existe la normativa jurídica que regula la exigencia de la motivación de la sentencia judicial, que quizás no sea la más cómoda o directa pues se estipula a través de Acuerdos y otras Disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, pero de forma general no se encuentra desprotegido jurídicamente. b) Todos los jueces conocen en qué consiste la motivación de la sentencia y conocen también la normativa jurídica que lo regula. c) No existe el mecanismo directo de control para impugnar una sentencia inmotivada a través del recurso de Casación, haciéndose necesaria una vía más directa para ello, puesto que nos encontramos ante una de las principales deficiencias en que incurren nuestros Tribunales hoyen día, al transcribir literalmente en el cuerpo de la sentencia lo acontecido en el Juicio Oral a través del acta, repetir lo planteado por los testigos sin hacer uso de algún razonamiento lógico o haciéndolo de forma parca, no cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo 172 y todos los documentos que circularon junto a este, lo que es muestra de que aún hay mucho por hacer en relación a ello, pues el llamado estímulo al que se refiere en dicho acuerdo al reconocer la inexistencia de una causal de casación que permita reaccionar contra estas faltas para lograr la perfección del proceso penal, se ha traducido en el descuido de nuestros jueces a la hora de la redacción de la sentencia, lo que demuestra en cierto grado que tal requisito o exigencia no se debe dejar al arbitrio o conciencia del propio juez que redacta la sentencia, por lo que, contrario a lo establecido el artículo 79 sobre la casación de oficio, debe existir un mecanismo directo que los conmine a su cumplimiento y que pueda ejercitarse por todos los juristas. d) La motivación de la sentencia no solo consiste en la correcta valoración de la prueba, sino que esta debe hacerse en toda la sentencia siempre que el caso lo amerite. e) El problema fundamental y radica en los propios jueces a la hora de materializarlos conocimientos acerca de la motivación en la propia sentencia, puesto que en ocasiones es por falta de disposición, por falta de preparación, desorganización, y por ser resistentes a los cambios que se impone no exigen a la hora de motivar una sentencia judicial. f) Aun falta preparación a los jueces en relación al tema. g) La motivación es un nuevo reto que se impone por necesidad histórica y de perfección del

sistema de justicia, que solo se logra con dedicación y es fuerza propio. h) Si la finalidad de la sentencia no es más que el registro de la decisión judicial y los argumentos que la determinan, la cual debe ser accesible al público cualquiera que sea su clase, a través de un lenguaje claro ya se quibla a cualquier nivel cultural, y esto se expresa solo a través de la correcta motivación de la resolución judicial, debemos tener presente que si no se hace de la manera adecuada, sencillamente la sentencia no cumple su finalidad, que es precisamente para lo que se crea.

Segura, (2007), investigó “El control judicial de la motivación de la sentencia penal”, y las conclusiones formuladas son: a) La motivación de la sentencia, al obligar al juez a hacer explícito el curso argumental seguido para adoptar determinado temperamento, es una condición necesaria para la interdicción de la arbitrariedad, posibilitando, por lo ya dicho, la realización plena del principio de inocencia del imputado. b) Tradicionalmente la sentencia judicial ha sido representada como un silogismo perfecto, en el que la premisa mayor corresponde a la ley general, la menor a un hecho considerado verdadero, y la conclusión a la absolución o la condena. c) El control de la motivación de la sentencia penal funciona como un reaseguro de la observancia del principio de inocencia. Motivación y control vienen a convertirse, por consiguiente, en un binomio inseparable por lo que el juez o tribunal de sentencia, sabedor de que su fallo muy probablemente será controlado, necesariamente habrá de situarse frente a él en la posición de quien habrá de examinarlo y juzgarlo, es decir, en la posición de un observado razonable, con independencia de que sea su propia convicción, de manera razonable y bien motivada el factor determinante de su decisión. d) Se representa filosóficamente a la sentencia como el producto de un puro juego teórico, fríamente realizado, sobre conceptos abstractos, ligados por una inexorable concatenación de premisas y consecuencias, pero en realidad sobre el tablero del juez, los peones son hombres vivos que irradian una invisible fuerza magnética que encuentra resonancias o repulsiones ilógicas, pero humanas, en los sentimientos del juzgador. e) La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento. No existiría motivación sino ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado del juzgador-suponiendo que hubiera forma de elucidarlo-hubiera sido impecable. f) En

realidad se puede observar que el principio de fundamentación, a través de la motivación en los puntos expuestos, que regula el Artículo 386 del Código Procesal Penal, si bien es aplicado por los tribunales de sentencia que fueron investigados, también se pudo observar que no es aplicado de la forma que la doctrina al respecto establece.

Mazariegos H. (2008), investigó: *Vicios en la Sentencia y Motivos Absolutorios de Anulación Formal Como Procedencia del Recurso de Apelación Especial en el Proceso Penal Guatemalteco*, cuyas conclusiones fueron: “a) El contenido de las resoluciones definitivas...debe cumplirse con las reglas de la lógica o logicidad de la motivación de la sentencia, la misma debe ser congruente para evitar resolver arbitrariamente, lo que da lugar a las impugnaciones...; b) Son motivos de procedencia del Recurso de Apelación Especial: i) El error in iudicando, motivo de fondo o inobservancia de la ley que significa omitir aplicar la norma adecuada al caso concreto por parte del Juez y la interpretación indebida o errónea de la ley que significa que el Juez al resolver el caso concreto utilizó una norma incorrecta ó le asignó un sentido distinto lo que es igual a violación de ley sustantiva cuyo resultado es la anulación de la sentencia; ii) El error in procedendo, motivos de forma o defecto de procedimiento...; y finalmente; iii). El error in cogitando que significa defectos incurridos en la motivación de la sentencia; esto se da cuando se busca el control de logicidad sobre la sentencia absurda o arbitraria, prescindir de prueba decisiva, invocar prueba inexistente, contradecir otras constancias procesales o invocar pruebas contradictorias entre otras...”

Por su parte, Pásara L. (2003), investigó: *Cómo sentencian los jueces del D. F. en materia penal*, cuyas conclusiones fueron: a)...se ha observado acerca de las sentencias federales en materia penal: “la calidad parece ser un tema secundario”; no aparecen en ellas “el sentido común y el verdadero análisis de los hechos y las pruebas,...; b) Por sobre todo, en el caso de las sentencias del D.F. examinadas, sobresale la voluntad de condenar, de parte del juzgador, en detrimento de otras consideraciones de importancia...En los países de nuestra tradición jurídica, los jueces tienden a sostener que, al tomar decisiones, se limitan a aplicar la ley. Basadas a menudo en la teoría silogística de la decisión,.. Específicamente, condenar y establecer el monto de la pena tienen base en juicios de valor, pues la gravedad del hecho y personalidad del delincuente no son términos que se refieran a hechos objetivos o verificables; c)...el

proceso penal mismo se halla seriamente desbalanceado por una acusación de peso decisivo, un Juez pasivamente replegado en sus funciones mínimas y una defensa ineficiente. Este desbalance conduce, como se ha señalado, a la predictibilidad del resultado, que es factible adelantar desde que se da inicio al proceso, y a cierto cuestionamiento sobre la utilidad de llevar a cabo el proceso; d) Un tercer elemento, que requiere ser mejor explorado, es la incidencia de las expectativas existentes sobre la decisión judicial. Si una absolución requiere ser explicada, en tanto que una condena no; si tanto en la sociedad mexicana como en la propia institución judicial se sospecha que el juez que absuelve es corrupto; si, en definitiva, el juez percibe que, aunque esta expectativa no esté formalizada en normas, lo que se espera de él es que condene, el incentivo es demasiado fuerte como para esperar que el juez promedio proceda en contrario cuando su examen del caso así se lo aconseje, arriesgándose a las consecuencias; e) La respuesta que se puede dar, a partir del análisis de la muestra de sentencias tomada, es que las decisiones en materia penal en el D.F. condenan a quien es consignado ante el juez. Si ello resuelve o no el problema planteado, en buena medida, guarda relación con las expectativas existentes respecto al trabajo del juez penal. Si de él se espera que imparta justicia, todo parece indicar que estamos aún lejos de tal objetivo. Pero si de él se espera que condene, pese a las limitaciones técnicas halladas en las sentencias, éstas satisfacen tales expectativas...; f) El diseño de mecanismos transparentes que permitan evaluar las sentencias que dictan los Poderes Judiciales es una tarea pendiente de gran urgencia en los procesos de reforma judicial del país...

Toda sentencia tiene una consecuencia jurídica que trasciende no solo en el plano judicial, sino también en lo social, de ahí la complejidad de acercarlas lo más fielmente posible a la realidad. Las sentencias son exponentes del razonamiento deductivo: unos hechos determinados que se declaran probados, se subsumen en el supuesto fáctico de una norma jurídica para extraer así la consecuencia prevista en ésta, siendo la lógica el elemento fundamental que estructura su contenido; que para determinarlo juegan un papel trascendente el enfrentamiento o debate de las partes, en la que cada una defenderá sus puntos de vista apoyándose en las teorías que estimen convincentes, exponiendo los hechos ocurridos y las pruebas que los apoyan, a fin de persuadir al Tribunal y convencer a los jueces mediante la argumentación. (Mixán M.1987)

Salazar (2002) en Venezuela, investigó: *sentencias insuficientes*: sus consecuencias y conclusiones fueron: a) después de un análisis y un estudio minucioso de la formación de la sentencia como acto jurídico, como una operación mental del juez, deriva de los términos mismos de la demanda, se hizo necesario explicar el ámbito tanto de la sentencia ajustada al derecho sustancial como la que no lo está. b) al estudiar los requisitos de la sentencia tanto lo extrínsecos como los intrínsecos, se determinó que las sentencias que no contengan los requisitos de forma y de fondo antes señalados estarán viciados de nulidad es decir, dicha sentencias nunca podrán llevar a cabo lo señalado en ella. De esta manera, en la legislación patria, existen sentencias tanto justas como injustas, porque los hombres (jueces) necesariamente se equivocan. c) La legislación patria establece las formas que deben revestir las distintas sentencias tanto en su redacción, (formalidades extrínsecas), como en su contenido (formalidades intrínsecas). Ellas tienen por objeto asegurar la recta administración de la justicia, obligando al juez a examinar detenidamente la cuestión litigiosa y a expresar los fundamentos de decisión, afín de que los litigantes conozcan los motivos que determinaron el fallo. d) el incumplimiento de las formas anteriores mencionadas esta impuesto imperativamente y, en consecuencia, su omisión es causa de nulidad de las sentencias o una sentencia insuficiente) es indiscutible el valor de la sentencia como un acto procesal. Esta actuación desde que el mundo es mundo sometido al famoso principio silogístico por medio del cual el juez sentencia según las reglas de las premisas.

2.2. BASES TEORICAS

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales, relacionadas con las sentencias en estudio.

2.2.1.1. Garantías constitucionales del proceso penal

2.2.1.1.1. Garantías generales

2.2.1.1.1.1. Principio de presunción de inocencia

Este principio consiste en que toda persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada de modo fehaciente, la que se haya materializado en una sentencia definitiva que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (Balbuena, Díaz, y Tena, 2008).

Asimismo Cubas (2015) refiere que el principio de inocencia Constituye una de las conquistas esenciales del movimiento liberal que consistió en eleva el rango constitucional el derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal hacer considerado. Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria.

González (2008) afirma que según el cual ninguna persona puede ser tratada ni considerada como culpable hasta el momento en que se dicte en su contra una sentencia condenatoria firme, la cual debe ser dictada por un juez legalmente nombrado principio de juez natural- luego del debido, correcto y amplio ejercicio del derecho de defensa, con lo cual se llegue a destruir aquella presunción. De todo ello, deviene que el sujeto sometido a proceso penal no debe demostrar su inocencia ante la instancia judicial, muy por el contrario, es su acusador quien tiene la obligación de demostrar su culpabilidad, si ello no sucede así, deberá respetarse la inocencia del imputado y absolvérselo de toda pena y responsabilidad, según las garantías y derechos que brinda nuestro moderno sistema de justicia penal.

El principio de inocencia se manifiesta como uno de los grandes pilares, sobre los cuales se sostiene el proceso penal, aunque el mismo parece desnaturalizarse, cuando se

imponen medidas cautelares como la prisión preventiva, las cuales se sustentan entre otros elementos, en la existencia de indicios comprobados, en cuanto a la comisión del delito. En este sentido, se refiere el artículo 239 inciso a) del Código Procesal Penal. Además, parece que la existencia de este requisito para el dictado de la prisión preventiva, vulnera dicha presunción de inocencia.

Respecto al principio de inocencia, puedo agregar que este cobra vigencia con la existencia de un principio de naturaleza universal y que precisamente está regulado en la parte final del artículo 9° del Código Penal, para ello se indica: En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado.

2.2.1.1.1.2. Principio del derecho de defensa

Por su parte para Hernández (2012) el derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionador. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuirse la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueden promover.

Por su parte Cubas (2015) expresa que para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la asistencia de un traductor o interprete cuando no se hable el idioma del tribunal, la información del hecho, Lambayeque que tiene el imputado para decidir si declara o si guarda silencio: la posibilidad real y concreta que puede comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios (p.42).

Finalmente el derecho de defensa no solo implica la asistencia de un abogado de la autodefensa del imputado sino sobre todo el derecho de disponer de los medios adecuados para preparar su defensa y el acceso a los documentos y pruebas en que se basa tal imputación (Rosas, 2015).

Prosiguiendo con el mismo autor, el derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda

comunicarse libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la detención, que sea informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada en su contra, que tenga acceso al expediente, archivos y documentos o las diligencias del proceso, que se disponga del tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, que cuente con un interprete o traductor si el inculcado no conoce el idioma del Tribunal.

Puedo agregar que el derecho de defensa no solo se limita a la protección del imputado, sino también a otras personas que pueden intervenir en el proceso, como el actor civil o el tercero. El Ministerio Público, desde la perspectiva de la defensa como limitación del poder estatal, no tiene derecho de defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria.

2.2.1.1.1.3. Principio del debido proceso

El debido proceso según Fix (1991) es una garantía de los derechos de la persona humana que implica una protección procesal a través de los medios procesales por conducto de los cuales es posible su realización y eficacia.

Asimismo el debido proceso ha sido concebido como búsqueda de justicia y paz social, para convivir humanamente en sociedad y para ser posible el desarrollo social se ha proscrito la auto tutela o autodefensa como forma violenta e individual para la preservación de los hechos conculcados (Rosas ,2015).

Para Sánchez, P. (2004) expresa que se trata de un principio general del derecho que inspira la labor jurisdiccional de un Estado, que comprende todo el conjunto de derechos y garantías que rodean al proceso y la actuación de los sujetos procesales y que está presente en cada uno de los actos en que se descompone el proceso e incluso antes de su inicio está presente también en los procedimientos judiciales especiales y acciones de garantía.

El Art. 139, numeral 14 de la Constitución Política del Perú consagra como uno de los fundamentos de la función jurisdiccional que a tenor dice: “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”, extiende dicha

protección constitucional a cualquier momento y tipo de procedimiento (penal, civil, constitucional, laboral, etc.), reconociéndolo como requisito esencial para la válida constitución de un proceso. (Salas Beteta; 2011).

“Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley”. (Código Penal Peruano, 2009).

Respecto al debido proceso se puede agregar que es el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo proceso.

2.2.1.1.1.4. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:

“El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales” (Tribunal Constitucional, exp. N° 015-2001 AI/TC).

Ore (1993) el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se ha convertido en el pilar fundamental del proceso, mereciendo que, además de ser adoptado en el título preliminar del Código Procesal Civil (artículo I) sea reconocido como derecho constitucional fundamental (inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política).

Mientras que para Monroy (1996) la jurisdicción tiene como contrapartida el derecho a la tutela jurisdiccional. Se considera que este es el que tiene todo sujeto de derechos – solo por el hecho de serlo- y que lo titula para exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional.

Podemos agregar que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva como el poder que tiene toda persona, sea esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de derechos ser parte en un proceso y así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas.

2.2.1.1.2. Garantías de la jurisdicción

2.2.1.1.2.1. Unidad y exclusividad de la jurisdicción

Dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, la potestad jurisdiccional debe ser siempre una sola, para el mejor desenvolvimiento de la dinámica del Estado y como efectiva garantía para los judiciales de certeza en su camino procesal que deberá seguir (Rosas, 2015).

De igual forma el Tribunal constitucional sostiene:

“Es necesario precisar que conforme al artículo 139° inciso 1, de la constitución, el principio de unidad de la función jurisdiccional implica que el Estado Peruano, en conjunto, posee un sistema jurisdiccional unitario, en el que sus órganos tienen idénticas garantías, así como reglas básicas de organización y funcionamiento. De ello no se deduce que el Poder Judicial sea el único encargado de la función jurisdiccional (pues tal función se le ha encargado también al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, a la jurisdicción especializada en lo militar y, por extensión, al arbitraje), sino que no exista ningún órgano jurisdiccional que no posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional. Como se ha mencionado, la función jurisdiccional del Estado es una sola y debe ser ejercida con todas las garantías procesales establecidas por la constitución” (Tribunal Constitucional. Exp. N° 004-2006-PI/TC).

Asimismo, sobre el principio de exclusividad de la función jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha sostenido:

“(…) afecta, de un lado, al status jurídico de los magistrados y, por otro, al orden funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria. De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder Judicial están dedicados única y exclusivamente a ejercer la jurisdicción, esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de la función que se les confía a los jueces y magistrados es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con la única excepción de la docencia universitaria, y siempre que ella se ejerza fuera del horario de trabajo judicial, como precisa el artículo 146° de la

Norma Suprema. De acuerdo con el segundo, solo el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder público pueda avocarse al ejercicio de dicha función. Así, es el Poder Judicial, en principio, el único de los órganos estatales a quien se ha confirmado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas y de los intereses y bienes jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción independiente (artículo 139°, inciso1), o que otros órganos realicen el juzgamiento de materias confiadas a él ya sea por comisión o por delegación, o por órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (inciso 1 y 3, artículo 139° de la Constitución)” (Tribunal Constitucional Exp. N° 004-2006-PI/TC).

Según la postura de Chanamé (2009) la unidad jurisdiccional tiene tres acepciones:

- a) Monopolio en la aplicación del derecho: solo los órganos judiciales pueden aplicar las normas jurídicas a los litigios concretos; y además, solo pueden cumplir esta función y ninguna otra.
- b) Resolución plena del asunto confiado a su competencia, sin que puedan separarse elementos de la Litis (incidentes, cuestiones previas o prejudiciales) por ejemplo, para confiarlos a otro centro decisorio distinto.
- c) Inexistencia de especies de delito o personas calificadas sustraibles a su jurisdicción.

Consagrado en el inciso 1 del artículo 139ª de la Constitución. El Estado tiene la exclusividad de la administración de justicia, esto es, que tiene el poder - deber de solucionar la litis. El Poder Judicial tiene la hegemonía en la administración de justicia, luego de superada la autodefensa (solución de la litis empleando la fuerza o violencia), y al no ser viable la autocomposición (solución de la litis reside en el acuerdo de las partes).

Respecto al principio de unidad y e exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial puedo agregar que es uno de sus principios básicos. No existe ni puede establecerse que: la jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Asimismo, las comunidades campesinas y nativas pueden administrar justicia en el ámbito de su jurisdicción y con base en sus costumbres, en tanto, no vulneren derechos fundamentales.

2.2.1.1.2.2. Juez legal o predeterminado por la ley

Gimeno (citado por Cubas, 2015, p.95) afirma:

Este derecho al juez o predeterminado por la ley encierra una doble garantía .por un lado para el justiciable a quien se le asegura que en el momento alguno podrá ser juzgado por un órgano distinto de los que integran la jurisdicción y por otro lado constituye un garantía propia de la jurisdicción, pues impide que el Poder Ejecutivo disponga a su antojo la constitución y funcionamiento de los tribunales.

Este derecho a un juez legal o predeterminado por la ley comprende:

1. Que el órgano judicial haya sido creado previamente, respetando la reserva de ley de la materia. Imposibilidad de constituirlo post factum.
2. Que ésta le haya sido investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial.
3. Que se régimen orgánico y procesal no permita calificarle como un Juez ad hoc o excepcional. Prohibición de Jueces extraordinarios o especiales.
4. Que la composición del órgano judicial venga determinado por ley, siguiéndose, en cada caso concreto, los procedimientos legalmente establecidos para la designación de sus miembros.

Por su parte Sánchez (citado por Rosas, 2015) refiere que el monopolio jurisdiccional lo tiene el Poder Judicial, según el cual la función de administrar la justicia penal, también aclara que exclusividad y monopolio de la función jurisdiccional son manifestaciones del principio de l unidad jurisdiccional, que es en tal sentido, cada Poder del Estado debe ejercer una función estatal por intermedio de sus órganos igualmente estatales.

En este sentido, la predeterminación legal del juez hace referencia exclusiva al órgano jurisdiccional, y no a la creación anticipada de salas especializadas. Es así que las salas especializadas anticorrupción no pueden considerarse “órganos de excepción”, toda vez que forman parte de otras diversas salas, a las que únicamente se les ha encomendado ciertas materias. Asimismo, la creación de salas especializadas mediante resoluciones administrativas no vulnera el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley, ya que

éstas solo constituyen subespecialidades que no deben confundirse con el “juez u órgano excepcional”.

Es importante precisar que, aunque el derecho comparado el derecho al juez natural comporte el atributo subjetivo del procesado a ser juzgado por un juez determinado por criterio de competencia territorial, capacidad, actitud, presunta mayor especialización, etc., el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, denominado precisamente “derecho al juez natural”, subyace solo el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley. En este sentido como debe entenderse el nomen iuris “derecho al juez natural” en la comunidad jurídica nacional. (Landa, 2012).

De acuerdo al principio de Juez legal o predeterminado por la ley podemos agregar que este derecho garantiza que quien tenga la potestad de juzgar sea un juez o tribunal de justicia ordinario predeterminado con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.2.1.1.2.3. Imparcialidad e independencia judicial

El Tribunal Constitucional (citado por Cubas 2015) expresa:

Hay dos fundamentos en base a la sentencia Exp.004-2006 PI / TC. La independencia jurisdiccional de los Jueces, establecida en los artículos 139° inc. 2 y 186° de la Constitución y de la L.O.P.J. respectivamente, significa que ninguna autoridad, ni siquiera los magistrados de instancias superiores, pueden interferir en su actuación.

a) **Independencia Externa;** según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea esta se desempeñe en la especialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan sólo de la Constitución y de la ley que sea acorde con

ésta.

b) **Independencia Interna;** de acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial (pp.97-99).

Sin duda la independencia de la función jurisdiccional penal es una reiteración a nivel particular del principio general de la “independencia del poder judicial”. La independencia del juez penal radica fundamentalmente en dos cuestiones: la primera, ejercer la función jurisdiccional que excluya toda clase de interferencia o perturbación de manera que sus resoluciones signifiquen la necesaria concreción de libertad de criterio o del poder signifiquen discrecional la necesaria concreción de libertad de criterio o del poder del que goza. La segunda como correlación de la primera es la imparcialidad del juez Penal sin ceñirse más que a la Ley y a la justicia (Rosas,2015).

El poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Este principio tiene dos alcances. Uno positivo, en cuanto a que el Poder Judicial es libre, soberano y autónomo de los demás órganos del Estado. Un aspecto negativo, en el sentido de que el órgano jurisdiccional no puede intervenir y ejercer las atribuciones de los órganos ejecutivo y legislativo.

Para (Aragoneses, 1997). Esta garantía para los sistemas procesales ha sido denominada como el principio supremo del proceso, nos encontramos ante la exigencia mediante la cual se garantiza que el funcionario encargado de la resolución jurídica del conflicto criminal no posea algún interés particular en el sentido que habrá de tener ésta, más allá de la correcta aplicación de las normas del Derecho penal.

De acuerdo al principio de independencia e imparcialidad del juez, la independencia judicial se encuentra garantizada en el Art. 203 Constitucional, al decir que los

magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.

2.2.1.1.3. Garantías procedimentales

2.2.1.1.3.1. Garantía de la no incriminación

La garantía de la no incriminación es un derecho referido a que nadie debe puede ser obligado a declarar en su contra ni a confesarse culpable, se presenta como una manifestación de derecho de defensa y del derecho a la presunción de inocencia, está reconocida por el artículo IX del Título Preliminar “la finalidad de dicho principio es excluir la posibilidad de obligar al imputado a cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo”.

La presunción de inocencia presume el desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, y ello impide que se pueda hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo lleven a incriminarse (Cubas, 2015).

Quispe (2002) la no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable.

Como señala (Vázquez Rossi, 2000), esta garantía protege la incolumidad de la voluntad de toda persona, su ámbito de decisión sobre lo que quiere o no decir y su derecho a no ser coaccionado para que colabore en la investigación, se incrimine o intervenga en actos que requieran de su participación.

Respecto a este principio puedo agregar que es la prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no incriminación.

2.2.1.1.3.2. Derecho a un proceso sin dilaciones

En nuestro país, el antecedente legislativo es el artículo 137 del CPP del año 1991 que estableció los plazos máximos de 9 y 18 meses para desarrollar los procesos sumarios y ordinarios respectivamente, hasta emitir una resolución final por lo menos en primera instancia. Sin embargo en nuestra realidad los procesos penales son morosos con una duración, en promedio de 921 días. La sabiduría popular ha resumido la gravedad que se asigna al tema al señalar “que la justicia que tarda no es justicia “ya que para que la justicia sea injusta no basta que se equivoque, basta que no juzgue cuando debe juzgar (Cubas, 2015).

Como su denominación lo indica, este derecho garantiza que el proceso penal se lleve adelante y finalice sin que existan dilaciones indebidas en su tramitación. Sin embargo, más allá, como bien lo ha señalado el Tribunal Supremo Federal Norteamericano, quizá la nota más importante que caracteriza a esta garantía (speedy trial) es la de que se trata de un concepto más vago que los que definen otros derechos procesales, de modo que es imposible determinar de manera general y con absoluta precisión cuando ha sido violado. (Esparza, 1995)

Se puede agregar que el derecho de todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas o a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso, es un derecho fundamental de naturaleza racional que se dirige a los órganos judiciales

2.2.1.1.3.3. La garantía de la cosa juzgada

La garantía de cosa juzgada actualmente se considera esta garantía como parte integrante del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al comprender esta, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Este principio de cosa juzgada en virtud del cual una resolución judicial firme, sentencia o auto de archivo es inalterable. La interdicción de la persecución penal múltiple, tiene expreso reconocimiento en el artículo III del Título Preliminar del CCP que establece: “Nadie podrá ser procesado ,ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento”(Cubas, 2015).

La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).

Monroy (1996) para que los fines del proceso se concreten es indispensable que la decisión final que se obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña a las resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. Un requisito adicional para que la autoridad de la cosa juzgada acompañe a una resolución es que se presente algunas de estas situaciones: sea que se hayan agotado todos los medios impugnatorios pasibles de ser deducidos contra ella, sea que se trate de una resolución inimpugnable o que haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin haberse interpuesto impugnación alguna contra esta. Es decir, es un requisito que la resolución sea última.

Se puede agregar respecto al principio de cosa juzgada que es el derecho que corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas.

2.2.1.1.3.4. La publicidad de los juicios

Cubas (2015) expresa que el artículo 139 inciso 4 de nuestra Carta Magna. Esta esta garantía exige que las actuaciones de un proceso penal sean públicas para el procesado e incluso para la sociedad. La publicidad es una característica de los procesos modernos y constituye una superación del secreto de los procedimientos inquisitivos, que llegó al extremo de guardar reservado frente al inculcado sobre los actos y actuaciones del proceso. La publicidad del juicio está garantizada por los artículos I del Título Preliminar, 356 y 357 del CPP, sin embargo, este principio puede presentar algunos límites en salvaguarda de la persona, tal es el caso cuando excepcionalmente se decide la realización de audiencias privadas, e inclusive la posibilidad que se excluya a la prensa de las actuaciones del juicio por razones

expresamente establecidas en las normas antes citadas (p.124).

Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la Nación conozca por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un acusado. El principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política, por los tratados internacionales, el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el art. 357° del CPP. “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio...”.

Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al juzgamiento. Este principio es una forma de auto legitimación de las decisiones de los órganos que administran justicia. Consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho político del cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (S. 8-12-83) ha señalado que, “la función política de control del poder judicial que cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar justicia”. La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera como se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se administra justicia y la calidad de la misma. La regla general es que los juicios deben ser públicos, salvo cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia, de este modo ha sido recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 inc. 5). Nuestra Ley señala la excepción al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses superiores, tal es el caso del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos contra la libertad sexual. Los juicios por responsabilidad de los funcionarios públicos, por los delitos cometidos por medio de la prensa y por la afectación de derechos fundamentales, siempre serán públicos.

Podemos agregar a todo esto que la publicidad de los juicios está también referida a la facultad de los medios de comunicación de poder informar sobre el desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control ciudadano

2.2.1.1.3.5. La garantía de la instancia plural

La instancia plural reconoce la posibilidad de que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales inferiores puedan ser revisadas y eventualmente modificadas por las autoridades superiores, conforme al sistema de recursos prescrito por la Ley, permite que las partes vuelvan a fundamentar su posición y que los tribunales superiores corrijan los errores en que se hubiera incurrido. De este modo, la garantía de doble instancia resguarda a rectitud y permite el control sobre las decisiones judiciales (Cubas, 2015, pp.124-125).

La pluralidad de instancia permite que una resolución sea vista en una segunda y hasta en una tercera instancia. Es decir, existe la posibilidad de que un error, deficiencia o arbitrariedad contenida en una resolución expedida por un órgano jurisdiccional de instancia menor, pueda ser subsanado, dice García. (Gimeo, 2004)

La instancia plural es además una seguridad para el propio juez, ya que los fallos de resultar correctos habrán de ser corroborados por el superior jerárquico. En cambio, si las decisiones son equivocadas como consecuencia de la existencia de cualquier tipo de deficiencia o insuficiente interpretación de la ley, dicho superior habrá de enmendadas. (Gimeo, 2004)

Debemos tener en cuenta que la instancia plural se considera que las instancias superiores están dotadas de un mayor nivel de conocimiento jurídico y de experiencia funcional.

2.2.1.1.3.6. La garantía de la igualdad de armas

La garantía de igualdad de armas surge del derecho de igualdad de los ciudadanos, reconocidos por el artículo 2 de la Ley Fundamental y determinar la necesidad de que ambas partes quienes hacen la acusación y la defensa tengan las mismas posibilidades de actuación dentro del proceso.

Esta garantía está reconocida por el artículo I inciso 3 del Título Preliminar del CPP, al establecer que “las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. Los jueces preservaran e principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia” (Cubas, 2015).

Calderón (2013) el principio de igualdad de armas en el aspecto material, que si bien existe previsión normativa, esta es carente de reglamentación y garantías que aseguren su plena eficacia en su aplicación práctica, pues de una revisión global del mismo Código Procesal Penal, se puede concluir que existe una aparente y enorme desigualdad de armas, dado que no hay igualdad de facultades y de medios entre el ministerio público y el imputado, pues detrás del primero y obligado a cumplir sus órdenes esta la policía y sus órganos especializados en criminalística, la dirección de policía contra la corrupción, el instituto de medicina legal y demás organismos técnicos del estado, que están obligados a colaborar con el esclarecimiento del delito y cumplir con los requerimientos de información formulados por el ministerio publico bajo apercibimiento de ser denunciados por omisión de denuncia, encubrimiento o incumplimiento de funciones, sin que se deje de contar con las medidas coercitivas que se pueden ejercer.

A lo antes descrito se puede agregar que este principio es derivado del derecho a la defensa y derecho a la contradicción a la que tiene el imputado, o acusado, según la etapa de desarrollo del proceso penal, para ello es necesario se le considere como un igual a cualquier otra parte del proceso.

2.2.1.1.3.7. La garantía de la motivación

La garantía de la motivación es una exigencia constitucional impuesta por artículo 139 inciso 5 que las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales se encuentren debidamente fundamentadas en el Derecho, esto es, que contengan una argumentación lógico jurídico que sustente la decisión judicial. En la redacción de las sentencias se exigirá la separación de sus partes: expositiva, considerativa, resolutive, al emitir resoluciones judiciales en general, se tendrá especial cuidado en respetar las formalidades establecidas en los artículos 119 y siguientes del Código de

Procesal Civil (Cubas, 2015, p.129).

Consiste en la exigencia de fundamentación y explicación que debe tener toda resolución judicial, la que debe estar amparada en una base construida de referentes de derecho y razonamiento, que expliquen la solución que se da un caso concreto que se juzga, no bastando una mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento lógico (Franciskovic I., 2002).

La censura por defecto de motivación, tal como se encuentra elaborado ésta en la práctica, tiende a someter la sentencia de mérito en todas sus partes a un control, como si dijéramos de logicidad: puesto que la sentencia debe contener, en la parte llamada “motivación”, la esquemática descripción del itinerario lógico que llevó al juez a las conclusiones incluidas en la parte dispositiva, y la justificación de los argumentos de derecho y de hecho que constituyeron las etapas de aquél recorrido. La casación, a título de “defecto de motivación” puede extenderse a censurar, no sólo la existencia sino también la consistencia, la perfección y la coherencia lógica y racional de esta motivación; no sólo a verificar si en la sentencia ha referido el juez cómo razonó, sino también a controlar si razonó bien, es decir en forma que respondiera a las leyes de la lógica, y por tanto, de modo convincente y exhaustivo”.(Spetale Bojorjez, 2013)

Puedo agregar a la motivación de las resoluciones implica aplicación de un nivel adecuado de conocimientos, coherencia en la argumentación y la pertinencia entre el caso materia de la resolución y la argumentación.

2.2.1.1.3.8. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

Este derecho garantiza a las partes la facultad de poder desplegar y usar sus medios de prueba pertinentes a fin de sustentar y defender sus posiciones. Este llamado derecho a la prueba se encuentra ligado al derecho de defensa, ya que solo es posible defenderse activamente introduciendo o exigiendo la realización de medio de prueba (Cubas, 2015).

Esta garantía asegura a las partes el derecho de poder disponer y usar los medios de prueba pertinentes cuando de sustentar y defender sus posiciones se trata. En ese sentido, solo si se posibilita la presentación oportuna y pertinente de las pruebas se

podrá crear convicción suficiente en el juzgador para que este sentencie adecuadamente, “(...) sin una debida actividad probatoria, donde el procesado haya tenido ocasión de presentar pruebas pertinentes y adecuadas de descargo, no puede hablarse de un debido proceso ni tampoco de respeto a la tutela jurisdiccional efectiva”. (Cubas, 2006)

Puedo agregar que el principio de utilizar los medios de prueba pertinentes en resumen indican que todos tienes derecho a probar pero en el momento oportuno dentro del proceso.

2.2.1.2. El derecho penal y el Ius Puniendi

Para Bustos (citado por Villa ,2014) define que el *jus puniendi* como la potestad del Estado de declarar punible determinados hechos a las que impone penas o medidas de seguridad.

Además para Velásquez (citado por Villa ,2014) expone que la potestad radicada en cabeza del Estado en virtud de la cual está revestido de su poderío o imperio, declara punible determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan contra la convivencia comunitaria y les impone penas y medidas de seguridad a título de consecuencia jurídica (p.128).

La sentencia penal, es un acto que importa la materialización del derecho penal a un caso específico y concreto, habilitando a través del mismo, el debido ejercicio del Ius Puniendi del Estado; esto es, que sirve a la función del ordenamiento jurídico penal estatal, que como mecanismo de control social (Muñoz, 1985), su lógica estriba en sancionar determinadas acciones humanas (matar, lesionar, violar, etc.) con un pena (prisión, multa, inhabilitación, etc.), o una medida de seguridad, cuando estas lesionan o ponen en peligro un bien jurídico penalmente tutelado(vida, integridad física, libertad sexual, etc.) (Polaino, 2004).

Sin embargo, su materialización sólo se puede hacer efectiva dentro de un proceso penal, definido como el conjunto de actos y formas, mediante los cuales los órganos jurisdiccionales fijados y preestablecidos en la ley, previa observancia de determinados

principios y garantías, aplican la ley penal en los casos singulares concretos (Sánchez, 2004).

El estado tiene el *ius puniendi* para cumplir el deber de garantizar la coexistencia humana, asegurando, la vigencia de los bienes jurídicos fundamentales. El poder punitivo del Estado o *ius puniendi* es la atribución que tiene que definir conductas como hechos punibles e imponer penas a las personas a las que las realizan. El profesor Jescheck busca encontrar el sustento de los límites de la función punitiva del Estado social y democrático de derecho en un núcleo de Derecho que, según la conciencia jurídica general, no puede ser vulnerado por ninguna ley ni por ninguna otra medida emanada del poder público; afirma que es el único núcleo inviolable y que está sustraído al ejercicio al ejercicio del poder estatal para proteger la dignidad humana. (Jescheck, 1981)

Entre los elementos materiales que el Estado cuenta, en primer orden está “el poder punitivo”, éste existe en todos los sistemas compuesto normas y órganos encargados del control social, castigando las conductas consideradas delictivas, para garantizar el funcionamiento del Estado y el logro de los fines que se le ha encargado. Está relacionado con la función que se le asigne al Estado. (Gómez, 2010)

Muchas teorías se han desarrollado acerca de la legitimidad del *ius puniendi*; pero hay un aspecto que a destacar, este es: que el ejercicio de la potestad sancionadora de un Estado democrático, necesariamente debe ser respetuoso de las garantías que el mismo Estado ha establecido, porque éstos son los límites. Asimismo, el Derecho Penal es estudiado por los expertos en dos sentidos: objetivo y subjetivo. En el sentido objetivo, se refiere a todo la producción normativa, y el subjetivo, es entendido como el derecho del Estado a crear normas para castigar, y aplicarlas (el *ius puniendi*).

Al respecto, Mir Puig, citado por el autor en referencia: el *ius puniendi* es, por una parte, una forma de control social muy importante monopolizado por el Estado y, por otra parte, es un aspecto fundamental del poder estatal, que desde la Revolución francesa es necesario delimitar con la máxima claridad posible como garantía del ciudadano. (Mir, 2008)

De esta forma, el derecho penal objetivo es, el medio empleado por el Estado para ejercer su poder punitivo, al que Mir Puig define como, conjunto de prescripciones jurídicas que desvaloran y prohíben la comisión de delitos, y asocian a éstos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica.

De lo expuesto, puede afirmarse que no obstante los puntos de vista expuestos, el ius puniendi del Estado es un poder o potestad punitiva, necesaria para evitar que las sociedades se desintegren.

2.2.1.3. La jurisdicción

2.2.1.3.1. Concepto

Etimológicamente, la palabra jurisdicción proviene del latín *iurisditio*, que se forma de la unión de los vocales *ius* (derecho) y *dicere* (acción), según el cual literalmente significa “decir o indicar el derecho” (Rosas, 2015, p.333).

La jurisdicción es la facultad del Estado de resolver un conflicto entre el derecho punitivo que el mismo se irroga y el derecho de libertad de la persona. Es la potestad del Estado de garantizar la observancia de las normas penales sustantivas, mediante la decisión en casos concretos aceptando o rechazando una pretensión punitiva y de resarcimiento (Cubas, 2015).

Al mismo tiempo para Devis (citado por Cubas, 2015) la jurisdicción en un sentido amplio mira a la función de fuente formal del derecho y entonces se tiene que la ley, la costumbre y la jurisprudencia son manifestaciones de ella. Por lo tanto no deben ni puede confundirse la jurisdicción en su sentido general y el proceso; porque no solamente declara el derecho el juez al decidir en un proceso, sino que también lo hace el legislador al dictar ley y el gobierno cuando promulga un derecho con fuerza de ley.

Martínez y Olmedo (2009) refieren que:

La Función Jurisdiccional o Jurisdicción se concibe como el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados, caracterizado por su independencia de otros Poderes del Estado y esferas y ámbitos del mismo y sumisión a la Ley y al Derecho, que ejerce en

exclusiva la potestad jurisdiccional y, en consecuencia, legitimado para la resolución jurídica, motivada, definitiva e irrevocable de los conflicto entre sujetos (intersubjetivos) y sociales, con la finalidad de: La protección de los derechos subjetivos, El control de la legalidad y La complementación del ordenamiento jurídico (s.p).

Respecto a la jurisdicción podemos agregar que la jurisdicción es una función soberana del Estado, realizada a través de una serie de datos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley.

2.2.1.3.2. Elementos

Para Rosas (2015) los elementos de la jurisdicción son:

- La notio, que es el derecho de la autoridad jurisdiccional a conocer de un asunto concreto.
- La vocatio, como la facultad de que está investida la autoridad para obligar a las partes (sujetos procesales) a comparecer al proceso.
- La coertio, connota la potestad del Juez de recurrir a que se utilice la fuerza pública para que se cumplan con las medidas adoptadas por su Despacho en el curso del proceso; se compele coactivamente al cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales.
- La iudicium, es la facultad de proferir sentencia, previa recepción y valoración de los medios probatorios, concluyendo con el proceso de carácter definitivo.
- La executio, atribución para hacer cumplir los fallos judiciales recurriendo de ser el caso a la fuerza pública, de manera que las resoluciones emitidas no queden a libre Albedrio de los otros sujetos procesales y la función jurisdiccional se torne inocua (p.334).

2.2.1.4. La competencia

2.2.1.4.1. Concepto

Etimológicamente, el término competencia viene de *competere*, que significa corresponder, incumbir a uno cierta cosa. Dentro de esta connotación la competencia es entendida como la medida en que la jurisdicción se distribuye entre las diversas

autoridades judiciales; así también la facultad que tiene un funcionario público de aplicar justicia a cada caso concreto (Rosas, 2015, pp. 342-343).

La competencia surge como consecuencia de la necesidad de aliviar la carga procesal, con el objetivo de tener una justicia especializada y rápida. Es por esto la circunscripción de la jurisdicción con diversos criterios determinados por y de acuerdo a ley (Cubas, 2015).

Si bien es cierto la competencia es el límite o medida de la jurisdicción, y se le puede definir como la capacidad o aptitud legal del funcionario judicial para ejercer jurisdicción en un caso determinado y concreto. De manera que la jurisdicción y la competencia son términos que no se contraponen. Por el contrario se complementan. Así un juez de Arequipa tiene jurisdicción en todo el país pero en cuanto a competencia, solo podrá conocer los casos de y en dicha ciudad (Rosas, 2015).

Rodríguez (2004). “Significa porción donde el Juez ejerce su jurisdicción. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso, o la dirección de una etapa procesal del mismo. (Investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento).

Según el Artículo 19 del código Procesal Penal Peruano la competencia es: objetiva, funcional, territorial y por conexión. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso.

Podemos agregar que la competencia es una condición que deben satisfacer no solo los juzgadores sino todas las autoridades. Es la suma de facultades que la ley da (a una autoridad) para ejercer ciertas atribuciones

2.2.1.4.2. La regulación de la competencia en materia penal

Está regulada en el artículo 19 del Código Procesal Penal que establece que la competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso (Frisancho, 2013, p. 323).

Se encuentra regulada en el Libro I, Disposiciones Generales, sección III, Título II Artículos del 19 al 32 del código Procesal Penal Peruano.

Art. 19° Determinación de la competencia: 1. La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. 2. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso (Código Procesal Peruano, 2004, P. 16)

i. Competencia por el territorio:

Art. 21°. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:

1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4. Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5. Por el lugar donde domicilia el imputado.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 17)

ii. Competencia objetiva y funcional:

Art. 26°. Competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema: Compete a la Sala Penal de la Corte Suprema:

1. Conocer del recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes Superiores, en los casos previstos por la Ley.
2. Conocer del recurso de queja por denegatoria de apelación.
3. Transferir la competencia en los casos previstos por la Ley.
4. Conocer de la acción de revisión.
5. Resolver las cuestiones de competencia previstas en la Ley, y entre la jurisdicción ordinaria y la militar.
6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la extradición activa y emitir resolución consultiva respecto a la procedencia o improcedencia de la extradición pasiva.
7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados.
8. Juzgar en los casos de delitos de función que señala la Constitución.

9. Entender de los demás casos que este Código y las Leyes determinan.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 17-18).

Art. 27° Competencia de las Salas Penales de las Cortes Superiores: Compete a las Salas Penales de las Cortes Superiores:

1. Conocer del recurso de apelación contra los autos y las sentencias en los casos previstos por la Ley, expedidos por los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces Penales –colegiados o unipersonales.
2. Dirimir las contiendas de competencia de los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces Penales –colegiados o unipersonales- del mismo o distinto Distrito Judicial, correspondiendo conocer y decidir, en este último caso, a la Sala Penal del Distrito Judicial al que pertenezca el Juez que previno.
3. Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia.
4. Dictar, a pedido del Fiscal Superior, las medidas limitativas de derechos a que hubiere lugar.
5. Conocer del recurso de queja en los casos previstos por la Ley.
6. Designar al Vocal menos antiguo de la Sala para que actúe como Juez de la Investigación Preparatoria en los casos previstos por la Ley, y realizar el juzgamiento en dichos casos.
7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados.
8. Conocer los demás casos que este Código y las Leyes determinen.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 18).

Art. 28° Competencia material y funcional de los Juzgados Penales:

1. Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.
2. Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados.
3. Compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer; b) Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del juzgamiento; c) Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen.

4. Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocerán de las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas;
5. Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal; b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letrado; c) Del recurso de queja en los casos previstos por la Ley; d) De la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 18).

Art. 29° Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.- Compete a los Juzgados de la Investigación Preparatoria:

1. Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la Investigación Preparatoria.
2. Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la Investigación Preparatoria.
3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada.
4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia.
5. Ejercer los actos de control que estipula este Código.
6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
7. Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 18-19).

Art. 30° Competencia de los Juzgados de Paz Letrados: Compete a los Juzgados de Paz Letrados conocer de los procesos por faltas.

iii. Competencia por conexión:

Art. 31° Conexión procesal: Existe conexión de procesos en los siguientes casos:

1. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos.
2. Cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible.

3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes.
4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad.
5. Cuando se trate de imputaciones recíprocas.

(Código Procesal Peruano, 2004, P. 19).

Art. 32° Competencia por conexión: En los supuestos de conexión previstos en el artículo 31°, la competencia se determinará:

1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con pena más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibió la comunicación prevista en el artículo 3°.
 2. En el numeral 2), la competencia se determinará subsidiariamente por la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avanzado. En caso de procesos incoados en distintos distritos judiciales, la competencia se establece por razón del territorio.
 3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al Juez Penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el numeral 3).
 4. En el numeral 4) corresponderá al que conoce del delito con pena más grave.
- (Código Procesal Peruano, 2004, P. 19).

2.2.1.4.3. Determinación de la competencia en el caso en estudio (EXPEDIENTE N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

En el caso en estudio se ha comprendido la competencia en razón de la materia ya que este proceso ha sido considerado en primera instancia por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo y en segunda instancia por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. De igual manera se consideró la competencia territorial, porque el juzgado y la Sala Penal que tramitó el proceso, corresponden al distrito judicial donde ocurrieron los hechos que ocasionaron la comisión del Delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (Expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01 pertenece al Juzgado Penal Colegiado del Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo)

2.2.1.5. La acción penal

2.2.1.5.1. Concepto

La acción tiene matrices históricas que van desde la concepción romana de Celso que concebía a la acción como el “el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido”, planteando así, la idea de que no hay acción si previamente no hay derecho (Cubas, 2015).

Asimismo, Rosas (2015) afirma que la acción penal tiene su basamento en el concepto de la pretensión punitiva, y debe materializarse a través del derecho concreto a justicia penal, a la persecución penal y particularmente a la condena y ejecución penal, también se le considera a la acción penal como potestad jurídica persecutoria contra la persona física que infrinja la norma jurídico-penal consiguiéndose de esta manera promover o provocar la actividad del órgano jurisdiccional para descubrir al autor y partícipes del delito o falta que se imputa y aplicar la ley penal con una sanción al responsable, así como lograr el resarcimiento de los daños ocasionados por la omisión del delito (p. 310).

La acción es única para cualquier campo en que se la quiera hacer valer. No existe una "acción" penal diversa a la acción civil. Ambas tienen la misma finalidad y la misma estructura; lo que varía, lo que cambia, o que la hace diferente a una de otra, lo que constituye la diferencia específica entre una y otra, es la materia con motivo de la cual debe actuar, es decir la naturaleza del objeto que permite su ejercicio. Así si la violación del derecho es de carácter civil, entonces, la acción ejercida es de carácter civil; si la norma violada es de carácter tributario, entonces el ejercicio de la acción será tributario; si la norma violada se encuentra penalmente garantizada, entonces, la acción ejercida será penal. Pero estos son los aspectos que presenta la acción es función de la naturaleza de la norma violada, que es lo que permite su ejercicio". (Zavala, 2004)

Se puede agregar que la acción penal es el poder jurídico concedido por el Estado a las personas o al Ministerio Público, con el fin de estimular al órgano jurisdiccional penal para que éste inicie el proceso penal cuando se ha violentado una norma jurídica penalmente protegida

2.2.1.5.2. Clases de acción penal

Rosas (2015) expone la siguiente clasificación:

A).- Ejercicio público de la acción penal: se concentra cuando se ejerce la acción penal de oficio, a través de un órgano del Estado, en este sentido le concierne al representante del Ministerio Público.

B).-Ejercicio privado de la acción penal; aquí no es lo mismo hablar de acusación particular y de acusación privada; tomando como punto de partida de este análisis la clasificación de los delitos según la naturaleza jurídica de la acción, en delitos perseguidos de oficio y delitos solo por iniciativa del ofendido, surge evidentemente la forma distinta en que se promueve la acción penal en cada caso; por medio de la acusación particular para los primeros y a través de acusación privada, para los segundos (p.313).

2.2.1.5.3. Características del derecho de acción

Cubas (2015) determina que las características del derecho de acción penal son:

A) Características de la acción penal pública:

A.1. Publicidad.- La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene además, importancia social.

A.2 .Oficialidad.- Por tener carácter público, su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público, titular de la acción penal y que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción popular o por noticia policial (con excepción de los delitos perseguibles por acción privada).

A.3. Indivisibilidad.- La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han participado en la comisión del delito.

A.4.Obligatoriedad.- La obligación por parte del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho ilícito.

A.5 Irrevocabilidad.- Una vez promovida la acción penal sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que declara el

sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada una excepción.

A.6 Indisponibilidad.- La ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer la acción penal, por tanto, es un derecho indelegable, intransferible. En el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público y en caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a sus sustitutos legales. B. Características de la acción penal privada:

B.1. Voluntaria.- En el acto de promover la acción penal privada prima la voluntad del titular.

B.2. Renunciable.- La acción penal privada es renunciable.

B.3. Relativa.- La acción penal privada es relativa, por cuanto la administración de todo el proceso penal y, sobre todo, la capacidad de ejercitar el Ius Puniendi está en manos del Estado, el particular tiene por tanto sólo facultades que se enmarcan dentro del control penal estatal (pp.140-141).

Para Rosas (2015) las características de la acción penal son:

A) El publicismo: que es derivada de la potestad estatal para preservar el ordenamiento jurídico, de manera que la acción se dirige hacia el órgano jurisdiccional para que este administre justicia penal, para que realice función pública.

B) Unidad: siendo la acción penal el derecho autónomo respecto del derecho de fondo, no existen diversas acciones que correspondan a cada uno de los tipos delictivos que conforman el código penal, sino que se trata de un derecho unitario a reclamar la actividad jurisdiccional penal.

C) Irrenunciabilidad: una vez ejercida la acción penal el sujeto procesal no puede sustraerse por el acto del proceso en cuanto se deán todos los presupuestos procesales, por el contrario va a recaer un pronunciamiento de fondo, esto es la conclusión a través de una sentencia (condenatoria o absolutoria) (pp.311-312).

2.2.1.5.4. Titularidad en el ejercicio de la acción penal

Para (Cubas 2015) refiere que en sus la acción penal recayó en la persona del ofendido (acusador privado del sistema germano antiguo), en una pluralidad de personas en el sistema de la acusación popular del derecho ateniense. Luego vendrían seis siglos de dominio del sistema inquisitivo que predominó en Europa (siglos XIII al XVIII), período durante el cual todas las facultades estaban centralizadas en la persona del

monarca. Posteriormente, con el advenimiento del Estado moderno, el poder se descentraliza y surgen nuevas instituciones o, en algunos casos, las viejas instituciones en el campo del derecho retoman roles acordes con el sistema político triunfante. Así es como también el Derecho Procesal Penal puede desarrollarse en muchos casos como control del poder punitivo exacerbado del Estado. Es en ese contexto donde podemos situar el tema de la titularidad al ejercer la acción penal.

En efecto, el Ministerio Público asume la titularidad del ejercicio de la acción penal bajo la premisa de que es un ente aparatado del poder judicial y, por tanto, con independencia en el rol de la investigación, es el vigilante de la legalidad durante el curso del proceso. En los casos de querellas, lo que existe como fundamento al depositar la titularidad de la acción penal en manos del directamente ofendido o de sus descendientes más cercanos incluido el cónyuge, es el interés del Estado de proteger bienes jurídicos de mayor trascendencia como el honor o la intimidad personal (p.142).

Finalmente Rosas (2015) expone que existen tres sistemas distintos:

A).- El Sistema de Oficialidad: consiste en la atribución del derecho de acción penal, a un órgano perteneciente al Estado, Esta oficialidad se subdivide a su vez en:

1. Inferencia; esto es cuando no existe persona distinta al juez, a quien se le encarga la función de promover el proceso, como es de verse, esta postura solo tiene cabida en un sistema inquisitivo.

2. Diferenciada; se materializa, cuando existe otra persona “oficial”, distinta a la del juez, a quien se le encarga la misión de promover el proceso: así tenemos en nuestro caso como la mayoría de los sistemas judiciales de los países, el Ministerio Público o Ministerio Fiscal.

B).- El Sistema de Disponibilidad: de acuerdo con este sistema se concede la atribución del derecho de la acción penal a las particularidades, bajo esta posición existen dos formas:

1. Absoluta: se concreta cuando se concede en forma ilimitada, indeterminada la acción penal, a cualquier particular.

2. Relativa: se concede a determinadas personas particularidades, en razón a una

especial circunstancia o el ofendido por el ser, generalmente, cuando es el agravio o el ofendido por el evento delictuoso presumiblemente cometido a una persona.

C).- El Sistema mixto o ecléctico través de este sistema convienen los dos sistemas anteriormente explicados en cuanto a la atribución indistinta de la concesión del ejercicio de la acción penal (pp.312-313).

2.2.1.5.5. Regulación de la acción penal

El Código Procesal Penal del 2004 corrige el error del Código de Procedimientos Penales de 1940, estableciendo con más acierto en el artículo 1° que: “la acción penal es pública. Su ejercicio en los delitos de persecución publica, corresponde al Ministerio Público (...). En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querrela” (Cubas, 2015, p. 143).

2.2.1.6. El proceso penal

2.2.1.6.1. Concepto

Etimológicamente, proceso proviene de la voz latina “processus” que a su vez deriva de pro, “para adelante”, y cederé, “caer”, “caminar”. Entonces, proceso significa, pues, en el lenguaje jurídico, un desenvolvimiento, una sucesión de actos que se dirigen a la declaración o a la ejecución de algún derecho (Rosas, 2015, p.103).

El proceso penal persigue interés públicos dimanantes de la imposición de Sanciones penales. Está sujeto a una titularidad estatal: solo el juez puede imponer sanciones, pero a su vez el Ministerio Publico es titular de la potestad de persecución. Así el principio acusatorio se impone porque coexisten dos derechos de relevancia constitucional en el proceso penal: el derecho de penar a cargo del juez y el derecho de perseguir a cargo del fiscal (San Martin, 2015).

Según San Martin (citado por Rosas, 2015) define:

El proceso penal desde un punto de vista descriptivo, como el conjunto de actos realizados por determinados sujetos (jueces, fiscales, defensores, imputados, etc.)

con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de esta última (...). En términos más precisos, el proceso penal es un instrumento previsto por el estado para la realización del derecho punitivo y, como tal, tiene un carácter necesario, es de interés público y tiene una finalidad práctica (P.104).

Finalmente para García (citado por Reyna, 2015, p.34) define el proceso penal como “el medio que establece la ley para lograr la pretensión punitiva del Estado.

Creus (1997), afirma que el derecho penal está constituido por el conjunto de leyes que describen delitos mediante la asignación de una pena para el autor de la conducta que los constituya, o la sustituye en ciertos casos por una medida de seguridad. (...)

La sentencia penal, es un acto que importa la materialización del derecho penal a un caso específico y concreto, habilitando a través del mismo, el debido ejercicio del Ius Puniendi del Estado; esto es, que sirve a la función del ordenamiento jurídico penal estatal, que como mecanismo de control social (Muñoz, 1985), su lógica estriba en sancionar determinadas acciones humanas (matar, lesionar, violar, etc.) con un pena (prisión, multa, inhabilitación, etc.), o una medida de seguridad, cuando estas lesionan o ponen en peligro un bien jurídico penalmente tutelado(vida, integridad física, libertad sexual, etc.) (Polaino, 2004).

Respecto a proceso puedo agregar que su materialización sólo se puede hacer efectiva dentro de un proceso penal, definido como el conjunto de actos y formas, mediante los cuales los órganos jurisdiccionales fijados y preestablecidos en la ley, previa observancia de determinados principios y garantías, aplican la ley penal en los casos singulares concretos.

2.2.1.6.2. Clases de proceso penal

De acuerdo a las normas contempladas en el Código de Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo N° 124 promulgada el 15 de junio de 1981, se identifican dos tipos de proceso penal. Proceso Penal Sumario y Proceso Ordinario.

2.2.1.6.3. Principios aplicables al proceso penal

2.2.1.6.3.1. Principio de legalidad

Peña (2013) afirma que el principio de legalidad significa poner un muro de contención ante una pretendida expansión punitiva del Estado, de poner marcos normativos delimitativos de los poderes criminalizadores detentados por las agencias estatales, como un valladar inoponible a los derechos y libertades ciudadanas (p. 45).

Según García (2005) el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos. De esta forma, el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley.

Asimismo, Bramont Arias (1994), señala las consecuencias del principio de legalidad: 1) La exclusividad de la ley penal, esto es, solo la ley penal es fuente creadora de delitos y penas, por lo que se excluyen la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la analogía; 2) La prohibición de delegar la facultad legislativa penal: sin embargo el poder legislativo puede delegar en el poder ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa (artículo 104, constitución de 1993); 3) Las leyes en blanco en las que se está determinada la sanción pero el precepto será definido por un reglamento o ley presente o futura (p. 33 y 34).

Garantías que exige el principio de legalidad; La doctrina reconoce cuatro garantías:

a) Garantía criminal (*nullum crimen sine lege*).

Esta garantía señala que no se puede definir como conducta delictiva a aquella conducta que no se encuentra previamente señalada en la ley y, mucho menos, posteriormente, castigarla con pena y/o medida de seguridad.

Por ende, se entiende que se califica como delito aquello que sólo la ley lo expresa sin importar si aquella conducta sea considerada reprochable y/o lesione el Derecho

(principio de legalidad criminal). De esta manera, se prohíbe la creación de conductas criminales por vía judicial ya que dicha misión le corresponde a la ley penal.

b) Garantía penal (*nulla poena sine lege*).

Esta garantía señala que no se puede imponer a la persona una pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en el Código. De esta manera, un sector de la doctrina sostiene que no pueden asignarse más penas que las implantadas por el legislador en cada cuestión, hallándose vedado sustituir por otra la penalidad prevista en cada figura delictiva y, más aún, “inventar” penas. Es por ello que también recibe el nombre de principio de legalidad penal.

c) Garantía jurisdiccional.

Esta garantía sostiene que nadie puede ser sancionado ni castigado sino sólo a través de un juicio formal, en el cual se respeten las garantías constituidas por la ley penal; También es conocido como principio de legalidad procesal.

d) Garantía de ejecución penal.

Esta garantía parte de la premisa de que toda pena tiene que ser cumplida, ejecutada y aplicadas. Partiendo de ello, esta garantía se sustenta bajo el axioma siguiente: “No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por la ley”. Esta garantía es conocida como principio de legalidad en la ejecución.

Finalmente por este principio, la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida esta como expresión de la “voluntad general”, que tiene la función de limitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal según Muñoz (2003).

En conclusión puedo agregar que el Principio de Legalidad se encuentra regulado en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, que estipula: Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta para la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella.

2.2.1.6.3.2. Principio de lesividad

Este principio consiste en que el delito requiere para ser considerado como tal, requiere de la vulneración de un bien jurídico protegido, es decir, que el comportamiento constituya un verdadero y real presupuesto de antijuricidad penal (Polaino 2004).

Para el autor Villa (2014) expone:

El bien jurídico como objeto de protección del derecho penal debe ser lesionado o puesto en peligro para que, conforme el principio de lesividad, el derecho penal intervenga. No es suficiente entonces con que exista oposición entre la conducta y la norma penal, es necesario la lesión o puesta en peligro del bien jurídico concreto cuya protección le ha sido encargada al catálogo de la parte especial del código pues *nullum crimen sine iniurian* (p.140).

Este principio consiste en que el delito requiere para ser considerado como tal, requiere de la vulneración de un bien jurídico protegido, es decir, que el comportamiento constituya un verdadero y real presupuesto de antijuricidad penal (Polaino N. 2004).

González (2008) afirma que este principio de lesividad o de ofensividad, como se le llama también en doctrina, se revela como uno de los fundamentos sobre los cuales, se sustenta el ejercicio del derecho penal, pero sobre todo, la efectividad de su carácter punitivo o sancionatorio. La naturaleza de este principio está directamente relacionada con la finalidad de protección de bienes jurídicos fundamentales, que se persigue a través del derecho penal y que puede resumirse en pocas palabras, pues para identificarlo basta con señalar que no existe delito sin daño y que su intervención solo será legítima, cuando se constate la afectación o lesión de un bien jurídico de naturaleza fundamental, ya que cuando no se produzca tal afectación jurídica, el derecho penal no debe intervenir y, si lo hace, su actuación devendría en irracional y desproporcional.

Se puede agregar que el principio de lesividad implica que ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto

jurídico, entendido como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo.

2.2.1.6.3.3. Principio de culpabilidad penal

Este principio supone que las solas lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos que el Derecho penal protege no son suficientes para que sobre el autor pese la carga de una pena, puesto que para ellos es necesario que exista dolo o culpa, es decir, que además de la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro, corresponde posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha actuado con una voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya que sin éstos componentes subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 1997).

Por su parte para Villa (2014) refiere que la garantía del derecho penal que se repriman solo conductas infractoras de la norma y no personalidades, creencias, valores, intereses, actitudes, modos de vida, o resultados producidos, con independencia de comportamiento responsable alguno. No cabe conforme el principio que nos ocupa, imponer una pena que no se corresponde con la verdadera responsabilidad del agente (p.143).

“Conforme la teoría normativista: culpabilidad es el resultado del juicio por el cual se reprocha a un sujeto imputable haber realizado un comportamiento típico y antijurídico, cuando le era exigible la realización de otro comportamiento diferente, adecuado a la norma (Vela S. 1983. Pág.201)”

José Luis Castillo Alva, afirma que el principio de culpabilidad constituye en el actual desarrollo del derecho penal contemporáneo el más importante axioma de los que derivan de modo directo de un Estado de Derecho, porque su violación implica el desconocimiento de la esencia del concepto de persona. Su vigencia permite que una persona sólo sea responsable por los actos que podía y debía evitar e impide que pueda responder por todas las consecuencias que se deriven de su acción. El principio de culpabilidad representa el límite mínimo que el Estado debe respetar si es que pretende legitimar su intervención y la aplicación del instrumento estatal más poderoso

La sanción penal no puede simplemente justificarse por necesidad es de defensa social o por criterios preventivo generales, que de por sí suelen ser expansivos y avasallantes cuando se trata de defender bienes jurídicos, no se trata de un principio jurídico formal, trata de un principio con un contenido material que traza un límite infranqueable a la actividad punitiva del estado.

En resumen se puede agregar que el principio de culpabilidad alude a las condiciones en que un determinado comportamiento antijurídico puede ser atribuido a su autor.

2.2.1.6.3.4. Principio de proporcionalidad de la pena

Para Villa (2014) sostiene que este principio del equilibrio y prudencia que debe existir entre la magnitud del hecho y la pena que le debe correspondiente el autor. La proporcionalidad debe fijar el punto en que la pena sea necesaria y suficiente a la culpabilidad del autor aunque con sujeción a La importancia de la norma protectora, o mismo que a la magnitud del daño, no teniendo cabida criterios de retribución talional o de venganza (p.144).

Por su parte Villavicencio (2013) afirma que el principio de proporcionalidad de la pena consiste en la búsqueda de un equilibrio entre el poder penal del Estado, la sociedad y el imputado. Constituye un principio básico respecto de toda intervención gravosa de este poder, directamente a partir del principio del Estado de derecho. La pena no sobrepasa la responsabilidad por el hecho. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes (p.115)

Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar directamente que se trata de un principio constitucional justifican su existencia invocando razones de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula la proporcionalidad entre la amenaza penal a la dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la medida de culpabilidad del hecho".

En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el concepto de culpabilidad como pilar básico de un Derecho penal moderno que este elemento limita el ejercicio de *liuspuniendi* en tanto ordenan o imponer sanción sino hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la culpabilidad. La pena constituye, de este modo, una retribución que la sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpable.

Por este principio se puede agregar que es un valor constitucional implícitamente derivado del principio de legalidad penal, así reconocido en el artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Constitución, en interpretación conjunta con el último párrafo del artículo 200º constitucional, en el que se reconoce explícitamente el principio de proporcionalidad.

2.2.1.6.3.5. Principio acusatorio

Este principio indica la distribución de roles y las condiciones en que se debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesa penal, al respecto, se entiendo por principio acusatorio a que según el cual no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después al respecto. Tenemos una persecución de oficio del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. Esta división, en primer lugar, impide la parcialidad del Juez, Ministerio Público que, por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de la organización judicial y regida por su propia ley orgánica, y en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho procesal común (San Martín, 2006).

Está previsto por el inciso 1 del art. 356º “El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú”. Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación

previa y válida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no puede iniciar de oficio el juzgamiento. “La acusación válidamente formulada y admitida produce eficacia (efecto) vinculante. Su fundamento es la idea rectora de que sin previa acusación es imposible jurídicamente el advenimiento del juzgamiento oral, público y contradictorio”. En virtud del Principio Acusatorio se reconoce nítidamente la separación de funciones para el desarrollo del proceso penal: al Ministerio Público le corresponde la función requirente, la función persecutoria del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, con esa finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. En tanto que al órgano jurisdiccional le corresponde la función decisoria, la función de fallo; dirige la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento; le corresponde resolver los conflictos de contenido penal, expidiendo las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley. Todo esto está previsto por los artículos IV y V del Título Preliminar. Este esquema supone la intervención de un acusador activo que investiga y requiere y de un tribunal pasivo, un árbitro entre las partes que controla y decide, preservando la efectiva vigencia de la imparcialidad judicial. Con esto se debe poner fin a la situación de caos procesal creado por la confusión de roles existente actualmente. Un fiscal que investiga sólo en la etapa preliminar, sin regulación alguna y en plazos indeterminados y que tiene que acusar en base a electos de convicción que él no ha logrado; un juez instructor que por estar pretendiendo investigar, no cumple su función esencial: juzgar, pero que sentencia e impone penas sin previo juicio en un sin número de procesos de trámite sumario. El principio de división de poderes restringe la tarea de los jueces a funciones estrictamente decisorias, propias del Poder Judicial, en este esquema el Juez asume su rol de garante de la vigencia plena de los derechos humanos. Como lo sostiene Alberto Bovino el principio acusatorio “es un principio estructural del derecho positivo, de alcance formal en los supuestos de persecución penal pública, este principio tiene como finalidad principal realizar la garantía de imparcialidad del tribunal, esto es la actuación objetiva del tribunal, limitada a las tareas decisorias que no se comprometen con la hipótesis persecutoria”. El contenido intrínseco al principio acusatorio, es la necesidad del requerimiento del Ministerio público para iniciar el procedimiento, se trata de una exigencia que impide que el

tribunal inicie de oficio a la investigación o someta a proceso al imputado de oficio. El juez por iniciativa propia no puede investigar o poner en marcha o impulsar el proceso. En consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria diferencia entre el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, aunque ambas tienen una finalidad convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. Hay una diferenciación teórica, normativa y práctica entre la potestad persecutoria y la potestad jurisdiccional, por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público; en tanto que al Poder Judicial le corresponde exclusivamente dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del juzgamiento (Cubas, s.f, s.p).

Podemos agregar que el principio acusatorio consiste en unir las ventajas de la persecución penal estatal con las del proceso acusatorio que consisten, precisamente en que juez y acusador no son la misma persona.

2.2.1.6.3.6. Principio de correlación entre acusación y sentencia

San Martín (2006) considera que este principio surge de los mandatos constitucionales establecidos en: a) el derecho fundamental de defensa en juicio (art. 139, inc. 14 de la Constitución Política del Perú), que impide válidamente que el juez resuelva sobre algo que no ha sido objeto de contradicción; b) el derecho a ser informado de la acusación (art. 139 inc. 15 de la Constitución), que es previo al anterior pues la contradicción efectiva requiere el previo conocimiento de los cargos, sobre los cuales se ha de estructurar la defensa; y, c) el derecho a un debido proceso (art. 139, inc. 3 de la Constitución Política).

Burga (2010) comenta: el principio de correlación entre acusación y sentencia, tiene que ver fundamentalmente con el objeto del debate en un proceso penal. La delimitación del objeto del debate en un proceso penal se va desarrollándose en forma progresiva durante la investigación. El primer momento de la delimitación se produce al emitirse la disposición de investigación por parte del Fiscal, la cual puede cambiar –sin ser alterado sustancialmente- conforme el avance de la investigación para lo cual se requiere emitir una disposición ampliatoria si surgen nuevos hechos que merecen ser investigados y posiblemente llevados a juicio, hasta el momento de la acusación donde el ente acusador

tiene que tener claro los hechos para poder fijar su imputación, que es la que tendrá que respetarse tanto para los efectos de la admisión de los medios de prueba, como para la decisión final, porque es la acusación la que marca la delimitación más fuerte de los hechos y su calificación jurídica, sobre todo en un sistema oral donde las partes deben en este estado del proceso, tiene que tener clara su teoría del caso o punto de vista sobre los hechos materia de juzgamiento, toda vez que éstos serán defendidos a través de las técnicas de litigación oral en el juicio. Es justamente la acusación la que determina el objeto del juicio, siendo sus características principales la inmutabilidad (no alteración de los hechos), y la indivisibilidad (hechos anteriores, concomitantes o posteriores) (s.p).

Mediante este principio se puede indicar que su finalidad es es el de garantizar la imparcialidad judicial, el derecho de contradicción, en especial, el del imputado, en el sentido que pueda este reaccionar ante la futura decisión con medios procesales adecuados (alegaciones, medios de prueba, etc.) en contra de un hecho enjuiciado prefijado que sea el objeto del proceso, limitando la potestad de resolver referido al objeto del proceso.

2.2.1.6.4. Finalidad del proceso penal

Armenta (citado por Rosas , 2015) refiere que la finalidad en el proceso penal tiene una serie de fines del proceso penal, sostiene que el fin fundamental del proceso penal es la actuación del *ius puniendi* estatal, que obedece o proviene esencialmente de la atribución exclusiva al Estado la facultad de imponer penas: el Estado tiene la facultad pero también el deber, de castigar las conductas delictivas de las que tenga conocimiento; y la facultad-deber solo pueden ejercitarlo los jueces y tribunales a través del proceso penal.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el ejercicio de esa facultad-deber, por definición, ha de quedar sujeto al principio de legalidad o necesidad; en tanto por otro lado, su carácter público lo convierte en indisponible para su titular, el Estado. Agrega esa autora, que además de esa finalidad de actuación del *ius puniendi*, se reconoce, sobre todo desde tiempos relativamente recientes, otros dos fines del proceso penal; la protección a la víctima del delito y la rehabilitación reinserción social del delincuente.

Por su parte Cafferata (citado por Rosas ,2015) expone:

El proceso penal no se lleva a cabo porque cometió un delito, sino para permitir que los órganos de la acusación de muestren ante los tribunales de justicia, y en las condiciones de garantías constitucionales preestablecidas, que un delito en realidad y probablemente se cometió y en caso afirmativo, se disponga la aplicación por su parte de los tribunales, de la sanción prevista por la ley penal el responsable. El imputado no deberá probar su inocencia o circunstancia existentes o atenuantes de culpabilidad, pero podrá hacerlo, por lo que esta posibilidad también debe ser considerada como uno de los fines del proceso.

Finalmente Ore (citado por Rosas, 2015) expresa que el proceso penal procura alcanzar diversos fines que pueden clasificarse en dos categorías:

1. El fin general del proceso penal se identifica con aquel objetivo remoto que persigue todo proceso; la resolución de conflictos.

2. El fin específico del proceso penal, de otro lado se identifica con la aplicación de la ley penal al caso concreto. En efecto todo proceso penal sirve esencialmente para la actuación, en un caso particular de la ley penal sustantiva, la cual no contiene más que previsiones abstractas.

2.2.1.6.5. Clases de proceso penal

2.2.1.6.5.1. Antes de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal

2.2.1.6.5.1.1. El proceso penal sumario

A. Concepto

Al proceso penal sumario lo podemos conceptualizarlo como aquel donde el Juez Penal investido de la potestad jurisdiccional plena desdobra sus funciones en investigar y la de fallar en un caso concreto puesto a su conocimiento en el plazo investigatorio establecido por ley, recurriendo supletoriamente a las reglas del proceso penal ordinario (Rosas, 2005, p. 543).

Para Peña (2013) sostiene que el proceso penal cuenta con una única de instrucción. El plazo de instrucción es de sesenta días el cual podrá prorrogarse por no más de treinta

días si el juez penal lo considera necesario o a solicitud del fiscal provincial (art. 3 del Dec. Leg. N 124), cuando se estime que no se ha logrado alcanzar los fines propuestos en el mismo (p. 205).

B. Regulación

Se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 124.

Artículo 1.- Los Jueces de Primera Instancia en lo Penal conocerán en juicio sumario y sentenciarán con arreglo al presente Decreto Legislativo los delitos tipificados por el Código Penal y leyes especiales que se precisan en el artículo siguiente. En los casos de concurso de delitos, donde alguno de los cuales sea más grave que los comprendidos en la presente Ley, el procedimiento será de acuerdo a los trámites del proceso ordinario previstos en el Código de Procedimientos Penales.

2.2.1.6.5.1.2. El proceso penal ordinario

A. Concepto

El proceso penal ordinario peruano vigente, es compatible con los principios constitucionales que rigen el proceso penal. El estudio del proceso penal ordinario esta estructura en 5 fases procesales claramente identificadas, entre el proceso penal y la norma constitucional. Estas fases son: la investigación preliminar, la instrucción judicial, la fase intermedia, el juicio oral, y la fase impugnativa (Burgos, 2002).

B. Regulación

Este proceso penal ordinario o esquema básico del proceso penal es el que regula el C. de P.P. y se desarrolla en dos etapas: la instrucción o periodo investigador y el juicio, que se realiza en instancia única (art. 1° del C. De P.P.) (Rosas, 2005, p. 458)

2.2.1.6.5.2. Características del proceso penal sumario y ordinario

Calderón y Águila (2011) expresan: la base legal del proceso penal sumario es el Dec. Leg. N° 124; solo presenta una etapa de instrucción; el plazo de la instrucción es de 60 días prorrogables a 30 días, los actos del fiscal (en este caso provincial) son formalizar la denuncia y realizar la acusación; los actos del órgano jurisdiccional, el

juez penal, son el auto de apertura de instrucción y la sentencia; los autos se ponen a disposición de las partes después de la acusación (10 días); sólo se da lectura a la sentencia condenatoria, como recurso se tiene a la apelación; las instancias son el juez penal y la sala penal superior.

Calderón y Águila (2011) expresan: la base legal del proceso penal ordinario es C.de PP. 1940; sus etapas son la instrucción, actos preparatorios y el juicio oral; el plazo de la instrucción es de 4 meses prorrogables a 60 días (en casos complejos hasta 8 meses adicionales); los actos del fiscal provincial son formalizar la denuncia y dar el dictamen final, y del fiscal superior es realizar la acusación; los actos del órgano jurisdiccional son, en caso del juez penal son el auto de apertura de instrucción y el informe final, y de la sala penal es la sentencia; los autos se ponen a disposición de las partes después del informe final (3 días); se da lectura a la sentencia condenatoria como a la absolutoria, se tiene el recurso de nulidad; las instancias son la sala penal superior y la sala penal suprema.

2.2.1.6.5.3. Los procesos penales en el Nuevo Código Procesal Penal

A. El proceso penal común

El proceso común se encuentra regulado en el libro tercero del Código procesal Penal del 2004 dividiéndose en tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. En este proceso penal cuya estructura tiene etapas diferencias Y cuya finalidad también se distinguen notablemente, este nuevo proceso penal y de decisión están claramente definidas, también se lleva a cabo por órganos diferentes, cumpliendo cada uno el rol que le corresponde (Rosas, 2015).

B. El proceso penal especial

El proceso inmediato es un proceso especial que se lleva a cabo cuando concurre una circunstancia extraordinaria que permite abreviar el proceso penal, en este caso no desarrollando las fases de investigación preparatoria e intermedia. Y a sea por una situación de flagrancia delictiva, por la confesión del imputado o porque, producto de las diligencias de investigación iniciales o preliminares se han obtenido los elementos de convicción necesarias, el fiscal podrá requerir al juez de la investigación preparatoria el inicio del proceso inmediato, el que, si es concedido,

permitirá la formulación de la acusación (Bramont, 1998).

2.2.1.6.5.4. Identificación del proceso penal en del caso en estudio.

Las sentencias emitidas en el expediente en estudio fueron dadas en un proceso que se regía al Nuevo Código Procesal Penal, por lo que el delito de robo agravado tramitó en la vía de proceso común.

2.2.1.7. Los sujetos procesales

2.2.1.7.1. El Ministerio Público

2.2.1.7.1. Concepto

El Ministerio Público es la institución encargada de la defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho. Asimismo El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y como tal actúa de oficio, a instancia del interesado, por acción popular o por noticia policial (Rosas, 2015).

Asimismo el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función (Art. 60, del C. P. P).

2.2.1.7.2. Atribuciones del Ministerio Público

Del mismo modo, el Código Procesal Penal, en su artículo 61° ha establecido las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público, siendo dichas atribuciones las siguientes:

- 1.** El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación.
- 2.** Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere

necesarias, cuando corresponda hacerlo.

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.

4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53 (Sánchez, 2013).

2.2.1.7.2. El Juez penal

2.2.1.7.2.1. Concepto

El juez penal es la persona que ejerce la jurisdicción penal la constitución le confiere la facultad decisoria, la facultad de fallo, la exclusiva del órgano jurisdiccional, dirigir las etapa procesal del juzgamiento (Cubas, 2015).

Finalmente el juez es un funcionario del Estado que ejerce un determinado poder denominado poder jurisdiccional. A ello hacen referencia tanto las teorías objetivas de lo jurisdiccional que hacen radicar la esencia de la función en la facultad de solucionar un conflicto como las teorías subjetivas de lo jurisdiccional que explican el funcionamiento por la potestad de aplicar el derecho al caso concreto (Rosas, 2015).

2.2.1.7.2.2. Órganos Jurisdiccionales en materia penal

Para Cubas (2006) los órganos jurisdiccionales en materia penal son:

1. Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.
2. Las Salas Penales Superiores en los Distritos Judiciales.
3. Los Juzgados Penales Provinciales
4. Los Juzgados de Paz Letrados.

Juez penal es el órgano jurisdiccional unipersonal, en tanto que la Sala Penal es el órgano jurisdiccional colegiado, su función por mandato constitucional es dirigir la etapa procesal del juzgamiento.

A los Juzgados Penales les corresponde conocer:

1. Los procesos penales de su competencia, con las facultades y los trámites señalados en la ley.
2. En grado de apelación los asuntos que resuelven los Juzgados de Paz Letrados.
3. Los demás asuntos que les corresponde conforme a ley. A la Sala Penal Superior le corresponde:
 1. Los recursos de apelación de su competencia.
 2. El juzgamiento oral de los procesos establecidos por la ley.
 3. Las quejas de derecho y contiendas de competencia promovidas en materia penal que les corresponde.
 4. En primera instancia, los procesos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por Jueces y Fiscales Especializados o Mixtos, Jueces de Paz Letrados, Jueces de Paz y otros funcionarios señalados por la ley aunque hayan cesado en el cargo.
 5. Los demás asuntos que correspondan conforme a ley. (pp. 188 - 189).

2.2.1.7.3. El imputado

2.2.1.7.3.1. Concepto

El imputado es la persona física contra quien se dirige la imputación sindicándolo como participe en la comisión del delito. Con ese nombre se designa a la persona desde el momento que se abre la investigación hasta su finalización. El ser imputado es una situación procesal de una persona, situación que le otorga una serie de facultades y derechos, y que en modo alguno puede ser de todo imputado un culpable porque para decidir esto existen el proceso y el juicio (Cubas, 2015).

Si bien es cierto el que el imputado puede ser cualquier persona física i individual, provista de capacidad de ejercicio, considerando como una participante más, pero no objeto del proceso penal. Es el principal protagonista del proceso penal (Rosas, 2015).

2.2.1.7.3.2. Derechos del imputado

Los derechos del imputado están establecidos en el artículo 71 del Código Procesal

Penal:

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o través de su abogado defensor, los

derechos que la constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata comprensible, que tiene derechos a:

- a) Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención, a que se le expresa la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda;
- b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
- c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor.
- d) Abstenerse de declarar; y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia:
- e) Que no emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y
- f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta se hará constar la abstención y se consignara el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del fiscal se dejara constancia, de tal hecho en el acta.

4. Cuando el imputado considera que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes (Sánchez, 2013).

2.2.1.7.4. El abogado defensor

2.2.1.7.4.1 Concepto

Por su parte Rosas (2015) refiere que:

“El abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía, es decir el que emplea sus conocimientos del Derecho en pedir justicia ante quienes haya de otorgarla o discernirla. Como se ve es una profesión y no un título académico” (p.481).

Dentro del principio constitucional del derecho a la defensa, nos encontramos con un elemento importante cual es el abogado defensor. Este constituye el asistente técnico del imputado, que puede ser de confianza o formal, según sea un abogado de libre elección o uno de oficio. Este aspecto está regulado por el artículo 80 de CPP al establecer “El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de sus elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso (Cubas, 2015).

Si bien es cierto el abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía, es decir el que emplea sus conocimientos del Derecho en pedir justicia ante quienes haya de otorgarla o discernirla. Como se ve es una profesión y no un título académico (Rosas, 2015).

2.2.1.7.4.2. Requisitos, impedimentos, deberes y derechos

Según Cubas (2015) expone que:

Los requisitos para patrocinar son los siguientes:

1. Tener título de abogado.
2. Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener inscrito el Título Profesional en un colegio de abogados. Los impedimentos son:

1. Ha sido suspendido en el ejercicio de la abogacía por resolución judicial firme.
2. Ha sido suspendido en el ejercicio por medida disciplinaria del Colegio de Abogados en donde se encuentra inscrito, o no se halle hábil conforme al estatuto del respectivo

colegio.

3. Ha sido inhabilitado para ejercer la abogacía por sentencia judicial firme;
4. Ha sufrido destitución de cargo judicial o público, en los cinco años siguientes a la aplicación de la sanción.
5. Se encuentre sufriendo pena privativa de la libertad impuesta por sentencia judicial condenatoria firme.

Los deberes del abogado son:

1. Actuar como servidor de la Justicia y como colaborador de los Magistrados.
2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.
3. Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional.
4. Guardar el secreto profesional.
5. Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice.
6. Desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio, herencia y ausentes, para el que se le ha designado.
7. Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los Magistrados y guarden el debido respeto a los mismos y a todas las personas que intervengan en el proceso.
8. Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente.
9. Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso aún no resuelto, en que intervenga.
10. Consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en caracteres legibles y el número de su registro en el Colegio de Abogados, y su firma en los originales, sin cuyos requisitos no se acepta el escrito.
11. Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía.
12. Ejercer obligatoriamente, cuando menos una defensa gratuita al año, según el reporte que realizase el respectivo Colegio de Abogados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289º de esta ley.

Los derechos del defensor:

1. Defender con independencia a quienes se lo soliciten en cualquier etapa del proceso;
2. Concertar libremente sus honorarios profesionales.
3. Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia.
4. Exigir el cumplimiento de la defensa cautiva.
5. Informar verbalmente o por escrito en todo proceso judicial, antes que se ponga fin a la instancia.
6. Exigir el cumplimiento del horario del Despacho Judicial y de las diligencias o actos procesales.
7. Ser atendido personalmente por los Magistrados, cuando así lo requiera el ejercicio de su patrocinio.
8. Recibir de toda autoridad el trato que corresponde a su función (pp. 251-256).

2.2.1.7.4.3. El defensor de oficio

La defensa de oficio en los países de la región de Latinoamérica se ha desarrollado de un modo muy pasivo, mas al servicio de la formalidad de la justicia que a la defensa del procesado, lo que se ha traducido en que no haya una verdadera igualdad de armas entre el defensor y el fiscal acusador (Cubas, 2015).

2.2.1.7.5. El agraviado

2.2.1.7.5.1. Concepto

Es la persona que ha sufrido el daño o ha sido lesionada. Esta lesión afecta lógicamente al bien jurídico protegido en la víctima, la víctima es la que ha soportado el actuar del agente en la comisión de un determinado delito (Rosas, 2015).

La víctima es una persona física que haya sufrido un perjuicio en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o en perjuicio económico directamente causado por el acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado (Cubas,2015).

2.2.1.7.5.2. Intervención del agraviado en el proceso

El agraviado puede limitarse a esperar que la sentencia fije el monto de la reparación para cobrarlo si lo considera conveniente ya que no puede ser obligado a ello o puede participar activamente en el desarrollo del proceso para esto es necesario que se constituya en actor civil (Cubas, 2015, p.277).

2.2.1.7.5.3. Constitución en parte civil

La intervención del agraviado cuando se constituye en actor civil en el proceso penal solo estará limitada a la acción preparatorias está previsto por el artículo 98 al establecer que: la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil este legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito (Cubas, 2015, p.279).

2.2.1.8. Las medidas coercitivas

2.2.1.8.1. Concepto

Gimeno (citado por Cubas , 2015) nos expresa que las medidas coercitivas se debe entender las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que puede adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa como consecuencia de un lado del surgimiento de su calidad de imputado y por el otro de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento penal por las que se limita provisionalmente Lambayeque o la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia.

2.2.1.8.2. Principios para su aplicación

La aplicación de las medidas coercitivas debe guiarse por preceptos generales, esto está referido a los principios rectores o informadores de la normativa y a las finalidades que han de perseguirse con la adopción de estas medidas, ya que con ellas se limita los derechos el individuo (Neyra, 2010).

2.2.1.8.2.1. Principio de necesidad

Las medidas coercitivas se impondrán cuando absolutamente indispensables para

asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo de procedimiento y la aplicación de la ley. La comprobación ,en cada caso, de la necesidad e imponerlas luego de un cuidadoso examen, al margen de un mero trámite formal o burocrático: debiendo tener siempre presente que toda persona goza de la presunción de inocencia, es decir, que es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad (Cubas,2015, p.430).

2.2.1.8.2.2. Principio de proporcionalidad

La aplicación de las medidas coercitivas tiene que ceñirse a determinadas reglas, sus efectos no deben exceder la finalidad perseguida por la ley. La medida de precaución debe ser proporcional al peligro que se trata de prevenir, Es decir, una medida coercitiva tiene que ser proporcional con la necesidad o intereses principal de la finalidad del proceso, que es su razón de ser (Cubas, 2015, p. 429).

2.2.1.8.2.3. Principio de legalidad

Según este principio solo serán aplicables las medidas coercitivas establecidas expresamente en la ley en forma y por tiempo señalado en ella. Tratándose de un derecho fundamental de la persona, como Lambayeque que se vería afectado por la coerción durante la prosecución de un proceso, es imprescindible tener en cuenta el mandato constitucional contenido en el párrafo b) del inciso 24 del artículo 2º (Cubas, 2015, p.429).

2.2.1.8.2.4. Principio de prueba suficiente

Para imponer cualquier medida coercitiva se exige determinar base probatoria respecto de la vinculación del imputado con el hecho punible y la necesidad cautelar. Opera también en concordancia con el principio de proporcionalidad, luego cuando más grave sea la medida coercitiva será mayor la exigencia del elemento probatorio que acredite la necesidad de su aplicación. Este principio lo recoge el vigente artículo 253º del CPP ° (Cubas, 2015, p.429).

2.2.1.9.2.5. Principio de provisionalidad

Las medidas coercitivas por su naturaleza son provisionales, ninguna tiene carácter definitivo o duración indeterminada. El carácter instrumental de las medidas coercitivas

las hace provisionales en tanto están sometidas al proceso, a su progreso y a cualquiera de sus formas de culminación, puede extinguirse o modificarse por otra, según el avance del proceso. Es decir una determinada medida de coerción tiene su justificación en tanto subsistan las razones que le dieron lugar. En este principio está basada la duración de los plazos de cada una de las medidas de coerción personal y especialmente los plazos de la prisión preventiva (Cubas, 2015, p.430).

2.2.1.8.3. Clasificación de las medidas coercitivas

2.2.1.8.3.1. Las medidas de naturaleza personal

a) Detención

De acuerdo con la norma constitucional “Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (art.2, ap.24° f). La disposición que comentamos desarrolla la detención por delito flagrante (...) (Sánchez, 2013).

El Código penal en su artículo 259 establece:

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

1. el agente es descubierto en la realización del hecho punible
2. el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto
3. el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho (...) y es encontrado dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho punible.
4. el agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas después de la perpetración del delito (...) (Sánchez, 2013).

b) La prisión preventiva

La prisión preventiva es la medida de coerción personal de mayor gravedad que importa la privación de libertad del imputado mientras dure el proceso penal o hasta que se cumpla el plazo o se varíe por otra medida (...) (Sánchez, 2013).

Asimismo la prisión preventiva no es indeterminada, dura hasta nueve meses. En casos complejos el plazo límite no podrá ser mayor a dieciocho meses; el proceso es complejo cuando requiere de un número significativo de diligencias de investigación

(...) (Sánchez, 2013).

El Código Procesal Penal establece: Artículo 268 Presupuestos materiales

1. El juez, a solicitud del ministerio público, podrá dictar mandatos de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos.

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad;

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad (Sánchez, 2013).

c) La intervención preventiva

La internación preventiva aparece como una medida alternativa o sustitutiva de la prisión preventiva que se aplica cuando el imputado padece de enfermedades psiquiátricas, es decir, sufre de grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo hacen peligroso para sí o para terceras personas (...) (Sánchez, 2013, p. 288)

El Art. 293 del Código Procesal Penal menciona los presupuestos para que el juez de investigación preparatoria pueda ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico (Sánchez, 2013).

d) La comparecencia

La comparecencia es la medida de coerción personal de menor intensidad que la prisión preventiva y que, igualmente, tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a las diligencias judiciales pero en donde los delitos no son estimados graves o siéndolos no satisfacen los requisitos para imponer mandato de prisión. En tal sentido, el imputado se encuentra en libertad, pero obligación a cumplir con determinadas reglas impuestas por el Juez. Este título regula las distintas manifestaciones de la comparecencia simple o con restricciones (...) (Sánchez, 2013).

El código procesal penal establece: Artículo 286: la comparecencia

1. El juez de investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266.
2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento Fiscal, no concurren los presupuestos materiales previstos en el artículo 268.

En los supuestos anteriores, el fiscal y el juez de la investigación preparatoria deben motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión (Sánchez, 2013, p.280).

Artículo 288. Las restricciones

1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informara periódicamente en los plazos designados.
2. La obligación de no ausentarse del lugar donde reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se fijen.
3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente (Sánchez, 2013, p. 282).

Artículo 291. Comparecencia simple

1. El juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288, cuando el hecho punible denunciado este penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen.

2. La infracción de la comparecencia, en los casos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia, determinara la orden de ser conducido compulsivamente por la policía (Sánchez, 2013, p. 286).

e) El impedimento de salida

El impedimento de salida del país o localidad que se fije al imputado constituye otra medida restrictiva de derecho al libre tránsito, que se determina cuando resulte indispensable para la investigación del delito y la pena tenga una previsión mayor a tres años de privación de Lambayeque. Se pretende asegurar la presencia del imputado en el proceso penal para efectos de las diligencias a realizar, así como para evitar la posibilidad de fuga; en cualquier caso, el impedimento de salida debe estar debidamente justificado y por tiempo que señala la ley (Sánchez, 2013, p. 289).

El impedimento de salida se encuentra regula en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece cuando el fiscal puede solicitar esta medida coercitiva (Sánchez, 2013).

f) Suspensión preventiva de derechos

La suspensión preventiva de derechos aparece como medida de coerción complementaria a las ya existentes para los casos en donde se investigue o juzgue delitos previstos con pena de inhabilitación, sea como pena principal o accesoria, o como dice el legislador, cuando resulte necesaria para evitar la reiteración delictiva. Los delitos en referencia pueden ser de distinta índole, pero, principalmente, son los delitos que incurran los funcionarios públicos (...) (Sánchez, 2013, p. 290).

Está regulada en el artículo 297 del Código Procesal Penal que establece los requisitos

y en el artículo 298 del mismo cuerpo legal que establecen las medidas de suspensión de derechos que pueden imponerse. (Sánchez, 2013).

2.2.1.8.3.2. Las medidas de naturaleza real

a) El embargo

(...) el embargo, es la medida de coerción patrimonial que se adopta contra el imputado (y tercero Civil) a fin de asegurar la efectividad del pago de la reparación civil que ocasiona la conducta delictiva (Sánchez, 2013, p. 293).

El Código Procesal Penal en el artículo 302 establece:

En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas (Sánchez, 2013, p. 293).

b) Incautación

Es la da sobre bienes o derechos que se presume que constituyen instrumentos efectos o garantías del delito y por tal razón llegado el momento podrán ser objeto de decomiso. Ello implica que la titularidad de quienes lo detentan sobre los bienes o derechos afectados por la incautación no aparece amparada por el ordenamiento jurídico (Cubas, 2015, p.492).

2.2.1.9. La prueba

2.2.1.9.1. Concepto

La prueba es la coincidencia o falta de coincidencia fundamental entre las apariencias y las realidades, por la que el Juez busca alcanzar un grado de “convicción” de que la “aparición” alegada coincide con las “realidad” concreta, subsumiendo dicho resultado con la norma jurídica que le preexiste, surgiendo una conclusión legal, que pondrá fin al litigio, y se formulará una sentencia (Fairen, 1992).

Carneluti (citado por Devis, 2002) menciona que la prueba para el Juez es el cerco de luz que le sirve para alumbrarse en la oscuridad que es el proceso, siendo que, la relación de la prueba con el Juzgador es el corazón del problema del pensamiento del Juez y del juicio, no del proceso, puesto que la prueba no es tanto el engranaje básico para el proceso.

En ese sentido, la Corte Suprema peruana ha establecido que la prueba es un medio u objeto que proporciona al Juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde un punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la mente del Juez. En efecto, sin la existencia de la prueba no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobretodo del imputado (Perú. Corte Suprema, exp.1224/2004).

2.2.1.9.2. El Objeto de la Prueba

Según Devis (2002), el objeto de la prueba son las realidades susceptibles de ser probadas, siendo objetos de prueba por tanto: a) todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive las simples palabras pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se pongan, así también Colomer (2003), encuadra dentro de la categoría de las acciones humanas voluntarias positivas, como las negativas, como acciones intencionales, acciones no intencionales, Omisiones: omisiones intencionales, omisiones no intencionales, así como también, a los hechos psicológicos: Estados mentales: voliciones, creencias, emociones; acciones mentales y las relaciones de causalidad; b) Los hechos de la naturaleza en que no interviene actividad humana, estados de cosas, sucesos; c) Las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto de la realidad material sean o no producto del hombre, incluyendo los documentos; d) La persona física humana, su existencia y características, estado de salud, etc.; e) Los estados y hechos síquicos o internos del hombre, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o con voluntad (el expreso se traduce en hechos externos: palabras o documentos), siempre que no impliquen - una conducta apreciable en razón de hechos externos, porque

entonces correspondería al primer grupo, Igualmente, por hechos hay que entender algo que ha sucedido o que está sucediendo, lo que ocurrió en el pasado o en el presente.

2.2.1.9.3. La Valoración de la prueba

La valoración probatoria es la operación mental que realiza el Juzgador con el propósito de determinar la fuerza o valor probatorio del contenido o resultado de la actuación de los medios de prueba que han sido incorporados (sea de oficio o a petición de parte) al proceso o procedimiento, no recayendo solo en los elementos de prueba, sino en los hechos que pretende ser acreditaros o verificados con ellos, a efectos de encontrar la verdad jurídica y objetiva sobre los hechos ocurridos (Bustamante, 2001).

Su finalidad es determinar la fuerza o el valor probatorio que tienen los medios de prueba para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos objeto de prueba, así, si estos no logran producir convicción en el Juzgador se dice que los medios probatorios no han cumplido su finalidad; sin embargo, la valoración si habrá cumplido su propósito pues el Juzgador llego a determinar que no ha tenido mayor fuerza o valor probatorio (Bustamante, 2001).

La fuerza o valor probatorio es la aptitud que tiene un hecho para demostrar judicialmente un hecho, si por sí sólo demuestra el hecho investigado, tendrá un valor o una fuerza probatoria plena o completa, y, si apenas sirve para llevar al Juez ese convencimiento, en concurso o colaboración con otros medios, su valor o fuerza probatoria será incompleto (Talavera, 2009).

Por operación mental, se entiende el “razonamiento judicial” que realiza el Juzgador, el que consiste en una operación u operaciones mentales del Juzgador que consiste la evaluación de un problema jurídico a partir de un método mental valorativo y sistemático de los medios de prueba y las circunstancias o hechos para dar una valoración de intensidad de fuerza o eficacia aprobatoria, que luego de su aplicación, puede llevar al Juzgador a un estado de ignorancia, duda, verosimilitud, probabilidad o, finalmente, de certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos materia de prueba (Bustamante, 2001).

Finalmente, la verdad jurídica objetiva es la finalidad procesal que se busca obtener con

la interpretación de los resultados de la prueba, esto es, que la convicción del Juzgador no sea reflejo de una verdad formal, o una certeza meramente subjetiva, sino en una certeza objetiva, basada en la realidad de los hechos y en el Derecho (Bustamante, 2001).

2.2.1.9.4. El sistema de la sana crítica o de la apreciación razonada

Es el sistema político de valoración judicial que adopta nuestro sistema judicial peruano, siendo que, se basa en la sana crítica o apreciación razonada de la prueba, es decir, que el Juzgador tiene libertad para valorar los medios de prueba, es decir, que está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por la ley, pero su valoración debe ser efectuada de una manera razonada, crítica, basado en las reglas de la lógica, la psicológica, la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de experiencia aplicables al caso (Bustamante, 2001).

Sin embargo, como afirma Quijano (citado por Bustamante ,2001), este sistema no implica una libertad para el absurdo o la arbitrariedad del Juzgador, puesto que exige que el Juzgador valore los medios de prueba sobre bases reales y objetivas, que se abstenga de tener en cuenta conocimientos personales que no se deduzcan del material probatorio aportado al proceso o procedimiento y que motive adecuadamente sus decisiones.

Esta forma de apreciación valorativa adoptada, encuentra su sustento legal en el art.

283 del Código de Procedimientos Penales el que establece: “Los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia” (Juristas, 2015).

Ahora bien, el Nuevo Código Procesal Penal, establece en su artículo 393, inciso 2: “Normas para la deliberación y votación.- (...) 2. El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos” (Sánchez, 2013).

2.2.1.9.5. Principios de la valoración probatoria

2.2.1.9.5.1. Principio de unidad de la prueba

Supone que los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción (Devis, 2002).

2.2.1.9.5.2. Principio de la comunidad de la prueba

Por este principio, el Juez no debe hacer distinción alguna en cuanto al origen de la prueba, como lo enseña el principio de su comunidad o adquisición; es decir, no interesa si llegó al proceso inquisitivamente por actividad oficiosa del Juez o por solicitud o a instancia de parte y mucho menos si proviene del demandante o del demandado o de un tercero interventor (Devis, 2002).

2.2.1.9.5.3. Principio de la autonomía de la prueba

Consiste en que el análisis de los medios probatorios requieren un examen completo, imparcial y correcto de la prueba, es indispensable un continuo grado de voluntad, para no dejarse llevar por las primeras impresiones o por ideas preconcebidas, antipatías, simpatías por las personas o las tesis y conclusiones, ni aplicar un criterio rigurosamente personal y aislado de la realidad social; en fin, para tener la decisión de suponer las nuevas posibilidades de error y tomarse el trabajo de someterlas a una crítica severa (Devis, 2002).

2.2.1.9.5.4. Principio de la carga de la prueba

Rosas (2005) señala la carga de la prueba consiste en el deber peculiar y exclusivo de cada una de las partes indicar el hecho que se ha de probar y suministrar la prueba de ese hecho, afirmando por cada una; vale decir que la prueba de un hecho es asunto de la parte que lo afirma.

2.2.1.9.6. Etapas de la valoración de la prueba

2.2.1.9.6.1. Valoración individual de la prueba

La valoración individual de la prueba se dirige a descubrir y valorar el significado de que cada una de las pruebas practicadas en la causa, se encuentra integrado por un

conjunto de actividades racionales; juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, comparación de los hechos alegados con los resultados probatorios (Talavera, 2009). Entre sus sub etapas se tiene:

2.2.1.9.6.1.1. La apreciación de la prueba

En esta etapa, el Juez entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación, sea directamente o de modo indirecto a través de la relación que de ellos le hacen otras personas o ciertas cosas o documentos; es una operación sensorial: ver, oír, palpar, oler y, en casos excepcionales, gustar. Es imprescindible que la percepción sea perfecta, para que pueda darse por cumplida la etapa de la percepción, se tiene que dar máximo cuidado en la exactitud, en cuanto a extraer los hechos, las cosas, los documentos, etc., todas las la relaciones, modalidades, detalles, huellas, elementos, etc. Este proceso se lleva de forma aislada los medios probatorios, elementos probatorios, órganos de prueba (Devis, 2002).

Para Carneluti (citado por Devis (2002), considera que no es posible suponer una percepción desligada totalmente de la actividad razonadora, porque cuando el hecho o la cosa son observados directamente, hay cierta función analítica que sirve para obtener las inferencias necesarias para su comprensión.

2.2.1.9.6.1.2. Juicio de incorporación legal

Según Talavera (2011), en esta etapa se verifica si los medios probatorios han sido incorporados cumpliendo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, así como el análisis de la legitimidad del medio de prueba, debiendo establecer su desarrollo y motivación acerca de exclusión probatoria, y la afectación de los derechos fundamentales de ser el caso.

2.2.1.9.6.1.3. Juicio de fiabilidad probatoria (valoración intrínseca)

Se refiere a las características que debe reunir un medio de prueba para cumplir su función, y a la posibilidad de que el mismo medio permita una representación del hecho que sea atendible, sin errores sin vicio (Talavera, 2011).

Esta valoración tiene dos aspectos esenciales: a) su autenticidad y sinceridad, cuando se

trate de documentos, confesiones y testimonios, y sólo la primera para huellas, rastros o cosas que se examinen directamente por el Juez (se evalúa que no haya alteración maliciosa o intencional de la prueba); b) su exactitud y credibilidad, la que se basa en la evaluación de que las pruebas correspondan a la realidad, es decir, que el testigo o el perito no se equivoque de buena fe, o que el hecho indiciario no sea aparente o no tenga un significado distinto ni haya sufrido alteración por la obra de la naturaleza, o que la confesión no se deba a error, o que lo relatado en el documento no se separe de la verdad también por error y sin mala fe de sus autores, ello en atención al principio de probidad o veracidad (Devis, 2002).

En primer lugar, el Juez debe comprobar que la prueba incorporada al juicio tenga todos los requisitos formales y materiales para alcanzar su finalidad, es decir, para demostrar o verificar la certeza y veracidad del hecho controvertido (Talavera, 2009).

Esta actividad judicial aporta un elemento fundamental para la valoración global de las pruebas, puesto que si el medio de prueba careciera de alguna de las exigencias materiales o formales legalmente exigidas, el resultado probatorio que se obtenga con el mismo no podrá tenerse en cuenta, o bien perderá parte de su eficacia probatoria en el momento del examen global de todas las pruebas (Talavera, 2009).

2.2.1.9.6.1.4. Interpretación de la prueba

Consiste en la determinación del significado de los hechos aportados por deductivos o silogísticos, cuya premisa mayor está integrada por las denominadas máximas de la experiencia sobre el uso del lenguaje, bien se trate del lenguaje general, bien de lenguajes correspondientes a ambientes más específicos. Mediante esta actividad se busca extraer información relevante, el elemento de prueba, del que el testigo proporcionó como información acerca de algún hecho, lo que el documento representa o las conclusiones del perito.

Talavera (2011) refiere que no se trata de obtener, en resumen, de lo vertido por el testigo, sino de seleccionar información con base en los enunciados facticos de las hipótesis de acusación o defensa. Esta fase se da después de haber verificado la fiabilidad del medio de prueba, con esta labor, el Juez trata de determinar y fijar el

contenido que se ha querido transmitir mediante el empleo del medio de la prueba por la parte que lo propuso. Se trata de la determinación de lo que el medio probatorio exactamente ha expresado y que es lo que este puede aportar (sentido), mediante la persona o el documento que comunica algo al Juzgador, en efecto, se da una genérica apreciación de las pruebas para la determinación del significado de los hechos que puedan aportar a la conclusión final.

2.2.1.9.6.1.5. Juicio de verosimilitud (valoración extrínseca)

Esta valoración es más general y uniforme, consiste en revisar la credibilidad o exactitud de la prueba, por medio de una crítica serena y cuidadosa, con ayuda de la psicología, la lógica y las reglas de experiencia (Talavera, 2009).

La apreciación de la verosimilitud de un resultado probatorio permite al Juez comprobar la posibilidad y aceptabilidad del contenido obtenido de una prueba mediante su correspondiente interpretación. El órgano jurisdiccional verifica la aceptabilidad y la posibilidad abstracta de que el hecho obtenido de la interpretación del medio de prueba pueda responder a la realidad, de manera que el Juzgador no deberá utilizar aquellos resultados probatorios que sean contrarios a las reglas comunes de la experiencia (Talavera, 2011).

Las reglas de experiencia (psicológicas, sociológicas, técnicas, lógicas) juegan un importantísimo papel en esta tarea, porque sin ellas es imposible apreciar la sinceridad y la autenticidad, lo mismo que la exactitud o credibilidad de las pruebas, siendo que, en esa doble crítica es absolutamente indispensable el estudio de la razón de su dicho, expuesta por el testigo, para comparar sus conclusiones con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que afirma haberlas obtenido, lo mismo que la de los fundamentos del dictamen pericial y los antecedentes y hechos coetáneos a la redacción del documento (Talavera, 2009).

La apreciación de la verosimilitud de un resultado probatorio permite al Juez comprobar la posibilidad y aceptabilidad de contenido de una prueba a través de su correspondiente interpretación, con ello el Órgano Jurisdiccional verifica la aceptabilidad y la posibilidad abstracta de que el hecho obtenido de la interpretación

del medio de prueba pueda responder a la realidad, de manera que el Juzgador no deberá utilizar aquellos resultados probatorios que sean contradictorios a las reglas comunes de la experiencia (Talavera, 2009).

2.2.1.9.6.1.6. Comprobación entre los hechos probados y los hechos alegados

Es el criterio fundamental que preside la selección judicial de los hechos probados (Talavera, 2009). En esta etapa, el Juez tiene los hechos alegados inicialmente por las partes (teoría del caso o alegatos preliminares), y los hechos considerados verosímiles, ha de confrontar ambos hechos para determinar si los hechos alegados por las partes resultan o no confirmados por los contenidos de los resultados probatorios, por lo que los hechos no probados no firman parte del tema de la decisión (Talavera, 2011).

Esta etapa se da después de haber determinado que medios probatorios son verosímiles y desechando los que no lo son, siendo que, el Juez va a confrontar los hechos que se han acreditado con los hechos que han propuesto las partes (hechos de cargo o de descargo), de esta manera, el Juzgador se limita para construir su valoración conforme una u otra teoría (acusatoria o de defensa) (Talavera, 2009).

2.2.1.9.6.2. Valoración conjunta de las pruebas individuales

Esta etapa se aplica en relación con el principio de la completitud de la valoración de la prueba, siendo que, el Juez, tras el análisis de cada una de las pruebas practicadas, procede a realizar una comparación entre los diversos resultados probados, con el objeto de establecer una base fáctica organizada de modo coherente, sin contradicciones para sobre ello aplicar el juicio jurídico pretendido por las partes.

Este principio de valoración completa o de completitud presenta una doble dimensión: 1) La que determina el valor probatorio con objeto al mismo hecho, para luego su confrontación, composición o exclusión y pasar a considerar las diversas y posibles versiones sobre esos mismo hechos, para terminar escogiendo aquellas que aparezcan conformada por un mayor grado de atendibilidad; 2) La dimensión global del principio de completitud, según la cual, previamente a la redacción del relato de los hechos probados, se debe tener en cuenta todos los resultados probatorios extraídos por el Juez (Talavera, 2009).

Su finalidad radica en que mediante ésta se garantiza que el órgano jurisdiccional examine y tenga en cuenta todos los posibles resultados probatoriamente posibles, aunque posteriormente no sean utilizados en la justificación de la decisión (Talavera, 2009).

Entre sus sub etapas se tiene:

2.2.1.9.6.2.1. La reconstrucción del hecho probado

Consiste en la construcción de una estructura base de hechos y circunstancias probadas como base para establecer el juicio o razonamiento, siendo que, el éxito de la valoración y la sentencia, depende en gran parte de la correcta y completa representación de los hechos, en la cual no debe omitirse ninguno, por accesorio que parezca, y deben coordinarse todos y colocarse en el sitio adecuado, para luego clasificarlos con arreglo a su naturaleza, al tiempo y a las circunstancias de la realidad histórica que se trata de reconstruir, no debiendo guiar su representación de la primera impresión, sino del resultado objetivo de todo ello (Devis, 2002).

Esa representación o reconstrucción puede hacerse respecto de algunos de los hechos por la vía directa de la percepción y observación, pero a muchos otros se llega indirectamente, por la vía de la inducción, es decir, infiriéndolos de otros hechos, porque sólo los segundos y no los primeros son percibidos por el Juez, o también deduciéndolos de reglas generales de experiencia (Devis, 2002).

2.2.1.9.6.2.2. Razonamiento conjunto

Para Couture (citado por Devis, 2002) este razonamiento funciona a manera de silogismo, no presupone una actitud mecánica exacta (similar a una operación matemática), debiendo partir de las reglas de la experiencia común, como una actividad preceptiva, falibles siempre, deficientes muchas veces, no agotándose en un silogismo, ni en una mera operación inductiva- deductiva.

Además de la lógica, siendo que los hechos analizados en las sentencias son hechos humanos, generalmente, o se relacionan con la vida de seres humanos, es necesario que el Juez pueda recurrir también a los conocimientos psicológicos y sociológicos, por los

principios que debe aplicar, ya que forman parte del conocimiento de la vida y son máximas de experiencia (reglas de vida), o juicios fundados en la observación de lo que comúnmente ocurre y que pueden ser generalmente conocidos y formulados por cualquier persona de un nivel mental medio, en un determinado círculo social, y que no se requiere enunciarlos y menos declararlos probados en la sentencia. No obstante, algunas de esas reglas requieren conocimientos técnicos, y, por lo tanto, el auxilio de peritos para su aplicación en el proceso.

2.2.1.9.7. Los medios probatorios actuados en el proceso judicial

2.2.1.9.7.1. La testimonial

2.2.1.9.7.1.1. Concepto

El testimonio es la declaración de una persona física, recibida en el curso del proceso penal, acerca de lo que pudo conocer, por percepción de sus sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual del hecho. En la gran mayoría de veces para someternos al pasado y poder descubrir como ocurrió un hechos de características delictuosas (De La Cruz, 1996, P. 367).

En ese mismo sentido, Parra Quijano, nos dice que el testimonio es la declaración de tercero ajeno a la contienda y al proceso, referente a hechos percibidos a través de los sentidos y principalmente con los hechos objeto del proceso. Queda claro de esta forma que el testimonio para tener tal valor, ha de sustentarse: a) en los que los testigos han percibido exactamente, b) que su memoria conserve fielmente el recuerdo del hecho percibido, c) que manifiesten todo lo que saben.

Nuestro Código Procesal Penal, bien como ya hemos dicho no define lo que es un testigo en el artículo 298 del Código Procesal Penal, sino que señala que tiene la "obligación de concurrir" al llamamiento judicial practicado con el fin de prestar declaración testimonial, "de declarar la verdad sobre lo que se le preguntare" y de "no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración". Este concepto en el derecho comparado se ha extendido a aquellos terceros que depongan ante el órgano jurisdiccional sobre hechos conexos que puedan tener alguna vinculación con el procedimiento.

2.2.1.9.7.1.2. La regulación de la prueba testimonial

La Prueba Testimonial está regulada en el Código de Procedimientos Penales en el Libro Segundo de la Instrucción, Título V Testigos, Art. 138 Citación de Testigos.

También, lo encontramos en el Nuevo Código Procesal Penal en el Libro Segundo La Actividad Procesal, Sección II, Título II Los Medios de Prueba, Capítulo II El Testimonio, Art. 162 Capacidad para rendir testimonio.

2.2.1.9.7.1.3. La testimonial en el proceso judicial en estudio (EXPEDIENTE N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

a) Testimonial del agraviado A

Al interrogatorio dijo que trabaja como chofer en La, el día dos de agosto del dos mil once venía prestando servicio a La Pradera, como a las siete de la noche hacía su última vuelta, en Pedro Ruiz y Luís Gonzáles subieron cinco sujetos, entre ellos una mujer que se puso a su respaldar, se llenó el carro y se dirigió hacia La Pradera, la mujer se enterró contra su asiento, no levantaba la cara, y ahí le dio un poquito de miedo; bajó por la otra pista y un carro estaba parado, cuando iba a pasar vino y de frente me metió el carro, se sale de la pista para no chocarse, le jalan la llave y le dicen “ya perdiste concha de tu madre”, la mujer baja y se mete al Chevrolet que estaba con la maletera levantada, reconoce al señor que le metió el carro porque era con luces, luego los agarraron, le metieron tres cachazos de revolver y lo sacan para atrás, pero el declarante no baja si no que bajó el que estaba a su costado, toma la llave y maneja, el carro avanza, se va y da la vuelta por la San Martín, lo llevan encintado de la boca, de sus manos y sus pies, lo botan por Santa Julia y su carro regresa para Chiclayo. El otro carro se va para San José. Luego lo recoge un patrullero, lo lleva a Las Mercedes para coserlo y dentro de un ratito, el otro patrullero que avanzó para adentro, lo llama que el carro se encontraba votado por un accesorio malogrado, se dirige hasta el lugar y reconozco al señor y al mismo carro que le había cerrado, y de ahí lo trajeron a la comisaría; perdió el conocimiento no sabía dónde me encontraba; reconoció al acusado en la audiencia del juicio; el lugar era oscuro y cuando llegó al lugar con el patrullero, él dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces el patrullero le dice “de que cholo me hablas” y él

dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces lo hicieron subir para que los acompañe a la comisaría, lo subieron atrás y al declarante adelante, y lo trajeron a la comisaría.

b) Testimonial del efectivo policial Capitán PNP J.

Al interrogatorio dijo que en agosto del dos mil once estaba laborando en la Comisaría del Norte de Chiclayo; tuvo una intervención con respecto a una llamada radial donde se hacía mención que un taxista había sido asaltado, golpeado y que se encontraba por el pueblo joven Juan Pablo II; inmediatamente a bordo de una unidad móvil policial se constituyeron al lugar, comenzamos a rondar la zona por donde más o menos les indicaba la comunicación radial y encontraron a una persona ensangrentada, con sangre en la cabeza y en su cuerpo, estaba mal herida como si tuviera desmayos y se sentía mal; él le indicó que le habían tomado una carrera por el lugar La Pradera cuatro sujetos y dentro de uno de ellos una fémina, en total son cinco; por el pueblo joven Juan Pablo II un vehículo le intercepta, y es ahí donde uno de los cuatro sujetos que iba a bordo de su vehículo, con arma de fuego le quitaron su vehículo, a base de eso seguramente opuso resistencia . Al recibir la comunicación radial inmediatamente se irradia a los demás vehículos y tripulación que está en la zona, aparte de ello se da las características del vehículo que ha sido robado, hasta donde recuerdo era un vehículo color plomo, marca Chevrolet, tenía farola pero el nombre no la recuerdo; cuando llegan al lugar encontraron al agraviado ensangrentado, golpeado, y lo primero que se hace es auxiliar a la persona; cuando estaban dirigiéndose con trayecto al hospital, recibió una comunicación que por el lugar Juan Pablo II, en un ingreso de trocha carrozable a Santa Julia habían encontrado un vehículo con las mismas características que daba el agraviado; razón por la cual retornó con el agraviado para que haga el reconocimiento, inmediatamente dio la vuelta, fue al lugar y el agraviado directamente dijo “sí, esta es la persona que participó, y éste es el vehículo que me cerró el paso”, lo hizo directamente, ni siquiera dudo, por ese motivo intervinieron a la persona y fue conducida a la comisaría conjuntamente con el vehículo; cuando llegó al lugar, el vehículo estaba apagado, sin luces, con una llanta en el suelo y unas llaves que recién me las habían puesto, porque los pernos estaban sin ajustar.

c) Testimonial del efectivo policial SOS PNP G.

Al interrogatorio dijo que en agosto trabajaba en una tripulación de una unidad móvil que está asignada a la Comisaría PNP del Norte; el día dos de agosto del dos mil once se encontraba patrullando por la jurisdicción del pueblo joven José Olaya a bordo de la unidad móvil 10168, fueron desplazados por orden de la central 105 de la policía a fin de apoyar a una unidad móvil, donde había sido asaltada una persona; inmediatamente se dirigió al lugar a fin de apoyar a esa unidad móvil que estaba al mando del capitán Benavides, en donde moradores del lugar indicaron que una persona había sido asaltada por delincuentes a bordo de un vehículo, versiones de los moradores indicaron que después del asalto un vehículo se había desplazado por la jurisdicción de un caserío Santa Lucia, por una trocha carrozable han iniciado el patrullaje respectivo con el apoyo de patrulleros del escuadrón de emergencia y han ubicado a un vehículo estacionado en una trocha carrozable, con las luces apagadas; su función fue bajar del patrullero a fin de intervenir al conductor que se encontraba debajo del vehículo; al interrogarlo indicó que se le había pinchado una llanta y que estaba arreglando ese neumático; el motivo de la intervención de dicho vehículo fue porque se tuvo conocimiento que habían asaltado a una persona en la jurisdicción de La Pradera y por las características del vehículo empezaron a intervenir a fin de identificar a dicho conductor y posteriormente se comunicó al capitán Benavides que estaba con el agraviado que había sido víctima del asalto.

d) Testimonial de V.

El fiscal prescindió de la actuación de éste órgano de prueba por no haber concurrido a juicio.

e) Testimonial de L

Mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de abril del dos mil doce se dispuso la oralización de su declaración prestada en sede fiscal.

El fiscal refiere que con esta acta demuestra que el vehículo venía a toda velocidad y apagó las luces por esa zona oscura para arreglar una llanta, y además cuando hace referencia la entrevistada que vio al tico que venía y que no había ninguna persona, se demuestra la versión contradictoria del imputado cuando refiere que hizo carrera a dos señoras en ese lugar.

La defensora refiere que con esta acta se demuestra la contradicción del agraviado cuando refiere que una fémina o una mujer subió al vehículo y que esta huyó en compañía de, presuntamente, el señor B; la entrevistada refiere que el señor se encontraba solo; además ha referido que el vehículo venía desde la caleta San José hacia la universidad, hecho que se contradice en la declaración del agraviado que afirma que el vehículo el huyó hacia una trocha de la carretera San José.

2.2.1.9.7.2. Pericias

2.2.1.9.7.2.1. Concepto

La Corte Suprema, con relación a la pericia, ha señalado que “es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia de que se trate hace dilucidar la controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos; que toda pericia (...) tiene un doble aspecto, uno referido a su contenido técnico y otro a su legalidad, esta última importa designación oficial o de parte, admisión y rectificación en sede judicial” (Ejecutoria suprema 1999).

Las pericias son los exámenes y estudios que realiza el perito sobre el problema encomendado, para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley, así mismo cabe señalar que la prueba pericial, es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal (De La Cruz, 1996, P. 338).

2.2.1.9.7.2.2. Regulación

Nuevo Código Procesal Penal 2004

CAPÍTULO III

LA PERICIA

Artículo 172.-

1.- La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.

2.- Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado.

3.- No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.

2.2.1.9.7.2.3. Las pericias en el proceso en estudio (EXPEDIENTE N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

a) Examen pericial del perito criminalístico W respecto del Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH.

Esta inspección se hizo en base a una solicitud de la DEPROVE del departamento de robo de vehículos de la policía, para hacer una inspección en la avenida que conduce a la universidad particular San Martín intersección con la avenida Juan Tomis Stack, donde se puede determinar con las respectivas fotografías, huellas de calzado masculino femenino y huellas de neumático de automóviles en diferentes direcciones. **Al examen** dijo que no se encontraron zapatillas sino huellas de zapatillas, se determinó la huella de un carro que venía por la avenida Juan Tomis Stack, sale de la pista y entra a la tierra pegada a una pared, y la huella del otro carro -que aparentemente ha estado en esta pista en dirección hacia Chiclayo- se encuentra con la otra huella, es decir, se podría presumir que esta huella es la que intercepta a la huella del automóvil; es en estas circunstancias, en el polvo, donde se encontraron las huellas de zapatillas de uso masculino y las huellas de calzado de uso femenino. **Al contraexamen** dijo que para determinar la precisión del neumático se requería hacer lo que es el modelado forense, lo cual no se realizó, el tipo de neumático se puede determinar fehacientemente a través de un modelado forense.

b) Examen pericial del perito médico legista LL. respecto del Certificado Médico Legal N° 008535-L.

El peritado fue evaluado el día tres de agosto de dos mil once y al momento del examen se le encuentra una herida contusa suturada 1.8 cm ubicada en la región

parietal posterior izquierda, con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; una herida contusa suturada de 2 cm ubicada en la región parietooccipital derecha con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa suturada de 2.1 cm ubicada en la región interparietal central con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa abierta de 1.5 x 0.5 cm ubicada en la región malar derecha con tumefacción moderada y equimosis violácea de 4 x 3.5 cm perilesionales, además de una equimosis violácea ovalada de 4.2 x 3.7 cm ubicada en el hombro derecho cara anterior con tumefacción moderada perilesional. Estas heridas o lesiones llevan a la conclusión de que dicho peritado presentó lesiones traumáticas recientes o sea relacionados con la data, de origen contuso, por lo que se le indicó una atención facultativa de tres días por una incapacidad médico legal de nueve días, salvo complicaciones.

2.2.1.9.7.3. Documentos

2.2.1.9.7.3.1. Concepto

Mixan (citado por Rosas, 2015) señala que desde el punto de vista etimológico la palabra documento deriva del termino latino *docere*, que equivale a “enseñar”.

Por su parte Parra, (Citado por Neyra 2010) señala que, documento es cualquier cosa que sirve por sí misma para ilustrar o comprobar por vía de representación, la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano, es decir, que para que un objeto pueda llamarse documento debe representar un hecho o una manifestación del pensamiento, ya que si el objeto se muestra a sí mismo, sin representar algo distinto, no es documento. El documento es prueba privilegiada y puede presentarse en cualquier etapa del proceso.

2.2.1.9.7.3.2. Clases de documentos

Según Sánchez, (citado por Rosas, 2015, p. 248) divide los documentos en públicos y privados

A) documento público, aquel es redacto u otorgado siguiendo la formalidad legal por la autoridad pública competente que da fe pública (...). De acuerdo a ley (Art. 235 del

CPC) es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia

B) documento privado, aquel que es redactado por las personas interesadas sea con testigos o sin ellos, pero sin intervención del notario o funcionario público. Los documentos privados carecen de valor por si solos hasta que se prueben su autenticidad y su relación con el hecho que investiga o con la persona imputada del delito.

2.2.1.9.7.3.3. Regulación

Esta regula en el código procesal penal artículos 184 al 188, en el cual se expresa que se incorpora al proceso todo documento que puede servir como medio de prueba (Jurista Editores, 2015).

2.2.1.9.7.3.4. Documentos valorados en el proceso judicial en estudio (EXPEDIENTE N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

- - Acta de intervención policial.
- Acta de registro personal de fecha dos de agosto de dos mil once.
- Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo de placa de rodaje N° MIE-629
- Cuatro (04) tomas fotográficas del vehículo de placa de rodaje M2M-627 y su respectiva cadena de custodia
- Acta de situación vehicular de la unidad intervenida de placa M2M-627.
- Acta de registro vehicular
- Requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones
- Informe de Claro de Levantamiento del secreto de las comunicaciones.
- Resolución N° Uno de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once.
- Disposición fiscal N° 03 de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce.
- Reporte N° TSP-83030000-ECE-0051-2012 de fecha veintisiete de enero del dos mil doce y treinta de enero de dos mil doce.
- Once fotografías de vehículos con su respectiva cadena de custodia.

2.2.1.10. La Sentencia

2.2.1.10.1. Etimología

En su sentido antiguo derivado de la etimología de la palabra sentencia, encontramos que ésta proviene del latín "*sententia*" y ésta a su vez de "*sentiens, sentientis*", participio activo de "*sentire*" que significa sentir, es decir, el criterio formado por el Juez que pudo percibir de un hecho puesto a su conocimiento (Omeba, 2000).

2.2.1.10.2. Concepto

Rocco (citado por Rojina, 1993) refiere que la sentencia es por su naturaleza, un acto jurídico público o estatal, porque se ejecuta por el Juez, un funcionario público que forma parte de la administración de justicia del Estado, además porque la facultad de sentenciar es la función esencial de la jurisdicción.

Asimismo, vista como la actividad de sentenciar que realiza el Juzgador, se la concibe como un silogismo judicial, en el que la premisa mayor estaría constituida por la norma legal aplicable al caso, la menor por los hechos y la conclusión por la adecuación de la norma al hecho, pero ello no de manera absoluta, pues esta postura es cuestionada al considerar en la realidad, la resolución judicial comprende cuestiones que no es posible encerrar en un planteamiento silogístico, por ser la realidad una entidad compleja, integrada por juicios históricos, lógicos y críticos (Gómez, A. ,1994).

Dentro de esta misma perspectiva (Couture, 1958) explica que, la sentencia en el proceso intelectual de sentenciar tiene muchos factores ajenos al simple silogismo, afirmando que ni el Juez es una máquina de razonar ni la sentencia es una cadena de silogismos; bajo esta premisa afirma también que debe observarse al Magistrado en su condición de hombre, de la que no se desprende al sentenciar, y es con la misma condición, con la que examina los hechos y determina el derecho aplicable.

En tal sentido, esta postura plantea que la sentencia es una operación humana, de sentido profundamente crítico, pero en la cual la función más importante incumbe al Juez como hombre y como sujeto de voliciones, tratándose por lo tanto, de una sustitución de la antigua logicidad de carácter puramente deductivo, argumentativo, conclusiones, por una logicidad de carácter positivo, determinativo y definitorio

(Rojina, 1993).

También, Binder (citado por Cubas, 2003) afirma que la sentencia, es el acto judicial por excelencia, que determina o construye los hechos, a la vez que construye la solución jurídica para esos hechos, solucionando, o mejor dicho, redefiniendo , el conflicto social de base, que es reinstalado de un modo nuevo en el seno de la sociedad.

Para García, (citado en Cubas, 2003, p. 454) “la sentencia es el medio ordinario de dar término a la pretensión punitiva. Su consecuencia legal es la cosa juzgada con relación al delito que fue materia de la investigación y a la persona inculpada del mismo”.

Acotando otras definiciones, se tiene la que vierte Bacre (citado por Hinostroza, 2004; p.89) la sentencia es el acto jurídico procesal emanado del juez y volcado en un instrumento público, mediante el cual ejercita su poder – deber jurisdiccional, declarando el derecho de los justiciables, aplicando al caso concreto la norma legal a la que previamente a subsumido los hechos alegados y probados por las partes, creando una norma individual que disciplinará las relaciones recíprocas de los litigantes, cerrando el proceso e impidiendo su reiteración futura.

Finalmente, se tiene la postura de que si bien la sentencia es un juicio lógico, crítico y volitiva, se trata de un acto de voluntad del Estado contenido en las normas generales y manifestadas al caso concreto a través del Juez, quien expresa su voluntad en base en ella, orientado por las normas del ordenamiento jurídico, por lo que no expresa su voluntad individual ni propia, sino como un intérprete del ordenamiento estatal (Devis, 2002).

Esta definición se sustenta en que el Estado manifiesta su voluntad para con los ciudadanos en el ejercicio de la función legislativa, por lo que no cabe otra voluntad en contra de ella, sino que la sentencia contiene dicha voluntad traducida en forma concreta por obra del Juez (Devis, 2002).

2.2.1.10.3. La sentencia penal

Dentro de la tipología de la sentencia, tenemos a la sentencia penal, que es el acto

razonado del Juez emitido luego de un debate oral y público, que habiendo asegurado la defensa material del acusado, recibido las pruebas con la presencia de las partes, sus defensores y el fiscal, y escuchados los alegatos de estos últimos, cierra la instancia concluyendo la relación jurídica procesal resolviendo de manera imparcial, motivadamente y en forma definitiva sobre el fundamento de la acusación y las demás cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando o absolviendo al acusado (Cafferata, 1998).

En esa misma línea, Oliva (Citado por San Martín ,2006) define a la sentencia como la resolución judicial que, tras el juicio oral, público y contradictorio, resuelve sobre el objeto del proceso y bien absuelve a la persona acusada o declara, por el contrario, la existencia de un hecho típico y punible, atribuye la responsabilidad de tal hecho a una o varias personas y les impone la sanción penal correspondiente.

Al respecto, agrega Bacigalupo (1999) que la sentencia penal tiene por finalidad aclarar si el hecho delictivo investigado existió, si fue cometido por el encartado o tuvo en él alguna participación, para lo cual, se realiza el análisis de su conducta de acuerdo con la teoría del delito como un instrumento conceptual para lograr la aplicación racional de la ley penal a un caso concreto, así como la teoría de la pena y la reparación civil para determinar sus consecuencias jurídicas.

Ahora, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, San Martín (2006) la define como un juicio lógico y una convicción psicológica, cuanto una declaración de ciencia y de voluntad del Juez , puesto que el Juez en la sentencia no solo refleja una simple operación lógica (silogismo judicial), sino también en su convicción personal e íntima, formada por la confluencia de hechos aportados al proceso, y otras varias circunstancias (impresiones, conductas, ambientes, fuerzas sociales, etc.), para que, después de realizar un juicio de hecho y de derecho, dicta el fallo como conclusión entre la relación de aquellos dos juicios.

2.2.1.10.4. La motivación en la sentencia

Los siguientes contenidos versan sobre los diversos significados de la motivación, desde el punto de vista de la finalidad perseguida, como actividad y como resultado de la misma, que se plasma en un discurso (Colomer, 2003).

2.2.1.10.4.1. La motivación como justificación de la decisión

Es un discurso elaborado por el Juez , en el cual se desarrolla una justificación racional de la decisión adoptada respecto del thema decidendi, en el cual, al mismo tiempo, el Juez da respuesta a las demandas y a las razones que las partes hayan planteado; por consiguiente son dos las finalidades que configuran la esencia de la actividad motivativa, de una parte, el hecho de ser una justificación racional y fundada en Derecho de la decisión, de otra parte, el dato de contrastar o responder críticamente a las razones o alegaciones expuestas por cada parte. Se precisa, que el discurso debe cumplir las exigencias emanadas de cada una de las finalidades para que de esta manera el intérprete de la sentencia pueda encontrar los elementos esenciales que le permitan valorar el grado de cumplimiento de la obligación de motivación que grava a todo Juez (Colomer, 2003).

2.2.1.10.4.2. La Motivación como actividad

La motivación como actividad se corresponde con una razonamiento de naturaleza justificativa, en el que el Juez examina la decisión en términos de aceptabilidad jurídica, y a prevención del control posterior que sobre la misma puedan realizar los litigantes y los órganos jurisdiccionales que eventualmente hayan de conocer de algún medio impugnatorio con la resolución. De lo expuesto se determina, que la motivación como actividad actúa de facto como un mecanismo de autocontrol a través del cual los jueces no dictan las sentencias que no puedan justificar. Esto significa que en la práctica la decisión adoptada viene condicionada por las posibilidades de justificación que presente y que el Juez estará apreciando al desarrollar su actividad de motivación. En términos sencillos, se puede decir que la motivación como actividad es la operación mental del Juez, dirigida a determinar si todos los extremos de una decisión son susceptibles de ser incluidos en la redacción de la resolución, por gozar de una adecuada justificación jurídica (Colomer, 2003).

2.2.1.10.4.3. Motivación como producto o discurso

Parte de la premisa, de que la sentencia es esencialmente un discurso, esto es, proposiciones interrelacionadas e insertas en un mismo contexto, de ahí que la sentencia es un medio para transmitir contenidos, es por tanto un acto de comunicación y para

lograr su finalidad comunicativa deberá respetar diversos límites relacionados a su formación y redacción, lo cual impide que el discurso sea libre (Colomer, 2003).

De acuerdo al autor en consulta, esta carencia de libertad permite establecer un modelo teórico de discurso, que de ser libre sería imposible proponerlo para que permita controlar al Juez en su actividad de motivación. El discurso en la sentencia, viene delimitado por unos límites internos (relativos a los elementos usados en el razonamiento de justificación) y por unos límites externos el discurso no podrá incluir proposiciones que estén más allá de los confines de la actividad jurisdiccional. Es fundamental considerar que la motivación tiene como límite la decisión, de modo que no será propiamente motivación cualquier razonamiento contenido en el discurso que no esté dirigido a justificar la decisión adoptada. La estrecha relación entre justificación y fallo permite, desde el punto de vista metodológico, conocer los límites de la actividad de motivación mediante el estudio de los límites del concreto discurso justificativo redactado por el Juez en relación con un concreto fallo. Por su parte, la labor del intérprete de la sentencia será comprobar si la concreta justificación formulada por el Juez se ha realizado con respeto de los límites que en cada orden jurisdiccional se fijan en la motivación (Colomer, 2003).

El discurso justificativo está conformado por un conjunto de proposiciones insertas en un contexto identificable, perceptible subjetivamente (encabezamiento) y objetivamente (mediante el fallo y el principio de congruencia); la motivación, debido a su condición de discurso, dicho de otro modo, es un acto de comunicación, que exige de los destinatarios la necesidad de emplear instrumentos de interpretación (Colomer, 2003).

2.2.1.10.5 La función de la motivación en la sentencia

Dado que la sentencia judicial es el acto procesal que implica una operación mental del Juzgador, por lo tanto de naturaleza abstracta, dicho juicio se manifiesta de manera concreta en la fundamentación que realiza el Juzgador acerca de su razonamiento, la cual se materializa en la redacción de la sentencia, por lo que es necesario toda una argumentación jurídica acerca de su decisión, la que se concibe como “motivación”, la que tiene la función de permitir a las partes el conocimiento los fundamentos y razones determinantes de la decisión judicial lo que llevará o

permitirá que posteriormente tengan la posibilidad de cuestionarla cuando no están de acuerdo con lo sentenciado por el Juez ; y, tiene una función de principio judicial, en el sentido que cumple la función de generar autocontrol en el Juez al momento de decidir, con lo cual el Juez debe controlar el sentido y alcance de su decisión y la forma en que justifica la misma (Colomer, 2003).

Asimismo, la Corte Suprema Peruana ha señalado como fines de la motivación a los siguientes: i) que el Juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas; ii) Que se pueda comprobar que la decisión judicial corresponde a una determinada interpretación y aplicación del derecho; iii) Que las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; iv) Que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho (Perú. Corte Suprema, Cas. 912-199 - Ucayali, Cas. 990-2000 -Lima).

2.2.1.10.6. La motivación como justificación interna y externa de la decisión

La justificación interna se expresa en términos lógico-deductivos, cuando en un caso es fácil la aplicación del Derecho se aproxima al Silogismo Judicial, pero esta justificación interna resulta insuficiente frente a los denominados casos difíciles, lo que lleva a la utilización de la justificación externa, en la cual la Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica enuncia que se debe encontrar criterios que permitan revestir de racionalidad a aquella parte de la justificación que escapa a la lógica formal (Linares, 2001).

Asimismo, la justificación interna es aquella que recurre a normas del sistema jurídico y se limita a la congruencia de la norma general vigente y la norma concreta del fallo, en cambio la justificación externa se basa en normas que no pertenecen a dicho sistema, viene a ser el conjunto de razones que no pertenecen al Derecho y que fundamenta la sentencia, tales como normas consuetudinarias, principios morales, juicios valorativos, etc. (Linares, 2001).

2.2.1.10.7. La construcción probatoria en la sentencia

Constituye el análisis claro y preciso, así como la relación de hechos que estuvieren

enlazados con las cuestiones que hayan de resolver en el fallo, sin perjuicio de hacer declaración expresa y terminante, excluyente de toda contradicción, de los que se estimen probados, consignando cada referencia fáctica, configuradora de todos los elementos que integran el hecho penal, que debe estar acompañada de justificación probatoria correspondiente (San Martín, 2006).

Siguiendo a Oliva (citado por San Martín ,2006) establece que la exigencia de una motivación puntual se expresa en tres supuestos:

a) cuando la prueba es indiciaria, en que debe darse suficiente razón del enlace apreciado.

b) cuando se debe emitir un pronunciamiento preciso acerca de la ilicitud o de la irregularidad de determinadas pruebas, en cuyo caso ha de explicar por qué ha atribuido o rechazado atribuir valor a unos determinados elementos probatorios; y,

c) cuando se debe atribuir o no valor a determinados elementos probatorios, en aquellos casos en que la fuerza probatoria de unos medios de prueba se ven contradichos por otros elementos probatorios. Sostiene que en esta parte, tampoco puede hacer uso de conceptos jurídicos que predetermine en fallo, puesto que tales conceptos solo se lograrían con un análisis considerativo jurídico” (p. 727-728).

Talavera (2011) siguiendo el esquema de la construcción probatoria, sostiene que la motivación debe abarcar, la motivación de la incorporación legal de los medios probatorios; de su legitimidad, la exclusión probatoria, y la afectación de los derechos fundamentales; así también, la motivación del juicio de fiabilidad probatoria, debiendo dejar constancia del cumplimiento de las garantías procesales en la obtención de la fuente de prueba.

Así también, cuando el Juez advierta la falta de algún requisito o criterio para la práctica de diligencias o actuaciones procesales, este hecho deberá ser consignado, seguidamente, la motivación de la interpretación del medio probatorio, debiendo describir el contenido relevante del medio de prueba, no una transcripción, no se debe transcribir y luego interpretar, se trata de un trabajo innecesario (Talavera,

2011).

Seguidamente, se debe motivar el juicio de verosimilitud, la que debe incluir una expresa mención al resultado de dicho examen, así como una explícita indicación del criterio de análisis empleado (máximas de la experiencia); y, finalmente, la motivación de la comparación entre los hechos probados con respecto a los hechos alegados; y, finalmente, la motivación de la valoración conjunta, por la cual, debe consignarse el valor probatorio de cada prueba que tenga por objeto el mismo hecho, y después prioridad, confrontación, combinación, exclusión, a considerar las diversas posibles versiones sobre este mismo hecho, para terminar escogiendo aquella que aparezca confirmada por un mayor grado de atendibilidad (Talavera, 2011).

2.2.1.10.8. La construcción jurídica en la sentencia

En esta sección se consignan las razones de la calificación jurídica que los hechos penales han merecido al Tribunal (San Martín, 2006).

El citado autor considera que dicha motivación comienza con la exposición de los fundamentos dogmáticos y legales de la calificación de los hechos probados, en consecuencia: a) Se debe abordar la subsunción de los hechos en el tipo penal propuesto en la acusación o en la defensa. Si el resultado de esta operación enjuiciadora no conduce a la absolución por falta de tipicidad – positiva o negativa – o de otros factores; b) se debe proceder a consignar los fundamentos jurídicos del grado de participación en el hecho y si se trata o no de un tipo de imperfecta ejecución; su omisión acarrea la nulidad de la sentencia; c) se debe analizar la presencia de eximentes de la responsabilidad penal en orden a la imputación personal o culpabilidad; d) si se concluye que el acusado es un sujeto responsable penalmente, se debe tomar en consideración todos los aspectos vinculados a la determinación de la pena, de las eximentes incompletas y atenuantes especiales, hasta las agravantes y atenuantes genéricas, en caso de hecho concurrido; e) se debe incorporar los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se hubiere estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que hubieran incurrido el acusado y el tercero civil (San Martín, 2006).

Esta motivación ha sido acogida por el art. 394, inciso 3 del Nuevo Código Procesal Penal, el que establece: “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique” (Sánchez, 2013).

2.2.1.10.9. Motivación del razonamiento judicial

En esta etapa de la valoración, el Juzgador debe expresar el criterio valorativo que ha adoptado para llegar a establecer como probados o no probados los hechos y circunstancias que fundamentan su decisión (Talavera, 2009).

Bajo este criterio, importa el Juez detallar de manera explícita o implícita, pero de manera que pueda constatarse: a) el procedimiento de valoración probatoria; en el cual constan la situación de legitimidad de las pruebas, la enumeración de las pruebas consideradas; la confrontación individual de cada elemento probatorio; la valoración conjunta y, b) el criterio de decisión judicial, siendo que, conforme al sistema del criterio razonado, el Juzgador tiene libertad para establecer el método o teoría valorativa adoptada para su valoración, siempre y cuando exprese los requisitos mínimos de una adecuada motivación legal (Talavera, 2009).

2.2.1.10.10. Estructura y contenido de la sentencia

En este rubro los referentes son:

El Manual de Resoluciones Judicial se trata de una fuente importante, publicada por la Academia de la Magistratura (AMAG) (León, 2008).

Todo raciocinio que pretenda analizar un problema dado, para llegar a una conclusión requiere de, al menos tres pasos: *formulación del problema, análisis y conclusión*. Esta es una metodología de pensamiento muy asentada en la cultura occidental.

En las matemáticas, por ejemplo, al planteamiento del problema le sigue el raciocinio (análisis) y luego la respuesta. En las ciencias experimentales, a la formulación del problema le sigue el planteamiento de las hipótesis y la verificación de las mismas

(ambas etapas se pueden comprender en una etapa analítica) para llegar luego a la conclusión. En los procesos de toma de decisión en el ámbito empresarial o administrativo, al planteamiento del problema le sigue la fase de análisis para terminar con la toma de la decisión más conveniente.

De igual forma, en materia de decisiones legales, se cuenta con una estructura tripartita para la redacción de decisiones: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutive. Tradicionalmente, se ha identificado con una palabra inicial a cada parte: VISTOS (parte expositiva en la que se plantea el estado del proceso y cuál es el problema a dilucidar), CONSIDERANDO (parte considerativa, en la que se analiza el problema) y SE RESUELVE (parte resolutive en la que se adopta una decisión). Como se ve, esta estructura tradicional corresponde a un método racional de toma de decisiones y puede seguir siendo de utilidad, actualizando el lenguaje a los usos que hoy se le dan a las palabras.

La parte expositiva, contiene el planteamiento del problema a resolver. Puede adoptar varios nombres: planteamiento del problema, tema a resolver, cuestión en discusión, entre otros. Lo importante es que se defina el asunto materia de pronunciamiento con toda la claridad que sea posible. Si el problema tiene varias aristas, aspectos, componentes o imputaciones, se formularán tantos planteamientos como decisiones vayan a formularse.

La parte considerativa, contiene el análisis de la cuestión en debate; puede adoptar nombres tales como “análisis”, “consideraciones sobre hechos y sobre derecho aplicable”, “razonamiento”, entre otros. Lo relevante es que contemple no sólo la valoración de los medios probatorios para un establecimiento razonado de los hechos materia de imputación, sino también las razones que desde el punto de vista de las normas aplicables fundamentan la calificación de los hechos establecidos.

En el orden de ideas que venimos anotando, el contenido mínimo de una resolución de control sería el siguiente:

a. Materia: ¿Quién plantea qué imputación sobre quién?, ¿cuál es el problema o la materia sobre la que se decidirá?

b. Antecedentes procesales: ¿Cuáles son los antecedentes del caso?, ¿qué elementos o fuentes de prueba se han presentado hasta ahora?

c. Motivación sobre hechos: ¿Qué razones existen para, valorando los elementos de prueba, establecer los hechos del caso?

d. Motivación sobre derecho: ¿Cuáles son las mejores razones para determinar qué norma gobierna el caso y cuál es su mejor interpretación?

e. Decisión. En este marco, una lista esencial de puntos que no deben olvidarse al momento de redactar una resolución judicial son los siguientes:

- ¿Se ha determinado cuál es el problema del caso?
- ¿Se ha individualizado la participación de cada uno de los imputados o intervinientes en el conflicto?
- ¿Existen vicios procesales?
- ¿Se han descrito los hechos relevantes que sustentan la pretensión o pretensiones?
- ¿Se han actuado las pruebas relevantes?
- ¿Se ha valorado la prueba relevante para el caso?
- ¿Se ha descrito correctamente la fundamentación jurídica de la pretensión?
- ¿Se elaboró un considerando final que resuma la argumentación de base para la decisión?
- La parte resolutoria, ¿señala de manera precisa la decisión correspondiente?
- ¿La resolución respeta el principio de congruencia? Pero también hay quienes exponen:

“La sentencia es una resolución por excelencia que requiere ser motivada. Mayor a su exigencia cuando ésta es de carácter penal como sostiene Rocío Castro M.: (...) contemporáneamente se habla de una mejor redacción de una sentencia penal, tanto en la forma de presentación como en la redacción misma. Así se critica una presentación “en sábana”, es decir con un comienzo sin puntos apartes, como si se tratara todo de un sólo párrafo; utilizándose profusamente los puntos y comas; estilo que obviamente es enrevesado, oscuro, confuso. En cambio ahora se aboga por el estilo de usar párrafos independientes para significar una idea referida a los hechos o al derecho, dependiendo de si trata de la parte expositiva o de la parte resolutoria, que a nuestro juicio son las más importantes enseñando que la estructura de la sentencia penal tiene:

Encabezamiento

Parte expositiva

Parte considerativa

3.1. Determinación de la responsabilidad penal

3.2. Individualización judicial de la pena

3.3. Determinación de la responsabilidad civil

Parte resolutive

Cierre” (Chanamé, 2009).

Comentando, esta exposición, Chanamé (2009) expone: “(...), la sentencia debe contener requisitos esenciales:

1. La mención del juzgado, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado;
2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado;
3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique;
4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales, o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo;
5. La parte resolutive, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito.
6. La firma del Juez o jueces” (p. 443).

A su turno, Según Gómez R. (2008), al referirse a la sentencia sostiene: la voz sentencia puede significar varias cosas, pero si se toma sentido propio y formal, en cuanto, a saber, es un pronunciamiento del juez para definir la causa (...), y tiene tres partes principales que son: parte dispositiva, parte motiva y suscripciones (...); refiriéndose a cada uno indica:

La parte dispositiva. (...), es la definición de la controversia,(...), es la sustancia de la

sentencia, a la cual conviene que se acerque el cuerpo o la forma(...), y la publicación; porque la sentencia guarda su día, en el cual fue dada.

La parte motiva. La motivación es ese mecanismo a través del cual, el juez se pone en contacto con las partes, explicándoles el por qué y la razón de su proceder, al mismo tiempo que les garantiza el contradictorio, y el derecho de impugnación. Dicho de otro modo, la motivación tiene como propósito verificar que los jueces dejen patente el camino por el cual han llegado a la decisión y cómo han aplicado el derecho a los hechos.

Suscripciones. En esta parte se precisa, el día en el cual se profiere la sentencia; es decir el día en el cual la sentencia según la norma...es redactada y suscrita; no el día en el cual debatieron, porque ese fue el día en que reunidos establecieron qué cosa había que establecer en la parte dispositiva de la sentencia. Establecida, por consiguiente, por los jueces, la parte dispositiva de la futura sentencia, la causa entonces es definitiva, pero la sentencia todavía no existe, existiendo sólo el día de la redacción y suscripción. Antes de aquella fecha, solo se tiene un anuncio de sentencia.

Continuando el autor citado expone, que la sentencia como acto que emana de un órgano jurisdiccional está revestida de una estructura, cuyo fin último es emitir un juicio por parte del juez, para el cual se tiene que proceder a realizar tres operaciones mentales que son:

En opinión de éste autor, la selección de la normativa; el análisis de los hechos, y la subsunción de los hechos por la norma; son los tres elementos que conforman la estructura interna de la sentencia.

Asimismo, precisando su posición exponer:

La selección normativa; que consiste en la selección de la norma la que ha de aplicarse al caso concreto.

Análisis de los hechos; que comprende los elementos fácticos, a los cuales se aplicará la norma.

La subsunción de los hechos a la norma; que consiste en un acople espontáneo de los hechos (facta) a la norma (in jure). Lo cual ha generado que algunos tratadistas sostengan, conciban y apliquen a la elaboración de la sentencia, el símil del silogismo; como aquel proceso lógico jurídico, donde la premisa mayor está representada por la norma, mientras que la premisa menor por los hechos alegados y vinculados al proceso.

La conclusión, que vendría a ser la subsunción, en donde el juez, con su autoridad, se pronuncia, manifestando que tal o cual hecho se encuentran subsumido en la ley.

Conforme se expone, con este proceso, el juez no haría más que conjugar el precepto legal con los hechos y las peticiones de las partes, armonizando la voluntad del legislador con la voluntad del juez.

Para éste autor la formulación externa de la sentencia debe evidenciar, que el juez ha tenido en cuenta no solo los hechos, sino también, el derecho, por consiguiente deberá considerar:

a. Conocer los hechos afirmados y su soporte legal. Esto es cuando el juez da curso al proceso en base a la petición del actor, en este preciso momento él es todo un ignorante de los hechos, pues si los conociera estaría asumiendo la función de testigo; pero en la medida en que vayan haciendo su ingreso las pruebas al proceso, el juez se torna conocedor de los hechos, conocimiento que es suministrado por los elementos probatorios.

b. Comprobar la realización de la ritualidad procesal. Esto es, si el proceso está constituido por una serie de actos, puestos por las partes y por el Juez, estos deben estar sometidos a las ritualidades procesales, cuya constatación corresponde al juez, y ello con el fin de que se respeten y se garanticen los derechos de las partes en contienda.

c. Hacer el análisis crítico de las pruebas alegadas por las partes. Esto con el fin de constatar la existencia de los hechos. No es suficiente, ni basta allegar al proceso los elementos probatorios, sino que se hace necesario que el juez lleve a cabo la función valorativa de los mismos, para lo cual debe realizar una operación de percepción, de

representación, ya directa, ya indirecta, y por último, una operación de razonamiento de todo el caudal probatorio en base a la llamada “sana crítica” con cuyo giro se requiere significar todo ese cúmulo de conocimientos de diversa índole: antropológicos, sociológicos, empíricos, susceptibles de engrosar el patrimonio cultural de una persona.

d. Interpretar la presunta normativa que subsume los hechos afirmados, y probados (demostrados).

e. Proferir el fallo judicial (juicio) que supone la subsunción de los hechos en la norma y decidir con autoridad de causa (p.11- 12).

Sin embargo, se deja expresamente, que el punto donde no se comparte, es que la sentencia sea un silogismo, porque la sentencia es más que un silogismo, porque la realidad de la administración de justicia es compleja, tan compleja como la realidad de donde emergen los conflictos, donde el juzgador tiene que elucubrar profundamente, hacer uso de un juicio lógico contextualizado.

Por lo expuesto, hay consenso respecto a la sentencia; sobre su estructura e inclusive respecto a la denominación de sus partes; pero lo más importante es el contenido que debe evidenciarse en cada uno de los componentes.

Cerrando, sobre la redacción de las resoluciones judiciales, entre ellas la sentencia; para Cubas (2003), tiene que observarse las formalidades previstas en las normas del artículo 119 y siguientes del Código Procesal Civil.

En este sentido no corresponde usar abreviaturas, las fechas y cantidades se escriben con letras. También precisa, que mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes. La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutive y llevarán firma completa del Juez o Jueces si es órgano colegiado.

En cuanto a la denominación y contenido de los componentes de la estructura de la sentencia, en este trabajo se va conservar fielmente lo que expone el autor citado:

1. **PARTE EXPOSITIVA.** Es el relato del hecho o hechos que hubieran dado lugar a la formación de la causa y que son materia de la acusación, además contiene los nombres y apellidos de los procesados y nombres de los agraviados.

2. **PARTE CONSIDERATIVA.** Es el “análisis y síntesis sobre la interpretación de las cuestiones de hecho hechas a la luz del discernimiento jurídico y demás conocimientos técnicos aplicables al caso”. Es la parte de la sentencia donde el Juez Penal o la Sala Penal desarrolla toda su apreciación sobre lo actuado, sopesando los elementos probatorios y aplicando los principios que garantizan la administración de justicia para determinar si el acusado es culpable o inocente de los hechos que se le imputan. El juicio del juzgador estará cimentado en las leyes penales.

En esta parte nos encontramos frente a la motivación de la sentencia, la misma que debe guardar coherencia con un razonamiento claro, integral y justo, lo cual constituye una garantía de rango constitucional.

3. **PARTE RESOLUTIVA O FALLO.** Es la decisión del Juez o Sala Penal sobre el acusado. De ser condenatoria, el juzgador señalará una pena dentro de los parámetros que se establece en el tipo penal y en los criterios de aplicación de la pena establecidos en los artículos 21, 22, 45 y 46 del Código penal, indicando además la suma de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado y/o el tercero civil responsable a la parte civil. De ser el caso, se indicará la inhabilitación o interdicción aplicable.

En caso de absolución, la parte resolutive se limita a declarar absuelto al acusado, ordenándose la libertad, de encontrarse sufriendo detención y la anulación de antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado (Cubas, 2003, p. 457 - 458).

2.2.1.10.11. Parámetros de la sentencia de primera instancia

2.2.1.10.11.1. De la parte expositiva

Es la parte introductoria de la sentencia penal. Contiene el encabezamiento, el asunto, el objeto procesal y la postura de la defensa (San Martín, 2006).

2.2.1.10.11.1.1. Encabezamiento

Es la parte introductoria de la sentencia que contiene los datos básicos formales de ubicación del expediente y la resolución, así como del procesado, en la cual se

detalla: a) Lugar y fecha del fallo; b) el número de orden de la resolución; c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de ley del acusado, vale decir, sus nombres y apellidos completos, apodo, sobrenombre y sus datos personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.; d) la mención del órgano jurisdiccional que expide la sentencia; e) el nombre del magistrado ponente o

Director de Debates y de los demás jueces (Talavera, 2011).

2.2.1.10.11.1.2. Asunto

Es el planteamiento del problema a resolver con toda la claridad que sea posible, siendo que, si el problema tiene varias aristas, aspectos, componentes o imputaciones, se formularan tantos planteamientos como decisiones vayan a formularse (León, 2008).

2.2.1.10.11.1.3. Objeto del proceso

Es el conjunto de presupuestos sobre los cuales el Juez va a decidir, los que son vinculantes para el mismo, puesto que, suponen la aplicación del principio acusatorio como garantía la inmutabilidad de la acusación fiscal y su titularidad de la acción y pretensión penal (San Martín, 2006).

El objeto del proceso está contenido en la acusación fiscal, que es el acto procesal realizado por el Ministerio Público, el cual tiene como efecto la apertura de la etapa del juzgamiento y la actividad decisoria (San Martín, 2006).

Al respecto, Gonzáles (2006) considera que en Alemania, es unánime la doctrina que considera que el objeto del proceso lo constituye el hecho objeto de la imputación, sin embargo, en España, la doctrina apunta por que el objeto del proceso es la pretensión penal.

De lo expuesto, ésta parte de la sentencia debe contener: la enunciación de los hechos y circunstancias objetos de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado.

2.2.1.10.11.1.3.1. Hechos acusados

Son los hechos que fija el Ministerio Público en la acusación, los que son vinculantes para el Juzgador e impiden que este juzgue por hechos no contenidos en la acusación, que incluya nuevos hechos, ello como garantía de la aplicación del principio acusatorio (San Martín, 2006).

Así también, el Tribunal Constitucional ha establecido el Juzgador no puede condenarse a un procesado por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, en virtud del principio acusatorio (Perú. Tribunal Constitucional, exp. N° 05386-2007-HC/TC).

Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa que la consideración y respeto de los hechos acusados, importa el principio de coherencia del fallo (San Martín, 2006).

2.2.1.10.11.1.3.2 Calificación jurídica

Es la tipificación legal de los hechos realizada por el representante del Ministerio Público, la cual es vinculante para el Juzgador, es decir, que su decisión solo se limita a comprobar la subsunción típica del hecho en el supuesto jurídico calificado o de negar su subsunción, no pudiendo efectuar una calificación alternativa, salvo en los casos previstos en el Código Adjetivo, respetando el derecho de defensa del procesado (San Martín, 2006).

2.2.1.10.11.1.3.3 Pretensión punitiva

Es el pedido que realiza el Ministerio Público respecto de la aplicación de la pena para el acusado, su ejercicio supone la petición del ejercicio del Ius Puniendi del Estado (Vásquez, 2000).

2.2.1.10.11.1.3.4. Pretensión civil

Es el pedido que realiza el Ministerio Público o la parte civil debidamente constituida sobre la aplicación de la reparación civil que deberá pagar el imputado, la cual no forma parte del principio acusatorio, pero dada su naturaleza civil, su cumplimiento implica el respeto del principio de congruencia civil, que es el equivalente al principio de

correlación, por cuanto el Juzgador está vinculado por el tope máximo fijado por el Ministerio Público o el actor civil (Vásquez, 2000).

2.2.1.10.11.1.3.5. Postura de la defensa

Es la tesis o teoría del caso que tiene la defensa respecto de los hechos acusados, así como su calificación jurídica y pretensión exculpante o atenuante (Cobo, 1999).

2.2.1.10.11.2. De la parte considerativa

Es la parte que contiene el análisis del asunto, importando la valoración de los medios probatorios para el establecimiento de la ocurrencia o no de los hechos materia de imputación y las razones jurídicas aplicables a dichos hechos establecidos (León, 2008).

Esta parte de la decisión también puede adoptar nombres tales como “análisis”, “consideraciones sobre hechos y sobre derecho aplicable”, “razonamiento”, entre otros (León, 2008).

Para Cortez (citado por San Martín, 2006) la parte considerativa contiene la construcción lógica de la sentencia, la que sirve para determinar si el acusado es o no responsable penal, si su conducta merece pena o no, imponiendo al Juez un doble juicio: histórico, tendente a establecer si un determinado hecho o conjunto de hechos ha existido o no con anterioridad al proceso; y jurídico, que tienden a concluir si el hecho que históricamente sucedió puede ser calificado como delito y merece pena

Según la teoría revisada, la parte considerativa debe contener:

2.2.1.10.11.2.1. Motivación de los hechos (Valoración probatoria)

Para San Martín (2006), la valoración probatoria consiste en la determinación que debe hacer el órgano jurisdiccional de si los hechos objeto de la acusación fiscal se dieron o no en el pasado, estando el Juzgador vinculado al hecho acusado, por tanto su conclusión no puede ser distinta que afirmar o negar su producción o acaecimiento.

La comprobación del juicio histórico determina la entrada al juicio jurídico, siendo que

si el juicio histórico es negativo deberá absolverse al imputado, ello en aplicación del principio de correlación entre acusación y sentencia derivado del principio acusatorio y del derecho de defensa; no pudiendo el Juzgador tampoco calificar el delito no precisado en dicha acusación ni agravante superior a la establecida, puesto que infringiría el principio de contradicción y vulneraría el derecho de defensa (San Martín, 2006).

De acuerdo a las fuentes revisadas, una adecuada valoración probatoria debe contener:

2.2.1.10.11.2.1.1. Valoración de acuerdo a la sana crítica

Apreciar de acuerdo a la sana crítica significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso (San Martín, 2006).

A decir de Oberg (citado por Gonzales ,2006) expone la ‘sana crítica’, es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical puede decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto.

Para Falcón (1990) la “sana crítica” es el resumen final de los sistemas de apreciación probatoria (prueba arbitraria, prueba libre, prueba tasada, prueba científica, prueba lógica) dentro de dicha concepción está incluida la prueba tasada y cualquier decisión a que se llegue que requiera un razonamiento libre de vicios, perfectamente argumentado y sostenido de modo coherente sobre medios de prueba con los que se ha llegado por las mejores vías posibles conocidas a la fijación de los hechos, pues este es el fin de la apreciación.

Por otro lado, (Couture,1958) expresa que la sana crítica está integrada por reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables, con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero que son estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.

Además, como afirma el autor, el sistema de la sana crítica está basado en la aplicación de dos principios: a) El Juez debe actuar de acuerdo a las reglas de la lógica. b) El Juez debe actuar aplicando las reglas de la experiencia, otras posiciones admiten solo la lógica como integrante de las reglas de la sana crítica, precisándola algunas veces como lógica crítica o es una consecuencia de un razonamiento integral en el cual se conectan los hechos y las pruebas aportadas para llegar al derecho aplicable, resultando de esta manera que la apreciación de la prueba conforme las reglas de la sana crítica implica que es lo aconsejado por el buen sentido, aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, la experiencia y en la observación de todos los elementos aportados al proceso (Couture, 1958).

Así también, nos dice que el valor jurídico de toda prueba depende, en definitiva, del grado de verdad proporcionado por la concordancia que (desde el doble punto de vista de su posibilidad y de su existencia) debe mediar entre la fuente y el objeto probatorio o, finalmente que consisten en la aplicación de la lógica y la experiencia (Couture, 1958).

Al respecto, Falcón (1990) nos dice que en resumen, la sana crítica constituye un método científico, compuesto por nueve reglas destinadas a la actividad operativa del Juez que en síntesis dicen: a) Solamente se prueban los hechos alegados en tiempo y forma; b) Los “hechos” por probar deben ser controvertidos; c) Corresponde aplicar primero las reglas de la prueba tasada, sean tales o provengan de la prueba legal; d) Es necesario ordenar los medios de prueba en una graduación estática que nos presente los que son más fiables que otros y tiene que ser más certeros: documental, informativa, confesional, pericial, testimonial; e) En función de los hechos de la causa hay que buscar por medio de la faz dinámica de la prueba, los medios idóneos correspondientes a cada hecho; f) Para poder tener la comprensión final del conflicto, hay que examinar los medios en su conjunto y coordinarlos con los hechos a fin de obtener una solución única; g) Cuando los restantes elementos no sean suficientes hay que aplicar las presunciones; h) Como última vía para determinar los hechos, resultarán útiles las reglas de la carga de la prueba; i) Finalmente habrá que narrar el desarrollo de la investigación y de las conclusiones sobre el conflicto de modo tal que el relato demuestre que se ha adquirido la certeza en virtud de un procedimiento

racional controlable, donde también se podrá utilizar como elemento corroborante la conducta de las partes en el proceso.

2.2.1.10.11.2.1.2. Valoración de acuerdo a la lógica

La valoración lógica presupone un marco regulativo de la sana crítica al cual corresponde proponerle las reglas de correspondencia adecuadas con la realidad, por un lado, y por otro como articulación genérica en el desenvolvimiento de los juicios (Falcón, 1990).

El juicio lógico se sustenta en la validez formal del juicio de valor contenido en la resolución que emita el Juez, permitiendo evaluar si el razonamiento es formalmente correcto, es decir, si no se ha transgredido alguna ley del pensar (Falcón, 1990).

Sus características son su validez universal y la legitimación formal que le otorga a la valoración efectuada por el Juez, sobre el particular Monroy (1996) indica que se clasifica la lógica en analítica y dialéctica, la primera plantea que, en un razonamiento, partiendo de afirmaciones necesariamente verdaderas se llega a conclusiones que también deben ser verdaderas, sobre la segunda precisa que estudia aquellos métodos que conducen el razonamiento en las discusiones o controversias, buscando persuadir, convencer o cuestionar la afirmación sostenida por el contrario.

Según el autor, las reglas y principios básicos del juicio lógico son:

2.2.1.10.11.2.1.2.1. El Principio de Contradicción

El cual nos dice que no se puede afirmar y negar una misma cosa respecto de algo al mismo tiempo. Se trata entonces, que dos enunciados que se oponen contradictoriamente no pueden ser ambos a la vez verdaderos. (Monroy, 1996).

2.2.1.10.11.2.1.2.2. El Principio del tercio excluido

El mismo establece que dos proposiciones que se oponen contradictoriamente no pueden ser ambas falsas. Así tenemos que si es verdadero que X es A, es falso que X sea no A. Entonces se sostiene la verdad de una proposición y la falsedad de la otra proposición (Monroy, 1996).

2.2.1.10.11.2.1.2.3. Principio de identidad

Sobre este principio dice que en el proceso de raciocinio preciso todo concepto y juicio debe ser idéntico a sí mismo...Es, pues, inadmisibles cambiar arbitrariamente una idea por otra, de hacerlo, se incurre en suplantación de concepto o de suplantación de tesis (Monroy, 1996).

2.2.1.10.11.2.1.2.4. Principio de razón suficiente

El mismo es enunciado de la siguiente manera: "nada es sin que haya una razón para que sea o sin que haya una razón que explique que sea". Esto es. "Ningún hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo", se considera a este principio como un medio de control de la aplicación de la libre apreciación de la prueba pues se exige una adecuada motivación del juicio de valor que justifique la decisión del Juez (Monroy, 1996).

2.2.1.10.11.2.1.3. Valoración de acuerdo a los conocimientos científicos

Esta valoración es aplicable a la denominada "prueba científica", la cual es por lo general por vía pericial, aparece en virtud de la labor de profesionales (médicos, contadores, psicólogos, matemáticos, especialistas en diversas ramas, como mercados, estadísticas, etc.) (Monroy, 1996).

La ciencia suele utilizarse como instrumento para influenciar al Juez aprovechando el mito de la certeza y de la verdad que está conectado con las concepciones tradicionales, groseras y acrílicas, de la ciencia (De Santo, 1992).

En consecuencia, se hace un uso epistémico, es decir que las pruebas científicas están dirigidas a aportar al Juez elementos de conocimiento de los hechos que se sustraen a la ciencia común de que dispone, por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la adopción de la perspectiva racionalista que aquí se sigue no implica la negación de Lambayeque y de la discrecionalidad en la valoración del Juez, que representa el núcleo del principio de la libre convicción, pero implica que el Juez efectúe sus valoraciones según una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación racional. Por decirlo así, el principio de la

libre convicción ha liberado al Juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón (De Santo, 1992).

Es necesario distinguir cuidadosamente cuál es el tipo de ciencia del que se trata, cuál es el estatuto epistemológico de los conocimientos que suministra, cuál es su grado de atendibilidad, y cuál es el grado de confirmación que pueden aportar al enunciado de hecho sobre el que se despliega la decisión del Juez, esta diversidad de niveles de atendibilidad de los conocimientos científicos que se realizan, con fines probatorios, durante el proceso implica una consecuencia importante: que solamente en casos particulares la prueba científica es capaz, por sí sola, de atribuirle a un enunciado de hecho un grado de probabilidad capaz de satisfacer el estándar de prueba que tiene vigor en esa clase de proceso, en consecuencia, debemos admitir que la prueba científica puede acompañarse o integrarse con otras pruebas, con pruebas "ordinarias", que pueden contribuir a fundar conclusiones válidas sobre el hecho que debe probarse (De Santo, 1992).

Así, por ejemplo, es muy posible que una prueba del ADN sea el único elemento de prueba para decidir sobre la identificación de un sujeto, dado que esta prueba alcanza valores de probabilidad del orden del 98 o 99%, sin embargo, también existen pruebas científicas estadísticas muy bajas, del orden del 1 o 2%, ciertamente, por sí solos, estos datos no son suficientes para demostrar un nexo de causalidad específica entre un hecho ilícito y el daño provocado a un sujeto, y es bastante dudoso que puedan dotar a la prueba de un nexo de causalidad general (en casos en los que un nexo de esta naturaleza es objeto de prueba), de esta forma, resulta evidente que, si se quiere alcanzar el estándar de prueba que debemos satisfacer para demostrar el nexo causal entre el hecho ilícito y el daño causado, y para afirmar que el enunciado correspondiente pueda considerarse como "verdadero", estos datos deben integrarse con pruebas de otro género, en sustancia, las pruebas científicas son muy útiles, pero raramente resultan decisivas y suficientes para determinar la decisión sobre los hechos (De Santo, 1992).

En el Proceso Penal, en el que debemos satisfacer el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, debemos resignarnos ante el hecho de que sólo en unos pocos casos la prueba científica aporta informaciones con un grado de probabilidad

suficientemente alto como para lograr la certeza o la casi-certeza del hecho, por lo general el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable solamente puede superarse cuando la conexión entre un hecho (causa) y otro hecho (efecto) está "recubierta" por una ley de naturaleza deductiva o, al menos, casi-deductiva, cuya aplicación permita otorgar un carácter de certeza o de casi-certeza al enunciado que se refiere a dicha conexión (De Santo, 1992).

2.2.1.10.11.2.1.4. Valoración de acuerdo a las máximas de la experiencia

La valoración de acuerdo a las máximas de la experiencia supone el uso de la experiencia para determinar la validez y existencia de los hechos, siendo que, esta experiencia se refiere a la apreciación como objetivación social de ciertos conocimientos comunes dentro de un ámbito determinado, en un tiempo específico, pero también, a la resultante de la tarea específica realizada, así el Juez puede apreciar claramente la peligrosidad de un vehículo que se desplaza a una velocidad incorrecta hacia el lugar donde está transitando; incluso puede usar al respecto reglas jurídicas que la experiencia ha volcado en el Código de tránsito (Devis, 2002).

A decir de Oberg (citado por Gonzales, 2006) las máximas de la experiencia: 1° Son juicios, esto es, valoraciones que no están referidas a los hechos que son materia del proceso, sino que poseen un contenido general. Tienen un valor propio e independiente, lo que permite darle a la valoración un carácter lógico; 2° Estos juicios tienen vida propia, se generan de hechos particulares y reiterativos, se nutren de la vida en sociedad, aflorando por el proceso inductivo del Juez que los aplica; 3° No nacen ni fenecen con los hechos, sino que se prolongan más allá de los mismos, y van a tener validez para otros nuevos; 4° Son razones inductivas acreditadas en la regularidad o normalidad de la vida, y, por lo mismo, implican una regla, susceptible de ser utilizada por el Juez para un hecho similar; 5° Las máximas carecen de universalidad. Están restringidas al medio físico en que actúa el Juez, puesto que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden todo lo que el Juez tenga como experiencia propia.

La experiencia también viene del modo común y normal del desarrollo de los sucesos, como ellos acostumbran a ocurrir, de manera que si se sostuviera que hay una variación en estos sucesos, habría que probarlo, por ejemplo, la experiencia

indica que la gente no “lee” la mente de otro; si ello fuese alegado en algún caso, debería probarse, de esta manera el curso natural de las cosas que el Juez aprecia está ayudado por las reglas de la carga de la prueba, tampoco el Juez necesita un psicólogo permanente para advertir si un testigo manifiestamente miente, por lo que la experiencia judicial le permite, a través del interrogatorio y en función de los demás elementos colectados en el proceso, determinar la contradicción, la falta de voluntad para declarar, el ocultamiento, etc. (Devis, 2002).

La experiencia según Paredes (citado por en Devis ,2002) el número de conclusiones extraídas de una serie de percepciones singulares pertenecientes a los más variados campos del conocimiento humano, tomadas por el Juez como suficientes para asignar un cierto valor a los medios probatorios. Son reglas contingentes, variables en el tiempo y en el espacio, y están encaminadas a argumentar el valor probatorio asignado a cada medio probatorio en particular como, primordialmente, a su conjunto

Asimismo, Devis (2002) informa un conjunto de reglas para orientar el criterio del Juzgador directamente (cuando son de conocimiento general y no requieren, por lo tanto, que se les explique, ni que se dictamine si tiene aplicación al caso concreto) o indirectamente a través de las explicaciones que le den los expertos o peritos que conceptúan sobre los hechos del proceso (cuando se requieren conocimientos especiales), es decir, esas reglas o máximas, le sirven al Juez para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, cuando advierte que hay contradicción con ellas, ya porque las conozca y sean comunes, o porque se las suministre el perito técnico.

A manera de ejemplo de regla de experiencia tenemos al comportamiento de las partes en el proceso, en tanto la falta a los deberes de veracidad, lealtad, buena fe y probidad es razón o argumento en contra de la parte infractora y a favor de la otra parte, pues se entiende que dicha transgresión se produce ante la necesidad de ocultar la verdad de los hechos que son desfavorables al infractor. Esta regla de experiencia ha sido legislada en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, el cual prescribe: "El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la

conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción".

2.2.1.10.11.2.2. Motivación del derecho (Fundamentación jurídica)

La fundamentación jurídica o juicio jurídico es el análisis de las cuestiones jurídicas, posterior al juicio histórico o la valoración probatoria sea positiva, consiste en la subsunción del hecho en un tipo penal concreto, debiendo enfocarse la culpabilidad o imputación personal y analizar si se presenta una causal de exclusión de culpabilidad o de exculpación, determinar la existencia de atenuantes especiales y genéricas, así como de agravantes genéricas, para luego ingresar al punto de la individualización de la pena (San Martín, 2006).

Los fundamentos de derecho deberán contener con precisión las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias (interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal), así como para fundar su decisión (Talavera, 2011).

Un adecuado juicio jurídico penal debe contener la tipicidad de la tipicidad (sin determinación de la autoría o grado de comisión), la antijuricidad, culpabilidad, determinación de la pena, y la determinación de la reparación civil.

2.2.1.10.11.2.2.1. Determinación de la tipicidad

2.2.1.10.11.2.2.1.1. Determinación del tipo penal aplicable

A decir de Nieto (citado por San Martín, 2006) consiste en encontrar la norma o bloque normativo determinado (específico) del caso concreto; sin embargo, teniendo en cuenta el principio de correlación entre acusación y sentencia, el órgano jurisdiccional podrá desvincularse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos ciertos que son objeto de acusación fiscal, sin que cambie el bien jurídico protegido por el delito acusado y siempre que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio.

Para efectos del derecho penal, la norma rectora del comportamiento delictual es el “tipo penal”, que se define al tipo penal en dos sentidos, en primer lugar como la figura elaborada por el legislador, descriptiva de una clase de eventos antisociales, con un contenido necesario y suficiente para garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos, y en segundo lugar, desde el punto de vista funcional el tipo es una clase de subconjuntos, necesarios y suficientes, que garantizan al bien jurídico. (Plascencia, 2004).

2.2.1.10.11.2.2.1.2. Determinación de la tipicidad objetiva

Mir (citado por Plascencia, 2004), señala “La tipicidad objetiva la conforman los elementos objetivos del tipo que proceden del mundo externo perceptible por los sentidos, es decir tiene la característica de ser tangibles, externos, materiales, por lo que son objetivos los que representan cosas, hechos o situaciones del mundo circundante”.

Según la teoría revisada, para determinar la tipicidad objetiva del tipo penal aplicable, se sugiere la comprobación de los siguientes elementos, estos son:

A. El verbo rector

El verbo rector es la conducta que se quiere sancionar con el tipo penal, y con ella es posible establecer de la tentativa o el concurso de delitos, implica además la línea típica que guía el tipo penal (Plascencia, 2004).

B. Los sujetos

Se refiere al sujeto activo, es decir, el sujeto que realiza la acción típica y el sujeto pasivo, quien es el sujeto que sufre la acción típica (Plascencia, 2004).

C. Bien jurídico

El Derecho Penal desarrolla su finalidad última de mantenimiento del sistema social a través de la tutela de los presupuestos imprescindibles para una existencia en común que concretan una serie de condiciones valiosas, los llamados bienes jurídicos (Plascencia, 2004).

Para Von (citado por Plascencia, 2006), el concepto de bien jurídico determinado

socialmente es anterior al Derecho, es decir que la norma jurídica busca la protección de interés socialmente protegido, así como lo considera la tesis de Welzel, la concepción de una expectativa social defraudada como un objeto de protección, sin embargo, la actual concepción de bien jurídico, sostiene que este supone no solo las expectativas sociales en sí, sino las condiciones efectivas existentes para la realización de los derechos fundamentales.

D. Elementos normativos

Los elementos normativos son aquellos que requieren valoración por parte del intérprete o del Juez que ha de aplicar la ley, esta valoración puede proceder de diversas esferas y tener por base tanto a lo radicado en el mundo físico como perteneciente al mundo psíquico (Plascencia, 2004).

Los elementos normativos o necesitados de complementación son todos aquellos en los cuales el tribunal de justicia no se satisface con una simple constatación de la descripción efectuada en la ley, sino que se ve obligado a realizar otra para concretar más de cerca la situación del hecho. Aquí cabe distinguir: elementos puramente cognoscitivos, en los que los tribunales valoran de acuerdo con datos empíricos, y elementos del tipo valorativos o necesitados de valoración, en que el tribunal adopta una actitud valorativa emocional (Plascencia, 2004).

Ejemplos: 1. Conceptos jurídicos: matrimonio, deber legal de dar alimentos, documentos, funcionario, cheque, concurso, quiebra. 2. Conceptos referidos a valor: móviles bajos, medidas violentas o arbitrarias. 3. Conceptos referidos a sentido: ataque a la dignidad humana, acción sexual (Plascencia, 2004).

E. Elementos descriptivos

Los elementos descriptivos están formados por procesos que suceden en el mundo real, u objetos que en él se encuentran, pero que difieren de los elementos objetivos, los subjetivos y los normativos, por lo que en virtud de que pueden pertenecer al mundo físico y al psíquico (Plascencia, 2004).

En efecto, los elementos descriptivos podemos considerarlos conceptos tomados del

lenguaje cotidiano o de la terminología jurídica que describen objetos del mundo real, pero que necesariamente son susceptibles de una constatación fáctica, por lo que pueden entenderse como “descriptivos”, aunque la precisión de su exacto contenido requiera la referencia a una norma y manifiesten, así, un cierto grado de contenido jurídico (Plascencia, 2004).

2.2.1.10.11.2.2.1.3. Determinación de la tipicidad subjetiva

Mir (citado por Plascencia, 2004) considera que la tipicidad subjetiva, la conforman los elementos subjetivos del tipo que se haya constituida siempre por la voluntad, dirigida al resultado (en los delitos dolosos de resultado), o bien, a una sola conducta (en los delitos imprudentes y en los de mera actividad), y a veces por elementos subjetivos específicos.

2.2.1.10.11.2.2.1.4. Determinación de la Imputación objetiva

El punto de partida de la imputación objetiva es la confirmación, según el criterio de a equivalencia de las condiciones, del nexo de causalidad entre la acción y el resultado (Hurtado, 2005).

A. Creación de riesgo no permitido

Esta postura implica que, para determinar la vinculación entre la acción y el resultado, es una acción abierta (cualquier tipo de acción), esta acción debe haber causado un riesgo relevante que pueda vulnerar el bien jurídico protegido por la norma penal, o, que sobrepase el riesgo o peligro permitido en la vida urbana; entendiéndose a estos como los peligros o riesgos socialmente aceptadas, reguladas por normas impuestas por el ordenamiento jurídico, la experiencia y la reflexión destinadas a reducir al mínimo el riesgo inevitable; siendo que cuando se pasa este límite, si es imputable la conducta, excluyéndose bajo este criterio, las conductas que no aumentan el riesgo para el bien jurídico sino lo disminuyen, o, se trataba de un riesgo jurídicamente permitido (Villavicencio, 2010).

B. Realización del riesgo en el resultado

Este criterio sostiene que, aun después de haberse comprobado la realización de una acción, la causalidad con el resultado típico y la creación de un riesgo no permitido, se

debe verificar si en efecto, este riesgo no permitido creado, se ha producido efectivamente en el resultado, es decir, el resultado debe ser la proyección misma del riesgo no permitido realizado (Villavicencio, 2010).

Cuando el resultado se produce como una consecuencia directa del riesgo y no por causas ajenas a la acción riesgosa misma, éste criterio sirve para resolver los llamados "procesos causales irregulares", o en el caso de confluencia de riesgos, negando, por ejemplo, la imputación a título de imprudencia de la muerte cuando el herido fallece a consecuencia de otro accidente cuando es transportado al hospital o por imprudencia de un tercero, o un mal tratamiento médico (Fontan, 1998).

C. Ámbito de protección de la norma

Este criterio supone que el resultado típico causada por el delito imprudente debe encontrarse dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado que ha sido infringida, es decir, que una conducta imprudente no es imputable objetivamente si el resultado de esta conducta no es el resultado que la norma infringida busca proteger (Villavicencio, 2010).

Por ejemplo, si una persona fallece por infarto al tener noticias de que un familiar suyo ha sido atropellado, en éste caso el ámbito de protección de la norma vedaría tal posibilidad, porque la norma del Código de circulación concretamente infringida por el conductor imprudente está para proteger la vida de las personas que en un momento determinado participan o están en inmediata relación con el tráfico automovilístico (pasajeros, peatones), no para proteger la vida de sus allegados o parientes que a lo mejor se encuentran lejos del lugar del accidente (Fontan, 1998).

D. El principio de confianza

Este criterio funciona en el ámbito de la responsabilidad un acto imprudente para delimitar el alcance y los límites del deber de cuidado en relación a la actuación de terceras personas, fundamentándose en que la acción imprudente no puede imputarse a una persona cuando esta imprudencia ha sido determinada por el actuar imprudente de un tercero, negándose la imputación objetiva del resultado si el resultado se ha producido por causas ajenas a la conducta imprudente del autor; por ejemplo, quien circula por una carretera, cuidará que su vehículo tenga luces atrás; confía que todos lo

harán, sin embargo, impacta contra un vehículo sin luces reglamentarias o estacionado sin señales de peligro, causando la muerte de sus ocupantes (Villavicencio, 2010).

E. Imputación a la víctima

Cancio (citado por Villavicencio, 2010) considera a este criterio, al igual que el principio de confianza niega la imputación de la conducta si es que la víctima con su comportamiento, contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido, y este no se realiza en el resultado, sino que el riesgo que se realiza en el resultado, es el de la víctima.

F. Confluencia de riesgos

Este criterio se aplica solo en los supuestos donde en el resultado típico concurren otros riesgos al que desencadenó el resultado, o que comparten el desencadenamiento compartido de los mismos, debiendo determinarse la existencia de un riesgo relevante atribuible a título de imprudencia al autor como otros riesgos también atribuibles a la víctima o a terceros (conurrencia de culpas), pudiendo hablarse en estos casos de autoría accesoria de autor y víctima (Villavicencio, 2010).

Para Villavicencio (2010) en el caso de una proporcional confluencia de riesgos, se debe afirmar una disminución del injusto en el lado del autor, es decir, como el resultado se produjo “a medias” entre el autor y la víctima, entonces debe reducirse la responsabilidad penal del agente.

2.2.1.10.11.2.2.2. Determinación de la antijuricidad

Este juicio es el siguiente paso después de comprobada la tipicidad con el juicio de tipicidad, y consiste en indagar si concurre alguna norma permisiva, alguna causa de justificación, es decir, la comprobación de sus elementos objetivos y además, la comprobación del conocimiento de los elementos objetivos de la causa de justificación (Bacigalupo, 1999).

Es así que, la teoría revisada, establece que para determinar la antijuricidad, se parte de un juicio positivo y uno negativo, entre ellos se siguen:

2.2.1.10.11.2.2.2.1. Determinación de la lesividad (antijuricidad material)

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que, si bien es cierto, la contradicción del comportamiento del agente con la norma preceptiva, y cumpliendo la norma penal prohibitiva, presupone la antijuricidad formal, sin embargo, es necesario establecerse la antijuricidad material, por lo que, este ha determinado:

El principio de lesividad en virtud del cual, en la comisión de un delito tiene que determinarse, según corresponda la naturaleza del mismo, al sujeto pasivo que haya sufrido la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma penal, de allí que el sujeto pasivo siempre es un elemento integrante del tipo penal en su aspecto objetivo; por lo tanto al no encontrarse identificado trae como consecuencia la atipicidad parcial o relativa; en consecuencia para la configuración del tipo penal de hurto agravado es imprescindible individualizar al sujeto pasivo, titular del bien o bienes muebles afectados, de lo contrario resulta procedente, la absolución en cuanto a este extremo se refiere (Perú. Corte Suprema, exp.15/22 – 2003).

Ahora bien, para determinar la antijuricidad, se puede aplicar un juicio negativo, el que implica la comprobación de causas de justificación, siendo estas excepciones a la regla de la tipicidad, que consisten en permisos concebidos para cometer, en determinadas circunstancias, un hecho penalmente típico, obedeciendo al principio de que, en el conflicto de dos bienes jurídicos, debe salvarse el preponderante para el derecho, preponderancia que debe extraerse teniéndose en cuenta el orden jerárquico de las leyes mediante la interpretación coordinada de las reglas legales aplicables al caso, extraídas de la totalidad del derecho positivo (Bacigalupo, 1999).

Entre las causas de exclusión de la antijuricidad son:

2.2.1.10.11.2.2.2.2. La legítima defensa

Es un caso especial de estado de necesidad, que tiene su justificación en la protección del bien del agredido respecto del interés por la protección del bien del agresor, fundamentándose en la injusticia de la agresión, lesionado por aquel o por un tercero que lo defiende (Zaffaroni, 2002).

Sus presupuestos son: a) la agresión ilegítima (un ataque actual o inminente de una persona a la persona o derechos ajenos); b) la actualidad de la agresión (La agresión es actual mientras se está desarrollando); c) la inminencia de la agresión (es decir, la decisión irrevocable del agresor de dar comienzo a la agresión, es equivalente a la actualidad); d) la racionalidad del medio empleado (el medio defensivo, que no es el instrumento empleado, sino la conducta defensiva usada, es racionalmente necesaria para impedir o repelar la agresión); e) la falta de provocación suficiente (la exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con intención de defenderse), pudiendo estar ausente este requisito en los casos de: i) provocación desde el punto de vista objetivo, provoca la agresión incitando maliciosamente al tercero a agredirlo para así cobijarse en la justificación, y ii) desde el punto de vista subjetivo: pretexto de legítima defensa, es el que voluntariamente se coloca en situación de agredido (ej. el ladrón o el amante de la adúltera, que sorprendidos son agredidos) (Zaffaroni, 2002).

2.2.1.10.11.2.2.2.3. Estado de necesidad

Es la causa de justificación que consiste en la preponderancia del bien jurídicamente más valioso que, en el caso, representa el mal menor, determinando la exclusión de la antijuricidad por la necesidad de la lesión, unida a la menor significación del bien sacrificado respecto del salvado, dada la colisión de bienes jurídicos protegidos (Zaffaroni, 2002).

Sus presupuestos son: a) el mal (daño causado a un interés individual o social protegido jurídicamente); b) mal de naturaleza pena (debe tener naturaleza penal, puesto que de otra forma no tendría relevancia al objeto de estudio); c) el mal evitado (el bien salvado debe ser de mayor jerarquía que el sacrificado); d) mal mayor (no interesa el origen del mal mayor que se intenta evitar, puede haberse causado por una persona o provenir de un hecho animal o natural); e) la inminencia (el mal es inminente si está por suceder prontamente, esto no sólo exige que el peligro de que se realice el mal sea efectivos, sino, también, que se presente como de realización inmediata); f) extrañeza (el autor es extraño al mal mayor, si éste no es atribuible a su intención) (Zaffaroni, 2002).

2.2.1.10.11.2.2.2.4. Ejercicio legítimo de un deber, cargo o autoridad

Implica el ejercicio del propio poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo público, debiendo ser: a) legítimo; b) dado por una autoridad designada legalmente, y; b) actuando dentro de la esfera de sus atribuciones; e) sin excesos (Zaffaroni, 2002).

El cumplimiento de un deber no requiere en el sujeto activo autoridad o cargo alguno, como caso de cumplimiento de un deber jurídico, se señala, entre otros, la obligación impuesta al testigo de decir la verdad de lo que supiere, aunque sus dichos lesionen el honor ajeno; la obligación de denunciar ciertas enfermedades impuesta por las leyes sanitarias a los que ejercen el arte de curar, aunque se revele un secreto profesional (Zaffaroni, 2002).

2.2.1.10.11.2.2.2.5. Ejercicio legítimo de un derecho

Esta causa de justificación supone que quien cumple la ley puede imponer a otro su derecho o exigirle su deber, cosa que no ocurrirá siempre en el ejercicio de un derecho, pues el límite de los derechos propios está fijado por los derechos de los demás (Zaffaroni, 2002).

Sin embargo, esta causa tiene excesos no permitidos, ellos son: a) cuando se lesiona un derecho de otro como consecuencia de actos que van más allá de lo autorizado o de lo que la necesidad del ejercicio requiere, de acuerdo con las circunstancias del caso; b) cuando se ejercita con un fin distinto del que el propio orden jurídico le fija, o en relación con las normas de cultura o convivencia social; c) cuando se lo ejerce usando medios y siguiendo una vía distinta de la que la ley autoriza (ejemplo: el ejercido por mano propia o las vías de hecho) (Zaffaroni, 2002).

2.2.1.10.11.2.2.2.6. La obediencia debida

Consiste en el cumplimiento de una orden dada de acuerdo a derecho dentro de una relación de servicio, significando ello que no habrá defensa legítima contra el cumplimiento de una orden que no es antijurídica (Zaffaroni, 2002).

Una parte de la teoría sostiene que a una orden dada dentro del marco de la competencia del superior jerárquico debe reconocerse una "presunción de juricidad", y, otro sector

estima que una orden es adecuada a derecho inclusive cuando las condiciones jurídicas de su juricidad no están dadas, pero el superior jerárquico las ha tenido erróneamente por existentes previa comprobación de acuerdo al deber (Zaffaroni, 2002).

El Código Penal establece de manera negativa las causales que niegan la antijuricidad, dichas causales están previstas en su art. 20, que establece: “Está exento de responsabilidad penal: (...).

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurren las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.”; c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa;

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, Lambayeque u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurren los siguientes requisitos: a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. (...)

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; 9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. (...)

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición;

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause

lesiones o muerte”, asimismo, establece en su art. 21 la responsabilidad restringida sosteniendo: “En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal (Jurista Editores, 2015).

2.2.1.10.11.2.2.3. Determinación de la culpabilidad

Zaffaroni (2002) considera que es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor, pudiendo establecerse esta vinculación a decir de Plascencia (2004), en la comprobación de los siguientes elementos: a) la comprobación de la imputabilidad; b) la comprobación de la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad (error de tipo); c) el miedo insuperable; d) la imposibilidad de poder actuar de otra manera (exigibilidad).

La culpa es concebida como el reproche personal de la conducta antijurídica cuando podía haberse abstenido de realizarla, siendo que, la posibilidad concreta de obrar de otro modo constituye el fundamento de la culpabilidad (Córdoba, 1997).

Según la teoría revisada, se sugiere que la culpabilidad debe determinarse con:

2.2.1.10.11.2.2.3.1. La comprobación de la imputabilidad

La determinación de la imputabilidad se realiza con un juicio de imputabilidad, un la cual es necesario evaluar si concurren: a) facultad de apreciar el carácter delictuoso de su acto, siendo relativo a la inteligencian (elemento intelectual); b) facultad de determinarse según esta apreciación (elemento volitivo), es decir que el autor tuvo por lo menos control de su comportamiento (Peña, 1983).

2.2.1.10.11.2.2.3.2. La comprobación de la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad

Este presupuesto supone, que será culpable quien ha tenido la capacidad para poder conocer la magnitud antijurídica de su acto, teniendo que, este conocimiento se presupone para las personas con coeficiente normal, dentro de esta categoría puede negarse en virtud del “error”, como hecho excluyente del dolo dado que eliminan su

comprensión de la criminalidad del acto, estructurando una situación de justificación o de inculpabilidad (Zaffaroni, 2002).

Pueden distinguirse el error de tipo (al momento de cometer el hecho su autor desconocía algún detalle o circunstancia del tipo objetivo) y error de prohibición (el autor de un hecho objetivamente antijurídico erróneamente cree que está permitido, sabe lo que hace pero no sabe que está prohibido), siendo que el error de tipo el autor no sabe lo que hace (ejemplo: embarazada toma un medicamento sin saber que es abortivo), en cambio, en el error de prohibición el agente sabe lo que hace pero no sabe que está prohibido (extranjera toma una pastilla para abortar porque cree que al igual que en su país el aborto está permitido), siendo que el primero elimina la tipicidad, y el segundo, elimina la culpabilidad si es invencible y la atenúa si es vencible (Zaffaroni, 2002).

2.2.1.10.11.2.2.3.3. La comprobación de la ausencia de miedo insuperable

La justificación de esta causa de inculpabilidad se trata también en la no exigibilidad, por la existencia de un terror que prive de lucidez o fuerza de voluntad al sujeto, basta con el temor, que, para ser relevante ha de ser insuperable, es decir, el que no hubiera podido resistir el hombre medio, el común de los hombres, ahora bien, ese hombre medio debe ser situado en la posición del autor, con sus conocimientos y facultades (Plascencia, 2004).

Así, se tendrán en cuenta la edad, la fuerza, la cultura, etc., del sujeto en concreto, pero no sus características patológicas, p., ej., neurosis, que dan lugar a un miedo patológico que el hombre normal superar (Plascencia, 2004).

2.2.1.10.11.2.2.3.4. La comprobación de la no exigibilidad de otra conducta

La no exigibilidad no significa ausencia de una prohibición; al contrario, la cuestión de la inexigibilidad sólo se plantea en el ámbito de la culpabilidad y después, por tanto, de que se haya comprobado la antijuridicidad del hecho (Plascencia, 2004).

El fundamento de esta causa de inculpabilidad es precisamente la falta de normalidad y de libertad en el comportamiento del sujeto activo, teniendo en cuenta la situación de

hecho, no podía serle exigido (Plascencia, 2004).

Para determinar la exigibilidad, es indispensable que se examinen las circunstancias concretas en las cuales estuvo inmerso el sujeto para ver si realmente pudo evitar el hecho injusto y adecuar su conducta al ordenamiento jurídico; siendo así que, puede negarse esta calidad cuando: a) Estado de necesidad cuando el bien sacrificado es de igual valor al salvado; b) la coacción; c) La obediencia jerárquica; d) Evitamiento de un mal grave propio o ajeno (Peña, 1983).

El Código Penal, establece de manera negativa las circunstancias en las cuales es posible negar la culpabilidad penal, así; Conforme al art. 14 del acotado, se establece el error de tipo y error de prohibición, prescribiendo: “El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena” (Jurista Editores, 2015).

Asimismo, el art. 15 del acotado establece el error de comprensión culturalmente condicionado, prescribiendo: “El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena” (Jurista Editores, 2015).

Así también, el art. 20 del Código Penal establece también de manera negativa las causales que niegan la culpabilidad, prescribiendo así: “Está exento de responsabilidad penal: 1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión; 2. El menor de 18 años; (...); 5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha

vinculación (Jurista Editores, 2015).

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica; (...) 7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor; (...)” (Jurista Editores, 2015).

2.2.1.10.11.2.2.4. Determinación de la pena

Según Silva (2007), la teoría de la determinación de la pena tiene autonomía sobre la teoría de la pena y la teoría del delito, ello por la necesidad de elaborar una categoría que este más allá de la culpabilidad, por los distintos factores relevantes para la individualización de la pena (comportamientos posteriores al hecho, nivel de sensibilidad a la pena, transcurso del tiempo) que carezcan de un soporte categorial en la teoría del delito y las múltiples circunstancias del hecho concreto a las que se asigna relevancia cuantificadora y que no tienen una referencia categorial clara.

La determinación de la pena se trata de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales que tiene por función, identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito (Perú. Corte Suprema, Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116).

La individualización de la pena es algo más que la mera cuantificación, siendo que es la actividad que nos indica en que cantidad privación de bienes jurídicos o la proporción de esta privación que implica la pena al preso, asimismo, cuál es el tratamiento resocializador al que debe someterse, así conceptuada la individualización de la coerción penal (Zaffaroni, 2002).

La determinación de la pena tiene dos etapas, la primera es la determinación de la pena abstracta y la segunda la determinación de la pena concreta.

En la primera etapa, se deben definir los límites de la pena o penas aplicables, se trata de la identificación de la pena básica, en cuya virtud corresponde establecer un

espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial y un máximo o límite final. En aquellos delitos donde sólo se ha considerado en la pena conminada uno de tales límites, se debe de integrar el límite faltante en base a los que corresponden genéricamente para cada pena y que aparecen regulados en la Parte General del Código Penal, al configurarse el catálogo o precisarse las características específicas de cada pena (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

La Pena básica es la específica como consecuencia de la comisión del delito, cada delito tipificado en la Parte Especial del Código Penal o en Leyes especiales o accesorias a él tiene señalada, por regla general, una o más penas a partir de extremos de duración o realización mínimas o máximas. En consecuencia, la realización culpable y comprobada judicialmente de un delito, conlleva la determinación de la pena entre ambos límites punitivos (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

En esta etapa se debe identificar la pena concreta dentro del espacio y límite prefijado por la pena básica en la etapa precedente, se realiza en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Las circunstancias modificativas de responsabilidad son ciertos hechos o circunstancias que concurriendo en el sujeto, lo colocan en un estado peculiar y propio, produciendo que el efecto de la pena sea distinto (mayor o menor) que el que se desprende y nace de considerarlo en sí mismo o en relación a su materia, son por tanto, personales y subjetivas y afectan al sujeto pasivo, no del delito, pudiendo agravar o atenuar la pena (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito, cuya esencia permanece intacta, es decir, posibilitan apreciar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del hecho) o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente), permitiendo de este modo ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse a su autor o partícipe (Perú: Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Se denomina circunstancias a aquellos factores objetivos o subjetivos que influyen en la medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o menos grave. Su función principal es coadyuvar a la graduación o determinación del quantum de pena aplicable al hecho punible cometido. En ese contexto se considera como circunstancias comunes o genéricas a aquellas que pueden operar con cualquier delito, por ejemplo las circunstancias previstas en el artículo 46° del Código Penal. Esta clase de circunstancias sólo permiten graduar la pena concreta dentro de los márgenes establecidos por la pena básica. En cambio las circunstancias cualificadas, si bien pueden operar también con cualquier delito, como el caso del artículo 46° A del Código Penal, ellas disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena y que será el límite fijado para dicho tipo de agravante por la ley (“...un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido”). Será hasta este nuevo máximo legal la pena básica y dentro de la cual el Juez deberá determinar la pena concreta” (Perú. Corte Suprema, Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116).

La Corte Suprema ha establecido que la determinación e individualización de la pena debe hacerse en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad –artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal– y bajo la estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales (Perú. Corte Suprema, Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116).

La Corte Suprema también ha establecido que en esta etapa, el Juzgador debe individualizar la pena concreta, entre el mínimo y el máximo de la pena básica, evaluando, para ello, diferentes circunstancias como las contenidas en los artículos 46°, 46° A, 46° B y 46° C del Código Penal y que estén presentes en el caso penal (Perú: Corte Suprema, Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116), las que son circunstancias genéricas no han sido calificadas por el legislador como agravantes o atenuantes, por lo que la Corte Suprema, citando a García (2005), considera que será del caso decidir si en el caso concreto le da a dichas circunstancias específicas un peso agravatorio o atenuatorio (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Con un criterio más específico y a modo de propuesta, Silva (2007), propone que la

determinación de la pena se puede hacer en relación a la desvaloración del resultado, como lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, y en relación a los elementos subjetivos entendidos como desatención del Derecho (dolo, peligrosidad de la conducta, la corresponsabilidad de la víctima), entendido no sólo como orden abstracto, sino comprendiendo también la relación jurídica con la víctima o la generalidad, considerando que esta valoración constituye una valoración empírica, así, propone: a) En primer lugar, la evaluación del injusto objetivo (ex ante), como la expectativa lesionada; considerando a ello el riesgo para el bien jurídico concreto; la Infracción de deberes especiales en relación con la situación (intensidad del deber de garante); b) La evaluación de los elementos de contenido expresivo o simbólico (móviles, etc.); c) la evaluación para los riesgos para otros bienes (las consecuencias extra típicas previsibles); d) La evaluación del injusto (ex post), conforme a la intensidad de vulneración o peligro; y, finalmente, e) la imputación subjetiva, en relación a la intención y grados de conocimiento.

Así, por la vinculación con la gravedad del hecho punible, siguiendo a Bramont (2003), la Corte Suprema considera que este criterio hace referencia a la cuantía del injusto, es decir al grado de antijuridicidad, de contrariedad de la conducta con el derecho, con el orden jurídico, siendo estas circunstancias la naturaleza de la acción; los medios empleados; la importancia de los deberes infringidos; la extensión de daño o peligro causado; y, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.1. La naturaleza de la acción

La Corte Suprema señala que esta circunstancia, puede atenuar o agravar la pena, permite dimensionar la magnitud del injusto realizado. Para ello se debe apreciar “la potencialidad lesiva de la acción”, es decir, será del caso apreciar varios aspectos como son el tipo de delito cometido o el *modus operandi* empleado por el agente, esto es, la “forma cómo se ha manifestado el hecho”, además, se tomará en cuenta el efecto psicosocial que aquél produce (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.2. Los medios empleados

La realización del delito se puede ver favorecida con el empleo de medios idóneos, la

naturaleza y efectividad dañosa de su uso pueden comprometer en mayor o menor medida la seguridad de la víctima o provocar graves estragos. De allí que Villavicencio, estime que esta circunstancia se refiere igualmente a la magnitud del injusto, sin embargo, para otros autores, que como Peña, señalan que ella posibilitaba reconocer la peligrosidad del agente (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.3. La importancia de los deberes infringidos

Es una circunstancia relacionada con la magnitud del injusto, pero que toma en cuenta también la condición personal y social del agente, resultando coherente que la realización del delito con infracción de deberes especiales propicie un efecto agravante, en la medida que el desvalor del injusto es mayor, pues trasciende a la mera afectación o puesta en peligro del bien jurídico, esto es, el agente compromete, también, obligaciones especiales de orden funcional, profesional o familiar que tiene que observar (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.4. La extensión de daño o peligro causado

Esta circunstancia indica la cuantía del injusto en su proyección material sobre el bien jurídico tutelado, así García, P. (2012) precisa que tal circunstancia toma como criterio de medición el resultado delictivo (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión

Se refieren a condiciones tempo–espaciales que reflejan, principalmente, una dimensión mayor en el injusto, ya que el agente suele aprovecharlas para facilitar la ejecución del delito (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Asimismo, por su vinculación con la personalidad del autor, este criterio busca medir la capacidad para delinquir del agente, deducida de factores que hayan actuado de manera de no quitarle al sujeto su capacidad para dominarse a sí mismo y superar el ambiente, según ello no se pretende averiguar si el agente podría o no cometer en el futuro otros delitos, sino que debe analizarse el grado de maldad que el agente demostró en la perpetración del delito que trata de castigarse, siendo estos criterios los móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; la edad, educación, costumbres, situación económica y medio social; la conducta anterior y posterior al hecho; la

reparación espontánea que hubiera hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y, los demás antecedentes, condiciones personales y circunstancias que conduzcan al conocimiento de la personalidad del infractor (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.6. Los móviles y fines

Según este criterio, la motivación y los fines que determinan, inducen o guían la acción delictiva del agente, influyen, de modo determinante, en la mayor o menor intensidad de su culpabilidad, esto es, tales circunstancias coadyuvan a medir el grado de reproche que cabe formular al autor del delito, su naturaleza subjetiva es preminente y se expresa en lo fútil, altruista o egoísta del móvil o finalidad, así citando a Cornejo (1936) establece: “Para la aplicación de las penas lo que debe evaluarse es el motivo psicológico en cuanto se relaciona con los fines sociales, y es tanto más ilícito en cuanto más se opone a los sentimientos básicos de la piedad, de la solidaridad, de la cultura, en suma” (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.7. La unidad o pluralidad de agentes

La pluralidad de agentes indica un mayor grado de peligrosidad y de inseguridad para la víctima. La concurrencia de agentes expresa necesariamente un acuerdo de voluntades que se integran para lo ilícito, siendo que, al respecto advierte García P. (2012), que lo importante para la oportunidad de esta agravante es que no se le haya considerado ya en la formulación del tipo penal (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.8. La edad, educación, costumbres, situación económica y medio social

Se trata de circunstancias vinculadas a la capacidad penal del agente y a su mayor o menor posibilidad para internalizar el mandato normativo, así como para motivarse en él y en sus exigencias sociales, operando sobre el grado de culpabilidad del agente (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.9. La reparación espontánea que hubiera hecho del daño

Esta circunstancia toma en cuenta la conducta posterior al delito que exteriorizó el

agente, consistente en que el delincuente repare en lo posible el daño ocasionado por su accionar ilícito, revela una actitud positiva que debe valorarse favorablemente con un efecto atenuante, así García ,P (2012) señala que “Con la reparación del daño, el autor adelanta una parte de los aspectos que le correspondería cumplir con la pena, afectando así la cuantificación de la pena concreta”, también, Peña señala: “que la reparación debe ser espontánea, es decir, voluntaria y, naturalmente, antes de la respectiva sentencia. Se entiende que la reparación debe partir del autor, y no de terceros” (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto

Esta circunstancia valora un acto de arrepentimiento posterior al delito, que expresa la voluntad del agente de hacerse responsable por el ilícito cometido y de asumir plenamente las consecuencias jurídicas que de ello derivan, lo que resulta en favor del agente, pues, con ella, se rechaza la frecuente conducta posterior al hecho punible y que se suele orientar hacia el aseguramiento y la impunidad del infractor; sin embargo, como señala Peña, “Hay diferencia notable en el delincuente que huye después de consumado el delito, del que se presenta voluntariamente a las autoridades para confesar. Este último muestra arrepentimiento, o por lo menos, asume su responsabilidad, lógicamente la atenuante es procedente; de suerte que no puede favorecerse al delincuente que huye, y regresa después acompañado de su abogado” (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

Asimismo, dicho criterio se diferencia del criterio del artículo 136° del Código de Procedimientos Penales (confesión sincera), puesto que equivale esta sólo equivale a una auto denuncia, teniendo menor eficacia procesal y probatoria (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

2.2.1.10.11.2.2.4.11. Los demás antecedentes, condiciones personales y circunstancias que conduzcan al conocimiento de la personalidad del infractor

Bajo este criterio, el art. 46 considera una opción innominada y abierta para interpretar y apreciar otras circunstancias, distintas de las expresamente identificadas por cada inciso precedente de dicho artículo, sin embargo, para evitar contradecir el principio de legalidad y riesgos de arbitrariedad, la circunstancia que invoca debe ser

equivalente con las reguladas legalmente (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). Como nota fundamental, cabe recalcar que la doctrina ha desarrollado la institución de “La compensación entre circunstancias”, las que se da frente a la existencia simultánea de circunstancias agravantes y atenuantes, este criterio posibilita la graduación cuantitativa de la pena a manera de compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción, pudiendo, de esta manera, ubicarse la penalidad concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la pena básica, así, citando a Gonzales (1988): “(...) dicha compensación deberá ajustarse a un correcto uso del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la sentencia. [...] En tales supuestos, el Tribunal está capacitado para recorrer toda la extensión de la pena, imponiéndola en el grado que estime oportuno según la compensación racional de unas y otras” (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001).

El art. I del Código Penal (Legalidad de la pena), el que prescribe: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella” (Jurista Editores, 2015).

En segundo lugar, el art. IV del Código Penal (Principio de lesividad), el que prescribe: “La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley” (Jurista Editores, 2015).

Asimismo, el art. V del Código Penal (Garantía jurisdiccional) que establece: “Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley” (Jurista Editores, 2015).

Así también, lo dispuesto por el art. VII del Código Penal (Responsabilidad penal), que establece: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”; y,

El art. VIII del Código penal (Principio de proporcionalidad) que establece: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede

ser ordenada por intereses públicos predominantes”.

El art. 45 del Código Penal, que establece: “El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta: 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 2. Su cultura y sus costumbres; y 3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen” (Jurista Editores, 2015).

Finalmente, el art. 46 del acotado que establece: “Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, considerando especialmente: 1. La naturaleza de la acción; 2. Los medios empleados; 3. La importancia de los deberes infringidos; 4. La extensión del daño o peligro causados; 5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 6. Los móviles y fines; 7. La unidad o pluralidad de los agentes; 8. La edad, educación, situación económica y medio social; 9. La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto; 11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; 12. La habitualidad del agente al delito; 13. La reincidencia” (Jurista Editores, 2015).

Al respecto, también se considera el art. 136 del Código de Procedimientos Penales, que establece: “(...) La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal,...” (Jurista Editores, 2015).

2.2.1.10.11.2.2.5. Determinación de la reparación civil

El daño, como define Gálvez (citado por García, 2012) es definido como la lesión a un interés patrimonial o extra patrimonial que recae sobre determinados bienes, derechos o expectativas de la víctima, no limitándose al menoscabo de carácter patrimonial, sino que incluye aquellas afectaciones que tienen una naturaleza no patrimonial, así como los efectos que produzca el delito en la víctima, entendido desde un concepto diferente del daño personal de naturaleza civil, sino a los efectos de los problemas de integración que causa el delito. La teoría revisada, sugiere que

los criterios que debe tener una adecuada determinación de la reparación civil, debe tener:

2.2.1.10.11.2.2.5.1. La proporcionalidad de la afectación al bien vulnerado

La Corte Suprema ha afirmado que la reparación civil derivada del delito debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se afectan, por lo que su monto, debe guardar relación con el bien jurídico abstractamente considerado, en una primera valoración, y en una segunda, con la afectación concreta sobre dicho bien jurídico (Perú. Corte Suprema, R.N. 948-2005 Junín).

2.2.1.10.11.2.2.5.2. La proporcionalidad con el daño causado

La determinación del monto de la reparación civil debe corresponderse al daño producido, así, si el delito ha significado la pérdida de un bien, entonces la reparación civil deberá apuntar a la restitución del bien y, de no ser esto posible, al pago de su valor (Perú. Corte Suprema, exp. 2008-1252-15-1601-JR-PE-1).

En el caso de otro tipo de daños de carácter patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o no patrimonial (daño moral o daño a la persona), la reparación civil se traducirá en una indemnización que se corresponda con la entidad de los daños y perjuicios provocados (Perú. Corte Suprema, R.N. 948-2005 Junín).

2.2.1.10.11.2.2.5.3. Proporcionalidad con la situación económica del sentenciado

Respecto de este criterio, el Juez , al fijar la indemnización por daños podrá considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuera equitativo, siempre que el daño no sea imputable a título de dolo, pues se trata, sin lugar a dudas, por un lado, de una desviación del principio de la reparación plena pues la entidad pecuniaria del daño sufrido por la víctima, puede ceder ante la incapacidad patrimonial del deudor para afrontar ese valor, por otro lado, implica, igualmente, un apartamiento del principio de que la responsabilidad civil por los daños causados no varía con arreglo a la culpabilidad del autor (Nuñez, 1981).

Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que: “...para la cuantificación de la reparación civil se tendrá en cuenta la gravedad del daño ocasionado así como las

posibilidades económicas del demandado (...)" (Perú. Corte Superior, exp. 2008-1252 - Lambayeque).

En esa misma línea, la Corte Suprema ha establecido que: "En cuanto al monto de la reparación civil,...la misma se encuentra prudencialmente graduada, tomando en cuenta además las posibilidades económicas de la procesada, quien es ama de casa,..." (Perú, Corte Suprema, R. N. N° 007 – 2004 – Cono Norte).

2.2.1.10.11.2.5.4. Proporcionalidad con las actitudes del autor y de la víctima realizadas en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible

Esto significa apreciar a mérito de lo expuesto y actuado en el proceso las actitudes o actos que hubieren expresado los protagonistas en la instancia de ocurrencia del hecho punible, los cuales serán diferentes dependiendo de la figura dolosa o culposa.

En los casos dolosos, evidentemente que habrá una ventaja, prácticamente absoluta del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, quien en forma premeditada sorprende a su víctima, de modo que la participación de éste último, es a merced del primero. En cambio, en el caso de los delitos culposos, es probable la participación de la víctima en los hechos típicos, es el caso de un accidente de tránsito por ejemplo, donde la víctima sin tomar las precauciones contribuye a la realización del hecho punible.

Estas cuestiones son motivo de evaluación a efectos de fijar la pena y hasta la misma reparación civil.

Para citar un ejemplo en el caso de las figuras culposas (en accidentes de tránsito) se expone: (...) si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el Juez , según las circunstancias, conforme lo previsto por el art. 1973 del Código Civil, así como por el Decreto Supremo N° 033-2001-MTC - Reglamento Nacional de Tránsito, que en su art. 276, establece que el hecho de que el peatón haya incurrido en graves violaciones a las normas de tránsito (como cruzar la calzada en lugar prohibido; pasar por delante de un vehículo detenido, parado o estacionado habiendo tránsito libre en la vía respectiva; transitar bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes; cruzar intempestivamente o

temerariamente la calzada; bajar o ingresar repentinamente a la calzada para intentar detener un vehículo; o subir o bajar de un vehículo en movimiento y por el lado izquierdo), no sólo sirve para que al acusado se le reduzca su pena, sino también la reparación civil.

2.2.1.10.11.2.2.6. Aplicación del principio de motivación

El Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso (Perú. Tribunal Constitucional, exp.8125/2005/PHC/TC).

En el ordenamiento peruano el artículo 139 inc. 5 de la Constitución señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional “la motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias (...) con mención expresa de la ley y los fundamentos de hecho en que se sustentan” (Jurista editores, 2015).

Asimismo, según la teoría revisada, se recomienda que una adecuada motivación de la sentencia penal debe contener los siguientes criterios:

A. Orden

El orden racional supone: a) La presentación del problema, b) el análisis del mismo, y c) el arribo a una conclusión o decisión adecuada (León, 2008).

B. Fortaleza

Consiste en que la decisiones debe estar basadas de acuerdo a los cánones constitucionales y de la teoría estándar de la argumentación jurídica, en buenas razones que las fundamenten jurídicamente (León, 2008).

Consiste en la fuerza que tienen razones oportunas y suficientes para denotar con sus fundamentos la razón adoptada, siendo por el contrario una resoluciones insuficientes por exceso cuando las razones sobran (son inoportunas) o son redundante, y por falta razones, aquí el problema también se puede presentar cuando faltan razones (León, 2008).

C. Razonabilidad

Requiere que tanto la justificación de la sentencia, los fundamentos de derecho y los fundamentos de hecho de la decisión sean fruto de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico; es decir, que en lo jurídico, que la norma seleccionada sea vigente, válida y adecuada a las circunstancias del caso; que tal norma haya sido correctamente aplicada y que la interpretación que se le haya otorgado de acuerdo a los criterios jurídicamente aceptados; y, que la motivación respete los derechos fundamentales; finalmente, que la conexión entre los hechos y las normas sea adecuada y sirva para justificar la decisión (Colomer, 2003).

Al respecto, señala Colomer (2003) la razonabilidad tiene que ver con la aceptabilidad de la decisión por el común de las personas y dogmática jurídica.

Son las expresiones lógicamente sustanciales vinculadas al problema concreto, estas pueden darse en el plano normativo, las que encuentran base en la interpretación estándar del derecho positivo vigente, en las razones asentadas en la doctrina legal y en las adoptadas en los criterios que la jurisprudencia vinculante o no va desarrollando caso por caso; y, en el plano fáctico, consiste en las razones que permite el razonamiento que valora los medios probatorios con el establecimiento de cada hecho relevante en cada caso concreto (León, 2008).

D. Coherencia

Es un presupuesto de la motivación que va de la mano y en conexión inescindible con la racionalidad, es decir, se refiere a la necesaria coherencia en sentido interno que debe existir en los fundamentos de la parte considerativa del fallo, y en un sentido externo, la coherencia debe entenderse como la logicidad entre motivación y fallo, y entre la motivación y otras resoluciones ajenas a la propia sentencia (Colomer, 2003).

Es la necesidad lógica que tiene toda argumentación debe guardar consistencia entre los diversos argumentos empleados, de tal manera que unos no contradigan a otros (León, 2008).

Asimismo, Colomer (2003) señala que:

La coherencia interna se traduce en la exigibilidad de que la justificación de la

sentencia tenga coherencia argumentativa. Por lo tanto, se prohíbe la existencia de: A. contradicciones entre los hechos probados dentro de una misma motivación de una sentencia; B. contradicciones entre los fundamentos jurídicos de una sentencia, es decir, que no haya incompatibilidad entre los razonamientos jurídicos de una resolución que impidan a las partes determinar las razones que fundamentan la decisión; C. contradicciones internas entre los hechos probados y los fundamentos jurídicos de una sentencia.

En relación a la coherencia externa de la motivación la sentencia, esta exige que en el fallo:

A. no exista falta de justificación de un elemento del fallo adoptado, B. que la justificación tenga en cuenta únicamente todos los fallos del caso y no incluya alguno ajeno al mismo, C. que la motivación esté conectada plenamente con el fallo, con lo cual se prohíbe que haya una motivación ajena al contenido del fallo, D. que las conclusiones de la motivación no sean opuestas a los puntos de decisión de la sentencia (Colomer, 2003).

E. Motivación expresa

Consiste en que cuando se emite una sentencia, el Juzgador debe hacer expresas las razones que respaldan el fallo al que se ha llegado, siendo este requisito indispensable para poder apelar, en el sentido de tener las razones del sentido del fallo y poder controlar las decisiones del Juez (Colomer, 2003).

F. Motivación clara

Consiste en que cuando se emite una sentencia, el Juzgador no solo debe expresas todas las razones que respaldan el fallo al que se ha llegado, sino que, además, estas razones deben ser claras, en el sentido de poder entender el sentido del fallo, así las partes puedan conozcan que es lo que se va a impugnar pues de otra forma el derecho a la defensa (Colomer, 2003).

G. La motivación lógica

Consiste en que la motivación desarrollada no debe contradecirse entre sí, y con la

realidad conocida, debiendo respetarse el principio de “no contradicción” por el cual se encuentra prohibida la afirmación y negación, a la vez, de un hecho, de un fundamento jurídico, etc.; Igualmente, se debe respetar el principio de “tercio excluido” que señala que “entre dos cosas contradictorias no cabe término medio, es decir, si reconocemos que una proposición es verdadera, la negación de dicha proposición es falsa, en ese sentido, no caben términos medios (Colomer, 2003).

Para el Tribunal Constitucional, la motivación debe ser:

Clara, lógica y jurídica, así, ha señalado que este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho (Perú. Tribunal Constitucional, exp.0791/2002/HC/TC).

En relación al mismo tema el Tribunal Constitucional también ha señalado que la motivación debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de esta medida cautelar) (Perú: Tribunal Constitucional, exp.0791/2002/HC/TC).

Así también, el Tribunal Constitucional hace referencia a las máximas de la experiencia y los razonamientos lógicos como exigencias de la motivación, señalando que:

Lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito) y el enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos (Perú. Tribunal Constitucional, exp.04228/2005/HC/TC).

2.2.1.10.11.3. De la parte resolutive de la sentencia de primera instancia

Esta parte contiene el pronunciamiento sobre el objeto del proceso y sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa (principio de exhaustividad de la sentencia), así como de los incidentes que quedaron pendientes en el curso del juicio oral. La parte del fallo debe ser congruente con la parte considerativa bajo sanción de nulidad (San Martín, 2006).

2.2.1.10.11.3.1. Aplicación del principio de correlación

2.2.1.10.11.3.1.1. Resuelve sobre la calificación jurídica propuesta en la acusación

Por el principio de correlación, el Juzgador está obligado a resolver sobre la calificación jurídica acusada, ello a efectos de garantizar también el principio acusatorio al respetar las competencias del Ministerio Público, y el derecho de defensa del procesado, no pudiendo en su decisión decidir sobre otro delito diferente al acusado, salvo que previamente se haya garantizado el derecho de defensa del procesado, bajo sanción de nulidad de la sentencia (San Martín, 2006).

Para Cubas (2003) lo importante, cuando la sentencia es condenatoria, es que debe guardar correlación con la acusación formulada, pues ambos actos procesales deben referirse al mismo hecho objeto materia o materia de la relación jurídica procesal. Agrega, esta vinculación, es el efecto más importante de la vigencia del principio acusatorio.

2.2.1.10.11.3.1.2. Resuelve en correlación con la parte considerativa

La segunda de las dimensiones del principio de correlación especifica no solo que el Juzgador resuelva sobre la acusación y los hechos propuestos por el fiscal, sino que, la correlación de la decisión debe serlo también con la parte considerativa, a efectos de garantizar la correlación interna de la decisión (San Martín, 2006).

2.2.1.10.11.3.1.3. Resuelve sobre la pretensión punitiva

La pretensión punitiva constituye otro elemento vinculante para al Juzgador, no pudiendo resolver aplicando una pena por encima de la pedida por el Ministerio

Público, por ser el titular de la acción penal, en virtud del principio acusatorio, sin embargo, el Juzgador su puede fijar una pena por debajo de la pedida por el Ministerio Público, y solo puede excederse de lo pedido, cuando la petición punitiva es manifiestamente irrisoria habiéndose aplicado una determinación por debajo del mínimo legal (San Martin, 2006).

2.2.1.10.11.3.1.4. Resolución sobre la pretensión civil

Si bien la pretensión civil no se encuentra avalada por el principio de correlación, ni por el principio acusatorio, dado que la acción civil es una acción acumulada a la acción penal, dada su naturaleza individual, la resolución sobre este punto presupone el respeto del principio de congruencia civil, no pudiendo excederse del monto pedido por el fiscal o el actor civil (ultra petita), pudiendo resolver sobre un monto menor al fijado (Barreto, 2006).

2.2.1.10.11.3.2. Descripción de la decisión.

2.2.1.10.11.3.2.1. Legalidad de la pena

Este aspecto implica que la decisión adoptada, tanto la pena, o alternativas a estas, así como las reglas de conducta y demás consecuencias jurídicas deben estar tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse la pena de una forma diferente a la legal (San Martin, 2006).

Este aspecto se justifica en el art. V del Código Penal que establece que: “el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley” (Jurista Editores, 2015).

2.2.1.10.11.3.2.2. Individualización de la decisión

Este aspecto implica que el Juzgador ha de presentar las consecuencias de manera individualizada a su autor, tanto la pena principal, las consecuencias accesorias, así como la reparación civil, indicando quien es el obligado a cumplirla, y en caso de múltiples procesados, individualizar su cumplimiento y su monto (Montero, 2001).

2.2.1.10.11.3.2.3. Exhaustividad de la decisión

Según San Martín (2006) este criterio implica que la pena debe estar perfectamente delimitada, debe indicarse la fecha en que debe iniciarse y el día de su vencimiento, así como su modalidad, si es del caso, si se trata de la imposición de una pena privativa de libertad, indicarse el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla.

2.2.1.10.11.3.2.4. Claridad de la decisión

Significa que la decisión debe ser entendible, a efectos de que pueda ser ejecutada en sus propios términos, ya su ejecución debe ser en sus propios términos (Montero, 2001).

La formalidad de la sentencia como resolución judicial, se encuentra fijadas en el artículo 122 del Código Procesal Civil, el que prescribe:

Contenido y suscripción de las resoluciones.- Las resoluciones contienen: 1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden; 2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden; 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, (...); 7. La suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo (...). La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutive (...) (Ramos, 2014).

Asimismo, de manera específica, el art. 285 del Código de Procedimientos Penales establece:

La sentencia condenatoria deberá contener la designación precisa del delincuente, la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, las circunstancias del delito, y la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que ésta comienza a

contarse, el día de su vencimiento, el lugar donde debe cumplirse y las penas accesorias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución de la pena; el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla, citando los artículos del Código Penal que hayan sido aplicados (Gómez G, 2010)

Ahora bien, el artículo 394 del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 establece de manera más certera los requisitos de la sentencia:

1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado; 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo; 5. La parte resolutive, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito; 6. La firma del Juez o Jueces (Gómez, G., 2010).

Así también, el artículo 399 del acotado establece respecto de la sentencia condenatoria:

1. La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso en el país. 2. En las

penas o medidas de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, descontando los períodos de detención o prisión preventiva cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa. 3. En tanto haya sido materia de debate, se unificarán las condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario se revocará el beneficio penitenciario concedido al condenado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en el que debe cumplir las penas sucesivamente. 4. La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil, ordenando

-cuando corresponda- la restitución del bien o su valor y el monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos. 5. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el Juez podrá disponer la prisión preventiva cuando bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia (Gómez, G., 2010).

2.2.1.10.12. Parámetros de la sentencia de segunda instancia

2.2.1.10.12.1. De la parte expositiva

2.2.1.10.12.1.1. Encabezamiento

Esta parte, al igual que en la sentencia de primera instancia, dado que presupone la parte introductoria de la resolución, se sugiere que debe constar:

a) Lugar y fecha del fallo;

b) el número de orden de la resolución;

c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de ley del acusado, vale decir, sus nombres y apellidos completos, apodo, sobrenombre y sus datos personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.;

d) la mención del órgano jurisdiccional que expide la sentencia;

e) el nombre del magistrado ponente o Director de Debates y de los demás jueces (Talavera, 2011).

2.2.1.10.12.1.2. Objeto de la apelación

Son los presupuestos sobre los cuales el Juzgador resolverá, importa los extremos impugnatorios, el fundamento de la apelación, la pretensión impugnatoria y los agravios (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.2.1. Extremos impugnatorios

El extremo impugnatorio es una de las aristas de la sentencia de primera instancia que son objeto de impugnación (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.2.2. Fundamentos de la apelación

Son las razones de hecho y de derecho que tiene en consideración el impugnante que sustentan el cuestionamiento de los extremos impugnatorios (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.2.3. Pretensión impugnatoria

La pretensión impugnatoria es el pedido de las consecuencias jurídicas que se buscan alcanzar con la apelación, en materia penal, esta puede ser la absolución, la condena, una condena mínima, un monto mayor de la reparación civil, etc (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.2.4. Agravios

Son la manifestación concreta de los motivos de inconformidad, es decir que son los razonamientos que relacionados con los hechos debatidos demuestran una violación legal al procedimiento o bien una inexacta interpretación de la ley o de los propios hechos materia de la litis (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.3. Absolución de la apelación

La Absolución de la apelación es una manifestación del principio de contradicción, que si bien es cierto, el recurso de apelación es una relación entre el órgano jurisdiccional que expidió la sentencia agraviosa, y el apelante, sin embargo, dado que la decisión de segunda instancia afecta los derechos de otras partes del proceso, mediante el principio de contradicción se faculta a las partes el emitir una opinión respecto de la pretensión impugnatoria del apelante (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.1.4. Problemas jurídicos

Es la delimitación de las cuestiones a tratar en la parte considerativa y en la decisión de la sentencia de segunda instancia, las que resultan de la pretensión impugnatoria, los fundamentos de la apelación respecto de los extremos planteados, y la sentencia de primera instancia, puesto que no todas los fundamentos ni pretensiones de la apelación son atendibles, solo las que resultan relevantes (Vescovi, 1988).

Asimismo, los problemas jurídicos delimitan los puntos de la sentencia de primera instancia que serán objeto de evaluación, tanto fáctica como jurídica (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.2. De la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia

2.2.1.10.12.2.1. Valoración probatoria

Respecto de esta parte, se evalúa la valoración probatoria conforme a los mismos criterios de la valoración probatoria de la sentencia de primera instancia, a los que me remito.

2.2.1.10.12.2.2. Fundamentos jurídicos

Respecto de esta parte, se evalúa el juicio jurídico conforme a los mismos criterios del juicio jurídico de la sentencia de primera instancia, a los que me remito.

2.2.1.10.12.2.3. Aplicación del principio de motivación

Respecto de esta parte, se aplica la motivación de la decisión conforme a los mismos criterios de motivación de la sentencia de primera instancia, a los que me remito.

2.2.1.10.12.3. De la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia

2.2.1.10.12.3.1. Decisión sobre la apelación

2.2.1.10.12.3.1.1. Resolución sobre el objeto de la apelación

Implica que la decisión del Juzgador de segunda instancia debe guardar correlación con los fundamentos de la apelación, los extremos impugnados y la pretensión de la

apelación, es lo que la doctrina denomina como el principio de correlación externa de la decisión de segunda instancia (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.3.1.2. Prohibición de la reforma peyorativa

Es un principio de la impugnación penal, la que supone que el Juzgador de segunda instancia, a pesar de que puede evaluar la decisión del Juez de primera instancia y reformarla conforme a la pretensión impugnatoria, no puede reformar la decisión del Juzgador por dejado de lo pretendido por el apelante, en todo caso, puede confirmar la sentencia de primera instancia, pero no fallar en peor del impugnante, ello cuando solo es uno el impugnante, sin embargo, cuando son varios los impugnantes, si es posible aplicar una reforma en peor del impugnante (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.3.1.3. Resolución correlativa con la parte considerativa

Esta parte expresa el principio de correlación interna de la sentencia de segunda instancia, por la cual, la decisión de segunda instancia debe guardar correlación con la parte considerativa (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.3.1.4. Resolución sobre los problemas jurídicos

Respecto de esta parte, es una manifestación del principio de instancia de la apelación, es decir que, cuando el expediente es elevado a la segunda instancia, este no puede hacer una evaluación de toda la sentencia de primera instancia, sino, solamente por los problemas jurídicos surgidos del objeto de la impugnación, limitando su pronunciamiento sobre estos problemas jurídicos, sin embargo, el Juzgador puede advertir errores de forma causantes de nulidad, y declarar la nulidad del fallo de primera instancia (Vescovi, 1988).

2.2.1.10.12.3.2. Descripción de la decisión

Respecto de esta parte, la presentación de la sentencia se hace con los mismos criterios que la sentencia de primera instancia, a los que me remito.

El fundamento normativo de la sentencia de segunda instancia se encuentra: en el

Artículo 425 del Nuevo Código Procesal Penal, que expresa:

Sentencia de Segunda Instancia.-1. Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para dictar sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos. 2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas periciales, documental, pre constituido y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de intermediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. 3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409, puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que hubiere lugar; b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. 4. La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia. 5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su admisión. 6. Leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el plazo para intentar recurrirla, el expediente será remitido al Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en este Código (Gómez G., 2010).

2.2.1.11. Medios impugnatorios en el proceso penal

2.2.1.11.1. Concepto

La doctrina alemana utiliza en un sentido más amplio el concepto de remedios jurídicos como un instrumento procesal que la ley pone a disposición de las partes y

también de intervinientes accesos encaminado a provocar diversas vías que el ordenamiento jurídico reconoce a las partes para controlar la actuación de los órganos jurisdiccionales (San Martín, 2015).

Neyra (2010) define que los medios impugnatorios como los mecanismos legales que permiten a las partes solicitar una modificación de la resolución judicial, cuando esta ocasione un gravamen o perjuicio al interés del impugnante.

En efecto, debido a que en el proceso penal tenemos en lucha intereses contrapuestos, el amparar uno u otro interés va a ocasionar la disconformidad y posible agravio- de aquél que no se vio favorecido con la resolución emitida. En ese sentido, el sujeto perjudicado va a buscar la forma de oponerse a que dicha resolución adquiera la calidad de Cosa Juzgada y en consecuencia evitar el efecto de inmutabilidad de ésta. Dicha oposición se materializa a través de los recursos (dentro de sus distintas clasificaciones), como un instrumento jurídico, que busca cambiar una decisión judicial por una nueva. En cumplimiento con el Principio de Legalidad, el cual exige, resoluciones acordes a la ley.

2.2.1.11.2. Fundamentos normativos del derecho a impugnar

Se encuentra estipulado en el artículo 404° del Nuevo Código Procesal Penal:

- Las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley. Los recursos se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida.
- El derecho de impugnación corresponde solo a quien la Ley se lo confiere expresamente. Si la Ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos.
- El defensor podrá recurrir en favor de su patrocinado, quien posteriormente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento requiere autorización expresa del abogado.
- Los sujetos procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse, antes de que el expediente se eleve al Juez que corresponda, al recurso Interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades de interposición (Sánchez, 2013).

2.2.1.11.3. Finalidad de los medios impugnatorios

La finalidad de impugnar es corregir vicios tanto en la aplicación del derecho como en la apreciación de los hechos padecidos por la resolución final y demás analizar el tramite seguido durante el desarrollo de la causa en este último supuesto se analiza si los actos del procedimientos se han producido con sujeción a lo previsto por la ley en lo que atañe a los sujetos, al objeto y a las formas. En suma su finalidad es garantizar en general que todas las resoluciones judiciales se ajusten al derecho y en particular que la Sentencia sea respetuosa con la exigencias de la garantía de la tutela jurisdiccional (San Martín, 2015).

2.2.1.11.4. Los recursos impugnatorios en el proceso penal peruano

2.2.1.11.4.1. Los medios impugnatorios según el Código de Procedimientos Penales

2.2.1.11.4.1.1. El recurso de apelación

El recurso de apelación que la ley procesal penal concede al sujeto procesal con la finalidad de que el superior jerárquico pueda reexaminar la resolución impugnada, que luego de ello procederá a confirmar (si está de acuerdo), o revocar el fallo (modificar), o declarar la nulidad la resolución por algún vicio procesal. Asimismo, el mismo autor (citando a San Martín Castro) señala que este recurso, cuando está en las sentencias, es el mecanismo procesal para conseguir el doble grado de jurisdicción (es el que configura la segunda instancia), a que hace referencia de modo amplio el artículo 139, numeral 6, de la Constitución. Y desde una perspectiva más estricta los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el X del título preliminar del Código Procesal Civil (San Martín, 2015).

El recurso de apelación constituye un medio impugnatorio ordinario y general que se interpone a fin de revocar autos o sentencias siempre y cuando no hayan adquirido la calidad de cosa juzgada. Con un recurso de apelación se garantiza la idea de un debido proceso, por eso puede decidirse con corrección, que el recurso de ajusta a las garantías mínimas del juicio justo (Peña, 2013).

2.2.1.11.4.1.2. El recurso de nulidad

Es un recurso impugnativo que se dirige a cuestionar las cuestiones de forma y de fondo como errores en que puede haber incurrido el juzgador de primera instancia. No obstante ello el legislador considero que dichas causales ameritaban la admisión del recurso de Nulidad. Del Valle Randich, estima que la ley habla del recurso de nulidad hay que considerar que existe un medio de impugnación que se llama recurso de nulidad que sigue los lineamientos de la legislación para los procesos civiles (Peña, 2013).

El recurso de nulidad es un remedio procesal distinto del recurso impugnatorio o de la acción de impugnación, que tiene por objeto la revisión de la actividad procesal cuando presenta irregularidades estructurales determinantes de su infancia por eso es que se sostiene que cumple la misma finalidad esencial que un medio de impugnación (San Martín, 2015).

2.2.1.11.4.2. Los medios impugnatorios según el Nuevo Código Procesal Penal

2.2.1.11.4.2.1. El recurso de reposición

La reposición no produce efecto devolutivo pero abre un procedimiento incluso con alegaciones que da lugar a una nueva resolución sobre el mismo objeto (San Martín, 2015).

El recurso de reposición constituye un remedio procesal que se dirige contra los derechos judiciales de mero trámite, es de decir contra meras articulaciones o el impulso procesal, el nombramiento de un perito el señalamiento de fecha para la realización de una determinada diligencia, este recurso se interpone ante el mismo juez que dicto el decreto y el plazo para su interposición es de tres días, contando desde la notificación de la resolución (Peña, 2013).

Es el recurso cuya base legislativa se encuentra en el artículo 415 del CPP. Se encuentra dirigido contra los decretos, cuyo propósito es que sea el mismo juez que los dicto quien los revoque. Se entiende por decreto, conforme a lo previsto por el artículo 123° del CPP, aquella resolución judicial que tiene por objeto el impulso del desarrollo del

proceso, de allí que se expidan sin trámite alguno y no se exija que contengan exposición de los hechos debatidos, de la prueba actuada, determinación de la ley aplicable y de la decisión (Reyna, 2015, p.542)

2.2.1.11.4.2.2. El recurso de apelación

La apelación constituye uno de los recursos impugnatorios de mayor frecuencia en el proceso penal, siendo su finalidad la de revisar lo resuelto por la instancia judicial inferior y de esa manera posibilitar un mayor grado de acierto y justicia de la resolución (Sánchez, 2009).

La apelación puede dirigirse contra resoluciones interlocutorias que realizan la dirección del proceso y contra la sentencia final de una instancia del proceso, es un mecanismo procesal para conseguir el doble grado de la jurisdicción que configura la segunda instancia a que hace referencia el artículo 139 de la constitución (Cubas,2015).

Finalmente, para San Martín (citado por Reyna, 2015, p. 543) la existencia de este tipo de recurso se justifica en razones de estricta economía procesal. Es lógico, ya que existen supuestos en los que el recurso a la doble instancia resulta absolutamente innecesario, por lo que se permite al propio órgano jurisdiccional corregir el decreto expedido.

2.2.1.11.4.2.3. El recurso de casación

La casación en materia penal constituye una de las instituciones procesales de mayor arraigo en la doctrina, que permite la formación de la jurisprudencia suprema, también ha sido definida como el medio de impugnación extraordinario con efectos devolutivos y a veces suspensivo y extensivo, mediante el cual se somete al tribunal Supremo el conocimiento a través de unos motivos tasados de determinadas sentencias y Autos definitivos dictados por órganos colegiados con el fin de lograr la anulación de la resolución recurrida, todo ello con fundamento en la existencia de vicios en aplicación e interpretación de las normas de Derecho material o procesal (Sanchez,2009).

La casación es la acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento.

También Leone, refiere que la casación es un medio de impugnación por el cual una de las partes por motivos específicamente previstos pide a la Suprema Corte de casación la anulación de una decisión que le es desfavorable (Cubas, 2015).

Conforme a lo dispuesto por el artículo 427° del CPP, el recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores (Reyna, 2015, p.552)

2.2.1.11.4.2.4. El recurso de queja

El recurso de queja constituye un recurso extraordinario que busca alcanzar la admisibilidad de una impugnación denegada por la instancia anterior, el cual busca que el juez superior pueda controlar si la resolución de inadmisibilidad decidida por el inferior se ha ajustado o no a derecho (Sánchez, 2009).

La queja es un medio de impugnación contra las resoluciones emitidas por los juzgados y Salas superiores que deniegan la apelación o la casación (Cubas, 2015).

San Martín (citado por Reyna, 2015, p. 560) menciona que el recurso de queja de derecho es un medio impugnatorio que busca lograr el control de la admisibilidad del recurso por parte de la Corte Suprema de Justicia, tras su denegatoria por el juez, en caso de denegatoria del recurso de apelación, o de la Sala Penal Superior, en caso de denegatoria del recurso de casación.

2.2.1.11.5. Formalidades para la presentación de los recursos

Siendo que la impugnación es un derecho inherente a las partes de un proceso judicial, de la cual hacen uso cuando se sienten perjudicados o afectados con las decisiones tomadas por los magistrados; al hablar de impugnabilidad subjetiva nos estamos refiriendo al derecho de todas aquellas personas que la ley procesal reconoce como facultades para interponer el recurso impugnatorio:

- a) El procesado, que puede ser el directamente afectado con la decisión judicial

materia de impugnación.

b) El Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal.

c) El agraviado constituido en parte civil (art. 58 del C. de P.P.)(Juristas Editores, 2015).

2.2.1.11.6. Medio impugnatorio utilizado en el proceso judicial en estudio (Expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01).

En el proceso judicial en estudio, el medio impugnatorio formulado fue el recurso de apelación, fue el imputado quien impugnó, por cuanto la sentencia de primera instancia se trata de una sentencia expedida en un Proceso Común por ende la sentencia fue emitida por órgano jurisdiccional denominado Juzgado Penal Colegiado. La pretensión formulada fue la absolución de los cargos formulados en la acusación fiscal.

Como quiera que se trata de un proceso común, en segunda instancia intervino la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Distrito Judicial de Lambayeque.

Al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado B El agraviado menciona que a esta hora aproximadamente tomó una carrera de Chiclayo como colectivo hacia La Pradera, porque esa era la ruta que este brindaba. Específicamente, en cuanto a la ruta que va desde Chiclayo a la Pradera, el señor dice que fue interceptado en la entrada que va desde la entrada de la ruta a la Pradera, es decir en toda la esquina de la fábrica Café Perú -carretera a Pimentel-, es ahí que dice que fue interceptado por un vehículo tipo modelo tico, pero en ningún momento hace referencia a un modelo exclusivo o precisa que se trataba de un Taxi La Cuzqueña. Además el señor en el Juicio Oral, dice que como fue interceptado intempestivamente por el sujeto que conducía el tico tipo matiz color plomo, inmediatamente miró para su derecha, porque según dijo, lo único que hacemos los que conducimos un vehículo en esos casos, es protegerse físicamente y materialmente con respecto a su vehículo, su reacción fue girar el timón hacia la derecha; a lo cual la defensa se pregunta en qué momento lo reconoció, porque aquí no hace referencia a que el señor haya bajado del vehículo, solo dice que lo reconoce que como lo interceptó lo quedó mirando. La defensa hace mención que por reglas de la lógica y la experiencia, cuando hay ese tipo de infracciones si se sigue al infractor para

llamarle la atención, pero en este caso el señor no lo siguió entonces en que momento como lo vio, lo pudo reconocer físicamente.

La versión del agraviado es incoherente, pues en Juicio Oral cuando se le dice que de lectura a su declaración, el hace referencia a que no puede hacerlo porque no sabe leer, entonces como es que el señor pudo leer para decir según el acta de intervención, que se trataba de un vehículo que decía Taxi La Cuzqueña, modelo Chevrolet. Sí el mismo hace referencia que la capota del vehículo estaba levantada, y las marcas de los vehículos están en la capota, cómo es que pudo verificar la marca del vehículo. (Exp.3110–2011–48–1706–JR–PE–01).

2.2.2. Desarrollo de instituciones jurídicas sustantivas, relacionadas con las sentencias en estudio

2.2.2.1. Identificación del delito sancionado en las sentencias en estudio

De acuerdo a la denuncia fiscal, los hechos evidenciados en el proceso en estudio, y las sentencias en revisión, el delito investigado fue: Robo agravado (Expediente N°3110–2011–48–1706–JR–PE–01).

2.2.2.2. Ubicación del delito en el Código Penal

El delito de Robo agravado se encuentra comprendido en el Código Penal, está regulada en el Libro Segundo. Parte Especial. Delitos, Título V: Delitos Contra el Patrimonio – Robo Agravado. (Jurista Editores, 2015).

2.2.2.3. Desarrollo de contenidos previos relacionados con el delito

2.2.2.3.1. El delito

2.2.2.3.1.1. Concepto

Antolisei citado por Villa, (2014) el delito es todo hecho al cual, el ordenamiento jurídico enlaza como consecuencia una pena. Para Mezger citado por Villa (2014) el delito es una acción típica antijurídica y culpable, con lo que se ingresa a un contexto lleno de definiciones modernas sobre, el delito.

Al respecto, Villavicencio (2006) indica, es una conducta típica, antijurídica y culpable.

Los niveles de análisis son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Estos “distintos elementos del delito están en una relación lógica necesaria. Solo una acción u omisión puede ser típica, solo una acción u omisión típica puede ser antijurídica y solo una acción u omisión típica puede ser culpable. El artículo 11 del código penal indica que “son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley”. Si bien esta sucinta descripción no expone taxativamente las características que se aceptan para la definición del delito, están implícitas. El Anteproyecto de la parte general del código penal 2004, en su artículo, 11 mantiene la misma fórmula. Ejemplo: el que con su arma de fuego dispara sobre otro y mata.

2.2.2.3.1.2. Clases de delito

De manera general podemos mencionar las siguientes clases de delito:

a. Delito doloso: acerca del delito doloso se puede mencionar que contiene básicamente una acción dirigida por el autor a la producción del resultado. Se requiere, por lo tanto, una coincidencia entre el aspecto objetivo y el subjetivo del hecho, es decir, lo ocurrido tiene que haber sido conocido y querido por el autor. (Bacigalupo, 1996, p. 82).

b. Delito culposo: este tipo de delito contiene una acción que no se dirige por el autor al resultado. Es decir, el hecho no ha sido conocido ni querido por el autor (Bacigalupo, 1996, P. 82). En concordancia con lo anterior encontramos que el delito es culposo cuando el resultado, aunque haya sido previsto; no ha sido querido por el agente pero sobreviene por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes, etc. (Machicado, 2009).

c. Delitos de resultado: puede mencionarse los siguientes: i. De lesión. Están integrados básicamente por la acción, la imputación objetiva y el resultado. Este último consiste, ante todo, en la lesión de un determinado objeto (Bacigalupo, 1999. p. 231). ii. De peligro. En estos tipos penales no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar (Bacigalupo, 1999. p. 231).

d. Delitos de actividad: En esta clase de delito (...) el tipo se agota en la realización de una acción que, si bien debe ser (idealmente) lesiva de un bien jurídico, no necesita producir resultado material o peligro alguno. La cuestión de la imputación objetiva de un resultado a la acción es, por consiguiente, totalmente ajena a estos tipos penales, dado que no vincula la acción con un resultado o con el peligro de su producción (Bacigalupo, 1999, p. 232).

e. Delitos comunes: Bacigalupo (1999) señala, por lo general, sólo se requiere para ser autor de un delito tener capacidad de acción (delitos comunes) (p.237).

f. Delitos especiales: sobre esta clase de delitos, Bacigalupo (1999) afirma que son delitos que solamente pueden ser cometidos por un número limitado de personas: aquellas que tengan las características especiales requeridas por la ley para ser autor. Se trata de delitos que importan la violación de una norma especial (p. 237)

2.2.2.3.1.3. La teoría del delito

2.2.2.3.1.3.1. Concepto

La teoría del delito, por su carácter abstracto, como toda teoría, persigue que se precie de tal una finalidad práctica consistente en facilitar la determinación precisa del universo de conductas que son cierta e inconfundiblemente contrarias al orden jurídico social, cuantificar la intensidad de contrariedad y aplicar con prudencia la contingencia sancionadora que el estado liberal y democrático de derecho, tribunales de justicia, considere político criminal (Villa,2014).

Esta teoría se encarga de definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada como un hecho punible. Esta es producto de una larga evolución de dogmática penal, esta teoría tiene su campo de estudio en la parte general del Derecho Penal (Villavicencio, 2013).

2.2.2.3.1.3.2. Elementos del delito

La teoría analítica del delito, caracterizada por estudiar separadamente los elementos que componen todo el delito, ubicándolos en niveles o fases cognitivas que

obedecen y siguen un orden lógico-sistemático. Se estructura como un método de análisis de distintos niveles, en el que cada nivel presupone al anterior. De esta manera, no se puede analizar si el agente es culpable o no si previamente no se ha establecido que su conducto es típico y antijurídico; no tiene sentido discutir si una persona es culpable de haber lesionado a otro cuando ha quedado establecido que actuó en legítima defensa. (Reátegui, 2014, p. 369)

2.2.2.3.1.3.2.1. La teoría de la tipicidad.

La tipicidad tiene dos aspectos: la imputación objetiva y subjetiva. Así determinar el tipo objetivo (imputación objetiva), supone identificar los aspectos de la imputación a la conducta y al resultado, sin embargo esto no basta, pues necesario analizar si se dieron las características exigidas en el aspecto subjetivo del tipo (imputación subjetiva) (Villavicencio, 2013).

La tipicidad es la característica que tiene una conducta por estar adecuada a un tipo. Es el resultado de la verificación de si la conducta y lo descrito en el tipo coinciden. El juicio de la tipicidad es el proceso de verificación de que la conducta se adecua o no al tipo; mientras que *típica* es la conducta que presenta la característica específica de tipicidad (Reátegui, 2014, p. 423)

2.2.2.3.1.3.2.1.1 Estructura de la tipicidad objetiva

Según Reátegui (2014) esta comprende las características del obrar externo del autor requeridas por el tipo.

1. Elementos referentes al autor

Generalmente el tipo de lo injusto describe al autor de una manera indeterminada, empleando una fórmula neutra, el anónimo “el que” (...) por ejemplo los denominados “delitos comunes” contenidos en el Código Penal, pues cualquiera los puede realizar.

Frente a estos delitos están los denominados *delitos especiales*, que establecen que la conducta prohibida solo puede ser realizada por ciertas personas que poseen presupuestos especiales. Estos delitos están limitados a portadores de determinados deberes especiales. Se distingue entre:

a) delitos especiales propios, son aquellos en los cuales la lesión del deber especial

fundamenta la punibilidad (por ejemplo, el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código penal, omisión del ejercicio de la acción penal previsto en el artículo 424 del Código penal, entre otros)

b) delitos especiales impropios, se presentan cuando la lesión del deber especial agrava la punibilidad (por ejemplo, aborto realizado por personal sanitario- art. 117 del CP-, lesiones graves a menores- art. 121 A de CP- violación de la intimidad cometido por funcionario- art. 155 del CP) (Reátegui, 2014, p. 424)

2. Elementos referente a la acción

Reátegui (2014) menciona que la afectación a los bienes jurídicos (principio de lesividad) se realizan mediante acciones u omisiones, consideradas como modalidades conductuales por excelencia, y el alcance y contenido de cada una dependerá de la posición que se adopte en relación con las principales teorías planteadas (...)

Las formas básicas del hecho punible son las siguientes:

- a) el delito de comisión se caracteriza porque describe la conducta prohibida.

- b) el delito de omisión implica el no haber realizado la conducta debida que hubiera evitado el resultado producido. Se debe distinguir entre la omisión propia (ejemplo: Omisión de auxilio o aviso a la autoridad- artículo 127 del CP) y la omisión impropia (ejemplo: los andinistas que abandonaron a un miembro del grupo que se ha accidentado en un nevado, muriendo por el frío- homicidio por omisión, artículos 13 y 106 del CP).

- c) el delito doloso se presenta cuando el agente realiza la conducta delictiva intencionalmente.

- d) el delito culposo, se da cuando el agente violando un deber de ciudadano produce un resultado (ejemplo el sujeto que maneja su vehículo en sentido contrario al señalado en la vía, tropellando a una persona a quien ocasiona lesiones art. 124 del CP).

Asimismo Reátegui (2014) menciona que en general la descripción de la conducta suele ser concisa. En determinados casos la descripción de la conducta es más exhaustiva, precisando el objeto de la acción, formas de ejecución, medios, etc. La conducta

prohibida puede ser estructurada de distintas maneras, por un lado la distinción entre delito de pura actividad y delitos de resultado y por otro lado la diferenciación entre delitos de lesión y peligro, los delitos de pura actividad son aquellos en los que la simple ejecución de la conducta específicamente determinada como tal es constitutiva de la realización del tipo, en los delitos de resultado la ley individualiza un determinado resultado. En cuanto a la distinción entre delito de lesión y de peligro, está en relación con el efecto sobre el bien jurídico protegido

- a) En el delito de lesión, se afecta el bien jurídico protegido.
- b) En el delito de peligro, es aquel en que se pone en riesgo el bien jurídico protegido, diferenciándose entre peligro concreto y abstracto, en el primero se requiere la comprobación por parte del juez en la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo, y en el segundo el legislador reprime la peligrosidad de la conducta en sí misma; es el caso del delito de conducción en estado de ebriedad.

3. Elementos descriptivos y elementos normativos

En principio, hay que señalar que no hay elementos puramente descriptivos o normativos, sino que predominan algunos de estos componentes.

- a) elementos descriptivos, son aquellos en lo que el sujeto puede conocer a través de sus sentidos, por ejemplo el elemento mujer presente en el delito de aborto sin consentimiento (Art. 116 del CP).
- b) elementos normativos son aquellos en los que se requiere una valoración y no son perceptibles solo mediante los sentidos (Reátegui, 2014).

Como menciona Bacigalupo citado por Reátegui, (2014) los elementos normativos de valoración jurídica como es el caso del término “apoderar” ilegítimamente está presente en los delitos contra el patrimonio, es de advertir que el conocimiento que se exija no es de una manera técnico- jurídica; sino, es suficiente una valoración paralela en la esfera del lego. También se tiene elementos normativos de valoración empírica cultural, en los cuales el autor debe hacer una valoración al término medio de la sociedad.

4. Relación de causalidad e imputación objetiva

Jescheck (citado por Reátegui, 2014) menciona que en la relación de causalidad

importa extraer una condición muy concreta, a saber, la acción humana, para comprobar si entre ella y el resultado existe un engarce que justifique la imputación de éste al autor como producto de su acción.

En este orden de ideas Zaffaroni (citado por Reátegui, 2014) establece que el planteo de la causalidad solo puede tener aptitud imputativa si se ha determinado en la actuación de la voluntad del autor, dentro del marco de una descripción típica. Incluso, es necesario conocer la causalidad física en general dado que sobre su previsión se montara la finalidad de la conducta voluntaria.

Siguiendo una secuencia estratificada de orden lógico Donna (citado por Reátegui, 2014) afirma que si no existe voluntariedad del sujeto, tampoco habría de sostener que exista conducta y, por ende, por más resultado o efecto que se hubiese producido ya que el curso lesivo no tiene como origen un comportamiento humano, es decir que jamás fue dominado durante su trayectoria, si quiera mínimamente, por el sujeto, dicho en otros términos, solo al curso casual que se pueda imputar a título de dolo o de culpa será relevantes a los efectos penales.

Por su parte Villavicencio (citado por Reátegui, 2014) menciona que no hay que sobrevalorar el papel de la causalidad, y sostiene que la relación de causalidad pertenece a la categoría del ser. En efecto “...un primer momento consiste en una comprobación, donde se verificará, desde un punto de vista natural, la relación de causalidad”. El desarrollo ulterior realizado a través de la denominada “imputación objetiva” como criterio normativo para afirmar la conducta típica, será considerada como categoría distinta ubicada dentro de la tipicidad. Así, para el juicio de causación, se tendrá en cuenta la teoría de la equivalencia, en cambio para el juicio de la imputación se tendrán en cuenta un conjunto de criterios normativos en los que se encuentran la causalidad adecuada, incremento del riesgo permitido y el de la esfera de la protección de la norma.

2.2.2.3.1.3.2.1.2. Tipicidad subjetiva - aspectos subjetivos

2.2.2.3.1.3.2.1.2.1. El dolo

El maestro Carrara (citado por Reátegui, 2014, p. 527) definía al dolo “... como la

intención más o menos perfecta de efectuar un acto que se sabe que es contrario a la ley. En tiempos más modernos Velásquez (citado por Reátegui, 2014) menciona que el dolo es definido comúnmente como el conocimiento y la voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo. Por tanto en el dolo están presentes dos elementos: el cognoscitivo (que se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para obrar con dolo) y el volitivo (referido a la voluntad del agente para desarrollar la conducta).

2. Elementos del dolo

a) el aspecto intelectual, el elemento cognoscitivo del dolo nos plantea que el agente debe haber tenido conocimiento de las circunstancias del tipo objetivo. Así, supone el conocimiento de los elementos descriptivos y normativos, los elementos de la autoría, la previsión del nexo causal y el resultado. (Reátegui, 2014, p. 529).

b) el aspecto volitivo, la parte intelectual comprende el conocimiento actual de todas las circunstancias objetivas del hecho del tipo penal. No es suficiente que el autor conociera potencialmente las circunstancias del hecho, es decir, que pudiera hacerlas aflorar en su conciencia. Mucho más, ha debido tener realmente la conciencia de ellas en el instante de su hecho, habérselas representado, habérselas percibido, haber pensado en ellas, siendo así, diferente la intención de la conciencia, según si se trata del fin, de los medios o de una circunstancia concomitante (Reátegui, 2014, pp. 532; 533).

3. Clases de dolo

La intensidad de la voluntad permite diferencias niveles en el dolo, conocidos como dolo directo de primer grado (se presenta cuando la realización del tipo es precisamente la que el autor persigue; ejemplo: el que fuerza con violencia a una mujer a realizar el acto sexual y lo logra); dolo indirecto de segundo grado o consecuencias necesarias (en realidad es una variante de la anterior y se presenta cuando el agente considera que el resultado que pretende esta acompañada de consecuencias necesarias e inevitables; es el caso de quienes colocan una bomba en el vehículo de un funcionario para matarlo, saben que al explotar el vehículo también morirá el chofer); y el dolo eventual (el cual se da cuando el agente se representa la

realización del tipo como posible; es el caso del sujeto que va a alta velocidad en una zona escolar, prevé como posible que pueda atropellar a un estudiante) (Reátegui, 2014, p. 533).

2.2.2.3.1.3.2.1.2.2. La culpa

La culpa tiene lugar en el insuficiente conocimiento imputado al autor sobre la lesividad de su hecho y el criterio de evitabilidad, de los que se deriva la posibilidad que tuvo el autor de evitar dicha lesividad. Por ejemplo, el conductor que va a 120 km/h dentro de una zona urbana no tiene el conocimiento preciso de que en la curva va a cruzarse un transeúnte, pero esta posibilidad le es conocida, pues en las esquinas cruces peatonales por lo que generalmente cruzan los caminantes. Al autor se le imputa el conocimiento de que por las esquinas cruzan peatones y que con la velocidad a la que va es casi imposible realizar una maniobra evasiva con éxito en caso se cruce un peatón. El conocimiento imputado al autor no genera un deber de dejar de realizar la conducta (detener el automóvil), sino de asumir ciertos deberes de cuidado en el emprendimiento de la conducta (disminuir la velocidad al límite permitido) (García, 2012, p. 534).

2.2.2.3.1.3.2.2. Teoría de la antijuricidad.

Para que la conducta típica sea imputable se requiere que sea antijurídica es decir no es justificada. La existencia de una causa de justificación impide comprobar que la conducta típica sea antijurídica, las causas de justificación son disponibles permisivas especiales que operan sobre cualquier forma básica de hecho punible (delito doloso o imprudente de comisión u omisión) Las más importantes justificaciones son la legítima defensa el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho, en la práctica el juicio de la antijuricidad se limita a una constatación negativa de la misma, pero la antijuricidad posee características especiales, si no se presenta alguna causa de justificación la antijuricidad de la conducta estará comprobada (Villavicencio, 2013).

Por su parte para Muñoz (2007) el término antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede con otras categorías de la teoría del delito, la antijuricidad no es un concepto específico del derecho penal, sino un concepto unitario, válido para todo el

ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada rama del mismo.

1. Antijuricidad formal y antijuricidad material

Según Roxin (citado por Hurtado, 2005) señala que, se entiende por antijuricidad formal la oposición del acto con la norma prohibitiva, implica en toda disposición penal que prevé un tipo legal (por ejemplo, “no matar” en relación con el art. 106. Por antijuricidad material, se comprende, por el contrario, el carácter dañino del acto con respecto al bien jurídico protegido por la norma legal. Este perjuicio al bien jurídico no solo debe ser comprendido en sentido natural, como producción de un daño a determinado objeto de la acción (por ejemplo, muerte de una persona o daños a una cosa), sino también como contradicción al valor ideal que protege la norma jurídica (ofensas del honor).

2.2.2.3.1.3.2.3. Teoría de la culpabilidad.

La teoría de la imputación personal se orienta por un lado desde la óptica del Estado en los fines preventivos de la pena (no se pretende un libre albedrío indemostrable empíricamente sino un concepto de libertad no en un sentido sino una especial ubicación del sujeto frente al cumulo de condicionamientos) y por otro lado desde la óptica del individuo siendo necesario apreciar la situación de desventaja que este tiene al frente al Estado. Para este fin imputación personal evalúa un conjunto de aspectos relativos al agente: imputabilidad (exclusiva por analogía psíquica grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción), probabilidad de conciencia de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta (Villavicencio, 2013).

Por su parte para Muñoz (2007) refiere que para la imposición de una pena, principal consecuencia jurídico-penal del delito, no es suficiente con la comisión de un hecho típico y antijurídico. Como se deduce de algunos preceptos del derecho penal vigente en cualquier país civilizado, la comisión de un hecho delictivo, en el sentido de un hecho típico y antijurídico, no acarrea automáticamente la imposición de una pena al autor de su hecho. Existen determinados casos en los que el autor de un hecho típico y antijurídico queda exento de responsabilidad penal. Ello demuestra que, junto a la tipicidad y a la antijuridicidad, debe darse una tercera categoría en la teoría

general del delito, cuya presencia es necesaria para imponer una pena. Esta categoría es la culpabilidad, una categoría cuya función consiste, precisamente, en acoger aquellos elementos referidos al autor del delito que sin pertenecer al tipo ni a la antijuricidad, son también necesarios para la imposición de una pena.

1. Determinación de la culpabilidad

En términos de Muñoz (2007) para poder afirmar la culpabilidad de una persona que, en el caso concreto, ha cometido un hecho típico y antijurídico, es necesario, conforme al derecho penal actualmente vigente, que se den en esa persona una serie de requisitos sin los cuales no se puede hablar de culpabilidad. La comunicación entre el individuo y los mandatos de la norma solo puede darse si el individuo tiene la capacidad para sentirse motivado por la norma, conoce su contenido y se encuentra en una situación en la que puede regirse, sin grandes esfuerzos, por ella. Si por el contrario el individuo, por falta de madurez, por defecto psíquico, por desconocer el contenido de la prohibición normativa o por encontrarse en una situación en la que no le era exigible un comportamiento distinto, no puede ser motivado por la norma o la motivación se altera gravemente faltara la culpabilidad, es decir, el hecho típico y antijurídico no podrá atribuirse a su autor y, por tanto, ese tampoco podrá ser sancionado con una pena.

2. La comprobación de la imputabilidad

La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se le llama imputabilidad, mas modernamente, capacidad de culpabilidad. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente, bien por sufrir de trastornos mentales, no puede ser declarado culpable y, por consiguiente, no puede ser responsable penalmente de sus actos, por más que estos sean típicos y antijurídicos. El concepto de imputabilidad o de capacidad de culpabilidad es, pues un tamiz que sirve para filtrar aquellos hechos antijurídicos que pueden ser atribuidos a su autor y permite que, en consecuencia, éste pueda responder de ellos (Muñoz, 2007).

3. La comprobación de la posibilidad de conocimiento de la antijuricidad

Junto a la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, constituye también un elemento de la culpabilidad el conocimiento de la antijuricidad. Quien realiza dolosamente un tipo penal actúa, por regla general, con conocimiento de la licitud de su hacer. Así como decimos antes que la tipicidad es un indicio de la antijuricidad, podemos decir ahora que la realización dolosa de un tipo penal casi siempre va acompañada de la conciencia de que se hace algo prohibido, tanto más cuando el bien jurídico protegido en el tipo en cuestión sea uno de los fundamentales para la convivencia y en cuya protección tiene su razón de ser el derecho penal. De ahí, en la práctica, el conocimiento de la antijuricidad no plantea demasiados problemas y se parte de su existencia en el autor de un hecho típico, no justificado, cuando dicho sujeto es imputable (Muñoz, 2007).

4. La comprobación de la no exigibilidad de otra conducta

El cumplimiento de los mandatos normativos es un deber para todos los ciudadanos. No obstante, los niveles de exigencia de este cumplimiento varían según el comportamiento exigido, las circunstancias en que se realice, los intereses en juego, etc. En principio, el ordenamiento jurídico marca unos niveles de exigencia que pueden ser cumplidos por cualquier persona. Se habla en estos casos de una exigibilidad normal, el ordenamiento jurídico no puede imponer, salvo en casos determinados, el cumplimiento de sus mandatos (Muñoz, 2007).

2.2.2.3.1.3.3. Consecuencias jurídicas del delito

Luego de que la teoría del delito establece qué comportamientos son considerados como tal y merecen una represión estatal (habiendo determinado su tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), entran en juego otras teorías que se encargan de establecer las consecuencias jurídicas que le son imputables a cada conducta ilícita, lo que supone una respuesta estatal punitiva (con el establecimiento de una pena o alguna alternativa a la misma que sirva para cumplir los fines de resocialización establecidos en la constitución), así como la generación de una obligación de carácter civil, por las consecuencias de la acción ilícita cometida para reparar el daño causado. Así,

tenemos:

2.2.2.3.1.3.3.1. La pena

2.2.2.3.1.3.3.1.1. Concepto

La pena es una consecuencia del delito que tiene como presupuesto lógico la imputación penal de un hecho antijurídico a un sujeto culpable a lo que se sirve como ya se vio la teoría del delito, sin embargo resulta pertinente precisar que la imposición de la pena no tiene lugar al estilo de las leyes causales mediante una aplicación automática desprovista de toda intervención humana sino que también aquí entran en consideración cuestiones de carácter valorativo para decidir la procedencia y cuantía de la reacción (García, 2012).

Finalmente para Hurtado (citado por Peña, 2011, p. 385) no hay pena sin ley previa, significa que, de la misma manera como el comportamiento debe ser delimitado en la disposición penal, por un lado, también la sanción punitiva, antes que el delito sea cometido debe ser prevista de manera suficiente y, por otro, que el juez debe limitarse a imponer la sanción prescrita.

2.2.2.3.1.3.3.1.2. Clases de las penas

Peña (2011) las penas en nuestro corpus punitivo, pueden clasificarse de la siguiente forma:

a) Penas privativas de libertad

Son aquellas sanciones punitivas, que suponen la privación de libertad personal del afectado con la medida, consistentes en el internamiento efectivo del condenado en un establecimiento penitenciario. Conforme lo establecido en el artículo 29° del CP, la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua; en el primer caso tendrá una duración mínima de dos años y una máxima de treinta y cinco (Peña, 2011, p. 200).

b) Restrictivas de libertad

Son las que disminuyen apenas el ejercicio de un derecho personal, limitando cualquiera de sus manifestaciones; se sufre en libertad, residiendo el penado en un lugar

determinado o fuera de un ámbito territorial determinado (Peña, 2011, p. 201).

c) Privación de derechos

Algunas penas suponen la limitación o suspensión de determinada actividad funcional o de otra índole, que es objeto de prevalecimiento para la comisión del hecho punible, aquella actividad que fue empleada por el autor para la interpretación del injusto penal; limitan al delincuente el goce de ciertos derechos civiles y políticos o del ejercicio de un arte o profesión, por ejemplo: la “inhabilitación” del cargo público en el caso de los delitos contra la administración pública (infracción de deber), la suspensión del ejercicio de la patria potestad según el literal b) del artículo 83° del Código de los Niños y adolescentes, la suspensión de la licencia de conducir (Código Nacional de Tránsito), así como otra clase de medidas que afectan derechos y ejercicios reconocidos constitucionalmente (Peña, 2011, p. 201).

d) Penas pecuniarias

Suponen todas aquellas sanciones de contenido dinerario, que significan una afectación al patrimonio del condenado y se hace efectiva a través del pago de una determinada suma dineraria que se le obliga a sufragar al penado (Peña, 2011, p. 202).

2.2.2.3.1.3.3.1.3. Criterios generales para determinar la pena

En líneas generales el código penal sigue el criterio clásico de aplicar la pena básicamente en función del hecho y de su gravedad imponiendo una medida que permite establecer variaciones de acuerdo al mayor o menor daño social y a la atenuación del hecho, de esta manera entonces nuestro sistema adopta las siguientes reglas en el Art. 37 del Código:

- 1.- Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad.
- 2.- El término medio se reducirá hasta el inferior o se aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto.

3.- Si concurren agravantes y atenuantes el juez deberá compensarlas por su puesto no en forma matemática sino según su prudente árbitro. Una sola agravante puede inclinar la balanza hacia el extremo superior aunque se den dos atenuantes.

4.- La pena se aplicara sin embargo en el límite superior o inferior, cuando así lo disponga expresamente la ley. Así mismo se traspasará uno a otro limite cuando así sea menester, en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuota, parte que entonces se calculará en proporción de la cantidad de la pena que el juez habría aplicado al reo si no concurre el motivo de aumento o de a disminución (Juristas editores, 2015).

2.2.2.3.1.3.3.2. La reparación civil

2.2.2.3.1.3.3.2.1. Concepto

La reparación civil puede presentarse en cualquier delito que haya generado daños o perjuicios, la reparación civil no es una pena, cada una de las consecuencias jurídicas del delito valora el hecho ilícito desde su propia perspectiva lo que se explica en el hecho de que parten de fundamentos distintos, la reparación civil se centra en reparar el daño provocado a la víctima por la acción electiva (García, 2012).

Montero (citado por Peña, 2011, p. 627) menciona que la ley acumula en el proceso penal un doble objeto, pues a la depuración de la responsabilidad penal se une una exigencia de responsabilidad civil, salvo que la víctima, que es titular del bien jurídico dañado, renuncie a exigir la reparación (porque no quiere reclamar o porque haya sido reparada extraprocesalmente) o la reserva para discutirla después de terminado el proceso penal.

Consecuentemente en el proceso penal se unifican ambas acciones, que corresponden a un naturaleza distinta: la acción penal se comprende en una “Justicia Distributiva” (de impartir el castigo punitivo de acuerdo a la culpabilidad del autor), mientras que la acción civil se comprende en la denominada “Justicia Compensatoria” (de disponer una compensación económica proporcional al daño materializado en el bien jurídico). El proceso penal versa sobre un hecho delictuoso, cuya persecución y sanción se justifica en merito a un interés público, en cambio la responsabilidad civil tiene que ver con una pretensión de privados, de un particular que busca ser resarcido de los

daños causados por el delito de sus bienes jurídicos fundamentales (Peña, 2011, p. 627).

Finalmente para Peña (2011, p. 627) indica que un aspecto es la naturaleza pública del Derecho penal y del Derecho procesal penal, en lo referente al *Ius Puniendi* estatal y a la promoción y persecución penal del delito y otro lo que tiene que ver con las legítimas expectativas de la víctima, de poder verse resarcida económicamente de forma proporcional al daño causado por el hecho delictuoso. Mientras que la legitimidad activa de la acción penal recae sobre el representante del Ministerio Público, la legitimidad activa e la acción civil es potestad de la víctima, no obstante que la legislación procesal le confiere ciertos derechos al persecutor público.

2.2.2.3.1.3.3.2.2. Criterios generales para determinar la reparación civil

1. Extensión de la reparación civil

El artículo 93° del CP, dispone a la letra que: la reparación comprende:

- _ La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y,
- _ La indemnización de los daños y perjuicios.

La aplicación de una u otra modalidad comprendida en el articulado, dependerá del caso concreto, puesto que no necesariamente se aplican ambas; la restitución del bien, solo resultara factible en delitos que atentan el patrimonio privado o del erario público (Peña, 2011).

a) La restitución del bien

El cometido esencial es de reponer la situación de las cosas, al estado anterior de la comisión del hecho punible. Modalidad de reparación, que por su singular naturaleza, únicamente resultará aplicable en el caso de bienes patrimoniales, no fungibles; de los cuales, el uso y/o empleo que se hace de ellos, si bien puede depreciar su valor en el mercado, su funcionalidad operativa se mantiene, a menos que se produzca una destrucción parcial o total del bien (Peña, 2011, p. 648).

En muchas ocasiones, la restitución no será suficiente para reparar el daño causado,

puesto que la sustracción que ha sido objeto su titular, puede haber generado determinado daños y perjuicios, por lo que deberá aplicarse el concepto de “indemnización de daños y perjuicios” (Peña, 2011, p. 649).

b) La indemnización por daños y perjuicios

La indemnización por daños y perjuicios viene a cubrir un amplio espectro de saber, de restituir, reparar y compensar a quien fue víctima de una agresión ilegítima. Conforme lo anotado, la acción indemnizatoria viene a comprender una serie de elementos, los cuales deben ser plenamente identificados y conceptualizados a fin de determinar su exacta amplitud, a tal efecto, hemos que remitirnos al artículo 1985° del Código Civil, que dispone a la letra lo siguiente: “la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral...” (Peña, 2011, p. 652).

c) El daño emergente y el lucro cesante

El daño emergente, se refiere a la necesidad de indemnizar a la víctima, conforme a una valuación económica destinada a reparar estimativamente el grado de afectación ocasionado; es por ello, que convenimos que el “daño emergente”, se extiende a la compensación por los daños o perjuicios materiales, cuantificables en dinero, que recaen sobre el patrimonio de la víctima o perjudicado (Peña, 2011, p. 653).

Velásquez (citado por Peña, 2011, p. 654) menciona que el “lucro cesante”, se refiere, por su parte, a la utilidad, beneficio o ganancia que se deja de percibir por el uso o propiedades que emergen del bien, por el tiempo que permanecieron sustraídos o secuestrados.

d) El daño moral

Gherzi (citado Peña, 2011, p. 654) establece que los “daños morales” son aquellos que afectan los bienes inmateriales del ofendido, se trata de una lesión a los sentimientos y que tiene eminentemente carácter reparatorio o de satisfacción.

En la esfera del “daño moral”, se comprende una distinción, entre aquellos que afectan

directamente el patrimonio, susceptibles de valuación económica; y, aquellos que no tienen incidencia alguna sobre el patrimonio, pues, tienen una incidencia espiritual (Peña, 2011, p. 654).

A estos últimos los denomina Alastuey (citado por Peña, 2011, p. 655) como daños morales puros y abarcan, a modo de ejemplo, el dolor por la pérdida de un ser querido, el sufrimiento físico, la disminución de condiciones o aptitudes físicas como la salud, estética, sexualidad, aptitud para el deporte, etc.

2.2.2.4. El delito de Robo simple

Regulación

El Código Penal del Perú tipifica el robo, que se caracteriza por el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, mediante la sustracción del lugar donde se encuentra, "empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física", conducta sancionada con pena privativa de libertad desde tres a ocho años (artículo 188). Y que se agrava también cuando se comete en determinadas circunstancias de lugar, tiempo, medios, etc., fijándose entonces la pena desde veinte a veinticinco años; o pasando a ser la de cadena perpetua si se actúa "en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental" (artículo 189).

El Robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.

La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica que la pena sea superior a la que se establece por el hurto. Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. El primero es aquel en el que se emplea una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como robo aquellas acciones en las que, a pesar de no

mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir como robo a aquel que se produce mediante el uso de una llave falsa o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de una llave falsa con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que protege del robo. El robo agravado es penalizado incluso con cadena perpetua.

El robo agravado es una ofensa seria y seguirá a una persona por toda su vida. Puede ser muy importante que la persona busque, en el mejor de sus intereses, una petición de perdón con el acusador para reducir la condena a un cargo mínimo a cambio de una acusación de culpa. El 34.5% de los delitos cometidos en el Perú son delitos contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado teniendo un índice de aumento del 4% anual con respecto del año anterior. Las ciudades de Ica, Lima, Lambayeque, Piura y Arequipa son las registran mayor número de denuncias por este tipo de delito. Para que exista robo agravado tiene que ser cometido en casa habitada, durante la noche o lugar desolado, a mano armada, siendo dos o más personas en, medio de transporte público, fingiendo ser autoridad, en agravio de menores, cuando se causa lesiones.

No es necesario que concurren todas las situaciones, con. una es suficiente. La función de agregar agravado al cargo de robo es para indicar la seriedad de la falta. La prueba del acusador puede ser más difícil para los acusados, pero también garantiza un tiempo adicional en la cárcel, más que otro cargo estándar de robo.

Pero veremos también los tipos de Delitos y una breve calificación, entre crimen y delito. Además veremos la elaboración del ITER CRIMINIS, o más conocido como camino del delito, el cual posee etapas, fases. Entre ellas tenemos a la fase interna que no es otra cosa que la fase mental o de la ideación del delito. Fase externa que implica la acción o ejecución de lo ya planeado en la fase interna es la materialización de los hechos y su realización o consumación. Hablaremos también de los que es la tentativa y sus tipos. Tentativa acabada, imposible, suspendida, etc.

Tipicidad

Elementos de la tipicidad objetiva

A. Bien jurídico protegido.

En lo que respecta al bien jurídico tutelado por el artículo 189, ha de convenirse que de igual forma que el robo simple, lo constituye la propiedad y la posesión, como derechos reales que vinculan jurídicamente a su titular con el bien mueble que es objeto de apoderamiento por parte del agente, pero además debe agregarse que otros bienes jurídicos resultan también tutelados, como la vida, el cuerpo, la salud y la libertad personal del sujeto pasivo de la acción típica.

Dígase que de forma más intensa que en el caso del artículo 188°, siendo que incluso la muerte de la víctima es consumida por este articulado, según lo expuesto en su último párrafo:

“La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.”

B. Modalidad Típica.

El robo, es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencian del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.

Art.189.-Robo Agravado La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 1. En inmueble habitado. 2. Durante la noche o en lugar desolado 3. A mano armada 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres , ferroviarios ,lacustres y fluviales, puertos , aeropuertos , restaurantes y afines , establecimientos de hospedajes y lugares de alojamiento ,aéreas naturales protegidas, fuentes de agua minero- medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y museos. 6. Fingiendo ser autoridad o servidor

público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 4. Sobre bienes de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la nación. La pena será de condena apertura cuando el agente actué en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de su víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física y mental. La primera modificación fue hecha a través de la ley N° 26319 del 01-06-94, la tercera en base de los decretos legislativos N° 895° y 896° y finalmente la cuarta modificación por intermedio de la ley N° 27472 del 5-06-01. La versión actual del delito de robo agravado corresponde a la descripción típica hecha en el artículo uno de la ley N° 27472.

3.2. Concepto El delito de robo agravado es el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando para ello violencia o amenazas contra la víctima o integridad física de la víctima y concurriendo, además cualquiera de las circunstancias agravantes específicas establecidas en el artículo 189 del código penal. Se puede dar el caso de que concurran en el robo más de una de las agravantes establecidas en el artículo 189, por ejemplo puede tratarse de un robo a mano armada y durante la noche, en tal situación al juzgador del compete establecer la pena adecuada en base al mayor contenido de ilicitud del robo, pero, para ello, debe decidir la pena a imponer conforme a los topes mínimo y máximo de la pena conminada por el legislador. Sin embargo, el robo concurrente, por ejemplo, la agravante basada en el modo de ejecución: a mano armada y la situación de indefensión de la víctima, incapaz físico o mental, la pena que se ha de aplicar debe ser más severa, es decir no menor de veinte ni mayor de veinticinco años de la privación de libertad. El robo agravado tiene a diferencia del robo simple, como uno de sus presupuestos típicos la causalidad de muerte o lesiones graves a la víctima, y por lo tanto no solo contiene la amenaza a la vida o a la integridad física del sujeto pasivo.

a) Sujeto activo. El delito de robo agravado es un delito común. Por ello sujeto activo puede ser cualquier persona con excepción del propietario del bien. Debido a que el tipo se consuma, además, cuando el bien mueble es parcialmente ajeno, sujeto activo del delito también puede serlo el copropietario. En el último párrafo del artículo 189° se establece una especial calidad en el sujeto activo del delito de robo agravado: la calidad de integrante de una organización delictiva o banda. Sin embargo esta circunstancia agravante es aplicable cuando el sujeto activo actúa en función a la organización delictiva, utilizando la organización delictiva o banda. Sin embargo esta circunstancia agravante es aplicable cuando el sujeto activo actúa en función de la organización delictiva, utilizando la organización delictiva para facilitar la comisión del robo. Se requiere pues, el accionar de la banda y , en tal accionar, la contribución específica del miembro integrante de ella.

b) Sujeto Pasivo. Sujeto pasivo del delito pasivo puede ser una persona física o jurídica. Es necesario que sea propietaria, copropietaria o tenga legítimamente algún poder inherente a la propiedad del bien mueble que es objeto del robo. Es necesario señalar que en algunos casos los directamente agraviados (sujeto pasivo de la acción) por el ilícito penal no son los sujetos pasivos del delito. Tal situación se produce, por ejemplo, cuando una banda asalta un banco y golpea y amenaza a los cajeros. Estos últimos son los directamente agraviados y sufren el menoscabo de la integridad física y psicológica. El banco (persona jurídico), en cambio, el sujeto pasivo del delito en vista de la agresión a su patrimonio. c) Acción Típica. El delito de robo agravado tiene los mismos presupuestos típicos que el delito de robo simple, pero, además, se incluyen en las circunstancias agravantes específicas (basadas en un mayor contenido de antijuridicidad o culpabilidad en el accionar delictivo) establecidas en el artículo 189° del código penal. Analizamos en primer lugar cada uno de los presupuestos típicos del delito de robo y posteriormente, cada una de las circunstancias, agravantes contenidas en el artículo 189°.

Elementos de la tipicidad subjetiva

El delito de robo agravado solo puede cometerse empleando dolo. En vista que el Título Preliminar del Código Penal proscribire toda forma de responsabilidad objetiva, consideramos que el robo que produce la muerte o lesiones graves en la víctima debe suponer, como mínimo, cierto nivel de previsibilidad del resultado en el agente. De otra

forma se aplicaría una pena excesivamente severa (cadena perpetua) cuando el resultado muerte o lesiones graves (ultimo resultado del artículo 189°) ni siquiera fue previsto como posible por el autor.

Formas Agravadas

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años (Artículo 189)

Circunstancias agravantes específicas del delito de robo • La pena no será menor de doce ni mayor de veinte si el robo es cometido en estas circunstancias:

1. Robo en inmueble habitado El robo en casa habitada entraña un valor disvalor de la acción realizada por el agente. Este mayor disvalor radica en el lugar en donde se realiza el delito contra el patrimonio. Se vulnera además la inviolabilidad del domicilio, la integridad y otros bienes jurídicos personales toda vez que la casa de la víctima es el lugar donde la custodia de sus bienes se considera más seguro y su vida íntima o familiar ante las intromisiones ajenas. El robo en casa habitada pone en mayor riesgo la integridad de las personas que la habitan. De allí que para la configuración del robo agravado se precisa que la casa este ocupada en el momento de la comisión del delito. Solo de esa manera es posible que se realice la necesaria violencia contra las personas. Casa habitada es el lugar donde mora una o más personas. Como indica Salinas Siccha “toda vivienda permanente o temporal por precaria que sea su construcción configura la agravante a condición que no esté abandonada o deshabitada. La casa puede servir de domicilio permanente o eventual de sus moradores, lo importante a tener en cuenta es el hecho que se trata de una morada y que al tiempo de cometerse el robo servía de vivienda para la víctima sin importar claro está que al momento de realizarse el robo, la vivienda se encontraba sin sus moradores que habían salido por ejemplo a visitar a un familiar o a una fiesta. En consecuencia, quedan aludidas las casas de campo o verano en el tiempo que son utilizadas. Desde el momento que se toma como referencia que el inmueble debe servir de morada o vivienda para la víctima, resultan excluidos del

agravante los edificios que sirven para negocios, los colegios, las oficinas, los locales de instituciones públicas o privadas.

2. Durante la noche o en lugar desolado. Por noche se entiende el tiempo transcurrido entre el termino del crepúsculo vespertino y el comienzo de la aurora matutina. Lugar desolado es toda zona o espacio urbano rural solitario o sin gente. El robo durante la noche o en lugar desolado es un delito en donde el agente aprovecha estas circunstancias objetivas para facilitar el éxito del robo. En estas situaciones la víctima atenúa la protección de su esfera de custodia del bien mueble, se halla con un menor grado de posible defensa ante la agresión de su patrimonio. El agente ha de sacar ventaja de estas circunstancias. Por otro lado, el robo durante la noche o en lugar desolado evita que otras personas puedan acudir en defensa del patrimonio de la víctima. Rojas Vargas enseña que lugar desolado es tanto el espacio físico sin población como el ámbito poblado que por factores diversos se halle sin gente: zonas industriales, calles extensas y solitarias, caminos, carreteras, zonas rurales alejadas de los pueblos o ciudades, estadios sin gente, etc.

3. Robo a mano armada. El arma utilizada debe ser eficaz para infundir temor u ocasionar el quebrantamiento total de la voluntad de la víctima. No encaja en este supuesto el uso de armas aparentes. Arma propiamente dicha es todo instrumento que tiene como finalidad específica la de poder ser utilizado indistintamente para poder agredir o para defender. Puede ser de fuego, cortante, punzo-cortante, contundente, etc. La ley alude a este tipo de armas propias con la frase “cualquier clase de armas”. Pueden ser: Revolver, Metralleta, Sable, Cachiporra Arma impropriadamente dicha es todo objeto que solo circunstancialmente sirve para aumentar el poder ofensivo de una persona. A esta clase de armas se refiere la ley con la frase “de instrumento que pudiera servir como tal. Pueden ser: Desarmador, Martillo, Cadena de fierro, Palo Arma aparente es la que por su forma y además características externas simula tener la potencia simula tener la potencia agresiva de las auténticas, siendo por lo tanto apta para amenazar, pero no idónea para cumplir con el destino natural de las armas propiamente así llamadas. Tales son los casos del empleo de arma de fuego que se encuentra deteriorada al extremo de ser inequívocamente inútil para disparar, o el uso de una imitación de metralleta que ha sido confeccionada con material plástico adecuado. El

delito de robo a mano armada no entra en concurso con el delito de tenencia ilícita de armas. Implica que el agente esgrima o exhiba el arma. El que roba puede emplearla o solo mostrarla. No se configura la agravante cuando el agente solo indica que tiene el arma guardada y que la puede sacar para inferir lesiones o la muerte del agredido.

4. Robo con el concurso de dos o más personas. Aquí no exige que el robo se realice en banda. Es suficiente que dos o más personas concurren, aunque sea de manera espontánea, y sin previo acuerdo en la comisión del robo. Hay convergencia voluntaria y consiente. En este caso se trata de un robo en autoría, pero siempre en forma funciona, facilitándose cada uno la consumación del delito. En este sentido Salinas Siccha cuando dice: la posición que asumimos sostiene que solo aparece la agravante cuando las dos o más personas que participan en el robo lo hacen en calidad de coautores. Es decir, cuando todos con su conducta teniendo el dominio del hecho aportan en la comisión del robo. Son los coautores los que toman parte en la ejecución del delito codominando el hecho. La coautoría no depende en su existencia dogmática de un reconocimiento legal expreso, pues esta como el autoría mediata implícita en la noción del autor. Una disposición expresa sobre la coautoría es desde el punto de vista de la técnica legislativa innecesaria.

5. Robo en medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga En esta circunstancia agravante hay un mayor contenido de ilicitud de la acción en vista de la confianza que tienen los pasajeros en la seguridad que les ofrecen las empresas de transporte público o privado. Por otro lado, resulta más difícil oponer resistencia a los agresores en estos medios en medio de locomoción en vista del riesgo que implica defender el patrimonio ante un asalto a plena marcha del vehículo de transporte. Además para que se lleve a cabo el delito, en estos casos, no solo se afecta el patrimonio de una persona sino de todos los pasajeros.

6. Robo fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. En este supuesto hay un mayor contenido de ilicitud en la comisión del robo debido a que el sujeto activo vulnera más bienes jurídicos para perpetrar el delito. Además el patrimonio se vulnera el bien jurídico administración pública, administración de justicia y la fe pública. Como indica Fidel

Rojas: “La acción de fingir (ante el propietario) la calidad no poseída, para ser penalmente relevante deberá tener una suficiente entidad engañadora. Esto es, se exige idoneidad suficiente y adecuada para en ponderación promedio lograr el quiebre o eclipsamiento de la defensa. Esta ponderación no puede pasar por encima ni soslayar condiciones concretas bajo las cuales se desarrolló la acción ilícita, tales como la edad, la cultura, el contexto geográfico (ciudades o áreas rurales) y la vulnerabilidad de la víctima, ni perder de vista que la acción de fingimiento va aunada a la amenaza grave y los actos de violencia, lo que en su conjunto genera un cuadro de prevalimiento difícil de superar para el sujeto pasivo o afectado.

7. Robo en agravio a menores de edad o ancianos. Los menores de edad y los ancianos merecen una tutela especial por parte del estado. De allí que se trate de reforzar la protección de su patrimonio a través del incremento de la pena para aquellos que les roban aprovechándose de su estado de indefensión.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido en estas circunstancias:

8. Robo causando lesiones a la integridad física o mental de la víctima. El robo es un delito complejo, su injusto típico puede abarcar múltiples afectaciones a diversos bienes jurídicos. En este caso, el robo se ve agravado en razón del menoscabo que ocasiona a la salud física o mental de la víctima. El presupuesto típico del delito del robo simple, que exige el uso de violencia física o moral por parte del agente, hace que con el robo se produzcan lesiones contra la salud de la víctima. Sin embargo, para que se configure el delito de robo agravado, las lesiones producidas deben ser de mayor gravedad que las que se consideran como faltas contra la persona. Es decir, las lesiones producidas a la víctima deben requerir más de diez días de asistencia facultativa o descanso para el trabajo (artículo 122 del C.P.) Si las lesiones son levísimas del accionar del sujeto activo se adecuara al tipo de robo simple. Por el contrario si las lesiones son graves, el delito de robo agravado cometido merecer la mayor pena establecida en nuestro ordenamiento penal: cadena perpetua.

Estas lesiones pueden haber sido causadas en forma dolosa o por culpa del agente en el mismo momento que se produce el robo, no antes. Serán dolosas las lesiones que realice

el agente a la víctima que en el mismo momento de la sustracción de sus bienes opone resistencia. En cambio, serán culposas cuando la víctima se lesiona a consecuencia del forcejeo que se produjo al momento de la sustracción.

9. Robo con abuso de incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima. En el caso del abuso de la incapacidad física, el agente aprovecha la indefensión del patrimonio del sujeto pasivo para apoderarse, sin mayor riesgo y posición del bien ajeno. Un estado de incapacidad observable en la víctima, que no ha sido creado ni propiciado por el agente y de lo cual se aprovecha este para sustraer y apoderarse del bien mueble objeto del delito. De modo que si el agente antes de sustraer el bien mueble, ha sometido a la víctima a un estado de invalidez o lo ha atado a una silla, o se cualquier otro modo lo ha incapacitado para actuar en su defensa, ello no será propio de esta agravante.

10. Robo que coloca a la víctima y a su familia en grave situación económica. Para que se configure esta circunstancia agravante, el agente ha debido, al menos, haber previsto que el robo que realiza pondrá en grave situación económica a la víctima o a su familia. Sin embargo para que opere la agravante no es necesario que la víctima quede en la pobreza o indigencia absoluta, solo se exige que este quede en una situación patrimonial difícil, de cierto agobio e inseguridad, el mismo que puede ser temporal o permanente. El agente debe conocer o percibir una variación notoria en la economía de la víctima o su familia; El dolo directo se ve así reforzado por el conocimiento de tal circunstancia. Caso contrario si el sujeto activo al momento de actuar no se presentó en tal situación, la agravante no aparece.

11. Robo sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. De esta manera se trata de reforzar penalmente no solo la integridad física o moral de los bienes de interés científico, sino, además, el patrimonio cultural de la nación. Resulta difícil saber que bienes tienen valores científicos y cuáles no. Corresponde al juez determinar tal calidad de cada caso concreto. Para ello sin duda necesitara la concurrencia de personas calificadas en bienes de valor científico para saber si se trata de bienes de tales características. Como indica Salinas Siccha, bienes con valor científico serían las maquinas o instrumentos médicos de alta precisión, los riñones o corazones artificiales, microscopios o telescopios electrónicos, aparatos y

dispositivos hidrométricos, espectrógrafos de última tecnología, etc., así como bienes de utilidad científica como material genético depositado en recipientes, cultivo de virus para estudio e investigación médica fármacos en proceso de ensayo o experimentación, compuestos químicos-radioactivos, etc. No interesa tanto el valor económico del bien sino su valor científico, así como que el agente debe conocer de tal característica. En tanto que bienes que integran el patrimonio cultural de la nación son todos aquellos que constituyen testimonios de la creación humana, material o inmaterial expresamente declarados por su importancia artística, científica, histórica o técnica. Por medio de ellos las generaciones humanas presentes y por venir conocemos nuestro pasado histórico. Para saber si estamos ante un bien que integra el patrimonio cultural de la nación el operador jurídico, como ya hemos mencionado al tratar la figura del hurto, debe recurrir a la ley número 24047 de 1985 que establece en forma, más o menos clara que bienes constituyen el patrimonio cultural de la nación.

Consumación

El robo agravado se consuma cuando el sujeto activo se apodera ilícitamente del bien ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra y empleando violencia contra la víctima. Deben concurrir, además, cualquiera de las circunstancias agravantes específicas señaladas en el artículo 189°. Para la consumación es suficiente que el que ha robado haya tenido en su poder de disposición el bien sustraído mediante violencia, así sea por unos minutos. Por ejemplo, puede haber robado una cartera utilizando una pistola y al pretender huir y verse perseguido la esconde en un tacho de basura. Aquel delito se ha consumado, no obstante que el ladrón es capturado en su huida y no logra aprovecharse del dinero sustraído.

2.2.2.5. El delito de robo agravado en la sentencia en estudio (Expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01)

2.2.2.5.1. Breve descripción de los hechos

El día dos de agosto del años dos mil once a las veinte horas con treinta minutos aproximadamente, el agraviado A se encontraba entre las avenidas Pedro Ruiz y Luís Gonzáles de esta ciudad realizando servicio de colectivo en la ruta Chiclayo la pradera y

viceversa, en esas circunstancias suben cinco personas entre ellos una f emina, por lo que el agraviado se dirige por su ruta normal con direcci on a La Pradera, sin embargo cuando el agraviado se encontraba a la altura de la empresa Caf e Per u, volteando por la universidad San Mart n, un autom ovil tipo matiz marca Chevrolet con farola taxi “La Cuzque a” -que estaba con la maletera abierta- abruptamente lo pasa, lo cruza y obliga al agraviado a que este sobrepase; en esas circunstancias los que estaban dentro del veh culo le dicen “ya perdiste”, le mientan la madre, sacan armas de fuego, lo enca onan y con la cacha del arma de fuego le impactan en el cr neo caus ndole lesiones en  ste y en el rostro ya que fueron varios impactos con esta arma de fuego; la f emina que se encontraba en el interior del veh culo del agraviado opta por salir inmediatamente y se refugia en el veh culo que hab a interceptado el veh culo del agraviado. Mientras todo ello suced a, los que estaban dentro del veh culo, es decir los cuatro sujetos que quedaron, logran poner al agraviado en la parte posterior, uno de ellos baja, toma el volante y se dirigen por atr s de la universidad San Mart n por la Urbanizaci n La Pradera, pueblo joven Santa Julia y dejan abandonado al agraviado con cintas adhesivas en las manos y en la boca, y se llevan el veh culo con rumbo a la ciudad de Chiclayo. El agraviado logra despojarse de estas ataduras y el capit n PNP Ra l Benavidez Ayala acude al lugar de los hechos al ser informado por la centra ciento cinco de este robo, ve al agraviado y le presta auxilio.

El Ministerio P blico va a demostrar que quien conduc a el veh culo que intercept  al agraviado fue el acusado B quien dentro del plan delictivo ten a como roles, no solo interceptar al veh culo del agraviado, sino tambi n sacar del lugar del asalto a la f emina con direcci n al pueblo joven Santa Julia hacia la pista antigua de la caleta San Jos , donde despu s de dejar a la f emina y a su regreso, el veh culo sufre un desperfecto, esto es, se pincha una llanta, el acusado baja del veh culo y apaga las luces para no levantar sospechas. En estas circunstancias el sub oficial PNP Edilberto Bravo Gamonal y el capit n PNP Ra l Benavidez Ayala llegaron a ese lugar – al haber sido informados por los propios vecinos del lugar y por los pobladores que el veh culo que hab a interceptado el agraviado hab a huido por ese lugar- e intervienen al acusado. Como hab an ido conjuntamente con el agraviado,  ste inmediatamente reconoce al veh culo que lo intercept  y reconoce al imputado como la persona que conduc a dicho veh culo, este veh culo fue identificado como autom vil con farola, marca Chevrolet, color

plomo, modelo Spark Life, de placa de rodaje M2M-627. Precisa que se probará que el vehículo del agraviado fue recuperado con el pago posterior de un cupo a otros sujetos sin identificar, lo que ha sido materia de otra investigación.

El comportamiento del acusado se subsume en el delito de robo modalidad de robo agravado que se encuentra tipificado en el artículo 188° como tipo base y artículo 189° incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del Código Penal; es decir, durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, utilizando medios de locomoción y sobre vehículo automotor. Se va a probar que el acusado participó en coautoría funcional con los demás sujetos repartiéndose roles para su atraco.

Todo lo expuesto quedará demostrado con los testimonios que van a rendir el agraviado, los policías intervinientes, la testigo S quien vio cómo es que el vehículo llega por esa zona - el vehículo que intercepta al agraviado-; con el examen pericial del PNP D, perito criminalístico a fin que detalle los aspectos referidos a su inspección criminalística en el lugar de los hechos; el examen pericial del médico legista que vio al agraviado donde se le recomienda descanso médico y se describe lesiones de tres por nueve; además sustentará su teoría con los documentos como el acta de intervención, las actas de registro personal, los documentos referidos a la preexistencia del vehículo, la tarjeta de propiedad, tomas fotográficas, entre otros.

El Ministerio Público estará solicitando que al acusado se le imponga una pena de trece años de pena privativa de la libertad y mil nuevos soles de reparación civil.

2.2.2.5.2 La pena fijada en la sentencia en estudio

De acuerdo al contenido de la sentencia la pena fijada fue: trece años de pena privativa de libertad efectiva (Expediente N°3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

2.2.2.5.3. La reparación civil fijada en la sentencia en estudio

La reparación civil fijada fue de S/. 1 000.00 nuevos soles, en favor de la parte agraviada (Expediente N°3110-2011-48-1706-JR-PE-01)

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos (Real Academia Española, 2001).

Calidad. Modo de ser. Carácter o índole. Condición o requisito de un pacto. Nobleza de linaje. Estado, naturaleza, edad y otros datos personales o condiciones que se exigen para determinados puestos, funciones y dignidades (Ossorio, 1996, p. 132).

Calidad. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie (Diccionario de la Lengua Española, s.f., párr. 2).

Corte Superior de Justicia. Es aquel órgano que ejerce las funciones de un tribunal de última instancia (Lex Jurídica, 2012).

Distrito Judicial. Demarcación establecida en las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial, para determinar los alcances de la jurisdicción de los tribunales y los juzgados. En el derecho procesal dicese de la circunscripción territorial sobre la que se extiende la competencia de una jurisdicción (Diccionario jurídico fundamental 2002).

Expediente. Es la carpeta material en la que se recopilan todos las actuaciones judiciales y recaudos que se establecen en un proceso judicial de un caso concreto (Lex Jurídica, 2012).

Inherente. Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo (Diccionario de la lengua española, s.f. párr.2).

Juzgado Penal. Es aquel órgano investido de poder jurisdiccional con competencia establecida para resolver casos penales (Lex Jurídica, 2012).

Máximas. Principio de derecho aceptado únicamente para interpretar un texto, resolver una situación o aplicarlo a un problema o caso jurídico (Ossorio, 1996).

Medios probatorios. Son las actuaciones que, dentro de un proceso judicial, cualquiera que sea su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de los hechos aducidos en el juicio (Lex Jurídica, 2012).

Parámetro(s). Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación (Real Academia Española, 2001).

Primera instancia. Es la primera jerarquía competencial en que inicia un proceso judicial (Lex Jurídica, 2012).

Rango. Amplitud de la variación de un fenómeno entre un mínimo y un máximo, claramente especificados (Diccionario de la lengua española. s.f. párr.2).

Sala Penal. Es aquel órgano que ejerce las funciones de juzgamiento de los procesos ordinarios y de apelación en los procesos sumarios (Lex Jurídica, 2012).

Segunda instancia. Es la segunda jerarquía competencial en que inicia un proceso judicial (Lex Jurídica, 2012).

Sentencia de calidad de rango alta. Calificación asignada a la sentencia analizada, **sin intensificar sus propiedades y el valor obtenido, no obstante su aproximación**, al que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio ((Muñoz, 2014).

Sentencia de calidad de rango baja. Calificación asignada a la sentencia analizada, **sin intensificar sus propiedades y el valor obtenido, no obstante su tendencia a alejarse**, del que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014).

Sentencia de calidad de rango mediana. Calificación asignada a la sentencia analizada **con propiedades intermedias**, cuyo valor se ubica entre un mínimo y un máximo pre establecido para una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014).

Sentencia de calidad de rango muy alta. Calificación asignada a la sentencia analizada, **intensificando sus propiedades y el valor obtenido, por su tendencia a aproximarse** al que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014).

Sentencia de calidad de rango muy baja. Calificación asignada a la sentencia analizada, **intensificando sus propiedades y el valor obtenido, por su tendencia a alejarse,** del que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014).

Variable. Justiprecio. Cálculo o apreciación del valor de las cosas. Aumento del precio de algo, por cualesquiera circunstancias (Ossorio, 1996).

III. METODOLOGIA

3.1. Tipo y nivel de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación. La investigación es de tipo cuantitativa – cualitativa (Mixta).

Cuantitativa. La investigación se inicia con el planteamiento de un problema de investigación, delimitado y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del objeto de estudio y el marco teórico que guía la investigación es elaborado sobre la base de la revisión de la literatura (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En perfil cuantitativo se evidencia en el uso intenso de la revisión de la literatura; en el presente trabajo facilitó la formulación del problema de investigación; los objetivos de la investigación; la operacionalización de la variable; la construcción del instrumento para recoger los datos; el procedimiento de recolección de datos y el análisis de los resultados.

Cualitativa. La investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa está centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

El perfil cualitativo se evidencia en la recolección de datos que requirió de la concurrencia del análisis para identificar a los indicadores de la variable. Además; la sentencia (objeto de estudio) es el producto del accionar humano, quien a título de representante del Estado en el interior de un proceso judicial (Juez unipersonal o colegiado) decide(n) sobre un conflicto de intereses de índole privado o público. Por lo tanto, la extracción de datos implicó interpretar su contenido para alcanzar los resultados. Dicho logro, evidenció la realización de acciones sistemáticas: a) sumergirse en el contexto perteneciente a la sentencia; es decir, hubo revisión sistemática y exhaustiva del proceso judicial documentado (Expediente judicial) con el propósito de comprenderla y b) volver a sumergirse; pero, ésta vez en el contexto específico, perteneciente a la propia

sentencia; es decir, ingresar a cada uno de sus compartimentos y recorrerlos palmariamente para recoger los datos (indicadores de la variable).

Su perfil mixto, se evidencia en que, la recolección y el análisis no son acciones que se manifestaron sucesivamente; sino, simultáneamente al cual se sumó el uso intenso de las bases teóricas: contenidos de tipo procesal y sustantivo; pertinentes, con los cuales se vinculó la pretensión judicializada o hecho investigado; esto fue, para interpretar y comprender a las sentencias y, sobre todo, reconocer dentro de ella a los indicadores de calidad: variable de estudio.

3.1.2. Nivel de investigación. El nivel de la investigación es exploratoria y descriptiva.

Exploratoria. Se trata de un estudio que se aproxima y explora contextos poco estudiados; además la revisión de la literatura reveló pocos estudios respecto de la calidad del objeto de estudio (sentencias) y la intención fue indagar nuevas perspectivas (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

El nivel exploratorio se evidenció en varios aspectos de la investigación; la inserción de antecedentes no ha sido sencilla, se hallaron trabajos aislados, de tipo interpretativo, donde el objeto estudiado fueron resoluciones judiciales (sentencias); pero, la variable en estudio fueron diferentes, por ejemplo: la identificación de la sana crítica, la valoración de las pruebas, la motivación; etc., pero respecto de la calidad, no se hallaron. Fuera de ello, los resultados obtenidos todavía son debatibles; además, las decisiones de los jueces comprenden elementos complejos como el principio de equidad y la justicia y su materialización dependerá del contexto específico donde fueron aplicados, no se puede generalizar.

Descriptiva. Se trata de un estudio que describe propiedades o características del objeto de estudio; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en describir el fenómeno; basada en la detección de características específicas. Además, la recolección de la información sobre la variable y sus componentes, se realiza de manera independiente y conjunta, para luego someterlos al análisis (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En opinión de Mejía (2004) en las investigaciones descriptivas el fenómeno es sometido a un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases teóricas para facilitar la identificación de las características existentes en él para luego estar en condiciones de definir su perfil y arribar a la determinación de la variable.

El nivel descriptivo, se evidenció en diversas etapas del trabajo: 1) en la selección de la unidad de análisis (expediente judicial); porque, el proceso judicial registrado en su contenido, tuvo que reunir condiciones pre establecidas para facilitar la realización de la investigación (Ver 3.3. de la metodología); y 2) en la recolección y análisis de los datos, establecidos en el instrumento; porque, estuvo direccionado al hallazgo de un conjunto de características o propiedades, que según las bases teóricas, debe reunir una sentencia (puntos de coincidencia o aproximación entre las fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial).

3.2. Diseño de la investigación

No experimental. El estudio del fenómeno es conforme se manifestó en su contexto natural; en consecuencia los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad de la investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Retrospectiva. La planificación y recolección de datos comprende un fenómeno ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Transversal. La recolección de datos para determinar la variable, proviene de un fenómeno cuya versión corresponde a un momento específico del desarrollo del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En el presente estudio, no se manipuló la variable; por el contrario las técnicas de la observación y análisis de contenido se aplicaron al fenómeno en su estado normal, conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado.

En otros términos, la característica no experimental, se evidencia en la recolección de

datos sobre la variable: calidad de las sentencias; porque, se aplicó en una versión original, real y completa sin alterar su esencia (Ver punto 3.8 de la metodología). Asimismo, su perfil retrospectivo se evidencia en el mismo objeto de estudio (sentencias); porque pertenece a un tiempo pasado, además acceder al expediente judicial que lo contiene solo es viable cuando desaparece el principio de reserva del proceso; antes es imposible que un tercero pueda revisarlo. Finalmente, su aspecto transversal, se evidenció en la recolección de datos para alcanzar los resultados; porque los datos se extrajeron de un contenido de tipo documental donde quedó registrado el objeto de estudio (sentencias); en consecuencia, no cambió siempre mantuvo su estado único conforme ocurrió por única vez en un determinado transcurso del tiempo.

3.3. Unidad de análisis

Las unidades de análisis: “Son los elementos en los que recae la obtención de información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a quienes se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información (Centty, 2006, p. 69).

De otro lado las unidades de análisis se pueden escoger aplicando los procedimientos probabilísticos y los no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó el procedimiento no probabilístico; es decir, aquellas que “(...) no utilizan la ley del azar ni el cálculo de probabilidades (...). El muestreo no probabilístico asume varias formas: el muestreo por juicio o criterio del investigador, el muestreo por cuota y muestreo accidental. Arista, (citado por Ñaupás, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2013; p. 211).

En el presente trabajo la selección de la unidad de análisis se realizó mediante el muestreo no probabilístico; específicamente, el muestreo o criterio del investigador. Que, según Casal y Mateu (2003) se denomina muestreo no probabilístico, llamado técnica por conveniencia; porque, es el mismo investigador quien establece las condiciones para seleccionar una unidad de análisis

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo representada por un expediente

judicial, porque de acuerdo a la línea de investigación (ULADECH, 2013) es un recurso o base documental que facilita la elaboración de la investigación, los criterios relevantes para ser seleccionado fueron: : proceso penal donde el hecho investigado fue un delito; con interacción de ambas partes; concluido por sentencia producto del desarrollo normal del proceso judicial; con decisiones condenatorias; cuya fue pena principal aplicadas en la sentencias fue, la pena privativa de Lambayeque; con participación de dos órganos jurisdiccionales (en primera y segunda instancia); pertenecientes al Distrito Judicial de Chiclayo.

Al interior del proceso judicial se halló: el objeto de estudio, estos fueron, las dos sentencias, de primera y de segunda instancia.

En el presente trabajo los datos que identifican a la unidad de análisis fueron: N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, hecho investigado para el delito de robo agravado, tramitado siguiendo las reglas del proceso común; perteneciente a los archivos del Juzgado Penal Colegiado; situado en la localidad de Chiclayo, comprensión del Distrito Judicial de Lambayeque .

La evidencia empírica del objeto de estudio; es decir, las sentencias estudiadas se encuentra ubicadas en el **anexo 1**; estos se conservan en su esencia, la única sustitución aplicada a su contenido fueron, en los datos de identidad pertenecientes a las personas naturales y jurídicas mencionadas en el texto; porque a cada uno se les asignó un código (A, B, C, etc.) por cuestiones éticas y respeto a la dignidad.

3.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64):

“Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes del

todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera adecuada”.

En el presente trabajo la variable fue: la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia.

La calidad, según la Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) es un conjunto características de un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f).

En términos judiciales, una sentencia de calidad es aquella que evidencia poseer un conjunto de características o indicadores establecidos en fuentes que desarrollan su contenido. En el ámbito del derecho, las fuentes que desarrollan el contenido de una sentencia son fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial.

Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone:

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su demostración.

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores son manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162).

En el presente trabajo, los indicadores son aspectos reconocibles en el contenido de las sentencias; específicamente exigencias o condiciones establecidas en la ley y la Constitución; los cuales son aspectos puntuales en los cuales las fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial, consultados; coincidieron o tienen una estrecha aproximación. En la literatura existen indicadores de nivel más abstracto y complejo;

pero, en el presente trabajo la selección de los indicadores, se realizó tomando en cuenta el nivel pre grado de los estudiantes.

Asimismo; el número de indicadores para cada una de las sub dimensiones de la variable solo fueron cinco, esto fue, para facilitar el manejo de la metodología diseñada para el presente estudio; además, dicha condición contribuyó a delimitar en cinco niveles o rangos la calidad prevista, estos fueron: muy alta, alta, mediana, baja y muy baja.

En términos conceptuales la calidad de rango muy alta, es equivalente a calidad total; es decir, cuando se cumplan todos los indicadores establecidos en el presente estudio. Éste nivel de calidad total, se constituye en un referente para delimitar los otros niveles. La definición de cada una de ellas, se encuentra establecida en el marco conceptual.

La operacionalización de la variable se encuentra en el **anexo 2**.

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Para el recojo de datos se aplicaron las técnicas de la *observación*: punto de partida del conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y *el análisis de contenido*: punto de partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta con captar el sentido superficial o manifiesto de un texto sino llegar a su contenido profundo y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013).

Ambas técnicas se aplicaron en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial existente en los expedientes judiciales; en la interpretación del contenido de las sentencias; en la recolección de datos al interior de las sentencias, en el análisis de los resultados, respectivamente.

Respecto al instrumento: es el medio a través del cual se obtendrá la información relevante sobre la variable en estudio. Uno de ellos es la lista de cotejo y se trata de un

instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: sí, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros (SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2do y 4to párrafo)

En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo (**anexo 3**), éste se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado, mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f) que consiste en la revisión de contenido y forma efectuada por profesionales expertos en un determinado tema. El instrumento presenta los indicadores de la variable; es decir, los criterios o ítems a recolectar en el texto de las sentencias; se trata de un conjunto de parámetros de calidad, preestablecidos en la línea de investigación, para ser aplicados a nivel pre grado.

Se denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las sentencias; porque son aspectos específicos en los cuales coinciden o existe aproximación estrecha entre las fuentes que abordan a la sentencia, que son de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial; respectivamente.

3.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los objetivos específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar las técnicas de la observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de cotejo, usando a su vez, las bases teóricas para asegurar la asertividad en la identificación de los datos buscados en el texto de las sentencias.

Asimismo, corresponde destacar que las actividades de recolección y análisis fueron simultáneas que se ejecutaron por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz González (2008). (*La separación de las dos actividades solo obedece a la necesidad de especificidad*).

3.6.1. De la recolección de datos

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en el anexo 4, denominado: Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de la variable.

3.6.2. Del plan de análisis de datos

3.6.2.1. La primera etapa. Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación; donde cada momento de revisión y comprensión fue una conquista; es decir, un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concretó, el contacto inicial con la recolección de datos.

3.6.2.2. Segunda etapa. También fue una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación de los datos.

3.6.2.3. La tercera etapa. Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza más consistente, fue un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y la revisión de la literatura.

Estas actividades se evidenciaron desde el instante en que el investigador(a) aplicó la observación y el análisis en el objeto de estudio; es decir las sentencias, que resulta ser un fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, lo cual quedó documentado en el expediente judicial; es decir, en la unidad de análisis, como es natural a la primera revisión la intención no es precisamente recoger datos; sino, reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la revisión de la literatura.

Acto seguido, el(a) investigador(a) empoderado(a) de mayor dominio de las bases teóricas, manejó la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los objetivos específicos inició el recojo de datos, extrayéndolos del texto de la sentencia al instrumento de recolección de datos; es decir, la lista de cotejo, lo cual fue revisado en varias ocasiones. Esta actividad, concluyó con una actividad de mayor exigencia observacional, sistémica y analítica, tomando como referente la revisión de la literatura, cuyo dominio fue fundamental para proceder a aplicar el instrumento y la descripción especificada en el anexo 4.

Finalmente, los resultados surgieron del ordenamiento de los datos, en base al hallazgo de los indicadores o parámetros de calidad en el texto de las sentencias en estudio, conforme a la descripción realizada en el anexo 4.

La autoría de la elaboración del instrumento, recojo, sistematización de los datos para obtener los resultados y el diseño de los cuadros de resultados le corresponden a la docente: Dione Loayza Muñoz Rosas.

3.7. Matriz de consistencia lógica

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” (p. 402).

Por su parte, Campos (2010) expone: “Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” (p. 3).

En el presente trabajo la matriz de consistencia será básica: problema de investigación y objetivo de investigación; general y específicos; respectivamente. No se

presenta la hipótesis, porque la investigación es de carácter univariado y de nivel exploratorio descriptivo. Dejando la variable e indicadores y la metodología a los demás puntos expuestos en la presente investigación.

En términos generales, la matriz de consistencia sirve para asegurar el orden, y asegurar la científicidad del estudio, que se evidencia en la logicidad de la investigación.

A continuación la matriz de consistencia de la presente investigación en su modelo básico.

Título: Calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado; con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
GENERAL	¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque; Chiclayo 2016?	Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque; Chiclayo 2016.
ESPECÍFICOS	Sub problemas de investigación /problemas específicos	Objetivos específicos
	<i>Respecto de la sentencia de primera instancia</i>	<i>Respecto de la sentencia de primera instancia</i>
	¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la introducción y la postura de las partes?	Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la introducción y la postura de las partes.
	¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil?	Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil.
	¿Cuál es la calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión?	Determinar la calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.
	<i>Respecto de la sentencia de segunda instancia</i>	<i>Respecto de la sentencia de segunda instancia</i>
	¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la introducción y las postura de las partes?	Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la introducción y la postura de las partes.
	¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda	Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la motivación de

	instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil?	los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil.
	¿Cuál es la calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión?	Determinar la calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia, con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.

3.8. Principios éticos

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a lineamientos éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). Se asumió, compromisos éticos antes, durante y después del proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad y Morales, 2005).

Para cumplir con ésta exigencia, inherente a la investigación, se ha suscrito una Declaración de compromiso ético, en el cual el investigador(a) asume la obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, éste se evidencia como anexo 5. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se reveló los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas en el proceso judicial.

3.9. Hipótesis

El estudio no evidencia hipótesis; porque comprende el estudio de una sola variable (Calidad de las sentencias). Además, el nivel del estudio es exploratorio descriptivo y en lo que respecta al objeto (sentencias) existen pocos estudios. Por estas razones el estudio se orientó por los objetivos.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados

Cuadro 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre robo agravado; con énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Parte expositiva de la sentencia de primera instancia	Evidencia Empírica	Parámetros	Calidad de la introducción, y de la postura de las partes					Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia					
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy Alta	Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy Alta	
			1	2	3	4	5	[1 - 2]	[3 - 4]	[5 - 6]	[7 - 8]	[9-10]	
Introducción	<p style="text-align: center;">CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE JUZGADO PENAL COLEGIADO EXP. N°: 3110-201</p> <p>EXPEDIENTE : 3110-2011-48-1706-JR-PE-01 IMPUTADO : B DELITO : ROBO AGRAVADO AGRAVIADO : A ESP. DE SALA : PEDRO SANTA MARÍA VERGARA ESP. DE AUDIENCIA: M</p> <p style="text-align: center;">S E N T E N C I A</p> <p>Resolución número: SEIS Picsí, nueve de mayo del Año dos mil doce.</p> <p style="text-align: center;">VISTA en audiencia oral y pública la presente causa, interviniendo como Director de Debate el magistrado Guillermo Piscoya, se procede a dictar sentencia bajo los términos siguientes:</p> <p>I. <u>PARTE EXPOSITIVA:</u></p>	<p>1. El encabezamiento evidencia: <i>la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/la identidad de las partes, en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple</i></p> <p>2. Evidencia el asunto: <i>¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá. Si cumple</i></p> <p>3. Evidencia la individualización del acusado: <i>Evidencia datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple</i></p> <p>4. Evidencia aspectos del proceso: <i>el contenido explícita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas provisionales adoptadas durante el proceso, cuestiones de</i></p>					X						10

	<p>1.1. <u>Sujetos procesales:</u></p> <p>a) Parte acusadora: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.</p> <p>b) Parte acusada: B, con DNI N° 41934215, natural del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, nacido el dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y tres, de veintiocho años de edad, hijo de X. y Y., con domicilio en Manzana F Lote 20 del pueblo joven Nueva Esperanza - Chiclayo.</p> <p>c) Parte agraviada: A.</p>	<p>competencia o nulidades resueltas, otros. Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</i></p>											
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Postura de las partes</p>	<p>1.2. <u>Alegatos iniciales:</u></p> <p>a) Del fiscal:</p> <p>El día dos de agosto del años dos mil once a las veinte horas con treinta minutos aproximadamente, el agraviado A se encontraba entre las avenidas Pedro Ruiz y Luís Gonzáles de esta ciudad realizando servicio de colectivo en la ruta Chiclayo la pradera y viceversa, en esas circunstancias suben cinco personas entre ellos una fémina, por lo que el agraviado se dirige por su ruta normal con dirección a La Pradera, sin embargo cuando el agraviado se encontraba a la altura de la empresa Café Perú, volteando por la universidad San Martín, un automóvil tipo matiz marca Chevrolet con farola taxi “La Cuzqueña” -que estaba con la maletera abierta- abruptamente lo pasa, lo cruza y obliga al agraviado a que este sobrepase; en esas circunstancias los que estaban dentro del vehículo le dicen “ya perdiste”, le mientan la madre, sacan armas de fuego, lo encañonan y con la cacha del arma de fuego le impactan en el cráneo causándole lesiones en éste y en el rostro ya que fueron varios impactos con esta arma de fuego; la fémina que se encontraba en el interior del vehículo del agraviado opta</p>	<p>1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple</p> <p>2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple</p> <p>3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple</p> <p>4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</i></p>				<p style="text-align: center;">X</p>							

	<p>por salir inmediatamente y se refugia en el vehículo que había interceptado el vehículo del agraviado. Mientras todo ello sucedía, los que estaban dentro del vehículo, es decir los cuatro sujetos que quedaron, logran poner al agraviado en la parte posterior, uno de ellos baja, toma el volante y se dirigen por atrás de la universidad San Martín por la Urbanización La Pradera, pueblo joven Santa Julia y dejan abandonado al agraviado con cintas adhesivas en las manos y en la boca, y se llevan el vehículo con rumbo a la ciudad de Chiclayo. El agraviado logra despojarse de estas ataduras y el capitán PNP R acude al lugar de los hechos al ser informado por la central cinco de este robo, ve al agraviado y le presta auxilio.</p> <p>El Ministerio Público va a demostrar que quien conducía el vehículo que interceptó al agraviado fue el acusado B quien dentro del plan delictivo tenía como roles, no solo interceptar al vehículo del agraviado, sino también sacar del lugar del asalto a la fémina con dirección al pueblo joven Santa Julia hacia la pista antigua de la caleta San José, donde después de dejar a la fémina y a su regreso, el vehículo sufre un desperfecto, esto es, se pincha una llanta, el acusado baja del vehículo y apaga las luces para no levantar sospechas. En estas circunstancias el sub oficial PNP G y el capitán PNP R llegaron a ese lugar – al haber sido informados por los propios vecinos del lugar y por los pobladores que el vehículo que había interceptado el agraviado había huido por ese lugar- e intervienen al acusado. Como habían ido conjuntamente con el agraviado, éste inmediatamente reconoce al vehículo que lo interceptó y reconoce al imputado como la persona que conducía dicho vehículo, este vehículo fue identificado como automóvil con farola, marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Life, de placa de rodaje M2M-627.</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Precisa que se probará que el vehículo del agraviado fue recuperado con el pago posterior de un cupo a otros sujetos sin identificar, lo que ha sido materia de otra investigación.</p> <p>El comportamiento del acusado se subsume en el delito de robo modalidad de robo agravado que se encuentra tipificado en el artículo 188° como tipo base y artículo 189° incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del Código Penal; es decir, durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, utilizando medios de locomoción y sobre vehículo automotor. Se va a probar que el acusado participó en coautoría funcional con los demás sujetos repartiéndose roles para su atraco.</p> <p>Todo lo expuesto quedará demostrado con los testimonios que van a rendir el agraviado, los policías intervinientes, la testigo S. quien vio como es que el vehículo llega por esa zona - el vehículo que intercepta al agraviado-; con el examen pericial del PNP C, perito criminalístico a fin que detalle los aspectos referidos a su inspección criminalística en el lugar de los hechos; el examen pericial del médico legista que vio al agraviado donde se le recomienda descanso medico y se describe lesiones de tres por nueve; además sustentará su teoría con los documentos como el acta de intervención, las actas de registro personal, los documentos referidos a la preexistencia del vehículo, la tarjeta de propiedad, tomas fotográficas, entre otros. El Ministerio Público estará solicitando que al acusado se le imponga una pena de trece años de pena privativa de la libertad y mil nuevos soles de reparación civil.</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) De la defensora del acusado.

Demostrará que el señor B no es la persona que interceptó al presunto agraviado el día de los hechos, con la declaración contradictoria del agraviado, las actas de intervención, las actas de registro vehicular y fotografías que ha presentado. Respecto a la intervención de la policía, señala que B se encontraba arreglando su llanta que había sido pinchada. Los testigos que el Ministerio Público ha ofrecido contradicen la declaración del agraviado. Si bien es cierto la policía intervino a su patrocinado, en Chiclayo y a nivel nacional no es el único vehículo con farola “La Cuzqueña” si no que existen muchos vehículos modelos matices y otros modelos con el mismo color que el agraviado ha descrito. Va demostrar la inocencia de su patrocinado y de la reparación civil.

1.3. Posición del acusado frente a la acusación.

Luego que se le explicara los derechos que le asistían en juicio y la posibilidad de que la presente causa termine mediante conclusión anticipada, el acusado previa consulta con su abogada defensora, manifestó que **no se considera autor del delito materia de acusación ni responsable de la reparación civil.**

1.4. Actividad Probatoria.

1.4.1. Examen del Acusado.

El acusado manifestó su decisión de guardar silencio, haciéndole conocer que conforme al artículo 371° del Código Procesal Penal, en la estación correspondiente se oralizarían sus declaraciones prestadas en sede fiscal.

1.4.2. Del Ministerio Público.

1.4.2.1. Prueba Testimonial.

f) Testimonial del agraviado A.

Al interrogatorio dijo que trabaja como chofer en La, el día dos de agosto del dos mil once venía prestando servicio a La Pradera, como a las siete de la noche hacía su última vuelta, en Pedro Ruiz y Luís Gonzáles subieron cinco sujetos, entre ellos una mujer que se puso a su respaldar, se llenó el carro y se dirigió hacia La Pradera, la mujer se enterró contra su asiento, no levantaba la cara, y ahí le dio un poquito de miedo; bajó por la otra pista y un carro estaba parado, cuando iba a pasar vino y de frente me metió el carro, se sale de la pista para no chocarse, le jalen la llave y le dicen “ya perdiste concha de tu madre”, la mujer baja y se mete al Chevrolet que estaba con la maletera levantada, reconoce al señor que le metió el carro porque era con luces, luego los agarraron, le metieron tres cachazos de revolver y lo sacan para atrás, pero el declarante no baja sino que bajó el que estaba a su costado, toma la llave y maneja, el carro avanza, se va y da la vuelta por la San Martín, lo llevan encintado de la boca, de sus manos y sus pies, lo botan por Santa Julia y su carro regresa para Chiclayo. El otro carro se va para San José. Luego lo recoge un patrullero, lo lleva a Las Mercedes para coserlo y dentro de un ratito, el otro patrullero que avanzó para adentro, lo

	<p>llama que el carro se encontraba votado por un accesorio malogrado, se dirige hasta el lugar y reconozco al señor y al mismo carro que le había cerrado, y de ahí lo trajeron a la comisaría; perdió el conocimiento no sabía dónde me encontraba; reconoció al acusado en la audiencia del juicio; el lugar era oscuro y cuando llegó al lugar con el patrullero, él dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces el patrullero le dice “de que cholo me hablas” y él dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces lo hicieron subir para que los acompañe a la comisaría, lo subieron atrás y al declarante adelante, y lo trajeron a la comisaría. El vehículo que lo interceptó era un color plomo con la farola de taxi “La Cuzqueña”, el número de teléfono no se le veía porque iba con la maletera alzada, cuando le mete el carro vio que decía taxi “La Cuzqueña”. El representante del Ministerio Público actuó cuatros fotografías correspondientes al vehículo que conduce el acusado; el agraviado luego de visualizar las mismas refieren que pertenecen al vehículo que lo interceptó, un carro plomo, Chevrolet, con farola blanca taxi “La Cuzqueña”, es de un modelo asimilado al tico. Al contrainterrogatorio dijo que las personas que subieron a su vehículo fueron dos hombres que se sentaron adelante y dos hombres atrás y una mujer a su respaldar; su reacción fue mirar al que lo intercepta, al que le cruza el carro, lo miró al toque porque lo iba a resontrar porque cada chofer tiene la costumbre de resontrar al que te mete el carro, entonces el declarante lo quedó mirando, cuando al toquecito le jalaron la llave y él se cuadra adelante con la maletera levantada; lo adelantó por el lado izquierdo; cuando le cruzan el carro la mujer baja de su carro y se mete al Chevrolet, los cuatro más se van con el declarante, le rompen la cabeza y lo pasan para atrás, se lo llevan al carro, es decir, lo sacan del volante y lo meten atrás, el declarante iba que lo miraba y lo miraba, más allá le dan</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>otro cachazo de revolver, lo voltean y ya no ve hasta que volteo a la San Martín, sólo iba mirando arriba, como es alumbrado, sabía que lo llevaban para Santa Julia; el que lo interceptó miró cuando el declarante venía, él ha estado abajo, sube su carro corriendo, se baja de la pista de Pimentel -porque él ha estado cuadrado arriba por la pista de Pimentel- se baja rapidito, viene y le mete el carro, el declarante para no chocar su carro porque era nuevo, ha frenado y ahí es donde le han jalado la llave; en ese ratito no iba a ver si portaban arma, pero cuando la mujer baja, le jalan la llave y lo pasan para atrás, sacan el revólver y le dan. Ya había bajado la mujer, pero como el declarante no quería salir del volante, entonces ahí le han dado para quitarlo de ahí y manejara el otro; las personas le dijeron “baja concha de tu madre”, “ya perdiste”. La defensora para impugnar credibilidad ingresa la pregunta y respuesta número tres prestada por el acusado durante la etapa de investigación; respecto a la distancia en que los dejaron refiere que no podría calcular, más de un kilómetro por lo menos, a velocidad, de diez a quince minutos; hasta el lugar donde fue intervenido el acusado hay unos quince minutos a toda velocidad, pero despacio será unos veinte.</p> <p>g) Testimonial del efectivo policial Capitán PNP R.</p> <p>Al interrogatorio dijo que en agosto del dos mil once estaba laborando en la Comisaría del Norte de Chiclayo; tuvo una intervención con respecto a una llamada radial donde se hacía mención que un taxista había sido asaltado, golpeado y que se encontraba por el pueblo joven Juan Pablo II; inmediatamente a bordo de una unidad móvil policial se constituyeron al lugar, comenzamos a rondar la zona por donde más o menos les indicaba la comunicación radial y encontraron a una persona ensangrentada, con</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sangre en la cabeza y en su cuerpo, estaba mal herida como si tuviera desmayos y se sentía mal; él le indicó que le habían tomado una carrera por el lugar La Pradera cuatro sujetos y dentro de uno de ellos una fémina, en total son cinco; por el pueblo joven Juan Pablo II un vehículo le intercepta, y es ahí donde uno de los cuatro sujetos que iba a bordo de su vehículo, con arma de fuego le quitaron su vehículo, a base de eso seguramente opuso resistencia . Al recibir la comunicación radial inmediatamente se irradia a los demás vehículos y tripulación que está en la zona, aparte de ello se da las características del vehículo que ha sido robado, hasta donde recuerdo era un vehículo color plomo, marca Chevrolet, tenía farola pero el nombre no la recuerdo; cuando llegan al lugar encontraron al agraviado ensangrentado, golpeado, y lo primero que se hace es auxiliar a la persona; cuando estaban dirigiéndose con trayecto al hospital, recibió una comunicación que por el lugar Juan Pablo II, en un ingreso de trocha carrozable a Santa Julia habían encontrado un vehículo con las mismas características que daba el agraviado; razón por la cual retornó con el agraviado para que haga el reconocimiento, inmediatamente dio la vuelta, fue al lugar y el agraviado directamente dijo “sí, esta es la persona que participó, y éste es el vehículo que me cerró el paso”, lo hizo directamente, ni siquiera dudo, por ese motivo intervinieron a la persona y fue conducida a la comisaría conjuntamente con el vehículo; cuando llegó al lugar, el vehículo estaba apagado, sin luces, con una llanta en el suelo y unas llaves que recién me las habían puesto, porque los pernos estaban sin ajustar. Al contrainterrogatorio dijo que cuando se hace una comunicación radial en el vehículo va el chofer y el operador; en el lugar encontró un vehículo policial de la Comisaría del Norte y un vehículo del Escuadrón de Emergencia, el que había encontrado el vehículo fue el</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

patrullero, la tripulación de la Comisaría del Norte; la que intervino al señor G fue la unidad policial de la Comisaría del Norte, la comunicación radial fue un aproximadamente ocho y media de la noche, pero exactamente no puedo certificar la hora de la intervención por el tiempo que ha transcurrido; en el lugar de la intervención no hay casas, es una zona oscura a ambos lados del camino, hay montes, más atrás hay chacras, pero las casas están distantes, en esa época. **La defensa actúa el acta de intervención policial;** refiere el testigo que en el momento de la intervención no había ninguna fémina; no puede indicar exactamente el nombre de los oficiales que estuvieron con él el día de la intervención porque la Comisaría del Norte tiene tres unidades móviles, y no recuerdo quienes estuvieron de chofer u operador en esa época. **Al redirecto del fiscal** dijo que primeramente el agraviado dicen fueron cinco personas dentro de ellos una fémina, seguramente se ha tratado de los cuatro sujetos que lo encañonaron, se ha referido a los cuatro varones, pero esa respuesta la debe dar la persona agraviada porque él es el que iba ahí, eso es lo que él le refirió.

h) Testimonial del efectivo policial SOS PNP G.

Al interrogatorio dijo que en agosto trabajaba en una tripulación de una unidad móvil que está asignada a la Comisaría PNP del Norte; el día dos de agosto del dos mil once se encontraba patrullando por la jurisdicción del pueblo joven José Olaya a bordo de la unidad móvil 10168, fueron desplazados por orden de la central 105 de la policía a fin de apoyar a una unidad móvil, donde había sido asaltada una persona; inmediatamente se dirigió al lugar a fin de apoyar a esa unidad móvil que estaba al mando del

	<p>capitán R, en donde moradores del lugar indicaron que una persona había sido asaltada por delincuentes a bordo de un vehículo, versiones de los moradores indicaron que después del asalto un vehículo se había desplazado por la jurisdicción de un caserío Santa Lucia, por una trocha carrozable han iniciado el patrullaje respectivo con el apoyo de patrulleros del escuadrón de emergencia y han ubicado a un vehículo estacionado en una trocha carrozable, con las luces apagadas; su función fue bajar del patrullero a fin de intervenir al conductor que se encontraba debajo del vehículo; al interrogarlo indicó que se le había pinchado una llanta y que estaba arreglando ese neumático; el motivo de la intervención de dicho vehículo fue porque se tuvo conocimiento que habían asaltado a una persona en la jurisdicción de La Pradera y por las características del vehículo empezaron a intervenir a fin de identificar a dicho conductor y posteriormente se comunicó al capitán Benavides que estaba con el agraviado que había sido víctima del asalto; éstos se constituyeron al lugar de los hechos, y el agraviado reconoció que esa persona había participado en el asalto, entonces por orden del capitán G se condujo al intervenido a la Comisaría del Norte para seguir con la diligencias respectivas; el señor indicó que había hecho un servicio de taxi a ese lugar y después de dejar esa carrera estaba retornando a su zona de trabajo y se había pinchado esa llanta, razón por la cual se le encontró debajo de la llanta; el vehículo estaba estacionado en una trocha carrozable, las características eran vehículo plomo, con una farola modelo Chevrolet, el lugar estaba oscuro, es un tipo chacra, no hay casas alrededor, y el vehículo estaba estacionado, parado; inmediatamente lo condujeron a la Comisaría del Norte y se efectuó el respectivo registro personal, recuerda que se le encontró en su poder dos billetes de cincuenta nuevos soles y uno al parecer era falso,</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>también se le encontró un celular, su licencia de conducir y su DNI; aclara que no se trata del pueblo joven Santa Lucía, sino del caserío Santa Julia; reitera que las luces del vehículo se encontraban apagadas. Al contrainterrogatorio dijo que se constituyó al lugar donde se había producido el asalto de esa persona y moradores del lugar indicaron las características del vehículo, y por las características del vehículo se interviene policialmente en ese lugar al vehículo que presuntamente había participado en el hecho; él me comunicó por medio de la central 105 que se trataba de ese tipo de vehículo. le dio las características; todas las actas se levantaron en la Comisaría del Norte, en el lugar de los hechos no se hizo ninguna acta, solamente se intervino policialmente, se identificó a la persona, y por la zona que es oscura, el lugar no era adecuado para hacer la respectiva documentación; por orden del capitán dispuso que se conduzca a la Comisaría del Norte y en este lugar se hicieron todas las diligencias respectivas; aparte del acta de registro personal se llevó a cabo un acta de situación vehicular del vehículo donde se consigna todos los accesorios del vehículo para entregarlo a su dueño sin ninguna novedad; también se llevó a cabo el acta de registro vehicular y no se encontró alguna arma. La defensora actuó el acta de registro vehicular y cuando se le pregunta al testigo porqué se consignó positivo para armas y municiones, responde que probablemente haya sido un error de imprenta, porque no se encontró ningún tipo de munición ni arma; en la comisaría se levantó el acta de registro personal y la firmó el declarante; sí le indicó al intervenido que tiene todo el derecho de comunicarse con algún familiar para que esté presente para hacer el acta de registro personal, pero él le refirió que por el momento no tenía ningún familiar para que se pueda comunicar. Al redirecto del fiscal dijo que recuerda que se confeccionó el</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>acta de registro personal, el registro de buen trato, el registro del imputado y el acta de registro vehicular. El acta de intervención la levantó el capitán Benavides toda vez de que él estaba a cargo de la intervención policial y el declarante solamente fui de apoyo a él; respecto al error de consignarse el arma en el registro vehicular dijo que por problema del apuro, en este caso ha habido un error de imprenta toda vez que se imprimió en la computadora el documento, pero el declarante ya había hecho el registro vehicular que no había ningún tipo de arma.</p> <p>i) Testimonial de V. El fiscal prescindió de la actuación de éste órgano de prueba por no haber concurrido a juicio.</p> <p>j) Testimonial de S Mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de abril del dos mil doce se dispuso la oralización de su declaración prestada en sede fiscal.</p> <p>El fiscal refiere que con esta acta demuestra que el vehículo venia a toda velocidad y apagó las luces por esa zona oscura para arreglar una llanta, y además cuando hace referencia la entrevistada que vio al tico que venía y que no había ninguna persona, se demuestra la versión contradictoria del imputado cuando refiere que hizo carrera a dos señoras en ese lugar.</p> <p>La defensora refiere que con esta acta se demuestra la contradicción del agraviado cuando refiere que una fémina o una mujer subió al vehículo y que esta huyó en compañía de, presuntamente, el señor B; la entrevistada refiere que el señor se encontraba solo; además ha referido que el vehículo venía desde la caleta San José hacia la</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

universidad, hecho que se contradice en la declaración del agraviado que afirma que el vehículo el huyó hacia una trocha de la carretera San José.

1.4.2.2. Prueba Pericial.

c) Examen pericial del perito criminalístico W respecto del Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH.

Esta inspección se hizo en base a una solicitud de la DEPROVE del departamento de robo de vehículos de la policía, para hacer una inspección en la avenida que conduce a la universidad particular San Martín intersección con la avenida Juan Tomis Stack, donde se puede determinar con las respectivas fotografías, huellas de calzado masculino femenino y huellas de neumático de automóviles en diferentes direcciones. **Al examen** dijo que no se encontraron zapatillas sino huellas de zapatillas, se determinó la huella de un carro que venía por la avenida Juan Tomis Stack, sale de la pista y entra a la tierra pegada a una pared, y la huella del otro carro -que aparentemente ha estado en esta pista en dirección hacia Chiclayo- se encuentra con la otra huella, es decir, se podría presumir que esta huella es la que intercepta a la huella del automóvil; es en estas circunstancias, en el polvo, donde se encontraron las huellas de zapatillas de uso masculino y las huellas de calzado de uso femenino. **Al contraexamen** dijo que para determinar la precisión del neumático se requería hacer lo que es el modelado forense, lo cual no se realizó, el tipo de neumático se puede determinar fehacientemente a través de un modelado forense.

d) Examen pericial del perito médico legista LL. respecto del Certificado Médico Legal N° 008535-L.

El peritado fue evaluado el día tres de agosto de dos mil once y al momento del examen se le encuentra una herida contusa suturada 1.8 cm ubicada en la región parietal posterior izquierda, con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; una herida contusa suturada de 2 cm ubicada en la región parietooccipital derecha con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa suturada de 2.1 cm ubicada en la región interparietal central con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa abierta de 1.5 x 0.5 cm ubicada en la región malar derecha con tumefacción moderada y equimosis violácea de 4 x 3.5 cm perilesionales, además de una equimosis violácea ovalada de 4.2 x 3.7 cm ubicada en el hombro derecho cara anterior con tumefacción moderada perilesional. Estas heridas o lesiones llevan a la conclusión de que dicho peritado presentó lesiones traumáticas recientes o sea relacionados con la data, de origen contuso, por lo que se le indicó una atención facultativa de tres días por una incapacidad médico legal de nueve días, salvo complicaciones. **Al examen** dijo que las lesiones de origen contuso corresponden a lo que son golpes ocasionados por objetos contundentes que podrían ser una piedra, un puño, objetos metálicos, cualquier objeto que pueda producir un golpe y ocasionar una lesión y es probable que pueda haber sido producida por la cachá de un revolver porque es un objeto contundente; las tres heridas en la cabeza son heridas suturadas o sea que han recibido atención médica con puntos y la herida que está en la región malar corresponde a una herida abierta o sea sin suturar. **La defensa no formuló contraexamen.**

<p>1.4.2.3. Prueba Documental.</p> <p>a) Acta de intervención policial. Fue actuada durante el examen del testigo G.</p> <p>b) Acta de registro personal de fecha dos de agosto de dos mil once.</p> <p>Con esta acta de registro personal demuestra que efectivamente al acusado no se le ha encontrado ningún arma de fuego y ello corroboraría el error material que cometió la policía en el levantamiento del acta, además con esta acta de prueba que se incauta dos billetes de cincuenta nuevos soles uno original y otro falso; la estrategia del acusado ha sido que realizó una carrera hacia el lugar donde se le encontró y que cobro ocho nuevos soles a las dos personas que supuestamente hizo una carrera, sin embargo cuando se le hace el registro personal se le encuentra billetes de cincuenta nuevos soles.</p> <p>c) Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo de placa de rodaje N° MIE-629.</p> <p>Se acredita la preexistencia del vehículo sustraído.</p> <p>d) Cuatro (04) tomas fotográficas del vehículo de placa de rodaje M2M-627 y su respectiva cadena de custodia.</p> <p>Se actuaron durante el examen del agraviado.</p> <p>e) Acta de situación vehicular de la unidad intervenida de placa M2M-627.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Se acredita la existencia del vehículo que iba manejando el acusado y con el cual interceptó a su víctima para que se perpetre el robo.</p> <p>La defensora en relación a los documentos oralizados por el fiscal refiere que éste ha obviado precisar un número de teléfono que fue incautado en el acta de registro personal. Con respecto a los demás documentos no tiene ningún pronunciamiento.</p> <p>1.4.3. De la Defensa.</p> <p>La defensa técnica del acusado por el principio de comunidad de la prueba ofreció los mismos medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, los cuáles fueron actuados por la defensa a través del contraexamen, prescindiendo la defensa de la actuación de la testimonial de V y solicitando la oralización de la declaración prestada a nivel fiscal por la testigo S, pedido que fue amparado mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de abril del dos mil doce.</p> <p>1.4.3.1. <u>Prueba Documental.</u></p> <p>a) Acta de registro vehicular.</p> <p>Se actuó durante el examen del testigo G.</p> <p>b) Requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones. El aporte de este requerimiento es que el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones con las personas que tenían alguna relación con los que intervinieron el día de los hechos y con mi patrocinado B,</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>antes, durante y después de los hechos, a fin de determinar si ha habido alguna comunicación con estas personas mediante mensaje de texto o directamente por el medio telefónico.</p> <p>c) Resolución N° Uno de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once. El aporte es que el requerimiento fue autorizado por el señor juez del juzgado de investigación preparatoria.</p> <p>d) Disposición fiscal N° 03 de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce.</p> <p>El aporte es que en el registro personal de su patrocinado se le encontró un celular que coincide con el mismo celular del que se solicitó el levantamiento de las comunicaciones, a fin de determinar alguna vinculación.</p> <p>e) Reporte N° TSP-83030000-ECE-0051-2012 de fecha veintisiete de enero del dos mil doce y treinta de enero de dos mil doce.</p> <p>El aporte es que al verificarse el reporte de las llamadas entrantes y salientes se verifica que su patrocinado no tuvo ninguna comunicación con los extorsionadores, ni por mensaje de textos, antes, durante y después de los hechos.</p> <p>f) Once fotografías de vehículos con su respectiva cadena de custodia. El aporte es para acreditar que, si la capota del vehículo estaba levantada cómo es que el agraviado ha precisado inicialmente a la policía que se trataba de un vehículo de marca Chevrolet, tipo matiz, color plomo. Además adjunta fotografías de distintos vehículos no siendo el de su patrocinado el único vehículo que tiene marca Chevrolet y</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

con el mismo color y sobre todo con la farola “La Cuzqueña”; existen otros vehículos y con la placa como las que ha presentado el representante del Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público señala que los documentos referidos al requerimiento de la carpeta fiscal 2680-2011, de la disposición fiscal y de la resolución judicial, no aportan nada en este caso porque se trata de una investigación totalmente diferente que se llevó a cabo en el despacho fiscal por un delito de extorsión; simplemente hace referencia a un archivo provisional porque no se ha identificado plenamente a los presuntos autores del delito de extorsión, y el hecho de que el acusado no se haya comunicado con los extorsionadores implica la especialización que hay en este tipo de delitos donde unos roban y otros extorsionan. En cuanto a las fotografías sirven para una cuestión ilustrativa y es conocimiento público que ese tipo de vehículos pueden existir, no muchos pero en su momento se tiene que hacer una valoración contextual del reconocimiento del vehículo y también del imputado. Además precisa que el agraviado si bien es cierto tiene primaria incompleta, pero él es un conductor con mucho tiempo en la conducción, por lo tanto el conductor tiene más ventaja para apreciar los tipos de vehículos o presumir que tipo de vehículos o de modelos puedan tratarse. Los reportes de telefónica no aportan para nada.

1.4.3.2. Oralización de la declaración del imputado B.

El fiscal refiere que el aporte es que el acusado refiere contradictoriamente que hizo una carrera a dos señoras pero no señala el lugar exacto, solamente hace un referencia genérica que las dejó por un puente y se ha escuchado al capitán que por

<p>ahí no había ningún tipo de puente ni casas; además hay una contradicción cuando él dice que él se da la vuelta y en esas circunstancias es que se le pincha la llanta, contrario a lo que ha referido la señora S al oralizar su entrevista a nivel de investigación preliminar; y en cuanto a los ocho nuevos soles que refiere haber cobrado al momento de su registro se le encontró dos billetes de cincuenta nuevos soles. También precisa que él ha referido expresamente que es taxista, pero contradictoriamente en la pregunta cinco, indica que también ha trabajado en La Pradera con el propósito de fundamentar que supuestamente lo conoce de vista al agraviado.</p> <p>La defensa refiere que no es cierto que haya contradicción porque sí se le ha encontrado un billete de cincuenta nuevos soles y no se le ha preguntado para nada con respecto al otro billete presuntamente falso; él ha dado su versión de que él ha tenido un billete de cincuenta nuevos soles que si aparece en el registro personal y que ha dado vuelto de cuarenta y dos nuevos soles. Cuando se le hizo la pregunta al capitán de que si habían casas, ha referido que no habían casas cerca, que es un camino carrozable donde hay chacras a los costados y en ningún momento ha precisado que no existe ningún puente, tampoco él en el acta de entrevista que ha tenido con las señoras, ha precisado si existe o no puente por la zona.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción, y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la parte expositiva incluyendo la cabecera.

LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la **parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta.** Se derivó de la calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: muy alta y muy alta, respectivamente. En, la introducción, se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; los aspectos del proceso; y la claridad. Asimismo, en la postura de las partes, se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos y

circunstancias objeto de la acusación; la calificación jurídica del fiscal; la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, y la pretensión de la defensa del acusado, y la claridad.

Cuadro 2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre robo agravado; con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Parte considerativa de la sentencia de primera instancia	Evidencia empírica	Parámetros	Calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil					Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia				
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta	Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta
			2	4	6	8	10	[1- 8]	[9- 16]	[17- 24]	[25- 32]	[33- 40]
Motivación de los hechos	<p>II. PARTE CONSIDERATIVA:</p> <p>PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO.</p> <p>1.1. Según el artículo 188° del Código Penal, incurre en el delito de robo, el agente que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con peligro inminente para su vida. Como elemento subjetivo se requiere la presencia de dolo.</p> <p>1.2. Dentro de las circunstancias agravantes del delito de robo se encuentran la de haber sido cometido en casa habitada, durante la noche y con el concurso de dos o más personas; circunstancias que están previstas en</p>	<p>1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. <i>(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es)).</i>Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. <i>(Se realiza el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, se ha verificado los requisitos requeridos para su validez).</i>Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. <i>(El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles resultados probatorios, interpreta la prueba, para saber su significado).</i> Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. <i>(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho</i></p>										40

	<p>los incisos 1, 2 y 4 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal.</p> <p>1.3. Igualmente constituye circunstancia agravante del delito de robo, el causar lesiones a la integridad física o mental de la víctima, la cual está prevista en el numeral 1 segundo párrafo del artículo 189° del Código Penal.</p> <p>1.4. El delito de robo agravado es un delito pluriofensivo, pues no sólo protege el patrimonio, sino también la vida, la integridad física y la libertad, lo cual demanda un mayor reproche penal.</p>	<p><i>concreto</i>). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i></p> <p>Si cumple</p>					X					
<p style="text-align: center;">Motivación del derecho</p>	<p>SEGUNDO: DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS POR LAS PARTES:</p> <p>2.1. DEL FISCAL: Señala que se ha probado:</p> <p>2.1.1. El Acuerdo Plenario 2-2005-CJ-116 refiere expresamente, que tratándose de la declaración de los agraviados, aún cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por ende virtualidad procesal, para enervar la presunción de inocencia del imputado, sin embargo se exige ciertas garantías de certeza que se han llevado a cabo en este juicio, pues, el agraviado ha sido coherente y consistente cuando sindicaba desde el primer momento de manera espontánea que el acusado fue la persona que lo interceptó cuando iba a voltear por la empresa Café Perú a la entrada de la universidad San Martín; también ha referido que inmediatamente fijó la mirada cuando lo cruza y lo intercepta, fija la mirada porque quería resonarlo, y conforme a las reglas de la experiencia en el ámbito de la conducción de vehículos, en los choferes existe</p>	<p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i></p> <p>Si cumple</p>					X					

<p style="text-align: center;">Motivación de la pena</p>	<p>esa situación de fijar siempre la mirada en quien vulnera una norma de tránsito; además indica que estando dentro del vehículo a la altura de Café Perú cuando lo intercepta el vehículo del acusado, los sujetos que se encontraban al interior de su vehículo le dicen “ya perdiste”, le mientan la madre y empiezan a impactarle con la cachá de revolver, y es en esas circunstancias que baja la fémina para guarecerse en el vehículo que conducía el acusado. En consecuencia, se cumple con dicha garantía de certeza.</p> <p>2.1.2. En cuanto al supuesto de incredibilidad subjetiva, la defensa no ha acreditado que ha existido situaciones de animadversión, enfrentamientos entre el imputado y el agraviado, es más ha quedado demostrado con la versión del agraviado que el recién lo conoce e identifica en el momento que fue interceptado.</p> <p>2.1.3. La versión del agraviado además de ser verosímil, coherente y sólida tiene corroboraciones periféricas: i) El agraviado dice que le impactaron con un arma de fuego, y al oralizar el examen pericial y al declarar el perito Wilson Becerra Llampén sobre el Certificado Médico Legal 008535-L, efectivamente se acredita que tiene lesiones en la cabeza, en el rostro, ocasionadas por objeto contundente, entre los que se encuentra una cachá de revolver; ii) El examen pericial del capitán PNP Jhony Díaz de la Cruz quien ha referido que cuando hizo la constatación fiscal ha constatado la presencia de neumáticos de dos tipos de vehículos, un neumático que está dispuesto a ingresar hacia la universidad San Martín y otro que intercepta; además ha referido que en ese lugar encontró huellas de pisada de zapato de mujer y de zapatilla, es decir, de sexo femenino, lo cual se enlaza con la versión que da el agraviado cuando refiere que la fémina baja del vehículo y se va al vehículo que conducía el acusado; además el</p>	<p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 (<i>Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen</i>) y 46 del Código Penal (<i>Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia</i>) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor</p>					<p>X</p>					

<p style="text-align: center;">Motivación de la reparación civil</p>	<p>agraviado indicó que cuando los imputados -aún sin identificar- se encontraban dentro de su vehículo, el que estaba conduciendo lo pone hacia la parte posterior y uno de ellos baja y toma el volante, es decir, baja de la parte posterior y se va a la parte delantera para tomar el volante y eso es coherente porque ahí se registra la pisada que hace referencia el perito, cuando afirma que encontró una huella de pisada de sexo masculino; iii) Los testimonios del capitán R y del testigo G han coincidido. El capitán R ha referido que encontró al agraviado ensangrentado, que tenía sangre en la cabeza, que lo ayudó y que fue comunicado por el señor Edilberto que habían encontrado un vehículo a la altura del pueblo joven Juan Pablo II que da para el pueblo joven Santa Julia en la carretera carrozable con destino a la caleta San José, lo cual refuerza su teoría en el sentido de que el capitán se constituye al lugar donde se encontraba este vehículo, conjuntamente con el agraviado, el agraviado de manera espontánea reconoce al imputado como la persona que lo intercepta y de igual manera reconoce al vehículo que lo interceptó, tal como lo ha referido el capitán PNP R al señalar que fue contundente y espontáneo; y que lo señaló inmediatamente; iv) G y el capitán R indican también que cuando intervinieron el vehículo, las luces de este se encontraban a pagadas, y en una evaluación contextualizada hay que tener en cuenta estos datos periféricos, y con la declaración del agraviado ha quedado demostrado que el lugar donde se interviene el vehículo del acusado era un lugar oscuro, una zona bastante movida, y donde el acusado de manera sintomática apaga las luces para arreglar una llanta que se había pinchado, justificación que no es usual en un conductor que tiene ese tipo de desperfectos, porque lo primero que se hace es prender la luz para advertir una situación de peligro; además se ha oralizado el testimonio de la señora L.E.S.Q. quien</p>	<p><i>decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p> <p>1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. <i>(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas).</i> Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. <i>(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas).</i> Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. <i>(En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención).</i> Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p>										

X

	<p>ha referido que el carro venía a gran velocidad y con las luces, y se cuando se pincha la llanta, el imputado opta por apagar las luces tanto interna como externamente; v) Además se debe valorar la prueba pre constituida consistente en el acta de intervención policial, que es coincidente con lo referido por el capitán. No existe contradicción como lo refiere la defensa cuando indica que primero se hace referencia a cinco sujetos y luego a cuatro; pues el capitán ha referido que es una situación que tiene que responderla el agraviado, y con la declaración de éste ha quedado claro que los cuatro sujetos fueron los que lo agredieron, cuando baja la fémina y se guarece en el vehículo del acusado; vi) El agraviado ha reconocido al imputado como la persona que lo interceptó en un vehículo; por tanto el reconocimiento que ha hecho el imputado como del vehículo a nivel preliminar, a nivel de la investigación preparatoria y en el juicio oral indican una persistencia en el reconocimiento; vii) En cuanto al robo agravado la acción de apoderamiento del vehículo está acreditada y se ha acreditado la preexistencia del vehículo; viii) La violencia se encuentra acreditada con el certificado del médico legal que denota la gran crueldad con la que han actuado estas personas, habiéndosele prescrito una atención facultativa de tres por una incapacidad médico legal de nueve días.</p> <p>2.1.4. En cuanto al tipo subjetivo referido al dolo y al ánimo de lucro, se evidencia con todo las pruebas oralizadas.</p> <p>2.1.5. En cuanto a la coautoría funcional, refiere que ha existido un reparto de roles, con división de trabajo, y en el presente caso, dentro del plan delictivo la función del acusado consistió en interceptar al vehículo del agraviado y sacar de la escena a la fémina. No existe ninguna contradicción cuando al momento de intervenir al imputado se le encuentra</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>solo, porque ya había sacado de la escena a esta fémina que también participó en el delito. En ese sentido ha quedado probado que cada una las personas -aún sin identificar- aportaron en este plan delictivo, incluyendo al acusado. Conforme al principio de reparto funcional de roles, las diferentes contribuciones se consideran un todo y el resultado total se atribuye a cada coautor, es por ello que si bien es cierto, el acusado no ha sido la persona que directamente impactó con el arma de fuego y que no fue la persona que llevó al vehículo a desaparecerlo por la ciudad de Chiclayo, se debe tener en cuenta que su participación se ceñía simplemente a su rol. Se debe hacer un análisis contextual sobre lo que significó la participación del acusado cuando se fue a dejar a la chica, pues, cuando la policía interviene no se encontró a nadie porque ya la había dejado.</p> <p>2.1.6. Se ha demostrado que ha existido un error material al consignar en el acta de registro vehicular que se encontró un arma, como lo aclaró uno de los testigos.</p> <p>2.1.7. En cuanto a la solicitud de la pena se ha tenido en cuenta que ha sido un delito que se ha cometido durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locomoción y sobre vehículo automotor. También se ha considerado que el acusado no registra antecedentes, motivo por los cuales considera que la pena proporcional a imponerse debe ser la de trece años de pena privativa de la libertad efectiva.</p> <p>2.1.8. En cuanto a la reparación civil, señala que posteriormente el vehículo se recuperó, pero aun así ha existido un perjuicio moral y también económico, por lo que considera que debe de imponerse una reparación civil de mil nuevos soles.</p> <p>2.2. DE LA ABOGADA DEFENSORA DEL</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ACUSADO: Refiere:</p> <p>2.2.1. El presunto agraviado, en su declaración en presencia del Ministerio Público y de su abogado refiere que él fue intervenido por un vehículo modelo matiz, de color plomo. En ningún momento hace referencia que se trataba de un modelo tipo matiz, marca Chevrolet, de color plomo.</p> <p>2.2.2. En la declaración del señor Mario Martín Santisteban incorporada en juicio, refiere que fue interceptado inicialmente por un vehículo modelo matiz, color plomo, con una farola y unas letras. Esto contradice a la presunta acta de intervención que solamente es firmada por el capitán R en la cual él ha precisado el modelo y la marca del vehículo, con una farola que decía “La Cuzqueña” y que no pudo ver el número de teléfono de la farola porque la capota estaba abierta y levantada. Se pregunta ¿cómo es que pudo dar cuenta respecto a la marca del vehículo, si de acuerdo a la fotografías adjuntadas de varios vehículos, las marcas se encuentran en la parte posterior, es decir en la capota?. Entonces si la capota se encontraba levantada, era imposible ver la marca del vehículo, preguntándose ¿Cómo es que el agraviado ha podido precisar las personas que supuestamente lo habían intervenido y las características del vehículo?.</p> <p>2.2.3. El acta de intervención ha sido realizada en la misma Comisaría del Norte y el capitán refirió que él inicialmente no lo había intervenido, sino que había sido intervenido por dos unidades policiales. Esta fue redactada por el capitán en la comisaría y se han consignado tres hechos: el hecho en que fue auxiliado el agraviado, cuando estaban conduciéndolo al hospital y después cuando se regresaron. Es una sola acta y se hace referencia a dos efectivos policiales, sin embargo ninguno de</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ellos ha firmado, ni menos ha firmado el agraviado ni el intervenido. El acta de intervención solamente la firma el capitán Benavides Ayala.</p> <p>2.2.4. En el acta de registro vehicular lo que han querido es agravar la situación del acusado respecto a armas y municiones. El señor G ha justificado esta supuesta anotación señalando que se trata de un error de imprenta, sin embargo ello no es justificación de apuro, pues lo único que se quiso lograr era agravar la situación del acusado, se trata de un acta de intervención que ha sido manipulada o manejada al antojo de las personas que intervinieron; que ha sido redactada en la misma comisaría y no había amenaza o un peligro para que pueda levantarse en el mismo lugar de los hechos.</p> <p>2.2.5. Los testigos G y el capitán dicen que por versiones de personas que transitan por ese lugar se enteraron que el agraviado había sido intervenida por un vehículo; sin embargo el policía sabe perfectamente cuáles son sus funciones y dentro de ellas, cuando concurre al lugar de los hechos, es recoger versiones o nombres de las personas que hayan visto directamente el momento en el que el señor Mario Martín Santisteban había sido víctima de robo agravado, porque el efectivo policial G y el capitán R son sólo testigos referenciales.</p> <p>2.2.6. Con respecto al acta de entrevista, es un acta de hechos inmediatos, no es que ha transcurrido mucho tiempo porque dice cerca de las ocho y media, lugar y hora en que presuntamente también había sido víctima de robo el señor A. Se pregunta ¿en qué momento su patrocinado pudo dejar a la fémina?. De acuerdo al acta de entrevista personal su patrocinado se encontraba solo y contradice a la versión del agraviado que sostiene que la fémina bajó del vehículo y subió al vehículo Chevrolet que presuntamente conducía B.</p> <p>2.2.7. Se pregunta ¿cuál es el ánimo de lucro que tenía su</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>patrocinado?, precisando que producto de este delito de robo agravado, el propietario del vehículo robado, señor J, fue objeto de extorsión. Si su patrocinado no tiene que ver en estos hechos, por qué entonces el Ministerio Público ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las llamadas entrantes y salientes así como de la lectura de mensajes de texto queriendo involucrarlo en la extorsión. Su patrocinado no tenía ninguna vinculación con estas personas, ni antes, ni durante, ni después de los hechos con respecto al robo que sufrió el señor A.</p> <p>2.2.8. Es verdad que la declaración del agraviado es muy importante como único testigo, sin embargo se debe tener en cuenta que esta versión se tiene que corroborar. El perito que ha inspeccionado el lugar ha precisado que hay huellas de pisadas de zapatillas de un varón y huellas de una mujer, que según el Ministerio Público era la que subió al vehículo. También ha señalado que existen las huellas de un vehículo, el mismo que interceptó al vehículo station wagon, y la pregunta que se le hizo al perito es que si se pudo determinar que esas huellas que se encontró pertenecían o al menos tenían las mismas características del neumático del vehículo Chevrolet que conducía B, respuesta que fue negativa, no existe ninguna prueba que corrobore que el vehículo de su patrocinado sea el mismo que interceptó al señor S.</p> <p>2.2.9. Cuando se ha dado lectura a la declaración de B, al referirse al cobro que le hizo a estas personas, hace referencia a un billete de cincuenta soles, y en ningún momento el representante del ministerio público le ha preguntado si es verdad o es falso que también había un billete falso de cincuenta nuevos soles; tampoco le ha pedido que explique si es que ha cobrado ocho soles y ha dado de vuelto de cuarenta y dos soles.</p> <p>2.2.10. Teniendo en cuenta el acta de entrevista personal, el acusado se encontraba solo, no había ninguna mujer,</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>y además se le hizo la pregunta al señor capitán si es que lo intervinieron con alguna mujer y este dijo que no, que estaba solo.</p> <p>2.2.11. Por estas consideraciones, solicita la absolución del señor B y de la pretensión de la reparación civil.</p> <p>TERCERO: DE LA VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS</p> <p>3.1. HECHOS PROBADOS:</p> <p>Respecto de los hechos objeto de imputación, del debate probatorio se ha llegado acreditar lo siguiente:</p> <p>3.1.1. Que, el día dos de agosto del dos mil once, en horas de la noche, el agraviado A se encontraba realizando el servicio de colectivo-taxi en el vehículo station wagon de placa de rodaje N° M1E-629 hacia la urbanización La Pradera, tal y como se acredita con la testimonial del mencionado agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el conainterrogatorio.</p> <p>3.1.2. Que, cuando realizaba su última vuelta, en la intersección de la avenida Pedro Ruiz y Luís Gonzáles de la ciudad de Chiclayo, subieron cinco personas (cuatro varones y una mujer) ubicándose dos hombres en el asiento delantero, dos hombres en el asiento posterior y la mujer en al lado izquierdo de la ventana en ese mismo asiento; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el conainterrogatorio.</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>3.1.3. Que, cuando el agraviado se encontraba dirigiéndose a la Urbanización La Pradera por la carretera a Pimentel, al doblar a la altura de Café Perú – Parque Industrial, un automóvil de modelo como el matiz, de color plomo, que se encontraba con la maletera abierta, lo adelantó bruscamente cerrándole el paso, razón por la cual redujo la velocidad del vehículo a fin de evitar el impacto, dando lugar a que se saliera de la pista; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorporada durante el contrainterrogatorio.</p> <p>3.1.4. Que, en esas circunstancias, los pasajeros que iban al interior de su vehículo, le dijeron “ya perdiste concha de tu madre”, encañonándolo con un arma de fuego, tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorporada durante el contrainterrogatorio.</p> <p>3.1.5. Que, inmediatamente lo han golpeado con la cacha del arma de fuego en la cabeza y en el rostro, y el pasajero que estaba a su costado en el asiento de adelante, le jala la llave del vehículo, para luego ser bajado del asiento delantero y ser ubicado en la parte posterior del vehículo, tal como se acredita con la testimonial del agraviado.</p> <p>3.1.6. Que, en esas circunstancias la fémina que iba como pasajera, ha bajado del vehículo que conducía el agraviado y se ha subido al vehículo plomo que le cerró el paso al agraviado, el mismo que se dirigió con dirección a la pista antigua de la caleta San José; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorporada durante el contrainterrogatorio.</p> <p>3.1.7. Que, el sujeto que le jaló la llave y que iba en el asiento delantero, bajó del vehículo que había conducido el agraviado, tomó el volante y manejó</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>con dirección hacia la parte posterior de la Universidad San Martín, llevando al agraviado encintado de la boca, manos y pies, dejándolo botado en dicha situación por el centro poblado Santa Julia, luego de lo cual, los sujetos regresaron en ese mismo vehículo con dirección a la ciudad de Chiclayo; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorporada durante el contrainterrogatorio.</p> <p>3.1.8. Que, el agraviado ha logrado desatarse con una piedra, para luego correr y salir hacia la Urbanización La Predera, instantes en que ha aparecido un patrullero de la policía nacional de placa KF-7369 que ya había recibido una comunicación radial, reportando al personal policial el robo de la camioneta station wagon de placa de rodaje N° M1E-629, así como las características del vehículo que lo había interceptado; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y del efectivo policial R, así como con el acta de intervención policial.</p> <p>3.1.9. Que, por orden de la central 105, la unidad móvil KF-10168 de la Comisaría del Norte fue desplazada hasta el lugar de los hechos a fin de apoyar a la unidad móvil KF-7369 y moradores del lugar indicaron que una persona había sido asaltada por delincuentes a bordo de un vehículo y que después del asalto dicho vehículo se había desplazado por la jurisdicción del caserío Santa Julia; tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G.</p> <p>3.1.10. Que, al iniciar la unidad móvil KF-10168 el patrullaje respectivo con el apoyo de patrulleros del escuadrón de emergencias, por una trocha carrozable y en un lugar oscuro, por unas chacras donde no hay casas, han encontrado un vehículo automóvil marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Lite, con placa de rodaje M2M-627, con las luces apagadas, así como a su conductor – el acusado B-, debajo del vehículo quien refirió que luego de hacer una carrera, se la</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>había pinchado una llanta y estaba arreglando dicho neumático; siendo intervenido el conductor y el mencionado vehículo, en razón de presentar las mismas características del vehículo que había participado en el asalto al agraviado, tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G y de la propia declaración prestada a nivel fiscal por el acusado ante su negativa de declarar en juicio, así como de la declaración de S. oralizada en juicio.</p> <p>3.1.11. Que, en circunstancias que el personal policial auxiliaba al agraviado, que se encontraba ensangrentado en su cabeza, llevándolo con dirección a un hospital, el efectivo policial R recibe una comunicación que por el pueblo Joven Juan Pablo II de la Pradera, en un ingreso de trocha carrozable al centro poblado Santa Julia, se había encontrado un vehículo con las mismas características que había proporcionado el agraviado, tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y del efectivo policial R, así como con el acta de intervención policial.</p> <p>3.1.12. Que, ante dicha comunicación el efectivo policial R retorna en compañía con el agraviado hasta el lugar indicado para que éste haga el reconocimiento correspondiente, siendo que cuando llegan a dicho lugar encuentran al vehículo intervenido con las luces apagadas, y el agraviado, sin lugar a duda, reconoció directamente al acusado intervenido como una de los participantes y al automóvil como el vehículo que le cerró el paso; tal y como se acredita con la testimonial de los efectivos policiales R, G, del agraviado A, así como con el acta de intervención policial.</p> <p>3.1.13. Que, el agraviado A ha sufrido lesiones traumáticas de origen contuso en la cabeza y en el rostro (región malar derecha); las mismas que son compatibles de haber sido causadas con la cache de un revólver y que han requerido tres atenciones facultativas por</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>nueve días de incapacidad médico legal; tal y como se acredita con el examen pericial del perito médico E quien depuso en juicio respecto del Certificado Médico Legal N° 008535-L de fecha tres de agosto de dos mil once.</p> <p>3.1.14. Que, al efectuarse la inspección criminalística en el lugar de los hechos, se encontró huellas de neumáticos: unas huellas de un vehículo que venía por la avenida Juan Tomis Stack, sale de la pista y entra a la tierra, pegada a una pared, y las huellas de otro vehículo que habría estado en la pista en dirección hacia Chiclayo, que cruza el área sin asfaltar e intercepta por delante las primeras huellas antes descritas, encontrándose además dos tipos de huellas de calzado una correspondiente a zapatilla de uso masculino, y otra de calzado de uso femenino; tal y como se acredita con el examen del perito criminalístico Jhony W. Díaz de la Cruz quien explicó en juicio el Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH.</p> <p>3.1.15. Que, al efectuársele el registro personal al acusado B, se le encontró en su poder dos billetes de cincuenta nuevos soles, su documento de identidad, licencia de conducir y un celular marca Nokia, tal y como se acredita con la testimonial de G y el acta de registro personal.</p> <p>3.1.16. Que, al efectuarse el registro vehicular al vehículo intervenido no se encontró armas ni municiones, tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G.</p> <p>3.1.17. Que, el vehículo Station Wagon de placa de rodaje N° M1E-629 es de propiedad de J, tal y como se acredita de la copia simple de la tarjeta de propiedad del mencionado vehículo.</p> <p>3.2. HECHOS NO PROBADOS:</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>3.2.1. La defensa técnica del acusado no ha probado su teoría del caso formulada tanto en sus alegatos iniciales como finales.</p> <p>CUARTO: PRESUNCION DE INOCENCIA FRENTE AL TEMA PROBATORIO</p> <p>4.1. El Principio de Presunción de inocencia consagrado en el artículo 2° inciso 24 literal “e” de nuestra Norma Fundamental, se configura, en tanto regla del juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referidas a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos.</p> <p>4.2. Realizada la actividad probatoria, con todas las garantías procesales y sustanciales, este principio ha logrado ser enervado desde la tesis acusatoria por las razones que a continuación se exponen.</p> <p>QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN O TIPICIDAD.</p> <p>5.1. Conforme a los hechos probados, el Ministerio Público ha acreditado más allá de toda duda razonable que el día dos de agosto de dos mil once, el agraviado A se encontraba prestando servicio de colectivo-taxi en el vehículo Station Wagon de placa de rodaje N° M1E-629 de propiedad de J del centro</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>de la ciudad de Chiclayo hacia La Pradera, y siendo aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, en circunstancias que el agraviado realizaba su última vuelta, cinco pasajeros –entre ellos cuatro hombres y una fémina- abordan su vehículo, y cuando se encontraba dirigiéndose por la carretera a Pimentel, doblando a la altura la altura de Café Perú (Parque Industrial), fue interceptado por el vehículo marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Lite, de placa de rodaje N° M2M-627, conducido por el acusado B, quien le cierra el paso, dando lugar a que el agraviado reduzca la velocidad y detenga su vehículo; circunstancia que es aprovechada por los pasajeros que iban en el vehículo del agraviado, quienes lo encañonan con un arma de fuego diciéndole “ya perdiste”, le quitan las llaves del vehículo, lo agreden físicamente causándole lesiones en la cabeza con la cacha de un arma de fuego que han requerido tres atenciones facultativas por nueve de días de incapacidad médico legal, lo suben a la parte posterior del vehículo, le encintan la boca, pies y manos, para luego uno de ellos conducir el vehículo y abandonar al agraviado por el caserío Santa Julia, logrando de esta forma apoderarse del vehículo, dirigiéndose con destino a Chiclayo; en tanto que el acusado B, luego de cumplir su rol de interceptar el vehículo del agraviado, cerrándole el pase, sale de dicho lugar en compañía de la fémina que venía como pasajera en el vehículo del agraviado, con dirección a la pista antigua de la caleta San José.</p> <p>5.2. No queda duda de la participación del acusado en los hechos materia de juzgamiento, por cuanto el agraviado lo ha reconocido plenamente en el momento mismo que le cerró el paso y además reconoció el vehículo precisando sus características, versión que efectivamente resulta creíble por cuanto, las reglas de la experiencia enseñan que cuando se infringe una regla de tránsito lo primero que hace un</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>conductor es observar a la persona que infringió la regla de tránsito. Esto explica el hecho de que cuando el agraviado llega hasta lugar de la intervención del acusado, sindicó directamente al acusado como uno de los autores del hecho, e identificó el vehículo que le había cerrado el pase, lo que demuestra que desde los momentos inmediatamente posteriores al evento delictivo el agraviado pudo lograr identificar al acusado sin lugar a duda.</p> <p>5.3. Evidentemente dada la forma y circunstancias en que se perpetró el evento delictivo, no cabe duda que el acusado ha actuado dolosamente, evidenciándose un reparto de roles en la ejecución de su plan criminal, lo que permite concluir que tiene la calidad de coautor.</p> <p>5.4. Así las cosas, el acusado B resulta ser responsable del delito de robo previsto en el artículo 188° del Código Penal, con las agravantes de haber sido cometido durante la noche y en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en un medio de locomoción, y sobre vehículo automotor; circunstancias que están previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del primer párrafo del Código Penal.</p> <p>5.5. Es necesario, indicar que respecto del grado de desarrollo del delito, éste ha quedado en grado de consumado, pues, los participantes en este hecho criminal, entre los que se encuentra el acusado, han tenido posibilidad de ejercitar actos de dominio sobre el citado bien, en tanto que éste ha sido recuperado con posterioridad al evento criminal.</p> <p>5.6. La defensa técnica sostiene que el agraviado, durante su declaración en sede fiscal en ningún momento refiere que se trataba de un vehículo marca Chevrolet. Al respecto debe expresarse que el agraviado dio las características generales del vehículo que lo abordó, pero suficientes para poder ser identificado (esto es, un vehículo modelo como</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>matíz, de color plomo, con una farola que decía “La Cuzqueña”), y el hecho de que no haya referido que se trataba de marca Chevrolet, ello más bien hace más verosímil su versión en el sentido de que la maletera se encontraba levantada, y en tales circunstancias es imposible que haya podido visualizar la marca del vehículo, por cuanto de las cuatro fotografías pertenecientes al vehículo que conducía el acusado y que han sido actuadas por el representante del Ministerio Público, se advierte que la marca del mismo se encuentra en la maletera, que en el momento de los hechos se encontraba levantada. Es de señalar además que es común, que los delincuentes pretendan evitar que se fijen en las características relevantes identificatorias de los vehículos que utilizan en esta clase de delitos.</p> <p>5.7. También la defensa técnica cuestiona el acta de intervención policial, alegando que ha sido firmada sólo por un efectivo policial interviniente y en ella se consigna que la marca del vehículo era Chevrolet y que no pudo ver el teléfono de la farola. Al respecto, debe indicarse que el cuestionamiento que hace la defensa, resulta irrelevante, si se tiene en cuenta que el testigo firmante de dicha acta, el efectivo policial R, ha concurrido a juicio a dar su versión respecto de su participación de los hechos, la cual se corrobora con la testimonial del efectivo policial G quien refiere además que sólo recurrieron en calidad de apoyo. Además este último testigo ha referido que todas se levantaron en la Comisaría del Norte, por cuanto se trataba de una zona oscura y no era el lugar adecuado para efectuar la documentación respectiva; siendo ello así resulta lógico que ya en la Comisaría del Norte -dependencia policial a la que pertenecía el efectivo policial R-, el acta de intervención haya sido suscrita sólo por éste, pues, no sólo auxilió al agraviado sino que además llegó hasta el lugar donde se había producido la intervención del acusado, y es</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>en este lugar donde al agraviado reconoció al acusado y al vehículo que lo intersectó. El hecho de que en el acta se haya consignado la marca del vehículo, como una referencia que habría proporcionado el agraviado resulta irrelevante si se tiene en cuenta que la misma defensa con fines de impugnar credibilidad ingresó la pregunta y respuesta número tres de la declaración del agraviado brindada en sede fiscal con fecha tres de agosto del dos mil once, y en ella no aparece que haya proporcionado la marca del vehículo. Por otra parte, el sólo hecho que el agraviado no haya podido ver el número de teléfono consignado en la farola, ello no significa que no haya podido reconocer al vehículo en sus características generales, pues como ya se ha indicado sí lo hizo, y en tales circunstancias en que es interceptado, encañonado y amenazado resulta absurdo exigirle que pudiera haber captado el menor detalle del vehículo.</p> <p>5.8. La defensa sostiene igualmente que en el acta de intervención se han consignado tres hechos, sin que haya sido firmada por los demás policías intervinientes. En relación a ello, debe reiterarse que la unidad policial en la que estaba el efectivo policial G, sólo ha participado en calidad de apoyo, en tanto que la unidad policial en la que iba el efectivo R no sólo participó auxiliando al agraviado sino que se constituyó hasta el lugar donde el agraviado reconoció al acusado y el vehículo con el que había sido intersectado. En consecuencia los cuestionamientos que hace la defensa al respecto en nada enervan la responsabilidad penal del acusado, máxime si los citados efectivos policiales han concurrido a juicio y han dado su versión sobre los hechos, sin que, en el aspecto principal referido a la intervención, hayan podido ser desacreditados.</p> <p>5.9. No es cierto lo que sostiene la defensa, en el sentido de que se ha querido agravar la situación del acusado respecto a las armas y municiones que se le habrían</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>encontrado al efectuársele el registro vehicular; pues, en juicio el efectivo policial G que efectuó tal registro, durante el contrainterrogatorio precisó que no se encontró ningún arma, y que lo consignado en dicha acta se debió a un error, toda vez que se imprimió en la computadora el documento, explicación que resulta atendible si se observa el acta de registro vehicular que se tiene a la vista. En ese orden de ideas, resulta incoherente, que se sostenga, que los efectivos policiales hayan pretendido agravar la situación del acusado, más aún cuando la citada acta fue redactada recién en la dependencia policial.</p> <p>5.10. La defensa señala que la función de los efectivos policiales era la de recoger versiones o nombres de las personas que hayan visto directamente el momento en que el agraviado fue víctima del robo de su vehículo. Al respecto, debe expresarse que conforme a los hechos probados, se ha acreditado más que suficiente que el agraviado fue víctima del robo de la unidad vehicular que conducía, y conforme a las testimoniales de los efectivos policiales R y G se advierte que lo que hicieron los efectivos del orden, era justamente recoger la versión de los moradores del lugar; y resulta absurdo que, dada la inmediatez y rapidez, con la que debe actuar la policía nacional, se detengan en ese momento y en ese lugar a recabar los nombres de testigos, máxime si las reglas de la experiencia nos enseñan que frente a este tipo de eventos criminales, difícilmente se puede lograr este objetivo, por el temor que la delincuencia organizada, infunde en la ciudadanía.</p> <p>5.11. Respecto del acta de entrevista de S., la defensa sostiene que se trata de hechos inmediatos porque dice cerca de las ocho y media, que es la hora en que el agraviado habría sido víctima de robo, y que además de ella se desprende que su patrocinado se encontraba sólo y no con una fémina. En relación a ello, se debe tener en cuenta que la hora consignada,</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>es una hora aproximada que da la persona entrevistada; y el sólo hecho de que el acusado no haya sido intervenido en compañía de la fémina con quien huyó del lugar del evento criminal, es simplemente porque, debido a las circunstancias que le sobrevinieron al acusado, la fémina no tuvo otra alternativa que abandonar al acusado y ponerse a buen resguardo a fin de no ser capturada por la autoridad policial, lo cual era fácil de lograr, si se tiene en cuenta las circunstancias del lugar, es decir, una zona oscura y cerca de chacras.</p> <p>5.12. En relación a los actos de investigación practicados con el Ministerio Público en otra investigación por el delito de extorsión relacionada con los hechos materia de juzgamiento; debe expresarse que lo que aquí se juzga es sólo el delito de robo agravado en agravio del agraviado, y no el delito de extorsión del que posteriormente fue objeto el propietario del vehículo, y el sólo hecho de que en dicha investigación no se hayan encontrado elementos que vinculen directamente al acusado como presunto autor de ese hecho, en nada enerva su responsabilidad que ha quedado acreditada por el delito que en el presente proceso que se le juzga.</p> <p>5.13. Si bien el perito criminalístico ha manifestado que no se ha determinado si las huellas encontradas pertenecen a las mismas características de los neumáticos del vehículo conducido por el acusado, también lo es que, lo concreto es que en el lugar de los hechos ha encontrado huellas de neumáticos de dos vehículos, en donde uno intercepta al otro; así como también ha encontrado huellas de zapatilla de uso masculino y de calzado de uso femenino. Ello no hace más que confirmar, la coherencia y verosimilitud del agraviado en el sentido que fue interceptado por un vehículo, y que la fémina que abordó su vehículo como pasajera, bajó del mismo para fugar en el vehículo conducido por el acusado.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>5.14. No resulta creíble la versión que da el acusado, en el sentido que habría hecho una carrera a dos señoras cobrándole por tal servicio la suma de ocho nuevos soles; por cuanto al momento de efectuársele el registro personal no se le ha encontrado ninguna moneda, que es lo normal en una persona que se dedica a prestar servicio de taxi; por el contrario se le encontró en poder de dos billetes de cincuenta nuevos soles (al parecer uno falso), no resultando creíble que justamente al cobrar dicha carrera haya tenido exactamente la suma de cuarenta y dos nuevos soles para darles el vuelto a las señoras que dice haber trasladado hasta un lugar, el cual no ha podido precisar con exactitud, pues, sólo hace referencia a un puente, sin que haya podido observar alguna vivienda a la cual puedan dirigirse las supuestas señoras.</p> <p>5.15. Finalmente debe precisarse que no está en discusión, si existen muchos más vehículos con características similares al vehículo que conducía el acusado, eso no es lo relevante para resolver este caso; lo importante es que el acusado reconoció a su conductor, observó las características del vehículo, esas características se irradiaron a las unidades policiales, y justo se encuentra el vehículo con las características proporcionadas por el agraviado, inmediatamente después de ocurridos los hechos a la altura de una trocha carrozable del Centro Poblado Santa Julia, con las luces apagadas, tal y como lo refirió el efectivo policial G, sin que el acusado pueda justificar –como ya se ha dicho- razonablemente la supuesta carrera que hizo, ni el pago que recibió por esta.</p> <p>5.16. Por las razones antes expuestas, el acusado B debe responder como coautor del delito de robo agravado que se le imputa.</p> <p>SEXTO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>CULPABILIDAD</p> <p>6.1. En el presente caso no se ha logrado determinar la existencia de causas que justifiquen la conducta del acusado B como para negar la antijuridicidad.</p> <p>6.2. Con respecto a la culpabilidad, debe considerarse que en el momento de los hechos el acusado era persona mayor de edad y ha cometido los mismos en pleno uso de sus facultades mentales, sin que existan elementos de prueba actuados en juicio que demuestren lo contrario; además por la forma y circunstancias como se han producido los hechos ha podido comprender la ilicitud de su conducta; e incluso claramente ha tenido la posibilidad de realizar conducta distinta, en consecuencia al resultar el juicio de tipicidad positivo, corresponde amparar la pretensión punitiva postulada por el representante del Ministerio Público.</p> <p>SÉPTIMO: DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA</p> <p>7.1. Para efectos de la determinación judicial de la pena al acusado, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena establecido para el delito de robo agravado previsto en el artículo 189° primer párrafo incisos 2, 3, 4, 5 y 8, que establece que la pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de la libertad.</p> <p>7.1. Conforme al artículo 397° numeral 1 del Código Procesal Penal el Juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una pena por debajo del mínimo legal sin causa justificada.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>7.2. El representante del Ministerio Público, está solicitando se imponga al acusado B, la pena de trece años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que no registra antecedentes penales.</p> <p>7.3. En el presente caso, se aprecia que en el hecho han concurrido cinco agravantes, situación que permitiría movilizar la pena hacia el extremo medio, y no hacia el mínimo como lo ha propuesto el señor Fiscal; sin embargo, atendiendo al principio de congruencia, aún cuando el acusado debería merecer una pena mayor, este Colegiado no tiene otra opción que amparar el quantum propuesto por el señor fiscal por cuanto se encuentra dentro del marco establecido en la ley; dejando constancia que este Colegiado no advierte ninguna otra circunstancia, que permitan la imposición de una pena menor.</p> <p>7.4. En consecuencia, la pena a imponer al acusado Guevara Ríos es la de trece años de pena privativa de la libertad.</p> <p>OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL</p> <p>8.1. En cuanto a la reparación civil, según el artículo 93° del Código Penal, comprende tanto la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios.</p> <p>8.2. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, según lo expresado por el señor fiscal en sus alegatos de clausura, el vehículo objeto del robo, ha sido recuperado con posterioridad.</p> <p>8.3. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el delito de robo agravado, es un delito pluriofensivo que no sólo afecta el patrimonio, sino también la libertad e integridad física de las personas – como en el</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>presente caso que se causó lesiones al agraviado A, y es evidente que las mimas han merecido un tratamiento médico y gastos en la compra de medicinas; además de haber dejado de laborar durante los días de incapacidad física que se le prescribió. Siendo ello así debe ampararse el quantum propuesto por el representante del Ministerio Público y fijarse en un mil nuevos soles el monto que deberá pagar el acusado por reparación civil a favor del agraviado, monto que este Colegiado lo considera suficiente y proporcional para reparar el daño causado.</p> <p>NOVENO: EJECUCION PROVISIONAL DE LA CONDENA</p> <p>Atendiendo a que según el artículo 402° inciso 1 del Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, corresponde disponer la ejecución inmediata de la misma.</p> <p>DECIMO: IMPOSICION DE COSTAS</p> <p>Teniendo en cuenta que el acusado Guevara Ríos ha sido vencido en juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500° numeral 1 del Código Procesal Penal corresponde imponerle el pago de las costas del proceso, las mismas que serán liquidadas en ejecución de sentencia si las hubiere.</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro 3: Calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia sobre robo agravado; con énfasis en la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Parte resolutive de la sentencia de primera instancia	Evidencia empírica	Parámetros	Calidad de la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión					Calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia				
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta	Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta
			1	2	3	4	5	[1 - 2]	[3 - 4]	[5 - 6]	[7 - 8]	[9-10]
<p align="center">III. PARTE RESOLUTIVA:</p> <p>Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos según la sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de los artículos citados y además los artículos IV del Título Preliminar, 12°, 23°, 29°, 45°, 46°, 93°, 188° y 189° primer párrafo incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del Código Penal; artículos 393° a 397°, 399°, 402° y 500° del Código Procesal Penal, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO al acusado B como COAUTOR del delito CONTRA EL PATRIMONIO en su figura de ROBO AGRAVADO tipificado en el artículo 188° del Código Penal con las agravantes previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del primer párrafo del artículo 189° del mismo Cuerpo de Leyes, en agravio de A y como tal le impone TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA la</p>	<p>1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (<i>relación recíproca</i>) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (<i>relación recíproca</i>) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil (<i>éste último, en los casos que se hubiera constituido como parte civil</i>). Si cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (<i>relación recíproca</i>) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (<i>relación recíproca</i>) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (<i>El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia</i>). Sí cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas</i></p>				X							

	<p>misma que computada desde la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el primero de agosto de dos mil veinticuatro; FIJARON en UN MIL NUEVOS SOLES el pago que por concepto de Reparación Civil deberá abonar el</p>	<p><i>extranjerias, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</i></p>											
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Descripción de la decisión</p>	<p>sentenciado a favor del agraviado; SE DISPONE la ejecución provisional de la sentencia en el extremo penal oficiándose con dicho fin; IMPÓNGASE el pago de las COSTAS al sentenciado, las que se calcularán en ejecución de sentencia si las hubiera; CONSENTIDA O EJECUTORIADA que fuere la presente resolución inscribese en el Registro Central de Condenas remitiéndose los boletines y testimonios de ley; REMITASE copia de la presente resolución al Director del Instituto Nacional Penitenciario para los fines pertinentes y en su oportunidad, archívese lo actuado con aviso a quien corresponda, DEVOLVIÉNDOSE lo actuado al Juzgado de Investigación Preparatoria para que ejecute la sentencia. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.</p> <p>Ss.</p> <p>GUILLERMO PISCOYA</p> <p>RODRÍGUEZ LLONTOP</p> <p>BANCES SÁNCHEZ</p>	<p>1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</i></p>					X						10

Cuadro diseñado por la Abog. Dionea L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, se realizó en el texto completo de la parte resolutive.

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la **parte resolutive de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta.** Se derivó de, la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y muy alta, respectivamente. En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado, el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente, y la claridad. Por su parte, en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado, y la claridad.

Cuadro 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, sobre robo agravado; con énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Parte expositiva de la sentencia de segunda instancia	Evidencia Empírica	Parámetros	Calidad de la introducción, y de la postura de las partes					Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia				
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy Alta	Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy Alta
			1	2	3	4	5	[1 - 2]	[3 - 4]	[5 - 6]	[7 - 8]	[9-10]
Introducción	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES	<p>1. El encabezamiento evidencia: <i>la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple</i></p> <p>2. Evidencia el asunto: <i>¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple</i></p> <p>3. Evidencia la individualización del acusado: <i>Evidencia sus datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple</i></p> <p>4. Evidencia aspectos del proceso: <i>el contenido explícita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentencia. Si cumple</i></p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</i></p>										
	<p>EXPEDIENTE : 3110–2011–48–1706–JR–PE–01 IMPUTADO : B DELITO : ROBO AGRAVADO AGRAVIADO : A ESP. DE SALA : PEDRO SANTA MARÍA VERGARA ESP. DE AUDIENCIA: ARACELY ELIZABETH SÁNCHEZ MEOÑO</p> <p align="center"><u>SENTENCIA NÚMERO 63-2012</u></p> <p>Resolución número: TRECE Picsi , Nueve de Agosto de dos mil doce.</p> <p align="center">OÍDOS y VISTOS; En mérito al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado B, es materia de revisión la sentencia, contenida en la resolución número seis, del nueve de mayo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, que falla condenando al apelante como autor del delito contra el patrimonio en su figura de robo agravado, en agravio de A y le impuso TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA computada desde la fecha de su</p>					X						10

<p style="text-align: center;">Postura de las partes</p>	<p>detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el primero de agosto del dos mil veinticuatro y fija en la suma de mil nuevos soles la reparación civil que deberá abonar a favor del agraviado; y CONSIDERANDO:</p> <p><u>PRIMERO.- Motivo de Impugnación</u></p> <p>Al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado B El agraviado menciona que a esta hora aproximadamente tomó una carrera de Chiclayo como colectivo hacia La Pradera, porque esa era la ruta que este brindaba.</p> <p>Específicamente, en cuanto a la ruta que va desde Chiclayo a la Pradera, el señor dice que fue interceptado en la entrada que va desde la entrada de la ruta a la Pradera, es decir en toda la esquina de la fábrica Café Perú -carretera a Pimentel-, es ahí que dice que fue interceptado por un vehículo tipo modelo tico, pero en ningún momento hace referencia a un modelo exclusivo o precisa que se trataba de un Taxi La Cuzqueña. Además el señor en el Juicio Oral, dice que como fue interceptado intempestivamente por el sujeto que conducía el tico tipo matiz color plomo, inmediatamente miró para su derecha, porque según dijo, lo único que hacemos los que conducimos un vehículo en esos casos, es protegerse físicamente y materialmente con respecto a su vehículo, su reacción fue girar el timón hacia la derecha; a lo cual la defensa se pregunta en qué momento lo reconoció, porque aquí no hace referencia a que el señor haya bajado del vehículo, solo dice que lo reconoce que como lo interceptó lo quedó mirando. La defensa hace mención que por reglas de la lógica y la experiencia, cuando hay ese tipo de infracciones si se sigue al infractor para llamarle la atención, pero en este caso el señor no lo siguió entonces en que momento como lo vio, lo pudo reconocer físicamente.</p> <p>La versión del agraviado es incoherente, pues en Juicio Oral cuando se le dice que de lectura a su declaración, el hace referencia a que no puede hacerlo porque no sabe leer, entonces</p>	<p>1. Evidencia el objeto de la impugnación: <i>El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple</i></p> <p>2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado el impugnante). Si cumple.</p> <p>3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple.</p> <p>4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado, buscar la del fiscal y de la parte civil, en los casos que correspondiera). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple.</i></p>					X						
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>como es que el señor pudo leer para decir según el acta de intervención, que se trataba de un vehículo que decía Taxi La Cuzqueña, modelo Chevrolet. Sí el mismo hace referencia que la capota del vehículo estaba levantada, y las marcas de los vehículos están en la capota, cómo es que pudo verificar la marca del vehículo.</p> <p>El acta fue redactada en la comisaría, otro cuestionamiento que se hace es cómo es que la policía o el agraviado precisan que su patrocinado se dirigía hacia el Pueblo Joven Santa Julia, si en el lugar en el que fue interceptado hay muchas rutas, se puede ir a la Pradera o salir dando la vuelta por otra fábrica y salir por la vía de evitamiento, entonces como es que precisa dirigiéndose al Pueblo Joven Santa Julia, el acta ha sido manipulada al antojo de la policía.</p> <p>Con respecto al acta de entrevista, el colegiado le da un desvalor en perjuicio de su patrocinado; pues el Colegiado para sentenciar dice “debemos suponer que como la fémina se bajo del vehículo, lo que hizo el acusado presuntamente es dejar a la fémina para regresar”.</p> <p>La testigo hace referencia a que vio al imputado sólo, en ningún momento hace referencia a que ha visto a una mujer cuando se reventó la llanta.</p> <p>Cuando a su patrocinado se le intervino, se dio lectura a su celular, y la defensa también presentó el levantamiento del secreto de comunicaciones., que consta en el cuaderno de pruebas, de donde no se puede determinar que haya tenido un tipo de comunicación, ya sea por mensaje o llamada con esas personas, que se haya coludido con estos señores para poder servir y adelantar al vehículo.</p> <p>Si los señores tenían un arma de fuego, cuál era la participación de su patrocinado, la de interceptarlo nada más y dejar a la fémina en buen recaudo, no resulta adecuado el razonamiento del Colegiado.</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>El Acuerdo Plenario N° 02-2005 hace referencia a que toda declaración debe de ser coherente, porque el único testigo presencial es el agraviado y de esa declaración tienen que corroborarse los dichos. Esa declaración no es coherente, por el contrario, contradictoria. El único testigo presencial es el agraviado y de esa declaración tienen que corroborarse los dichos, y aquí no se cumple esto, porque la declaración es poco creíble, porque en su declaración hace referencia a que tenía estudios superiores y por eso tenía brevete, sin embargo en Juicio declaró que no sabía leer, entonces como pudo advertir que se trataba de un vehículo que decía taxi la Cuzqueña.</p> <p>Ante la insuficiencia probatoria, no debida valoración de las pruebas, la defensa solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su patrocinado.</p> <p><u>SEGUNDO.- De la posición del Ministerio Público.</u></p> <p>El señor Fiscal sostiene que se debe tener en cuenta el Acuerdo Plenario 02-2005, fundamento diez, en tal sentido, durante el interrogatorio no ha señalado que hubiera alguna situación de odio, resentimiento, que nos pudiera colegir que gratuitamente el agraviado le está imputando un delito.</p> <p>No tan solo tenemos la declaración del agraviado quien en forma coherente, firme desde un inicio ha reconocido al imputado como partícipe del hecho delictivo en su agravio; sino también la declaración de los efectivos policiales PNP R y G, quienes elaboraron los documentos policiales correspondientes.</p> <p>No se ha hecho la tacha respecto a estos documentos en su momento oportuno, por lo que han llegado estadio de Juicio Oral, cumpliendo con los artículos 120 y 121 del Nuevo Código Procesal Penal.</p> <p>El acto respecto a la víctima también se encuentra corroborado con el Certificado Médico N° 008535-Lesiones por el perito médico legisla Wilson Emerson Becerra Llempén, que arrojó</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>atención facultativa de tres días por incapacidad médico legal de nueve días.</p> <p>Respecto de la presencia de la fémina que habría subido al vehículo del acusado, queda corroborado además con el Perito Criminalístico Jhonny B. Díaz de la Cruz en su Informe Pericial N° 905-2011, donde refiere que ha podido corroborar las pisadas correspondientes a zapatillas tanto de elemento masculino como femenino en el lugar donde fuera llevado a cabo la intervención policial.</p> <p>Considera la Fiscalía que debe confirmarse la resolución emitida por el Colegiado de primera instancia.</p> <p><u>TERCERO.- De los medios de prueba actuados en audiencia de apelación.</u></p> <p>Se tomó la declaración al sentenciado quien aceptó declarar en audiencia, respondiendo de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El día dos de agosto del dos mil once, se encontraba realizando servicio de taxi. Su última carrera fue a las ocho y treinta de la noche aproximadamente. 2) Respecto a la imputación manifiesta que ese día solo estaba haciendo una carrera y lo detienen por el lugar de los hechos. 3) A la pregunta ¿Cómo es que el agraviado lo haya reconocido como la persona que participó en el hecho? Respondió que al agraviado si lo conoce, porque trabajaba por la Pradera en un colectivo, en esas circunstancias lo conoció, tenían una relación de transportistas nada más. 4) Cuando se le preguntó ¿Los funcionarios policiales que lo intervinieron refieren que lo hacen a raíz de una llamada que se hizo al 105, cuál fue el procedimiento de su intervención? Manifestó que fueron dos o tres patrulleros que llegaron y lo detienen como supuesto 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sospechoso, y el les manifestó que se encontraba arreglando sus neumáticos. El lugar en el que se le intervino era como trocha, a la izquierda había hectáreas de arroz, la casa más próxima estaba a unos tres metros, no puede especificar si estaban juntas o no estas casas, porque estaba oscuro.</p> <p>5) Sobre ¿A cuántas personas movilizó en la última carrera? Sostuvo que a dos personas de sexo femenino. Le solicitaron que las dirija a Pedro Ruiz con Luis Gonzáles, tomó la ruta de Pedro Ruiz, luego Angamos, bajó por Lora y Cordero, luego agarró Junín y terminó por la Comisaría del Norte, agarró la Juan Tomis que da a la carretera a Pimentel, y entró a la Pradera al sitio donde le han mencionado.</p> <p>6) ¿Ha ingresado por la ruta que van los colectivos hacia la Pradera, la carretera principal que va hacia el frontis de la Universidad de San Martín, ha ingresado por ahí? Sí.</p> <p>7) ¿Cuánto cobró por la carrera? Ocho soles. Le pagaron con billete de cincuenta, les dio treinta soles en billetes y el resto de vuelto en sencillo que sacó de la gaveta.</p> <p>8) En su sencillera solo guarda monedas, billetes grandes en su cartuchera –billetera.</p> <p>LECTURA DE PIEZAS PROCESALES: POR PARTE DE LA ABOGADA DEFENSORA</p> <p><u>Acta de Intervención Policial.</u> En el punto número uno de esta acta, la utilidad y pertinencia es respecto a la hora que se consignó, en la que fue víctima el presunto agraviado, es decir a las 20 hrs. con 30 minutos. Su patrocinado de acuerdo a la hora en que fue intervenido, estaba arreglando su llanta y fue visto por una testigo.</p> <p>En el punto dos, última parte donde dice “fue interceptado por un vehículo Chevrolet color plomo con farola Taxi Cuzqueña</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>quien le cerró el paso y los cuatro sujetos que iban a bordo de su vehículo lo encañonaron con un arma de fuego y bajo golpes y amenazas se apoderaron de su vehículo para darse a la fuga, el vehículo (...)” la utilidad consiste en que, resulta anormal el hecho de cómo sabía el agraviado o la policía a donde se dirigía su patrocinado. Esta acta de intervención fue redactada en la comisaría no en el lugar de los hechos in situ.</p> <p><u>Acta de entrevista a la señora S</u>, la utilidad es respecto a la hora en que ella vio a su patrocinado, cuando se le pregunta para que narre por los hechos, dice que se encontraba en casa de su tía a las ocho y treinta de la noche vio un carro que se dirigía del camino de San José hacia la universidad, escuchó el sonido de aire de una llanta, en eso vio un auto modelo tico al parecer particular y no ha visto a otras personas. Hace dos observaciones, una respecto a la hora en que vio a su patrocinado, otro, de la dirección en que dice se dirige el auto. Se trata de una testigo del representante del Ministerio Público, la misma que declaró cuando el señor fiscal se constituyó hasta su domicilio, la misma que en Juicio no se presentó.</p> <p><u>CUARTO.- De la delimitación del debate</u></p> <p>Conforme a la pretensión impugnativa del sentenciado, corresponde a la Sala verificar: Si conforme a las pruebas actuadas en el juicio, el recurrente es o no coautor del delito contra el patrimonio en su figura de ROBO AGRAVADO previsto en los incisos 2,3,4,5 y 8, del Artículo 189 del Código Penal y si es que existen medios probatorios suficientes para tenerlo como tal.</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota: La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción, y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la parte expositiva incluyendo la cabecera.

LECTURA. El cuadro 4, revela que **la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta.** Se derivó de la calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: muy alta y muy alta, respectivamente. En, la introducción, se encontraron los 5 parámetros previstos: el asunto, la individualización del acusado; el encabezamiento; y los aspectos del proceso, y la claridad. Asimismo, en la postura de las partes, se encontraron los 5 parámetros previstos: el objeto de la impugnación, la congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación; la formulación de las pretensiones del impugnante; y las pretensiones penales y civiles de la parte contraria y la claridad.

	<p>automóvil como Matiz con farola Taxi La Cuzqueña, que estaba con la maletera abierta lo adelantó bruscamente, cerrándole el paso por lo que se vio obligado a bajar la velocidad; en tales circunstancias sus pasajeros le dijeron “ya perdiste concha de tu...”, encañonándolo con un arma de fuego y lesionarlo con la cacha del arma en la</p>	<p><i>dar a conocer de un hecho concreto</i>).Si cumple 5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p>											
<p style="text-align: center;">Motivación del derecho</p>	<p> cabeza y en el rostro; optando la fémina por bajar del vehículo del agraviado y subir al vehículo que le cerró el paso, el cual era conducido por un sujeto de tez trigueña, cabello medio ondulado corto, cara redonda a quien uno de los asaltantes le dijo “oye superman avanza”, quien efectivamente arrancó con dirección a la pista antigua de la caleta San José. En tanto que los delincuentes que estaban en el vehículo del agraviado, le arrebatan sus llaves, lo quitan del volante y lo ponen en la parte posterior, despojándolo de su celular marca NOKIA número 979835073, su DNI N° 40843602, dejándolo abandonado a la altura del CCPP Santa Julia (por carretera de la caleta San José) atado con cintas adhesivas en las manos y en la boca, llevándose su vehículo. La PNP al ser informados de estos hechos por la central 105, acudió al lugar de los hechos de manera inmediata, es así que mientras el agraviado era auxiliado por el Cap. PNP R en una unidad móvil; otra unidad móvil KF-10168 al</p>	<p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (<i>Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas</i>). Si cumple 2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (<i>Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas</i>). Si cumple 3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (<i>Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas</i>). Si cumple 4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (<i>Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo</i>). Si cumple 5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i></p>					<p>X</p>						

	mando del SOB PNP G y se constituyó al lugar del robo	Si cumple										
Motivación de la pena	<p>y toman conocimiento también de los pobladores del lugar, que la unidad comprometida en el asalto había huido con dirección al Pueblo Joven Juan Pablo II, optando por peinar dicha zona y al llegar a una trocha carrozable con dirección al CP Santa Julia advierten la presencia de un vehículo con las mismas características del que cerró el paso al agraviado, además su conductor estaba debajo del carro arreglando una llanta con las luces apagadas, siendo intervenido por la PNP identificándose como B; por lo que la PNP interviniente comunica de este hallazgo al Cap. PNP R, quien se constituyó a dicho lugar con el agraviado, siendo que éste reconoció plenamente y de manera espontánea e inmediata a dicha unidad, como el vehículo que le cerró el paso: cuyas características son: automóvil con farola, marca Chevrolet, color plomo modelo SPARK LITE de placa de rodaje M2M-627. también reconoció al conductor de este vehículo por sus características físicas.</p> <p>2) Que, estos hechos el Ministerio Público los tipifica en los incisos 2,3,4,5 y 8 del Art.189 del Código Penal que sanciona al que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola</p>	<p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 (<i>Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen</i>) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (<i>Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa</i>). Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (<i>Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido</i>). Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (<i>Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas</i>). Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. (<i>Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado</i>). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p>					X					

Motivación de la reparación civil	<p>con un peligro inminente para su vida o integridad física, con las agravantes de haberlo realizado durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero – medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos, y sobre vehículo automotor.</p> <p><u>SEXTO.- Intervención del acusado en calidad de coautor y motivos para desestimar su pretensión.</u></p> <p>Teniendo en cuenta que la defensa técnica del recurrente cuestiona la participación de su patrocinado en el delito de ROBO AGRAVADO, señalando que: A) El Colegiado de primera instancia no ha valorado adecuadamente las pruebas actuadas en el juicio oral, B) En su declaración preliminar, el agraviado no ha mencionado el letrado que diga La Cuzqueña, solo hace referencia a un vehículo matiz color plomo que se encontraba con la maletera abierta; asimismo, si en el juicio oral hace referencia que no sabe leer como pudo haber darse</p>	<p>1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. <i>(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas)</i>. Sí cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. <i>(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas)</i>. Sí cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. <i>(En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención)</i>. Sí cumple</p> <p>4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Sí cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Sí cumple</p>					X					
--	---	---	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

<p>cuenta lo que decía en el cartel, C) Lo normal en estos casos es que trate de protegerse físicamente y materialmente el vehículo, por lo que debido a como sucedieron los hechos no pudo identificar a su patrocinado, D)No se ha valorado debidamente la declaración de Luz Emerita Sánchez Quispe, quien ha manifestado que vio al sentenciado solo sin hacer referencia a una mujer, y E) Tampoco se ha valorado la disposición de levantamiento de secreto de las comunicaciones que se hizo a su patrocinado. Al respecto, estima este Colegiado que, en contrario a lo alegado por la defensa técnica del sentenciado apelante, el órgano de primera instancia, sí ha efectuado una correcta valoración del material probatorio actuado en dicha instancia, por lo siguiente:</p> <p>A) De su condición de Coautor: La coautoría tiene lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Código penal, cuando varias personas cometen un delito en común; señala el autor Percy García Caveró al respecto, que: la teoría del dominio del hecho en esta forma de autoría tiene lugar <i>“cuando los intervinientes toman la decisión común de realizar el delito y cada uno realiza un aporte esencial en el estadio de ejecución”</i>, (Lecciones de Derecho Penal, Parte General, ED. Grijley 2008, Pág. 577) y en el caso de autos se ha establecido,</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>fuera de toda duda, que el acusado forma parte de un plan general que se inicia con los cinco sujetos que se hacen pasar como pasajeros para luego el acusado interceptar el vehículo y favorecer a que lo despojen del mismo, huyendo y dejándolo abandonado al agraviado. <i>El rol del acusado fue encargarse de interceptar al vehículo que conducía el agraviado, cerrándole el paso, para que los demás sujetos que se hacían pasar como pasajeros despojen con violencia el vehículo al agraviado,</i> constituyendo la conducta del recurrente un aporte indispensable en la ejecución del ilícito, quedando probado por las razones siguientes:</p> <p>i) El día dos de agosto del dos mil once, siendo las veinte horas con treinta minutos aproximadamente de la noche, en circunstancias que el agraviado se dirigía haciendo colectivo, desde las avenidas Pedro Ruiz con Luis Gonzáles, llevando a bordo a cinco personas, entre ellos una mujer, que simulaban ser pasajeros, con dirección a la Pradera, en dicho trayecto, fue interceptado por otro vehículo color plomo, que era conducido por el sentenciado, momento en el cual mediante violencia y haciendo uso de armas de fuego redujeron al agraviado y le despojaron del vehículo de placa</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>de rodaje M1E – 629, marca NISSAN, Station Wagon, color plata, de propiedad de J (conforme a la copia de tarjeta de propiedad oralizada en juicio oral y que obra en el folio 10 de la carpeta de medios probatorios), para luego dejarlo abandonado, versión que ha sido corroborada con la declaración firme y coherente del agraviado tanto en el juicio oral como en la declaración preliminar (folio 41-43) que fue introducida al juicio, en el extremo de la pregunta número tres. Asimismo, momentos después, al ser auxiliado por efectivos policiales y realizar el operativo respectivo, se logra intervenir al acusado Edit Genaro Guevara Ríos, en circunstancias que se le había reventado una llanta y procedía al cambio del mismo, siendo reconocido plenamente por el agraviado.</p> <p>ii) La declaración del agraviado es tomada como prueba de cargo, puesto que cumple con las siguientes exigencias: <i>a) ausencia de incredibilidad subjetiva:</i> al no haberse establecido que entre el agraviado y el sentenciado apelante, o sus familiares existan relaciones de enemistad, odio o algún otro sentimiento subalterno que hubiera motivado una</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>falsa imputación; b) verosimilitud: La versión narrada por el agraviado ha sido corroborada con los medios de prueba actuados en juicio oral, así tenemos: declaración del SOB Brigadier PNP G, quien participó en la intervención el día de los hechos, declaración del Capitán R, efectivo que también intervino el día que ocurrieron los hechos, Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH (folio 1-4), oralizado y explicado por el perito CAP. PNP Jhony Wilder Díaz De La Cruz, en el juicio oral, acta de intervención policial (folio 6-7), acta de registro personal (folio 8), cuatro tomas fotográficas (folio 48-49), Acta de situación vehicular (folio 13), todas actuadas en la audiencia de juicio oral. c) persistencia en la incriminación: el agraviado, ha mantenido desde el inicio una versión coherente y uniforme respecto de su imputación contra el sentenciado apelante, como autor del delito en su agravio, confirmando en juicio oral los hechos que dieron inicio a la investigación.</p> <p>iii) Asimismo, con el certificado médico legal N° 008535 – L (5), se establece que el agraviado A, con motivo del delito, sufrió lesiones traumáticas</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>recientes de origen contuso, por lo que requirió tres días de atención facultativa por nueve días de incapacidad médico legal, lo mismo que ha sido explicado por el perito LL., en el juicio oral.</p> <p>iv) De igual manera, el agraviado ha identificado plenamente al acusado y al vehículo, durante la investigación, e incluso desde el mismo día de la intervención, tal como lo manifiestan los efectivos policiales que participaron el día de los hechos, G y R, lo cual ha sido sostenido también durante la audiencia de juicio oral.</p> <p>v) Sobre los argumentos de la defensa técnica del sentenciado apelante, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1) Respecto a la diferencia que existiría en las actas respecto a la hora en que ocurrieron los hechos, debe tenerse en cuenta que conforme suscitaron los hechos delictivos, a la forma y circunstancias, conforme a las emociones y miedo causado en la víctima, es evidente que las mismas no sean dadas con exactitud, sino en aproximaciones, más aún si es dichas actas no han sido impugnadas con los medios técnicos de defensa con los que ha contado en su defensa el sentenciado oportunamente, conforme a las normas del</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>debido proceso. 2) El agraviado ha brindado su testimonio durante el juicio oral y ha narrado las características tanto del acusado como del vehículo que utilizaron para la comisión del delito, las mismas que no se contradicen con lo manifestado a nivel preliminar, pregunta tres que fue introducida a juicio, 3) Asimismo, ha hecho referencia que pudo identificar al sentenciado, puesto que su reacción normal era la de reprender al mal conductor, que le obstruía el camino, lo cual constituye una reacción normal de los conductores, conforme a las máximas de experiencia. 4) Si bien hace referencia a que durante el juicio oral no se encontraba en posibilidad de dar lectura a su declaración preliminar, de acuerdo a su nivel de instrucción, esto no prueba que no sepa leer, más aún si conforme relata se dedica a las labores de chofer y al transporte público, lo que le permite identificar logos de vehículos que se dedican al mismo rubro, por lo que pudo perfectamente identificar el vehículo, 5) Respecto a la carpeta fiscal 2680-2011, ofrecido como medio probatorio por la defensa del sentenciado, en el cual se solicitó el levantamiento del secreto de</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>las comunicaciones, dichas documentales, no guardan relación con los hechos materia del presente proceso, por lo que resultan irrelevantes para su defensa, 6) Muy contrario, a lo aludido por la defensa del sentenciado, ha quedado debidamente acredita la responsabilidad del acusado, a quien se le intervino de manera sospechosa y conforme han manifestado los efectivos policiales G y R, en sus testimoniales brindadas en juicio oral, de acuerdo a las características del lugar, estaba cambiando neumático, con las luces apagadas, más aún, si se cuenta con el testimonio de Luz Emerita Sánchez Quispe, quien sostiene que el acusado se dirigía en el vehículo a toda velocidad y que se detuvo con motivo del desperfecto que tuvo su neumático, todo lo cual evidencia su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Público; asimismo, sobre su versión de que se encontraba por el lugar realizando una carrera a dos señoras, esto no ha sido corroborado, puesto que si como refiere que le cancelaron ocho nuevos, no resulta creíble, si es que al momento del registro personal se le encontró billetes de cincuenta nuevos soles,</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

careciendo de lógica que cuente sólo con ese dinero si trabaja desde horas de la mañana y que sólo haya contado con dinero que hubiese entregado como vuelto, más aún si la testigo Sánchez Quispe, también hace referencia a que se encontraba manejando sólo, 7) Finalmente, como hace referencia su defensa que no es el único vehículo con esas características, también es cierto que por el lugar donde fue intervenido, es una zona de poco tráfico vehicular, lo que no hace más que confirmar que su estadía por dicho lugar fue con motivo de su actuar delictivo.

SÉTIMO: De la conclusión de la sala

Siendo así, en criterio de la Sala, durante el juzgamiento sí se ha aportado suficiente material probatorio que acredita la participación del sentenciado apelante en los hechos materia de imputación, habiendo efectuado el A quo una correcta valoración de los medios de prueba aportado en el juicio oral; por lo que se ha quebrantado el principio de presunción de inocencia que alega, encontrándose en consecuencia, arreglada a ley, la sentencia de condena impuesta.

<p>OCTAVO.- De las Costas</p> <p>Conforme a lo dispuesto por el artículo 504, inciso 02, del código procesal penal, el apelante, por no haber sido estimada su impugnación, íntegramente está obligado al pago de las costas que el juicio de apelación hubiera causado a la parte agraviada en este proceso.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos; del derecho; de la pena; y de la reparación civil, se realizó en el texto completo de la parte considerativa.

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración.

LECTURA. El cuadro 5, revela que **la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta.** Se derivó de la calidad de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de rango: muy alta, muy alta, muy alta, y muy alta; respectivamente. En, la motivación de los hechos, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian la aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencian la aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, y la claridad. En, la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad; En, la motivación de la pena; se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y la claridad; Finalmente en, la motivación de la reparación civil, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cumplir los fines reparadores, y la claridad.

<p style="text-align: center;">Descripción de la decisión</p>	<p>la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el uno de agosto de dos mil veinticuatro; fijaron en mil nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del agraviado, confirmándola en lo demás que contiene; con costas; devolver la carpeta de apelación al juzgado de origen.</p> <p>Señores:</p> <p>BALCAZAR ZELADA</p> <p><u>NÚÑEZ JULCA</u></p> <p>GARCÍA RUIZ.</p>	<p>2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p>					<p style="text-align: center;">X</p>					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota. El cumplimiento de los parámetros de “la aplicación del principio de correlación”, y “la descripción de la decisión”, se identificaron en el texto completo de la parte resolutive.

LECTURA. El cuadro 6 revela **que la calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta.** Se derivó de la calidad de la: aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente. En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio, el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia, el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, respectivamente, y la claridad. Por su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s); el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s), y la claridad.

Cuadro 7: Calidad de la sentencia de primera instancia, sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Variable en estudio	Dimensiones de la variable	Sub dimensiones de la variable	Calificación de las sub dimensiones					Calificación de las dimensiones	Determinación de la variable: Calidad de la sentencia de primera instancia						
			Muy baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta		Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta		
			1	2	3	4	5		[1 - 12]	[13-24]	[25-36]	[37-48]	[49 - 60]		
Calidad de la sentencia de primera instancia	Parte expositiva	Introducción					X	10	[9 - 10]	Muy alta					60
		Postura de las partes					X		[7 - 8]	Alta					
									[5 - 6]	Mediana					
							[3 - 4]		Baja						
						[1 - 2]	Muy baja								
	Parte considerativa		2	4	6	8	10	40	[33- 40]	Muy alta					
		Motivación de los hechos					X		[25 - 32]	Alta					
		Motivación del derecho					X		[17 - 24]	Mediana					
		Motivación de la pena					X		[9 - 16]	Baja					
		Motivación de la reparación civil					X		[1 - 8]	Muy baja					
	Parte resolutive	Aplicación del Principio de correlación					5	10	[9 - 10]	Muy alta					
							X		[7 - 8]	Alta					
		Descripción de la decisión							[5 - 6]	Mediana					
									[3 - 4]	Baja					
									[1 - 2]	Muy baja					

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración.

LECTURA. El Cuadro 7 revela, que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01; del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo, fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive que fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de: introducción, y la postura de las partes, fueron: muy alta y muy alta; asimismo de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: muy alta, muy alta, muy alta y muy alta; finalmente la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, fueron: muy alta y muy alta, respectivamente.

Cuadro 8: Calidad de la sentencia de segunda instancia, sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2016

Variable en estudio	Dimensiones de la variable	Sub dimensiones de la variable	Calificación de las sub dimensiones					Calificación de las dimensiones	Determinación de la variable: Calidad de la sentencia de primera instancia						
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy Alta		Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta		
									[1 - 12]	[13-24]	[25-36]	[37-48]	[49 - 60]		
			1	2	3	4	5								
Calidad de la sentencia de segunda instancia	Parte expositiva	Introducción					X	10	[9 - 10]	Muy alta					60
		Postura de las partes					X		[7 - 8]	Alta					
									[5 - 6]	Mediana					
									[3 - 4]	Baja					
	Parte considerativa	Motivación de los hechos	2	4	6	8	10	40	[33- 40]	Muy alta					
							X		[25 - 32]	Alta					
		Motivación del derecho					X		[17 - 24]	Mediana					
		Motivación de la pena					X		[9 - 16]	Baja					
		Motivación de la reparación civil					X		[1 - 8]	Muy baja					
	Parte resolutive	Aplicación del Principio de correlación	1	2	3	4	5	10	[9 - 10]	Muy alta					
							X		[7 - 8]	Alta					
		Descripción de la decisión					X		[5 - 6]	Mediana					
									[3 - 4]	Baja					
									[1 - 2]	Muy baja					

Cuadro diseñado por la Abog. Dione L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica

Fuente. Sentencia de segunda instancia en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración.

LECTURA. El cuadro 8, revela que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre robo agravado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01; del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo, fue de rango muy **alta**. Se derivó, de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive que fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de la introducción, y la postura de las partes, fueron: muy alta y muy alta; asimismo de la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: muy alta, muy alta, muy alta y muy alta; finalmente la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, fueron: muy alta y muy alta, respectivamente.

4.2. Análisis de los resultados

Conforme a los resultados se determinó que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre robo agravado del expediente N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, perteneciente al Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo, fueron de rango muy alta y muy alta calidad, esto es de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, planteados en el presente estudio, respectivamente (Cuadros 7 y 8).

Para poder analizar sentencias debemos iniciar por definir las, pues para Bacigalupo (1999) afirma que la sentencia penal tiene por finalidad aclarar si el hecho delictivo investigado existió, si fue cometido por el encartado o tuvo en él alguna participación, para lo cual, se realiza el análisis de su conducta de acuerdo con la teoría del delito como un instrumento conceptual para lograr la aplicación racional de la ley penal a un caso concreto, así como la teoría de la pena y la reparación civil para determinar sus consecuencias jurídicas.

En relación a la sentencia de primera instancia

Se trata de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de primera instancia, este fue el Juzgado Penal Colegiado de la ciudad de Chiclayo cuya calidad fue de rango muy alta, de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes (Cuadro 7)

Se determinó que la calidad de las partes expositiva, considerativa, y resolutive fueron, de rango muy alta, muy alta, y muy alta, respectivamente (Cuadro 1, 2 y 3).

1. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la introducción y de la postura de las partes, que fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 1).

En la **introducción**, se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; los aspectos del proceso; y la claridad.

En relación a la parte introductoria, se puede afirmar que la juez al momento de sentenciar, tal y como lo expone San Martín (2006) y Talavera (2011), cuando tratan sobre la parte expositiva de una sentencia, tomó en cuenta al momento de redactar la misma, el encabezamiento, el planteamiento del problema y el objeto procesal, que viene a ser el conjunto de presupuestos sobre los cuales la juez resolvió

Que en concordancia con nuestro expediente en estudio N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, cumple con la mención expresa del número de expediente, nombre de las partes, delito, número de resolución, lugar y fecha, así como también me indica el asunto o el problema materia de imputación.

En **la postura de las partes**, se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos, circunstancias objeto de la acusación; Evidencia la calificación jurídica del fiscal, Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal; la pretensión de la defensa del acusado y la claridad.

En la postura de las partes según la teoría los hechos que fija el Ministerio Público en la acusación, son los vinculantes para el Juzgador e impiden que este juzgue por hechos no contenidos en la acusación, que incluya nuevos hechos, ello como garantía de la aplicación del principio acusatorio (San Martín, 2006).

Así mismo, podemos indicar que de acuerdo a nuestro expediente en estudio cumple con la descripción de los hechos ocurridos, con la calificación jurídica del fiscal, con la pretensión penal y civil del fiscal, así como también con la defensa del acusado.

2. En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la **motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil**, que fueron de rango muy alta, muy alta, alta y alta, respectivamente (Cuadro 2).

La parte considerativa, es la parte que contiene el análisis del asunto, importando la valoración de los medios probatorios para el establecimiento de la ocurrencia o no de los

hechos materia de imputación y las razones jurídicas aplicables a dichos hechos establecidos (León, 2008).

En, **la motivación de los hechos**, se encontraron los 5 parámetros previstos las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas.; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad.

Para San Martín (2006), la valoración probatoria consiste en la determinación que debe hacer el órgano jurisdiccional de si los hechos objeto de la acusación fiscal se dieron o no en el pasado, estando el Juzgador vinculado al hecho acusado, por tanto su conclusión no puede ser distinta que afirmar o negar su producción o acaecimiento.

De acuerdo a la sentencia en estudio, cumple con los hechos probados y hechos no probados y el Colegiado de Chiclayo realizó la valoración judicial de las pruebas de manera pertinente.

En **la motivación del derecho**, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad; las razones evidencian la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad, las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad.

La fundamentación jurídica o juicio jurídico es el análisis de las cuestiones jurídicas, posterior al juicio histórico o la valoración probatoria sea positiva, consiste en la subsunción del hecho en un tipo penal concreto, debiendo enfocarse la culpabilidad o imputación personal y analizar si se presenta una causal de exclusión de culpabilidad o de exculpación, determinar la existencia de atenuantes especiales y genéricas, así como de agravantes genéricas, para luego ingresar al punto de la individualización de la pena (San Martín, 2006).

A lo largo del desarrollo de nuestra sentencia en estudio se observó que en la parte

considerativa se halla la valoración de derecho, se aplica la norma sustantiva y la norma adjetiva, y se contrasta con los hechos.

En cuanto a **la motivación de la pena**, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad; las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad, la claridad las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado y la claridad, mientras que no se encontró las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros normativos previstos en los artículo 45 y 46 del Código Penal.

Según Silva (2007), la teoría de la determinación de la pena tiene autonomía sobre la teoría de la pena y la teoría del delito, ello por la necesidad de elaborar una categoría que este más allá de la culpabilidad, por los distintos factores relevantes para la individualización de la pena (comportamientos posteriores al hecho, nivel de sensibilidad a la pena, transcurso del tiempo) que carezcan de un soporte categorial en la teoría del delito y las múltiples circunstancias del hecho concreto a las que se asigna relevancia cuantificadora y que no tienen una referencia categorial clara.

A nuestro entender nuestra sentencia en estudio cumple la motivación de la pena por cuanto aplica un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales que tiene por función, identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito, en este caso el delito de robo agravado.

Finalmente en, **la motivación de la reparación civil**, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible y la claridad; las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores.

El daño, como define García, P. (2012) siguiendo a Gálvez (1990) es definido como la lesión a un interés patrimonial o extra patrimonial que recae sobre determinados bienes, derechos o expectativas de la víctima, no limitándose al menoscabo de carácter patrimonial, sino que incluye aquellas afectaciones que tienen una naturaleza no patrimonial, así como los efectos que produzca el delito en la víctima, entendido desde un concepto diferente del daño personal de naturaleza civil, sino a los efectos de los problemas de integración que causa el delito.

En nuestra sentencia en estudio la reparación civil se determina en atención al principio del daño causado, puesto que la reparación civil debe ceñirse al daño, con independencia del agente o sujeto activo del mismo.

Con respecto a este hallazgo se puede decir que es quizá la parte más importante de la sentencia ya que es aquí donde va contenido el análisis del asunto (León, 2008); asimismo para San Martín (2006), siguiendo a Cortez (2001) considera que en la parte considerativa es donde contiene la estructura lógica de la sentencia, que a su vez va a ser materia determinante para concluir si es acusado es culpable o inocente; si dicha conducta es merecedora de pena o no.

3. En cuanto a la parte resolutive se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, que fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 3).

En, la **aplicación del principio de correlación**, se encontraron los 5 parámetros previstos: parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal, el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado y la claridad; el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente.

Por el principio de correlación en nuestra sentencia se evidencia que el fallo tiene relación con la parte expositiva y la parte considerativa, que el juzgador sólo se pronuncia por las pretensiones formuladas en la parte expositiva.

En **la descripción de la decisión**, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado; y la claridad.

Sobre el particular se puede afirmar que es en esta parte donde se pronunciará el juzgador sobre los hechos materia de imputación decidiendo su inocencia o culpabilidad (San Martín, 2006); asimismo el autor señala que dicho pronunciamiento por parte del Juez debe guardar relación con la parte considerativa, a efectos de garantizar la correlación interna de la decisión.

Por su parte; (Montero, 2001) señala que la decisión del juzgador debe ser entendible para ambas partes, dejando de lado todo léxico jurídico que dificulte al entendimiento y por ende al cumplimiento de la sentencia.

Analizando, éste hallazgo se puede decir que: Se inicia con la palabra Parte resolutive en el cual se pronuncia CONDENANDO al acusado B como COAUTOR del delito CONTRA EL PATRIMONIO en su figura de ROBO AGRAVADO y como tal le impone TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA y FIJARON en UN MIL NUEVOS SOLES el pago que por concepto de Reparación Civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado.

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguientes razones: Que cumple con el principio de congruencia, acorde con la pretensión inicial del proceso, por eso se puede afirmar que tiene una calidad de muy alta.

En síntesis, de lo visto y analizado considerando que: la parte expositiva, considerativa y resolutive cumple con los requisitos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, se puede afirmar que la sentencia de primera instancia reveló una calidad de muy alta.

En relación a la sentencia de segunda instancia

Se trata de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de segunda instancia, este fue la Sala Penal de Apelaciones, de la ciudad de Chiclayo cuya calidad fue de rango muy alta, de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes (Cuadro 8)

Se determinó que la calidad de sus partes expositiva, considerativa y resolutive fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta respectivamente (Cuadro 4, 5 y 6).

4. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la introducción y de la postura de las partes, que fueron de rango muy alta y muy alta calidad respectivamente (Cuadro 4).

En la **introducción**, se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento, el asunto, la individualización del acusado; los aspectos del proceso y la claridad

En cuanto a **la postura de las partes**, se encontraron los 5 parámetros previstos: evidencia el objeto de la impugnación, evidencia la congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación; evidencia la formulación de las pretensiones del impugnante; evidencia formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria y la claridad.

En relación a los resultados obtenidos puede afirmarse que, la sentencia de segunda instancia cumple con los parámetros siguientes: a) Lugar y fecha del fallo; b) el número de orden de la resolución; c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de ley del acusado, vale decir, sus nombres y apellidos completos, apodo, sobrenombre y sus datos personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.; d) la mención del

órgano jurisdiccional que expide la sentencia; e) el nombre del magistrado ponente o Director de Debates y de los demás jueces (Talavera, 2011).

El encabezamiento se inicia con los siguientes datos: el Nombre del Juzgado a cargo, el tipo de proceso, el número de expediente, nombre del acusado, delito, agraviado, número de resolución, y fecha. En cuanto al cuerpo de la sentencia se inicia con la palabra Óídos y vistos, en el cual se puede identificar lo expuesto en el medio impugnatorio, al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado B. al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado B. Ante la insuficiencia probatoria, no debida valoración de las pruebas, la defensa solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su patrocinado.

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguientes razones: Cuenta con los datos de generales de ley para identificar un expediente, se puede afirmar que tiene una calidad de muy alta.

5. En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de **la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil**, que fueron de rango: muy alta, muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 5).

En, la **motivación de los hechos**, fue de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian la aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencian la aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia y la claridad.

En cuanto a la **motivación del derecho**, fue de rango muy alta; porque se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad, las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad;

En cuanto a la **motivación de la pena**, fue de rango muy alta, porque se encontraron

los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal y la claridad;

Finalmente, respecto de **la motivación de la reparación civil**, fue de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. y la claridad;

En base al hallazgo se puede afirmar que en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, se evalúa el juicio jurídico conforme a los mismos criterios del juicio jurídico de la sentencia de primera instancia. Es decir se aprecia los juicios de motivación de los hechos materia de impugnación, derecho, pena y reparación civil.

6. En cuanto a la parte resolutive se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, que fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 6).

Esta parte expresa el principio de correlación interna de la sentencia de segunda instancia, por la cual, la decisión de segunda instancia debe guardar correlación con la parte considerativa (Vescovi, 1988).

En, la **aplicación del principio de correlación**, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas

en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio, el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, respectivamente y la claridad.

Finalmente, en **la descripción de la decisión**, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado; y la claridad.

Se inicia con la palabra Resuelve, en el cual se pronuncia de la siguiente manera: CONFIRMAR la sentencia en cuanto CONFIRMAR LA SENTENCIA contenida en la resolución número seis, del nueve de mayo del año dos mil doce, emitida por el Juzgado Penal Colegiado de esta Corte, que condena al apelante como autor del delito contra el patrimonio, en su figura de ROBO AGRAVADO, en agravio de A; como a tal se le impone TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma que computada desde la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el uno de agosto de dos mil veinticuatro; fijaron en mil nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del agraviado.

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguientes razones: el contenido de la parte resolutive cumple con el principio de congruencia, se puede afirmar que tiene una calidad de muy alta.

Implica que la decisión del Juzgador de segunda instancia debe guardar correlación con los fundamentos de la apelación, los extremos impugnados y la pretensión de la apelación, es lo que la doctrina denomina como el principio de correlación externa de la decisión de segunda instancia, de lo analizado en la sentencia de segunda instancia, se puede concluir que cumple con los parámetros indicados por nuestra universidad.

V. CONCLUSIONES

Se concluyó que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia sobre Robo agravado, en el expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, de la ciudad de Chiclayo y fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 7 y 8).

5.1. En relación a la calidad de la sentencia de primera instancia. Se concluyó que fue de rango muy alta se determinó en base a la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, que fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. (Ver cuadro 7 comprende los resultados de los cuadros 1, 2 y 3). Fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de la ciudad de Chiclayo, el pronunciamiento fue condenatorio en el delito de robo agravado a una pena de trece años, Respecto a la reparación civil, se fijó la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles. (N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01).

5.1.1. La calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción y la postura de las partes, fue de rango muy alta (Cuadro 1). En la introducción fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; los aspectos del proceso; y la claridad. Por su parte, en la postura de las partes fue de rango muy alta; Se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos, circunstancias objeto de la acusación; Evidencia la calificación jurídica del fiscal, Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal; la pretensión de la defensa del acusado y la claridad. En síntesis la parte expositiva presentó 10 parámetros de calidad.

5.1.2. La calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación de los hechos y la motivación del derecho, de la pena y la reparación civil fue de rango muy alta (Cuadro 2). En la motivación de los hechos fue de rango muy alta; porque se encontraron los 5 parámetros previstos las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencia aplicación de

las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad. Por su parte, la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad. Asimismo la calidad de la motivación de la pena fue de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos: ; las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad; las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad, las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros normativos previstos en los artículo 45 y 46 del Código Penal y la claridad,. Finalmente la motivación de la reparación civil fue de rango muy alta; se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible, las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores y la claridad. En síntesis la parte expositiva presento 20 parámetros de calidad.

5.1.3. La calidad de la parte resolutive con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, fue de rango muy alta (Cuadro

3). En la aplicación del principio de correlación fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal, el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado, el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente y la claridad. Por su parte en la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque en su contenido se hallaron los 5 parámetros previstos: el

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado; y la claridad. En síntesis la parte resolutive presento: 10 parámetros de calidad.

5.2. En relación a la calidad de la sentencia de segunda instancia. Se concluyó que, fue rango muy alta; se determinó en base a la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, que fueron de rango muy alta, muy alta, muy alta, respectivamente (Ver cuadro 8 comprende los resultados de los cuadros 4, 5 y 6). Fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo, donde se resolvió: confirmar la sentencia, por lo cual se condena a B como autor del delito contra el patrimonio en agravio de A, imponiéndole trece años de pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de mil nuevos soles (expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01).

5.2.1. La calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción y la postura de las partes, fue de rango muy alta (Cuadro 4). En la introducción fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento, el asunto, la individualización del acusado; los aspectos del proceso y la claridad. Por su parte la postura de las partes fue de rango muy alta porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado, y la claridad. En síntesis la parte expositiva presento: 10 parámetros de calidad.

5.2.2. La calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación de los hechos y la motivación del derecho, la pena y la reparación civil fue de rango muy alta (Cuadro 5). En la motivación de los hechos fue de rango muy alta; porque en su contenido, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad. Por su parte en la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad. Asimismo en la motivación de la pena, fue de rango muy alta, porque se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado; que las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal y la claridad. Finalmente en la motivación de la reparación civil, fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores y la claridad. En síntesis la parte considerativa presento: 20 parámetros de calidad.

5.2.3. La calidad de la parte resolutive con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, fue de rango muy alta (Cuadro 6). En la aplicación del principio de correlación fue de rango muy alta; porque en su

contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio, el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, respectivamente y la claridad. Finalmente, en la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado; y la claridad. En síntesis la parte resolutive presento 10 parámetros de calidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, S. y Morales, J. (2005). *El derecho de acceso a la información pública – Privacidad de la intimidad personal y familiar*. En: Gaceta Jurídica. *LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Análisis artículo por artículo. Obra colectiva escrita por 117 autores destacados del País*. (pp.81-116). T-I. (1ra. Ed.). Lima.
- Alternativas.
- Arenas López, Mailín. (2009) *La argumentación jurídica en la sentencia*, en *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, octubre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/06/alrb.htm
- Arenas, L. & Ramírez, B. (2009). “*La argumentación jurídica en la sentencia*”. Recuperado de: www.eumed.net/rev/cccss/06/alrb.htm.
- Bacigalupo, E. (1999). *Derecho Penal: Parte General*. (2da. Ed.). Madrid: Hamurabi.
- Balbuena, P., Díaz, L., Tena de Sosa, F. (2008). *Los Principios fundamentales del*
- Balbuena, P., Díaz, L., Tena, F. (2008). *Los Principios fundamentales del Proceso Penal*. Santo Domingo: Finjus.
- Barreto, J. (2006). *La Responsabilidad Solidaria*. Documento recuperado de: <http://lawiuris.com/2009/01/09/responsabilidad-solidaria/>
- Barton, B. 2002. *Judicial Reform in Latin America*. En <http://www.ruf.rice.edu/~poli/NewsandEvents/UGRC2002/barton.pdf>
- Bertot Yero, María Caridad. (2009) *Curso de Profesores Vascos. La sentencia Penal en Cuba* .p.2
- Binder, Alberto. *Introducción al Derecho procesal penal*. Ad Hoc SRL. 2da edición. Primera reimpresión. Argentina 2000. Pág. 245.
- Bramont, T. (1998). *Manual de Derecho Penal – Parte Especial*. Lima, Perú: San Marcos.
- Burgos V. (2002). Tesis: *El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad*. Lima-Perú. Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/burgos_m_v/cap3.pdf
- Burgos, J. (2010). *La Administración de Justicia en la España del XXI (Ultimas Reformas)*. Recuperado de http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=16&embedded=true (23.11.2013)

- Bustamante, R. (2001). *El derecho a probar como elemento de un proceso justo*. Lima: Ara.
- Cafferata, J. (1998). *La Prueba en el Proceso Penal* (3ra Edición). Buenos Aires: DEPALMA
- Calderón, A. (2013). *Derecho procesal penal. Desarrollo con precedentes judiciales vinculantes, acuerdos plenarios de la corte suprema y últimas modificaciones*. Lima, Perú: San Marcos.
- Calderón, A. y Águila, G. (2011). *El AEIOU del derecho*. Modulo penal. Lima-Perú. Editorial San Marcos E.I.R.L.
- Camerino: Trotta.
- Carrasco Espinach Lourdes María. (2008) Casación, motivación de sentencia y racionalidad. Revista Justicia y Derecho número 10, año 6, junio 2008. Pág. 39.
- Casal, J. y Mateu, E. (2003). En Rev. Epidem. Med. Prev. 1: 3-7. *Tipos de Muestreo*. CReSA. Centre de Recerca en Sanitat Animal / Dep. Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona. Recuperado en: <http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TiposMuestreo1.pdf> . (23.11.2013)
- Chanamé, R. (2009). *Comentarios a la constitución*. (4ta. ed). Lima: Jurista
- Cháñame, R. (2009). *Comentarios a la Constitución*. (4ta. Ed.). Lima: Jurista Editores.
- Cobo, M. (1999). *Derecho penal. Parte general*. (5ta. Ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Colomer, I. (2003). *La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales*. Valencia: Tirant to Blanch.
- Córdoba, J. (1997). *Culpabilidad y Pena*. Barcelona: Bosch.
- Couture, E. (1958). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. (3ra. Ed.). Buenos Aire: Depalma.
- Cubas, V. (2003). *El Proceso Penal. Teoría y Práctica*. Lima: Perú: Palestra Editores.
- Cubas, V. (2015). *El nuevo Proceso Penal peruano. Teoría y práctica su implementación*. (2da. Ed.).Lima: Perú: Palestra Editores.
- Cubas, V. (2015). *El nuevo Proceso Penal peruano. Teoría y práctica su implementación*. (2da. Ed.).Lima: Perú: Palestra Editores.
- Cubas, V. (2006). *El proceso penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional*. Perú: Palestra.

Cubas, V. (2006). *El Proceso Penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional*, Perú: Palestra.

de justicia de la república del Perú, tribunal constitucional del Perú, corte interamericana de derechos humanos. Lima, Perú: Editora Diskcopy.

De La Oliva Santos, Andrés. El Derecho a los Recursos. Los problemas de la única instancia. (En) Revista Tribunal de Justicia N° 10. 1997. p. 980.

De Santo, V. (1992). *La Prueba Judicial, Teoría y Práctica*. Madrid: Varsi.

Devis, H. (2002). *Teoría General de la Prueba Judicial*. (Vol. I). Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía.

Diccionario de la lengua española (s.f). Rango. [en línea]. En portal wordreference. Recuperado de: <http://www.wordreference.com/definicion/rango>.

Diccionario de la lengua española (s.f.) Calidad. [En línea]. En wordreference. Recuperado de: <http://www.wordreference.com/definicion/calidad> (10.10.14)

Diccionario de la lengua española (s.f.) Inherente [en línea]. En, portal wordreference. Recuperado de: <http://www.wordreference.com/definicion/inherentes>. Editores.

Escovar León, Ramón (2001). La motivación de la sentencia y su relación con la argumentación jurídica. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas.

Esparza Leibar, Iñaki. El principio del proceso debido. Barcelona - España: José María Bosch, 1995, pág. 214.

Expediente N° 3110-2011-48-1706-JR-PE-01, *delito de Robo agravado*, 1° Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo.

Expediente N.° 4080-2004-AC/TC. ICA. De fecha, 28 de enero del 2005. Caso: MARIO FERNANDO RAMOS HOSTIA

Fairen, L. (1992). *Teoría General del Proceso*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Falcón, E. (1990). *Tratado de la prueba*. (Tom. II). Madrid: Astrea.

Ferrajoli, L. (1997). *Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal* (2da Edición).

Fix Zamudio, H. (1991). *Derecho Procesal*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Fix, H. (1991). *Derecho Procesal*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Fontan (1998). *Derecho Penal: Introducción y Parte General*. Buenos Aires: *Formal*

Como Procedencia Del Recurso de Apelación Especial en el Proceso Penal Guatemalteco. (Tesis para titulación). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

- Franciskovic I. (2002). *Derecho Penal: Parte General*, (3a ed.). Italia: Lamia.
- Frisancho, M. (2013). *Manual para la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Rodhas
- Gaceta Jurídica. (2011). *Vocabulario de uso judicial*. Lima, Perú: El Búho.
- García, P. (2012). *Derecho Penal: Parte General*. (2da. Ed.). Lima: Jurista Editores
- García, P. (2005). *Naturaleza y Alcance de la Reparación Civil*. Recuperado de: http://www.itaiusesto.com/revista/5_0506%20-%20Garcia%20Cavero.pdf
- García, P. (2012). *La naturaleza y alcance de la reparación civil: A propósito del Precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 948.2005 Junín*. *Eta Iuto Esto*, 1-13. Recuperado de: http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_1-Garcia-Cavero.pdf (12.01.14).
- Gimeno Sendra, Vicente (2004). *Derecho Procesal Penal*, Ed. Colex, Madrid,
- Gómez, A. (1994). *La sentencia civil*. (3ra. Edición). Barcelona: Bosch.
- Gómez, G. (2010). *Código Penal – Código Procesal Penal y normas afines*. (17ª. Ed.)Lima: Rodhas.
- Gómez, R (2008). *Juez, sentencia, confección y motivación*. Recuperado de: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=derecho_canonico
- González, A. (2006). *El Principio de Correlación entre Acusación y Sentencia, Departamento de Derecho Internacional y procesal*: Laguna
- Gonzales, C. (2006). *La Fundamentación de las sentencias y la sana critica*. *Revista Chilena de Derecho*. vol 33(01). p. 105.
- Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5ta. Edición). México: Editorial Mc Graw Hill.
- Hernández, R. (2012). *El Derecho De Defensa*. Recuperado de:
- Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5ta. Edición). México: Editorial Mc Graw Hill.
- Hinostroza, A. (2004). *Sujetos del Proceso Civil*. (1ra. Edición). Lima: Gaceta Jurídica.
<http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2012/09/el-derecho-de-defensa-y-la-defensa.html>

<https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwsIeosKjJAhXB6CYKHTVFBs8QFggrMAI&url=http%3A%2F%2Ffreddyhernandezrengifo.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fel-derecho-de-defensa-y-la-defensa.html&usq=AFQjCNGs-4fouHBI7rx85QAs4BoSAU5aBA&sig2=M47iHX9G6ngfWUPUcXENzQ>

Jaén Vallejo, Manuel. (1987). La Presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional. Akal. Madrid. P 19.

Jescheck, Hans-Heinrich (1981); Tratado de Derecho Penal. Parte General, Vol I, traducción y adiciones de Derecho Español por S. Mir Puig y F. Muñoz Conde, Bosch, Barcelona.

Jurista Editores. (2015). *Código Penal (Normas afines)*. Lima.

Landa, C. (2012). *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*. Corte suprema

Lenise, M., Quelopana, A., Compean, L. y Reséndiz, E. (2008). El diseño en la investigación cualitativa. En: Lenise Do Prado, M., De Souza, M. y Carraro, T. *Investigación cualitativa en enfermería: contexto y bases conceptuales. Serie PALTEX Salud y Sociedad 2000 N° 9*. (pp.87-100). Washington: Organización Panamericana de la Salud

León, R. (2008). *Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales*. Lima.: Acad

Lex Jurídica (2012). *Diccionario Jurídico On Line*. Recuperado de: <http://www.lexjurídica.com/diccionario.php>.

Linares (2001). *Enfoque Epistemológico de la Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica*. Recuperado de <http://www.justiciayderecho.org/revista2/articulos/ENFOQUE%20EPISTEMOLOGICO%20Juan%20Linares.pdf>

Machicado, J. (2009). *Clasificación del Delito. Apuntes Jurídicos*. Recuperado de http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/clasificacion-del-delito.html#_Toc272917583

Maestría). Recuperado de: <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1794.pdf>

Mejía J. (2004). *Sobre la Investigación Cualitativa. Nuevos Conceptos y campos de desarrollo*. Recuperado de: http://www.sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/inv_sociales/N13_2004/a15.pdf . (23.11.2013)

Mir Puig, Santiago. (2008). Derecho penal. Parte general. Barcelona. Reppertor

Monroy, J. (1996). *Introducción al Proceso Civil. (Tom I)*. Colombia: Temis

Monroy, J. (1996). *Introducción Al Proceso Civil*. T.I. Bogotá, Colombia: Editorial

- Montero Aroca, J. (2002). *Derecho Jurisdiccional* (10a ed.). Valencia: Tirant to Blanch.
- Montero, J. (2001). *Derecho Jurisdiccional* (10ma Edición). Valencia: Tirant to Blanch.
- Muñoz, D. (2014). Constructos propuestos por la asesora del trabajo de investigación en el IV Taller de Investigación-Grupo-B-Sede-Central Chimbote –ULADECH Católica.
- Muñoz, F. (2003). *Introducción al Derecho Penal*. (2da Edición). Buenos Aires
- Muñoz, F. (2007). *Derecho Penal Parte General*, Valencia.
- Neyra, J. (2010). *Manual del Nuevo Derecho Procesal Penal, Teoría de la prueba*.
- Novak, F. Las Garantías del Debido Proceso. Materiales de Enseñanza PUCP. 1º ed. Octubre 1996. Pág. 71
- Núñez, C. (1981). *La Acción Civil en el Proceso Penal*. (2da. Ed.). Córdoba.
- Ñaupas, H.; Mejía, E.; Novoa, E. y Villagómez, A. (2013). *Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de Tesis*. (3ra. Edic.). Lima – Perú: Centro de Producción Editorial e Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Omeba (2000), (Tomo III). Barcelona: Nava.
- Ore, A. (1993). *Estudios de Derecho Procesal Penal*. Lima, Perú. Editorial
- Ossorio, M. (1996), *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, Editorial Heliasta,
- Pasará, L. (2003). *Como sentencian los jueces del D. F. en materia penal*. México D. F.: CIDE.
- Pásara, L. (s.f.) (2010). Tres Claves de Justicia en el Perú. Recuperado de <http://www.justiciaviva.org.pe/blog/?p=1945>.
- Peña, R. (1983). *Tratado de Derecho Penal: Parte General* (Vol. I) (3ra. Ed.). Lima: Grijley.
- Peña, R. (2002). *Derecho Penal Parte Especial*. Lima: Legales.
- Peña, R. (2011), *Derecho Penal Parte General, Tomo II*. Lima: editorial Moreno S.A.
- Peña, R. (2013). *Manual de Derecho Procesal Penal Tratado de Derecho* (3ra. Ed.). Lima: Legales.
- Perú, Corte Suprema. Sentencia recaída en el R. N. N° 007 – 2004 – Cono Norte

- Perú. Corte Superior. Sentencia recaída en el exp. 2008 – 1252-15-1601-Lambayeque
- Perú. Corte Suprema, Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116.
- Perú. Corte Suprema, Cas. 912-199 - Ucayali, Cas. 990-2000 -Lima.
- Perú. Corte Suprema. Sentencia recaída en A.V. 19 – 2001
- Perú. Corte Suprema. Sentencia recaída en el exp.1224-2004
- Perú. Corte Suprema. Sentencia recaída en el exp.15/22 – 2003
- Perú. Corte Suprema. Sentencia recaída en el exp.948-2005-Junín
- Perú. Tribunal Constitucional. Exp. N° 004-2006-PI/TC.
- Perú. Tribunal Constitucional. Exp. N° 05386-2007-HC/TC.
- Perú. Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el exp.04228-2005-HC/TC
- Perú. Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el exp.0791-2002-HC/TC
- Perú. Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el exp.1014-2007-PHC/TC
- Perú. Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el exp.8125-2005-PHC/TC
- Pimentel, M. (2013). *La Administración de Justicia en España en el siglo xxi*.
- Plascencia, R. (2004). *Teoría del Delito*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Polaino Navarrete, M. (2004). *Derecho Penal: Modernas Bases Dogmáticas*. Lima: Grijley.
- Polaino, M. (2004). *Derecho Penal: Modernas Bases Dogmáticas*. Lima: Grijley.
- Presidente de la AEC. Asociación Española de Empresas de Consultoría. Recuperado de:
file:///C:/Users/User/Downloads/Informe%20Sectorial%202013%20-%20Justicia.pdf
- Proceso Penal*. Santo Domingo: FINJUS.
- Quispe, F. (2002). *El Derecho a la no Incriminación y su Aplicación en el Perú*.
- Ramos, M. (2014). *Nuevo Código Procesal Civil*, Lima: Editorial Berrio
- Real Academia de la Lengua Española. (2001); *Diccionario de la Lengua Española*. (Vigésima segunda Edición). Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/>
- Reátegui, J. (2014). *Manual De Derecho Penal Parte General*, volumen I, Instituto Pacifico, S.A.C., Lima

- Reyna L. (2015) *Manual de derecho procesal penal*, Instituto Pacifico S.A.C, Lima.
- Rico José Ma., (1985). *Crimen y justicia en América Latina*, 3a ed., México, Siglo XXI,
- Rojina, R. (1993). *Derecho Procesal General*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni.
- Rosas, J. (2005). *Derecho Procesal Penal*. Perú. Editorial Jurista Editores.
- Rosas, J. (2015). *Tratado de Derecho Procesal Penal* .Lima: Juristas Editores.
- Salas, C. (2011). *El Proceso Penal Común*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Salazar, B. (2002). *Las sentencias insuficientes: sus consecuencias* (tesis
- Salinas, R. (2013). *Derecho Penal: Parte Especial*. . (5ta Ed.). Lima: Grijley.
- San Martin, C. (2006). *Derecho Procesal Penal*. (3ra Edición). Lima: Grijley.
- San Martin, C. (2015) *Derecho Procesal Penal Lecciones*.(1ra Ed.).Lima: INPECCP y Cenaus.
- Sánchez Velarde, P. (2004). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: Idemsa.
- Sánchez, P. (2004). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: IDEMSA
- Sánchez, P. (2009). *El nuevo proceso penal*, Lima: IDEMSA
- Sánchez, P. (2013), *Código Procesal Penal Comentado*. Lima.
- Segura, H. (2007). *El control judicial de la motivación de la sentencia penal* (Tesis de Título Profesional). Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Recuperado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7126.pdf
- Segura, P. H. (2007). *El control judicial de la motivación de la sentencia penal* (Tesis de Título Profesional). Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Soledad. Recuperado de: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1215/1/Quispe_ff.pdf
- Talavera, P. (2009). *La Prueba En el Nuevo Proceso Penal: Manual del Derecho Probatorio y de la valorización de las pruebas en el Proceso Penal Común*. Lima: Academia de la Magistratura.
- Talavera, P. (2011), *La Sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal: Su Estructura y Motivación*. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo.
- Temis S.A.
- Universidad de Celaya. (2011). *Manual para la publicación de tesis de la Universidad de Celaya*. Centro de Investigación. México. Recuperado de: http://www.udec.edu.mx/i2012/investigacion/manual_Publicacion_Tesis_Agosto_2011.pdf . (23.11.2013)

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia (s.f). 301404 - Ingeniería de Software.
Material Didáctico. *Por la Calidad Educativa y la Equidad Social*. Lección
31. Conceptos de calidad. Recuperado de:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301404/301404_ContenidoEnLinea/leccin_31__conceptos_de_calidad.html (20/07/2016).
- Valderrama, S. (s.f.). *Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica*. (1ra Ed.). Lima: Editorial San Marcos
- Vargas Viancos, J. E. 2003. Eficiencia en la Justicia. En <http://www.cejamericas.org/documentos/jev-eficiencia.pdf>
- Vásquez, J. (2000). *Derecho Procesal Penal. (Tomo I)*. Buenos Aires: Robinzal Culzoni.
- Vescovi, E. (1988). *Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica*. Buenos Aires: Depalma.
- Villa, J. (2014). *Derecho Penal: Parte General*. Lima: ARA Editores.
- Villavicencio, F. (2013). *Derecho penal: Parte general (4ta. Ed.)*. Lima, Perú: Grijley.
- Villavicencio, F. (2010). *Derecho Penal: Parte General. (4ta. Ed.)*. Lima: Grijley.
- Zaffaroni, E. (2002). *Derecho Penal: Parte General*. Buenos Aires: Depalma.

A

N

E

X

O

S

ANEXO 1

Evidencia empírica del objeto de estudio



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE : 3110-2011-48-1706-JR-PE-01
IMPUTADO : B
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : A
ESP. DE SALA : PEDRO SANTA MARÍA VERGARA
ESP. DE AUDIENCIA: M

S E N T E N C I A

Resolución número: SEIS
Picsi, nueve de mayo del
Año dos mil doce.

VISTA en audiencia oral y pública la presente causa, interviniendo como Director de Debate el magistrado Guillermo Piscoya, se procede a dictar sentencia bajo los términos siguientes:

II. PARTE EXPOSITIVA:

1.1. Sujetos procesales:

- d) **Parte acusadora:** Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.
- e) **Parte acusada:** B, con DNI N° 41934215, natural del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, nacido el dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y tres, de veintiocho años de edad, hijo de X. y Y., con domicilio en Manzana F Lote 20 del pueblo joven Nueva Esperanza - Chiclayo.
- f) **Parte agraviada:** A.

1.2. Alegatos iniciales:

b) Del fiscal:

El día dos de agosto del años dos mil once a las veinte horas con treinta minutos aproximadamente, el agraviado A se encontraba entre las avenidas Pedro Ruiz y

Luís Gonzáles de esta ciudad realizando servicio de colectivo en la ruta Chiclayo la pradera y viceversa, en esas circunstancias suben cinco personas entre ellos una fémina, por lo que el agraviado se dirige por su ruta normal con dirección a La Pradera, sin embargo cuando el agraviado se encontraba a la altura de la empresa Café Perú, volteando por la universidad San Martín, un automóvil tipo matiz marca Chevrolet con farola taxi “La Cuzqueña” -que estaba con la maletera abierta- abruptamente lo pasa, lo cruza y obliga al agraviado a que este sobrepase; en esas circunstancias los que estaban dentro del vehículo le dicen “ya perdiste”, le mientan la madre, sacan armas de fuego, lo encañonan y con la cacha del arma de fuego le impactan en el cráneo causándole lesiones en éste y en el rostro ya que fueron varios impactos con esta arma de fuego; la fémina que se encontraba en el interior del vehículo del agraviado opta por salir inmediatamente y se refugia en el vehículo que había interceptado el vehículo del agraviado. Mientras todo ello sucedía, los que estaban dentro del vehículo, es decir los cuatro sujetos que quedaron, logran poner al agraviado en la parte posterior, uno de ellos baja, toma el volante y se dirigen por atrás de la universidad San Martín por la Urbanización La Pradera, pueblo joven Santa Julia y dejan abandonado al agraviado con cintas adhesivas en las manos y en la boca, y se llevan el vehículo con rumbo a la ciudad de Chiclayo. El agraviado logra despojarse de estas ataduras y el capitán PNP R acude al lugar de los hechos al ser informado por la centra ciento cinco de este robo, ve al agraviado y le presta auxilio.

El Ministerio Público va a demostrar que quien conducía el vehículo que interceptó al agraviado fue el acusado B quien dentro del plan delictivo tenía como roles, no solo interceptar al vehículo del agraviado, sino también sacar del lugar del asalto a la fémina con dirección al pueblo joven Santa Julia hacia la pista antigua de la caleta San José, donde después de dejar a la fémina y a su regreso, el vehículo sufre un desperfecto, esto es, se pincha una llanta, el acusado baja del vehículo y apaga las luces para no levantar sospechas. En estas circunstancias el sub oficial PNP G y el capitán PNP R llegaron a ese lugar – al haber sido informados por los propios vecinos del lugar y por los pobladores que el vehículo que había interceptado el agraviado había huido por ese lugar- e intervienen al acusado. Como habían ido conjuntamente con el agraviado, éste inmediatamente reconoce al vehículo que lo interceptó y reconoce al imputado como la persona que conducía dicho vehículo, este vehículo fue identificado como automóvil con farola, marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Life, de placa de rodaje M2M-627. Precisa que se probará que el vehículo del agraviado fue recuperado con el pago posterior de un cupo a otros sujetos sin identificar, lo que ha sido materia de otra investigación.

El comportamiento del acusado se subsume en el delito de robo modalidad de robo agravado que se encuentra tipificado en el artículo 188° como tipo base y artículo

189° incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del Código Penal; es decir, durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, utilizando medios de locomoción y sobre vehículo automotor. Se va a probar que el acusado participó en coautoría funcional con los demás sujetos repartiéndose roles para su atraco.

Todo lo expuesto quedará demostrado con los testimonios que van a rendir el agraviado, los policías intervinientes, la testigo S. quien vio cómo es que el vehículo llega por esa zona - el vehículo que intercepta al agraviado-; con el examen pericial del PNP C, perito criminalístico a fin que detalle los aspectos referidos a su inspección criminalística en el lugar de los hechos; el examen pericial del médico legista que vio al agraviado donde se le recomienda descanso médico y se describe lesiones de tres por nueve; además sustentará su teoría con los documentos como el acta de intervención, las actas de registro personal, los documentos referidos a la preexistencia del vehículo, la tarjeta de propiedad, tomas fotográficas, entre otros.

El Ministerio Público estará solicitando que al acusado se le imponga una pena de trece años de pena privativa de la libertad y mil nuevos soles de reparación civil.

c) De la defensora del acusado.

Demostrará que el señor B no es la persona que interceptó al presunto agraviado el día de los hechos, con la declaración contradictoria del agraviado, las actas de intervención, las actas de registro vehicular y fotografías que ha presentado. Respecto a la intervención de la policía, señala que B se encontraba arreglando su llanta que había sido pinchada. Los testigos que el Ministerio Público ha ofrecido contradicen la declaración del agraviado. Si bien es cierto la policía intervino a su patrocinado, en Chiclayo y a nivel nacional no es el único vehículo con farola “La Cuzqueña” si no que existen muchos vehículos modelos matices y otros modelos con el mismo color que el agraviado ha descrito. Va demostrar la inocencia de su patrocinado y de la reparación civil.

1.3. Posición del acusado frente a la acusación.

Luego que se le explicara los derechos que le asistían en juicio y la posibilidad de que la presente causa termine mediante conclusión anticipada, el acusado previa consulta con su abogada defensora, manifestó que **no se considera autor del delito materia de acusación ni responsable de la reparación civil.**

1.4. Actividad Probatoria.

2.4.1. Examen del Acusado.

El acusado manifestó su decisión de guardar silencio, haciéndole conocer que conforme al artículo 371° del Código Procesal Penal, en la estación correspondiente se oralizarían sus declaraciones prestadas en sede fiscal.

2.4.2. Del Ministerio Público.

1.4.2.1. Prueba Testimonial.

k) Testimonial del agraviado A.

Al interrogatorio dijo que trabaja como chofer en La, el día dos de agosto del dos mil once venía prestando servicio a La Pradera, como a las siete de la noche hacía su última vuelta, en Pedro Ruiz y Luís Gonzáles subieron cinco sujetos, entre ellos una mujer que se puso a su respaldar, se llenó el carro y se dirigió hacia La Pradera, la mujer se enterró contra su asiento, no levantaba la cara, y ahí le dio un poquito de miedo; bajó por la otra pista y un carro estaba parado, cuando iba a pasar vino y de frente me metió el carro, se sale de la pista para no chocarse, le jalan la llave y le dicen “ya perdiste concha de tu madre”, la mujer baja y se mete al Chevrolet que estaba con la maletera levantada, reconoce al señor que le metió el carro porque era con luces, luego los agarraron, le metieron tres cachazos de revolver y lo sacan para atrás, pero el declarante no baja si no que bajó el que estaba a su costado, toma la llave y maneja, el carro avanza, se va y da la vuelta por la San Martín, lo llevan encintado de la boca, de sus manos y sus pies, lo botan por Santa Julia y su carro regresa para Chiclayo. El otro carro se va para San José. Luego lo recoge un patrullero, lo lleva a Las Mercedes para coserlo y dentro de un ratito, el otro patrullero que avanzó para adentro, lo llama que el carro se encontraba votado por un accesorio malogrado, se dirige hasta el lugar y reconozco al señor y al mismo carro que le había cerrado, y de ahí lo trajeron a la comisaría; perdió el conocimiento no sabía dónde me encontraba; reconoció al acusado en la audiencia del juicio; el lugar era oscuro y cuando llegó al lugar con el patrullero, él dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces el patrullero le dice “de que cholo me hablas” y él dijo “yo no le he robado al cholo”, entonces lo hicieron subir para que los acompañe a la comisaría, lo subieron atrás y al declarante adelante, y lo trajeron a la comisaría. El vehículo que lo intersectó era un color plomo con la farola de taxi “La Cuzqueña”, el número de teléfono no se le veía porque iba con la maletera alzada, cuando le mete el carro vio que decía taxi “La Cuzqueña”. **El representante del Ministerio Público actuó cuatros fotografías correspondientes al vehículo que conduce el acusado;** el agraviado luego de visualizar las mismas refieren que pertenecen al vehículo que lo interceptó, un carro plomo, Chevrolet, con farola blanca taxi “La Cuzqueña”, es de un modelo asimilado al tico. **Al conainterrogatorio** dijo que las personas que subieron a su vehículo fueron dos hombres que se sentaron adelante y dos hombres atrás y una mujer a su respaldar; su

reacción fue mirar al que lo intercepta, al que le cruza el carro, lo miró al toque porque lo iba a resontrar porque cada chofer tiene la costumbre de resontrar al que te mete el carro, entonces el declarante lo quedó mirando, cuando al toquecito le jalaron la llave y él se cuadra adelante con la maletera levantada; lo adelantó por el lado izquierdo; cuando le cruzan el carro la mujer baja de su carro y se mete al Chevrolet, los cuatro más se van con el declarante, le rompen la cabeza y lo pasan para atrás, se lo llevan al carro, es decir, lo sacan del volante y lo meten atrás, el declarante iba que lo miraba y lo miraba, más allá le dan otro cachazo de revolver, lo voltean y ya no ve hasta que volteo a la San Martín, sólo iba mirando arriba, como es alumbrado, sabía que lo llevaban para Santa Julia; el que lo interceptó miró cuando el declarante venía, él ha estado abajo, sube su carro corriendo, se baja de la pista de Pimentel -porque él ha estado cuadrado arriba por la pista de Pimentel- se baja rapidito, viene y le mete el carro, el declarante para no chocar su carro porque era nuevo, ha frenado y ahí es donde le han jalado la llave; en ese ratito no iba a ver si portaban arma, pero cuando la mujer baja, le jalan la llave y lo pasan para atrás, sacan el revólver y le dan. Ya había bajado la mujer, pero como el declarante no quería salir del volante, entonces ahí le han dado para quitarlo de ahí y manejara el otro; las personas le dijeron “baja concha de tu madre”, “ya perdiste”. La defensora para impugnar credibilidad ingresa la pregunta y respuesta número tres prestada por el acusado durante la etapa de investigación; respecto a la distancia en que los dejaron refiere que no podría calcular, más de un kilómetro por lo menos, a velocidad, de diez a quince minutos; hasta el lugar donde fue intervenido el acusado hay unos quince minutos a toda velocidad, pero despacio será unos veinte.

l) Testimonial del efectivo policial Capitán PNP R.

Al interrogatorio dijo que en agosto del dos mil once estaba laborando en la Comisaría del Norte de Chiclayo; tuvo una intervención con respecto a una llamada radial donde se hacía mención que un taxista había sido asaltado, golpeado y que se encontraba por el pueblo joven Juan Pablo II; inmediatamente a bordo de una unidad móvil policial se constituyeron al lugar, comenzamos a rondar la zona por donde más o menos les indicaba la comunicación radial y encontraron a una persona ensangrentada, con sangre en la cabeza y en su cuerpo, estaba mal herida como si tuviera desmayos y se sentía mal; él le indicó que le habían tomado una carrera por el lugar La Pradera cuatro sujetos y dentro de uno de ellos una fémina, en total son cinco; por el pueblo joven Juan Pablo II un vehículo le intercepta, y es ahí donde uno de los cuatro sujetos que iba a bordo de su vehículo, con arma de fuego le quitaron su vehículo, a base de eso seguramente opuso resistencia . Al recibir la comunicación radial inmediatamente se irradia a los demás vehículos y tripulación que está en la zona, aparte de ello se da las características del vehículo que ha sido robado, hasta donde recuerdo era un vehículo color plomo, marca Chevrolet, tenía farola pero el nombre no la recuerdo; cuando llegan al lugar encontraron al

agraviado ensangrentado, golpeado, y lo primero que se hace es auxiliar a la persona; cuando estaban dirigiéndose con trayecto al hospital, recibió una comunicación que por el lugar Juan Pablo II, en un ingreso de trocha carrozable a Santa Julia habían encontrado un vehículo con las mismas características que daba el agraviado; razón por la cual retornó con el agraviado para que haga el reconocimiento, inmediatamente dio la vuelta, fue al lugar y el agraviado directamente dijo “sí, esta es la persona que participó, y éste es el vehículo que me cerró el paso”, lo hizo directamente, ni siquiera dudo, por ese motivo intervinieron a la persona y fue conducida a la comisaría conjuntamente con el vehículo; cuando llegó al lugar, el vehículo estaba apagado, sin luces, con una llanta en el suelo y unas llaves que recién me la habían puesto, porque los pernos estaban sin ajustar. **Al conainterrogatorio** dijo que cuando se hace una comunicación radial en el vehículo va el chofer y el operador; en el lugar encontró un vehículo policial de la Comisaría del Norte y un vehículo del Escuadrón de Emergencia, el que había encontrado el vehículo fue el patrullero, la tripulación de la Comisaría del Norte; la que intervino al señor G fue la unidad policial de la Comisaría del Norte, la comunicación radial fue un aproximadamente ocho y media de la noche, pero exactamente no puedo certificar la hora de la intervención por el tiempo que ha transcurrido; en el lugar de la intervención no hay casas, es una zona oscura a ambos lados del camino, hay montes, más atrás hay chacras, pero las casas están distantes, en esa época. **La defensa actúa el acta de intervención policial**; refiere el testigo que en el momento de la intervención no había ninguna fémina; no puede indicar exactamente el nombre de los oficiales que estuvieron con él el día de la intervención porque la Comisaría del Norte tiene tres unidades móviles, y no recuerdo quienes estuvieron de chofer u operador en esa época. **Al redirecto del fiscal** dijo que primeramente el agraviado dicen fueron cinco personas dentro de ellos una fémina, seguramente se ha tratado de los cuatro sujetos que lo encañonaron, se ha referido a los cuatro varones, pero esa respuesta la debe dar la persona agraviada porque él es el que iba ahí, eso es lo que él le refirió.

m) Testimonial del efectivo policial SOS PNP G.

Al interrogatorio dijo que en agosto trabajaba en una tripulación de una unidad móvil que está asignada a la Comisaría PNP del Norte; el día dos de agosto del dos mil once se encontraba patrullando por la jurisdicción del pueblo joven José Olaya a bordo de la unidad móvil 10168, fueron desplazados por orden de la central 105 de la policía a fin de apoyar a una unidad móvil, donde había sido asaltada una persona; inmediatamente se dirigió al lugar a fin de apoyar a esa unidad móvil que estaba al mando del capitán R, en donde moradores del lugar indicaron que una persona había sido asaltada por delincuentes a bordo de un vehículo, versiones de los moradores indicaron que después del asalto un vehículo se había desplazado por la jurisdicción de un caserío Santa Lucia, por una trocha carrozable han iniciado el patrullaje

respectivo con el apoyo de patrulleros del escuadrón de emergencia y han ubicado a un vehículo estacionado en una trocha carrozable, con las luces apagadas; su función fue bajar del patrullero a fin de intervenir al conductor que se encontraba debajo del vehículo; al interrogarlo indicó que se le había pinchado una llanta y que estaba arreglando ese neumático; el motivo de la intervención de dicho vehículo fue porque se tuvo conocimiento que habían asaltado a una persona en la jurisdicción de La Pradera y por las características del vehículo empezaron a intervenir a fin de identificar a dicho conductor y posteriormente se comunicó al capitán Benavides que estaba con el agraviado que había sido víctima del asalto; éstos se constituyeron al lugar de los hechos, y el agraviado reconoció que esa persona había participado en el asalto, entonces por orden del capitán G se condujo al intervenido a la Comisaría del Norte para seguir con la diligencias respectivas; el señor indicó que había hecho un servicio de taxi a ese lugar y después de dejar esa carrera estaba retornando a su zona de trabajo y se había pinchado esa llanta, razón por la cual se le encontró debajo de la llanta; el vehículo estaba estacionado en una trocha carrozable, las características eran vehículo plomo, con una farola modelo Chevrolet, el lugar estaba oscuro, es un tipo chacra, no hay casas alrededor, y el vehículo estaba estacionado, parado; inmediatamente lo condujeron a la Comisaría del Norte y se efectuó el respectivo registro personal, recuerda que se le encontró en su poder dos billetes de cincuenta nuevos soles y uno al parecer era falso, también se le encontró un celular, su licencia de conducir y su DNI; aclara que no se trata del pueblo joven Santa Lucía, sino del caserío Santa Julia; reitera que las luces del vehículo se encontraban apagadas. **Al contrainterrogatorio** dijo que se constituyó al lugar donde se había producido el asalto de esa persona y moradores del lugar indicaron las características del vehículo, y por las características del vehículo se interviene policialmente en ese lugar al vehículo que presuntamente había participado en el hecho; él me comunicó por medio de la central 105 que se trataba de ese tipo de vehículo. le dio las características; todas las actas se levantaron en la Comisaría del Norte, en el lugar de los hechos no se hizo ninguna acta, solamente se intervino policialmente, se identificó a la persona, y por la zona que es oscura, el lugar no era adecuado para hacer la respectiva documentación; por orden del capitán dispuso que se conduzca a la Comisaría del Norte y en este lugar se hicieron todas las diligencias respectivas; aparte del acta de registro personal se llevó a cabo un acta de situación vehicular del vehículo donde se consigna todos los accesorios del vehículo para entregarlo a su dueño sin ninguna novedad; también se llevó a cabo el acta de registro vehicular y no se encontró alguna arma. **La defensora actuó el acta de registro vehicular** y cuando se le pregunta al testigo porqué se consignó positivo para armas y municiones, responde que probablemente haya sido un error de imprenta, porque no se encontró ningún tipo de munición ni arma; en la comisaría se levantó el acta de registro personal y la firmó el declarante; sí le indicó al intervenido que tiene todo el derecho de comunicarse con algún familiar para que esté presente para hacer el acta de registro personal, pero él le refirió que por el

momento no tenía ningún familiar para que se pueda comunicar. **Al redirecto del fiscal** dijo que recuerda que se confeccionó el acta de registro personal, el registro de buen trato, el registro del imputado y el acta de registro vehicular. El acta de intervención la levantó el capitán Benavides toda vez de que él estaba a cargo de la intervención policial y el declarante solamente fui de apoyo a él; respecto al error de consignarse el arma en el registro vehicular dijo que por problema del apuro, en este caso ha habido un error de imprenta toda vez que se imprimió en la computadora el documento, pero el declarante ya había hecho el registro vehicular que no había ningún tipo de arma.

n) Testimonial de V.

El fiscal prescindió de la actuación de éste órgano de prueba por no haber concurrido a juicio.

o) Testimonial de S

Mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de abril del dos mil doce se dispuso la oralización de su declaración prestada en sede fiscal.

El fiscal refiere que con esta acta demuestra que el vehículo venía a toda velocidad y apagó las luces por esa zona oscura para arreglar una llanta, y además cuando hace referencia la entrevistada que vio al tico que venía y que no había ninguna persona, se demuestra la versión contradictoria del imputado cuando refiere que hizo carrera a dos señoras en ese lugar.

La defensora refiere que con esta acta se demuestra la contradicción del agraviado cuando refiere que una fémina o una mujer subió al vehículo y que esta huyó en compañía de, presuntamente, el señor B; la entrevistada refiere que el señor se encontraba solo; además ha referido que el vehículo venía desde la caleta San José hacia la universidad, hecho que se contradice en la declaración del agraviado que afirma que el vehículo el huyó hacia una trocha de la carretera San José.

1.4.2.2. Prueba Pericial.

e) Examen pericial del perito criminalístico W respecto del Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH.

Esta inspección se hizo en base a una solicitud de la DEPROVE del departamento de robo de vehículos de la policía, para hacer una inspección en la avenida que conduce a la universidad particular San Martín intersección con la avenida Juan Tomis Stack, donde se puede determinar con las respectivas fotografías, huellas de

calzado masculino femenino y huellas de neumático de automóviles en diferentes direcciones. **Al examen** dijo que no se encontraron zapatillas sino huellas de zapatillas, se determinó la huella de un carro que venía por la avenida Juan Tomis Stack, sale de la pista y entra a la tierra pegada a una pared, y la huella del otro carro -que aparentemente ha estado en esta pista en dirección hacia Chiclayo- se encuentra con la otra huella, es decir, se podría presumir que esta huella es la que intercepta a la huella del automóvil; es en estas circunstancias, en el polvo, donde se encontraron las huellas de zapatillas de uso masculino y las huellas de calzado de uso femenino. **Al contraexamen** dijo que para determinar la precisión del neumático se requería hacer lo que es el modelado forense, lo cual no se realizó, el tipo de neumático se puede determinar fehacientemente a través de un modelado forense.

f) Examen pericial del perito médico legista LL. respecto del Certificado Médico Legal N° 008535-L.

El peritado fue evaluado el día tres de agosto de dos mil once y al momento del examen se le encuentra una herida contusa suturada 1.8 cm ubicada en la región parietal posterior izquierda, con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; una herida contusa suturada de 2 cm ubicada en la región parietooccipital derecha con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa suturada de 2.1 cm ubicada en la región interparietal central con tumefacción moderada y restos hemáticos secos perilesionales; otra herida contusa abierta de 1.5 x 0.5 cm ubicada en la región malar derecha con tumefacción moderada y equimosis violácea de 4 x 3.5 cm perilesionales, además de una equimosis violácea ovalada de 4.2 x 3.7 cm ubicada en el hombro derecho cara anterior con tumefacción moderada perilesional. Estas heridas o lesiones llevan a la conclusión de que dicho peritado presentó lesiones traumáticas recientes o sea relacionados con la data, de origen contuso, por lo que se le indicó una atención facultativa de tres días por una incapacidad médico legal de nueve días, salvo complicaciones. **Al examen** dijo que las lesiones de origen contuso corresponden a lo que son golpes ocasionados por objetos contundentes que podrían ser una piedra, un puño, objetos metálicos, cualquier objeto que pueda producir un golpe y ocasionar una lesión y es probable que pueda haber sido producida por la cachá de un revolver porque es un objeto contundente; las tres heridas en la cabeza son heridas suturadas o sea que han recibido atención médica con puntos y la herida que está en la región malar corresponde a una herida abierta o sea sin suturar. **La defensa no formuló contraexamen.**

1.4.2.3. Prueba Documental.

f) Acta de intervención policial.

Fue actuada durante el examen del testigo G.

g) Acta de registro personal de fecha dos de agosto de dos mil once.

Con esta acta de registro personal demuestra que efectivamente al acusado no se le ha encontrado ningún arma de fuego y ello corroboraría el error material que cometió la policía en el levantamiento del acta, además con esta acta de prueba que se incauta dos billetes de cincuenta nuevos soles uno original y otro falso; la estrategia del acusado ha sido que realizó una carrera hacia el lugar donde se le encontró y que cobro ocho nuevos soles a las dos personas que supuestamente hizo una carrera, sin embargo cuando se le hace el registro personal se le encuentra billetes de cincuenta nuevos soles.

h) Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo de placa de rodaje N° MIE-629.

Se acredita la preexistencia del vehículo sustraído.

i) Cuatro (04) tomas fotográficas del vehículo de placa de rodaje M2M-627 y su respectiva cadena de custodia.

Se actuaron durante el examen del agraviado.

j) Acta de situación vehicular de la unidad intervenida de placa M2M-627.

Se acredita la existencia del vehículo que iba manejando el acusado y con el cual interceptó a su víctima para que se perpetre el robo.

La defensora en relación a los documentos oralizados por el fiscal refiere que éste ha obviado precisar un número de teléfono que fue incautado en el acta de registro personal. Con respecto a los demás documentos no tiene ningún pronunciamiento.

2.4.3. De la Defensa.

La defensa técnica del acusado por el principio de comunidad de la prueba ofreció los mismos medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, los cuáles fueron actuados por la defensa a través del contraexamen, prescindiendo la defensa de la actuación de la testimonial de V y solicitando la oralización de la declaración prestada a nivel fiscal por la testigo S, pedido que fue amparado mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de abril del dos mil doce.

2.4.3.1. Prueba Documental.

g) Acta de registro vehicular.

Se actuó durante el examen del testigo G.

h) Requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones.

El aporte de este requerimiento es que el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones con las personas que tenían alguna relación con los que intervinieron el día de los hechos y con mi patrocinado B, antes, durante y después de los hechos, a fin de determinar si ha habido alguna comunicación con estas personas mediante mensaje de texto o directamente por el medio telefónico.

i) Resolución N° Uno de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once.

El aporte es que el requerimiento fue autorizado por el señor juez del juzgado de investigación preparatoria.

j) Disposición fiscal N° 03 de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce.

El aporte es que en el registro personal de su patrocinado se le encontró un celular que coincide con el mismo celular del que se solicitó el levantamiento de las comunicaciones, a fin de determinar alguna vinculación.

k) Reporte N° TSP-83030000-ECE-0051-2012 de fecha veintisiete de enero del dos mil doce y treinta de enero de dos mil doce.

El aporte es que al verificarse el reporte de las llamadas entrantes y salientes se verifica que su patrocinado no tuvo ninguna comunicación con los extorsionadores, ni por mensaje de textos, antes, durante y después de los hechos.

l) Once fotografías de vehículos con su respectiva cadena de custodia.

El aporte es para acreditar que, si la capota del vehículo estaba levantada cómo es que el agraviado ha precisado inicialmente a la policía que se trataba de un vehículo de marca Chevrolet, tipo matiz, color plomo. Además adjunta fotografías de distintos vehículos no siendo el de su patrocinado el único vehículo que tiene marca Chevrolet y con el mismo color y sobre todo con la farola “La Cuzqueña”; existen otros vehículos y con la placa como las que ha presentado el representante del Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público señala que los documentos referidos al requerimiento de la carpeta fiscal 2680-2011, de la disposición fiscal y de la resolución judicial, no aportan nada en este caso porque se trata de una investigación totalmente diferente que se llevó a cabo en el despacho fiscal por un delito de extorsión; simplemente hace referencia a un archivo provisional porque no se ha identificado plenamente a los presuntos autores del delito de extorsión, y el hecho de que el acusado no se haya comunicado con los extorsionadores implica la especialización que hay en este tipo de delitos donde unos roban y otros extorsionan. En cuanto a las fotografías sirven para una cuestión ilustrativa y es conocimiento público que ese tipo de vehículos pueden existir, no muchos pero en su momento se tiene que hacer una valoración contextual del reconocimiento del vehículo y también del imputado. Además precisa que el agraviado si bien es cierto tiene primaria incompleta, pero él es un conductor con mucho tiempo en la conducción, por lo tanto el conductor tiene más ventaja para apreciar los tipos de vehículos o presumir que tipo de vehículos o de modelos puedan tratarse. Los reportes de telefónica no aportan para nada.

2.4.3.2. Oralización de la declaración del imputado B.

El fiscal refiere que el aporte es que el acusado refiere contradictoriamente que hizo una carrera a dos señoras pero no señala el lugar exacto, solamente hace un referencia genérica que las dejó por un puente y se ha escuchado al capitán que por ahí no había ningún tipo de puente ni casas; además hay una contradicción cuando él dice que él se da la vuelta y en esas circunstancias es que se le pincha la llanta, contrario a lo que ha referido la señora S al oralizar su entrevista a nivel de investigación preliminar; y en cuanto a los ocho nuevos soles que refiere haber cobrado al momento de su registro se le encontró dos billetes de cincuenta nuevos soles. También precisa que él ha referido expresamente que es taxista, pero contradictoriamente en la pregunta cinco, indica que también ha trabajado en La Pradera con el propósito de fundamentar que supuestamente lo conoce de vista al agraviado.

La defensa refiere que no es cierto que haya contradicción porque sí se le ha encontrado un billete de cincuenta nuevos soles y no se le ha preguntado para nada con respecto al otro billete presuntamente falso; él ha dado su versión de que él ha tenido un billete de cincuenta nuevos soles que si aparece en el registro personal y que ha dado vuelto de cuarenta y dos nuevos soles. Cuando se le hizo la pregunta al capitán de que si habían casas, ha referido que no habían casas cerca, que es un camino carrozable donde hay chacras a los costados y en ningún momento ha precisado que no existe ningún puente, tampoco él en el acta de entrevista que ha tenido con las señoras, ha precisado si existe o no puente por la zona.

III. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO.

- 1.5. Según el artículo 188° del Código Penal, incurre en el delito de robo, el agente que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con peligro inminente para su vida. Como elemento subjetivo se requiere la presencia de dolo.
- 1.6. Dentro de las circunstancias agravantes del delito de robo se encuentran la de haber sido cometido en casa habitada, durante la noche y con el concurso de dos o más personas; circunstancias que están previstas en los incisos 1, 2 y 4 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal.
- 1.7. Igualmente constituye circunstancia agravante del delito de robo, el causar lesiones a la integridad física o mental de la víctima, la cual está prevista en el numeral 1 segundo párrafo del artículo 189° del Código Penal.
- 1.8. El delito de robo agravado es un delito pluriofensivo, pues no sólo protege el patrimonio, sino también la vida, la integridad física y la libertad, lo cual demanda un mayor reproche penal.

SEGUNDO: DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS POR LAS PARTES:

2.1. DEL FISCAL: Señala que se ha probado:

- 3.1.1. El Acuerdo Plenario 2-2005-CJ-116 refiere expresamente, que tratándose de la declaración de los agraviados, aún cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por ende virtualidad procesal, para enervar la presunción de inocencia del imputado, sin embargo se exige ciertas garantías de certeza que se han llevado a cabo en este juicio, pues, el agraviado ha **sido coherente y consistente** cuando sindicó desde el primer momento de manera espontánea que el acusado fue la persona que lo interceptó cuando iba a voltear por la empresa Café Perú a la entrada de la universidad San Martín; también ha referido que inmediatamente fijó la mirada cuando lo cruza y lo intercepta, fija la mirada porque quería resonarlo, y conforme a las reglas de la experiencia en el ámbito de la conducción de vehículos, en los choferes existe esa situación de fijar siempre la mirada en quien vulnera una norma de tránsito; además indica que estando dentro del vehículo a la altura de Café Perú cuando lo intercepta el vehículo del acusado, los sujetos que se encontraban al interior de su vehículo le dicen “ya perdiste”, le mientan la madre y empiezan a impactarle con la cacha de revolver, y es en esas circunstancias que baja la fémina para guarecerse en el vehículo que conducía el acusado. En consecuencia, se cumple con dicha garantía de certeza.

- 3.1.2. En cuanto al supuesto de incredibilidad subjetiva, la defensa no ha acreditado que ha existido situaciones de animadversión, enfrentamientos entre el imputado y el agraviado, es más ha quedado demostrado con la versión del agraviado que el recién lo conoce e identifica en el momento que fue interceptado.
- 3.1.3. La versión del agraviado además de ser verosímil, coherente y sólida tiene corroboraciones periféricas: **i)** El agraviado dice que le impactaron con un arma de fuego, y al oralizar el examen pericial y al declarar el perito Wilson Becerra Llampén sobre el Certificado Médico Legal 008535-L, efectivamente se acredita que tiene lesiones en la cabeza, en el rostro, ocasionadas por objeto contundente, entre los que se encuentra una cache de revolver; **ii)** El examen pericial del capitán PNP Jhony Díaz de la Cruz quien ha referido que cuando hizo la constatación fiscal ha constatado la presencia de neumáticos de dos tipos de vehículos, un neumático que está dispuesto a ingresar hacia la universidad San Martín y otro que intercepta; además ha referido que en ese lugar encontró huellas de pisada de zapato de mujer y de zapatilla, es decir, de sexo femenino, lo cual se enlaza con la versión que da el agraviado cuando refiere que la fémina baja del vehículo y se va al vehículo que conducía el acusado; además el agraviado indicó que cuando los imputados -aún sin identificar- se encontraban dentro de su vehículo, el que estaba conduciendo lo pone hacia la parte posterior y uno de ellos baja y toma el volante, es decir, baja de la parte posterior y se va a la parte delantera para tomar el volante y eso es coherente porque ahí se registra la pisada que hace referencia el perito, cuando afirma que encontró una huella de pisada de sexo masculino; **iii)** Los testimonios del capitán R y del testigo G han coincidido. El capitán R ha referido que encontró al agraviado ensangrentado, que tenía sangre en la cabeza, que lo ayudó y que fue comunicado por el señor Edilberto que habían encontrado un vehículo a la altura del pueblo joven Juan Pablo II que da para el pueblo joven Santa Julia en la carretera carrozable con destino a la caleta San José, lo cual refuerza su teoría en el sentido de que el capitán se constituye al lugar donde se encontraba este vehículo, conjuntamente con el agraviado, el agraviado de manera espontánea reconoce al imputado como la persona que lo intercepta y de igual manera reconoce al vehículo que lo interceptó, tal como lo ha referido el capitán PNP R al señalar que fue contundente y espontáneo; y que lo señaló inmediatamente; **iv)** G y el capitán R indican también que cuando intervinieron el vehículo, las luces de este se encontraban a pagadas, y en una evaluación contextualizada hay que tener en cuenta estos datos periféricos, y con la declaración del agraviado ha quedado demostrado que el lugar donde se interviene el vehículo del acusado era un lugar oscuro, una zona bastante movida, y donde el acusado de manera sintomática apaga las luces para arreglar una llanta que se había pinchado, justificación que no es usual en un conductor que tiene ese tipo de desperfectos, porque lo primero que se hace es prender la luz para advertir una situación de peligro; además se ha oralizado el testimonio de la señora L.E.S.Q. quien ha referido que

el carro venía a gran velocidad y con las luces, y se cuándo se pincha la llanta, el imputado opta por apagar las luces tanto interna como externamente; **v)** Además se debe valorar la prueba pre constituida consistente en el acta de intervención policial, que es coincidente con lo referido por el capitán. No existe contradicción como lo refiere la defensa cuando indica que primero se hace referencia a cinco sujetos y luego a cuatro; pues el capitán ha referido que es una situación que tiene que responderla el agraviado, y con la declaración de éste ha quedado claro que los cuatro sujetos fueron los que lo agredieron, cuando baja la fémina y se guarece en el vehículo del acusado; **vi)** El agraviado ha reconocido al imputado como la persona que lo interceptó en un vehículo; por tanto el reconocimiento que ha hecho el imputado como del vehículo a nivel preliminar, a nivel de la investigación preparatoria y en el juicio oral indican una persistencia en el reconocimiento; **vii)** En cuanto al robo agravado la acción de apoderamiento del vehículo está acreditada y se ha acreditado la preexistencia del vehículo; **viii)** La violencia se encuentra acreditada con el certificado del médico legal que denota la gran crueldad con la que han actuado estas personas, habiéndosele prescrito una atención facultativa de tres por una incapacidad médico legal de nueve días.

- 3.1.4. En cuanto al tipo subjetivo referido al dolo y al ánimo de lucro, se evidencia con todo las pruebas oralizadas.
- 3.1.5. En cuanto a la coautoría funcional, refiere que ha existido un reparto de roles, con división de trabajo, y en el presente caso, dentro del plan delictivo la función del acusado consistió en interceptar al vehículo del agraviado y sacar de la escena a la fémina. No existe ninguna contradicción cuando al momento de intervenir al imputado se le encuentra solo, porque ya había sacado de la escena a esta fémina que también participó en el delito. En ese sentido ha quedado probado que cada una las personas -aún sin identificar- aportaron en este plan delictivo, incluyendo al acusado. Conforme al principio de reparto funcional de roles, las diferentes contribuciones se consideran un todo y el resultado total se atribuye a cada coautor, es por ello que si bien es cierto, el acusado no ha sido la persona que directamente impactó con el arma de fuego y que no fue la persona que llevó al vehículo a desaparecerlo por la ciudad de Chiclayo, se debe tener en cuenta que su participación se ceñía simplemente a su rol. Se debe hacer un análisis contextual sobre lo que significó la participación del acusado cuando se fue a dejar a la chica, pues, cuando la policía interviene no se encontró a nadie porque ya la había dejado.
- 3.1.6. Se ha demostrado que ha existido un error material al consignar en el acta de registro vehicular que se encontró un arma, como lo aclaró uno de los testigos.
- 3.1.7. En cuanto a la solicitud de la pena se ha tenido en cuenta que ha sido un delito que se ha cometido durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locomoción y sobre vehículo automotor. También se ha considerado que el acusado no registra antecedentes, motivo por

los cuales considera que la pena proporcional a imponerse debe ser la de trece años de pena privativa de la libertad efectiva.

- 3.1.8. En cuanto a la reparación civil, señala que posteriormente el vehículo se recuperó, pero aun así ha existido un perjuicio moral y también económico, por lo que considera que debe de imponerse una reparación civil de mil nuevos soles.

2.2. DE LA ABOGADA DEFENSORA DEL ACUSADO: Refiere:

- 2.2.12. El presunto agraviado, en su declaración en presencia del Ministerio Público y de su abogado refiere que él fue intervenido por un vehículo modelo matiz, de color plomo. En ningún momento hace referencia que se trataba de un modelo tipo matiz, **marca Chevrolet**, de color plomo.
- 2.2.13. En la declaración del señor Mario Martín Santisteban incorporada en juicio, refiere que fue interceptado inicialmente por un vehículo modelo matiz, color plomo, con una farola y unas letras. Esto contradice a la presunta acta de intervención que solamente es firmada por el capitán R en la cual él ha precisado el modelo y la marca del vehículo, con una farola que decía “La Cuzqueña” y que no pudo ver el número de teléfono de la farola porque la capota estaba abierta y levantada. Se pregunta ¿cómo es que pudo dar cuenta respecto a la marca del vehículo, si de acuerdo a la fotografías adjuntadas de varios vehículos, las marcas se encuentran en la parte posterior, es decir en la capota?. Entonces si la capota se encontraba levantada, era imposible ver la marca del vehículo, preguntándose ¿Cómo es que el agraviado ha podido precisar las personas que supuestamente lo habían intervenido y las características del vehículo?.
- 2.2.14. El acta de intervención ha sido realizada en la misma Comisaría del Norte y el capitán refirió que él inicialmente no lo había intervenido, sino que había sido intervenido por dos unidades policiales. Esta fue redactada por el capitán en la comisaría y se han consignado tres hechos: el hecho en que fue auxiliado el agraviado, cuando estaban conduciéndolo al hospital y después cuando se regresaron. Es una sola acta y se hace referencia a dos efectivos policiales, sin embargo ninguno de ellos ha firmado, ni menos ha firmado el agraviado ni el intervenido. El acta de intervención solamente la firma el capitán Benavides Ayala.
- 2.2.15. En el acta de registro vehicular lo que han querido es agravar la situación del acusado respecto a armas y municiones. El señor G ha justificado esta supuesta anotación señalando que se trata de un error de imprenta, sin embargo ello no es justificación de apuro, pues lo único que se quiso lograr era agravar la situación del acusado, se trata de un acta de intervención que ha sido manipulada o manejada al antojo de las personas que intervinieron; que ha sido redactada en la misma comisaría y no había amenaza o un peligro para que pueda levantarse en el mismo lugar de los hechos.

- 2.2.16. Los testigos G y el capitán dicen que por versiones de personas que transitan por ese lugar se enteraron que el agraviado había sido intervenida por un vehículo; sin embargo el policía sabe perfectamente cuáles son sus funciones y dentro de ellas, cuando concurre al lugar de los hechos, es recoger versiones o nombres de las personas que hayan visto directamente el momento en el que el señor Mario Martín Santisteban había sido víctima de robo agravado, porque el efectivo policial G y el capitán R son sólo testigos referenciales.
- 2.2.17. Con respecto al acta de entrevista, es un acta de hechos inmediatos, no es que ha transcurrido mucho tiempo porque dice cerca de las ocho y media, lugar y hora en que presuntamente también había sido víctima de robo el señor A. Se pregunta ¿en qué momento su patrocinado pudo dejar a la fémina?. De acuerdo al acta de entrevista personal su patrocinado se encontraba solo y contradice a la versión del agraviado que sostiene que la fémina bajó del vehículo y subió al vehículo Chevrolet que presuntamente conducía B.
- 2.2.18. Se pregunta ¿cuál es el ánimo de lucro que tenía su patrocinado?, precisando que producto de este delito de robo agravado, el propietario del vehículo robado, señor J, fue objeto de extorsión. Si su patrocinado no tiene que ver en estos hechos, por qué entonces el Ministerio Público ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las llamadas entrantes y salientes así como de la lectura de mensajes de texto queriendo involucrarlo en la extorsión. Su patrocinado no tenía ninguna vinculación con estas personas, ni antes, ni durante, ni después de los hechos con respecto al robo que sufrió el señor A.
- 2.2.19. Es verdad que la declaración del agraviado es muy importante como único testigo, sin embargo se debe tener en cuenta que esta versión se tiene que corroborar. El perito que ha inspeccionado el lugar ha precisado que hay huellas de pisadas de zapatillas de un varón y huellas de una mujer, que según el Ministerio Público era la que subió al vehículo. También ha señalado que existen las huellas de un vehículo, el mismo que interceptó al vehículo station wagon, y la pregunta que se le hizo al perito es que si se pudo determinar que esas huellas que se encontró pertenecían o al menos tenían las mismas características del neumático del vehículo Chevrolet que conducía B, respuesta que fue negativa, no existe ninguna prueba que corrobore que el vehículo de su patrocinado sea el mismo que interceptó al señor S.
- 2.2.20. Cuando se ha dado lectura a la declaración de B, al referirse al cobro que le hizo a estas personas, hace referencia a un billete de cincuenta soles, y en ningún momento el representante del ministerio público le ha preguntado si es verdad o es falso que también había un billete falso de cincuenta nuevos soles; tampoco le ha pedido que explique si es que ha cobrado ocho soles y ha dado de vuelto de cuarenta y dos soles.
- 2.2.21. Teniendo en cuenta el acta de entrevista personal, el acusado se encontraba solo, no había ninguna mujer, y además se le hizo la pregunta al señor capitán si es que lo intervinieron con alguna mujer y este dijo que no, que estaba solo.

2.2.22. Por estas consideraciones, solicita la absolución del señor B y de la pretensión de la reparación civil.

TERCERO: DE LA VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS

3.1. HECHOS PROBADOS:

Respecto de los hechos objeto de imputación, del debate probatorio se ha llegado acreditar lo siguiente:

- 3.1.18. Que, el día dos de agosto del dos mil once, en horas de la noche, el agraviado A se encontraba realizando el servicio de colectivo-taxi en el vehículo station wagon de placa de rodaje N° M1E-629 hacia la urbanización La Pradera, tal y como se acredita con la testimonial del mencionado agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.
- 3.1.19. Que, cuando realizaba su última vuelta, en la intersección de la avenida Pedro Ruiz y Luís Gonzáles de la ciudad de Chiclayo, subieron cinco personas (cuatro varones y una mujer) ubicándose dos hombres en el asiento delantero, dos hombres en el asiento posterior y la mujer en al lado izquierdo de la ventana en ese mismo asiento; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.
- 3.1.20. Que, cuando el agraviado se encontraba dirigiéndose a la Urbanización La Pradera por la carretera a Pimentel, al doblar a la altura de Café Perú – Parque Industrial, un automóvil de modelo como el matiz, de color plomo, que se encontraba con la maletera abierta, lo adelantó bruscamente cerrándole el paso, razón por la cual redujo la velocidad del vehículo a fin de evitar el impacto, dando lugar a que se saliera de la pista; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.
- 3.1.21. Que, en esas circunstancias, los pasajeros que iban al interior de su vehículo, le dijeron “ya perdiste concha de tu madre”, encañonándolo con un arma de fuego, tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.
- 3.1.22. Que, inmediatamente lo han golpeado con la cachapa del arma de fuego en la cabeza y en el rostro, y el pasajero que estaba a su costado en el asiento de adelante, le jala la llave del vehículo, para luego ser bajado del asiento delantero y ser ubicado en la parte posterior del vehículo, tal como se acredita con la testimonial del agraviado.
- 3.1.23. Que, en esas circunstancias la fémina que iba como pasajera, ha bajado del vehículo que conducía el agraviado y se ha subido al vehículo plomo que le

cerró el paso al agraviado, el mismo que se dirigió con dirección a la pista antigua de la caleta San José; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.

- 3.1.24. Que, el sujeto que le jaló la llave y que iba en el asiento delantero, bajó del vehículo que había conducido el agraviado, tomó el volante y manejó con dirección hacia la parte posterior de la Universidad San Martín, llevando al agraviado encintado de la boca, manos y pies, dejándolo botado en dicha situación por el centro poblado Santa Julia, luego de lo cual, los sujetos regresaron en ese mismo vehículo con dirección a la ciudad de Chiclayo; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y con su declaración prestada en sede fiscal (pregunta tres) incorpora durante el contrainterrogatorio.
- 3.1.25. Que, el agraviado ha logrado desatarse con una piedra, para luego correr y salir hacia la Urbanización La Predera, instantes en que ha aparecido un patrullero de la policía nacional de placa KF-7369 que ya había recibido una comunicación radial, reportando al personal policial el robo de la camioneta station wagon de placa de rodaje N° M1E-629, así como las características del vehículo que lo había interceptado; tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y del efectivo policial R, así como con el acta de intervención policial.
- 3.1.26. Que, por orden de la central 105, la unidad móvil KF-10168 de la Comisaría del Norte fue desplazada hasta el lugar de los hechos a fin de apoyar a la unidad móvil KF-7369 y moradores del lugar indicaron que una persona había sido asaltada por delincuentes a bordo de un vehículo y que después del asalto dicho vehículo se había desplazado por la jurisdicción del caserío Santa Julia; tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G.
- 3.1.27. Que, al iniciar la unidad móvil KF-10168 el patrullaje respectivo con el apoyo de patrulleros del escuadrón de emergencias, por una trocha carrozable y en un lugar oscuro, por unas chacras donde no hay casas, han encontrado un vehículo automóvil marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Lite, con placa de rodaje M2M-627, con las luces apagas, así como a su conductor – el acusado B-, debajo del vehículo quien refirió que luego de hacer una carrera, se la había pinchado una llanta y estaba arreglando dicho neumático; siendo intervenido el conductor y el mencionado vehículo, en razón de presentar las mismas características del vehículo que había participado en el asalto al agraviado, tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G y de la propia declaración prestada a nivel fiscal por el acusado ante su negativa de declarar en juicio, así como de la declaración de S. oralizada en juicio.
- 3.1.28. Que, en circunstancias que el personal policial auxiliaba al agraviado, que se encontraba ensangrentado en su cabeza, llevándolo con dirección a un hospital, el efectivo policial R recibe una comunicación que por el pueblo Joven Juan Pablo II de la Pradera, en un ingreso de trocha carrozable al centro poblado Santa Julia, se había encontrado un vehículo con las mismas características que

- había proporcionado el agraviado, tal y como se acredita con la testimonial del agraviado y del efectivo policial R, así como con el acta de intervención policial.
- 3.1.29. Que, ante dicha comunicación el efectivo policial R retorna en compañía con el agraviado hasta el lugar indicado para que éste haga el reconocimiento correspondiente, siendo que cuando llegan a dicho lugar encuentran al vehículo intervenido con las luces apagadas, y el agraviado, sin lugar a duda, reconoció directamente al acusado intervenido como una de los participantes y al automóvil como el vehículo que le cerró el paso; tal y como se acredita con la testimonial de los efectivos policiales R, G, del agraviado A, así como con el acta de intervención policial.
- 3.1.30. Que, el agraviado A ha sufrido lesiones traumáticas de origen contuso en la cabeza y en el rostro (región malar derecha); las mismas que son compatibles de haber sido causadas con la cacha de un revólver y que han requerido tres atenciones facultativas por nueve días de incapacidad médico legal; tal y como se acredita con el examen pericial del perito médico E quien depuso en juicio respecto del Certificado Médico Legal N° 008535-L de fecha tres de agosto de dos mil once.
- 3.1.31. Que, al efectuarse la inspección criminalística en el lugar de los hechos, se encontró huellas de neumáticos: unas huellas de un vehículo que venía por la avenida Juan Tomis Stack, sale de la pista y entra a la tierra, pegada a una pared, y las huellas de otro vehículo que habría estado en la pista en dirección hacia Chiclayo, que cruza el área sin asfaltar e intercepta por delante las primeras huellas antes descritas, encontrándose además dos tipos de huellas de calzado una correspondiente a zapatilla de uso masculino, y otra de calzado de uso femenino; tal y como se acredita con el examen del perito criminalístico Jhony W. Díaz de la Cruz quien explicó en juicio el Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFCRI/IC-CH.
- 3.1.32. Que, al efectuársele el registro personal al acusado B, se le encontró en su poder dos billetes de cincuenta nuevos soles, su documento de identidad, licencia de conducir y un celular marca Nokia, tal y como se acredita con la testimonial de G y el acta de registro personal.
- 3.1.33. Que, al efectuarse el registro vehicular al vehículo intervenido no se encontró armas ni municiones, tal y como se acredita con la testimonial del efectivo policial G.
- 3.1.34. Que, el vehículo Station Wagon de placa de rodaje N° M1E-629 es de propiedad de J, tal y como se acredita de la copia simple de la tarjeta de propiedad del mencionado vehículo.

3.2. HECHOS NO PROBADOS:

- 3.2.2. La defensa técnica del acusado no ha probado su teoría del caso formulada tanto en sus alegatos iniciales como finales.

CUARTO: PRESUNCION DE INOCENCIA FRENTE AL TEMA PROBATORIO

- 4.3. El Principio de Presunción de inocencia consagrado en el artículo 2° inciso 24 literal “e” de nuestra Norma Fundamental, se configura, en tanto regla del juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referidas a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos.
- 4.4. Realizada la actividad probatoria, con todas las garantías procesales y sustanciales, este principio ha logrado ser enervado desde la tesis acusatoria por las razones que a continuación se exponen.

QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN O TIPICIDAD.

- 5.17. Conforme a los hechos probados, el Ministerio Público ha acreditado más allá de toda duda razonable que el día dos de agosto de dos mil once, el agraviado A se encontraba prestando servicio de colectivo-taxi en el vehículo Station Wagon de placa de rodaje N° M1E-629 de propiedad de J del centro de la ciudad de Chiclayo hacia La Pradera, y siendo aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, en circunstancias que el agraviado realizaba su última vuelta, cinco pasajeros –entre ellos cuatro hombres y una fémina- abordan su vehículo, y cuando se encontraba dirigiéndose por la carretera a Pimentel, doblando a la altura la altura de Café Perú (Parque Industrial), fue interceptado por el vehículo marca Chevrolet, color plomo, modelo Spark Lite, de placa de rodaje N° M2M-627, conducido por el acusado B, quien le cierra el paso, dando lugar a que el agraviado reduzca la velocidad y detenga su vehículo; circunstancia que es aprovechada por los pasajeros que iban en el vehículo del agraviado, quienes lo encañonan con un arma de fuego diciéndole “ya perdiste”, le quitan las llaves del vehículo, lo agreden físicamente causándole lesiones en la cabeza con la cachá de un arma de fuego que han requerido tres atenciones facultativas por nueve de días de incapacidad médico legal, lo suben a la parte posterior del vehículo, le encintan la boca, pies y manos, para luego uno de ellos conducir el vehículo y abandonar al agraviado por el caserío Santa Julia, logrando de esta forma apoderarse del vehículo, dirigiéndose con destino a Chiclayo; en tanto que el acusado B, luego de cumplir su rol de interceptar el vehículo del agraviado, cerrándole el pase, sale de dicho lugar en compañía de la fémina que venía como pasajera en el vehículo del agraviado, con dirección a la pista antigua de la caleta San José.

- 5.18. No queda duda de la participación del acusado en los hechos materia de juzgamiento, por cuanto el agraviado lo ha reconocido plenamente en el momento mismo que le cerró el paso y además reconoció el vehículo precisando sus características, versión que efectivamente resulta creíble por cuanto, las reglas de la experiencia enseñan que cuando se infringe una regla de tránsito lo primero que hace un conductor es observar a la persona que infringió la regla de tránsito. Esto explica el hecho de que cuando el agraviado llega hasta lugar de la intervención del acusado, sindicó directamente al acusado como uno de los autores del hecho, e identificó el vehículo que le había cerrado el pase, lo que demuestra que desde los momentos inmediatamente posteriores al evento delictivo el agraviado pudo lograr identificar al acusado sin lugar a duda.
- 5.19. Evidentemente dada la forma y circunstancias en que se perpetró el evento delictivo, no cabe duda que el acusado ha actuado dolosamente, evidenciándose un reparto de roles en la ejecución de su plan criminal, lo que permite concluir que tiene la calidad de coautor.
- 5.20. Así las cosas, el acusado B resulta ser responsable del delito de robo previsto en el artículo 188° del Código Penal, con las agravantes de haber sido cometido durante la noche y en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en un medio de locomoción, y sobre vehículo automotor; circunstancias que están previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del primer párrafo del Código Penal.
- 5.21. Es necesario, indicar que respecto del grado de desarrollo del delito, éste ha quedado en grado de consumado, pues, los participantes en este hecho criminal, entre los que se encuentra el acusado, han tenido posibilidad de ejercitar actos de dominio sobre el citado bien, en tanto que éste ha sido recuperado con posterioridad al evento criminal.
- 5.22. La defensa técnica sostiene que el agraviado, durante su declaración en sede fiscal en ningún momento refiere que se trataba de un vehículo marca Chevrolet. Al respecto debe expresarse que el agraviado dio las características generales del vehículo que lo abordó, pero suficientes para poder ser identificado (esto es, un vehículo modelo como matiz, de color plomo, con una farola que decía “La Cuzqueña”), y el hecho de que no haya referido que se trataba de marca Chevrolet, ello más bien hace más verosímil su versión en el sentido de que la maletera se encontraba levantada, y en tales circunstancias es imposible que haya podido visualizar la marca del vehículo, por cuanto de las cuatro fotografías pertenecientes al vehículo que conducía el acusado y que han sido actuadas por el representante del Ministerio Público, se advierte que la marca del mismo se encuentra en la maletera, que en el momento de los hechos se encontraba levantada. Es de señalar además que es común, que los delincuentes pretendan evitar que se fijen en las características relevantes identificatorias de los vehículos que utilizan en esta clase de delitos.

- 5.23. También la defensa técnica cuestiona el acta de intervención policial, alegando que ha sido firmada sólo por un efectivo policial interviniente y en ella se consigna que la marca del vehículo era Chevrolet y que no pudo ver el teléfono de la farola. Al respecto, debe indicarse que el cuestionamiento que hace la defensa, resulta irrelevante, si se tiene en cuenta que el testigo firmante de dicha acta, el efectivo policial R, ha concurrido a juicio a dar su versión respecto de su participación de los hechos, la cual se corrobora con la testimonial del efectivo policial G quien refiere además que sólo recurrieron en calidad de apoyo. Además este último testigo ha referido que todas se levantaron en la Comisaría del Norte, por cuanto se trataba de una zona oscura y no era el lugar adecuado para efectuar la documentación respectiva; siendo ello así resulta lógico que ya en la Comisaría del Norte -dependencia policial a la que pertenecía el efectivo policial R-, el acta de intervención haya sido suscrita sólo por éste, pues, no sólo auxilió al agraviado sino que además llegó hasta el lugar donde se había producido la intervención del acusado, y es en este lugar donde al agraviado reconoció al acusado y al vehículo que lo intersectó. El hecho de que en el acta se haya consignado la marca del vehículo, como una referencia que habría proporcionado el agraviado resulta irrelevante si se tiene en cuenta que la misma defensa con fines de impugnar credibilidad ingresó la pregunta y respuesta número tres de la declaración del agraviado brindada en sede fiscal con fecha tres de agosto del dos mil once, y en ella no aparece que haya proporcionado la marca del vehículo. Por otra parte, el sólo hecho que el agraviado no haya podido ver el número de teléfono consignado en la farola, ello no significa que no haya podido reconocer al vehículo en sus características generales, pues como ya se ha indicado sí lo hizo, y en tales circunstancias en que es interceptado, encañonado y amenazado resulta absurdo exigirle que pudiera haber captado el menor detalle del vehículo.
- 5.24. La defensa sostiene igualmente que en el acta de intervención se han consignado tres hechos, sin que haya sido firmada por los demás policías intervinientes. En relación a ello, debe reiterarse que la unidad policial en la que estaba el efectivo policial G, sólo ha participado en calidad de apoyo, en tanto que la unidad policial en la que iba el efectivo R no sólo participó auxiliando al agraviado sino que se constituyó hasta el lugar donde el agraviado reconoció al acusado y el vehículo con el que había sido intersectado. En consecuencia los cuestionamientos que hace la defensa al respecto en nada enervan la responsabilidad penal del acusado, máxime si los citados efectivos policiales han concurrido a juicio y han dado su versión sobre los hechos, sin que, en el aspecto principal referido a la intervención, hayan podido ser desacreditados.
- 5.25. No es cierto lo que sostiene la defensa, en el sentido de que se ha querido agravar la situación del acusado respecto a las armas y municiones que se le habrían encontrado al efectuársele el registro vehicular; pues, en juicio el efectivo policial G que efectuó tal registro, durante el contrainterrogatorio

precisó que no se encontró ningún arma, y que lo consignado en dicha acta se debió a un error, toda vez que se imprimió en la computadora el documento, explicación que resulta atendible si se observa el acta de registro vehicular que se tiene a la vista. En ese orden de ideas, resulta incoherente, que se sostenga, que los efectivos policiales hayan pretendido agravar la situación del acusado, más aún cuando la citada acta fue redactada recién en la dependencia policial.

- 5.26. La defensa señala que la función de los efectivos policiales era la de recoger versiones o nombres de las personas que hayan visto directamente el momento en que el agraviado fue víctima del robo de su vehículo. Al respecto, debe expresarse que conforme a los hechos probados, se ha acreditado más que suficiente que el agraviado fue víctima del robo de la unidad vehicular que conducía, y conforme a las testimoniales de los efectivos policiales R y G se advierte que lo que hicieron los efectivos del orden, era justamente recoger la versión de los moradores del lugar; y resulta absurdo que, dada la inmediatez y rapidez, con la que debe actuar la policía nacional, se detengan en ese momento y en ese lugar a recabar los nombres de testigos, máxime si las reglas de la experiencia nos enseñan que frente a este tipo de eventos criminales, difícilmente se puede lograr este objetivo, por el temor que la delincuencia organizada, infunde en la ciudadanía.
- 5.27. Respecto del acta de entrevista de S., la defensa sostiene que se trata de hechos inmediatos porque dice cerca de las ocho y media, que es la hora en que el agraviado habría sido víctima de robo, y que además de ella se desprende que su patrocinado se encontraba sólo y no con una fémina. En relación a ello, se debe tener en cuenta que la hora consignada, es una hora aproximada que da la persona entrevistada; y el sólo hecho de que el acusado no haya sido intervenido en compañía de la fémina con quien huyó del lugar del evento criminal, es simplemente porque, debido a las circunstancias que le sobrevinieron al acusado, la fémina no tuvo otra alternativa que abandonar al acusado y ponerse a buen resguardo a fin de no ser capturada por la autoridad policial, lo cual era fácil de lograr, si se tiene en cuenta las circunstancias del lugar, es decir, una zona oscura y cerca de chacras.
- 5.28. En relación a los actos de investigación practicados con el Ministerio Público en otra investigación por el delito de extorsión relacionada con los hechos materia de juzgamiento; debe expresarse que lo que aquí se juzga es sólo el delito de robo agravado en agravio del agraviado, y no el delito de extorsión del que posteriormente fue objeto el propietario del vehículo, y el sólo hecho de que en dicha investigación no se hayan encontrado elementos que vinculen directamente al acusado como presunto autor de ese hecho, en nada enerva su responsabilidad que ha quedado acreditada por el delito que en el presente proceso que se le juzga.
- 5.29. Si bien el perito criminalístico ha manifestado que no se ha determinado si las huellas encontradas pertenecen a las mismas características de los neumáticos

del vehículo conducido por el acusado, también lo es que, lo concreto es que en el lugar de los hechos ha encontrado huellas de neumáticos de dos vehículos, en donde uno intercepta al otro; así como también ha encontrado huellas de zapatilla de uso masculino y de calzado de uso femenino. Ello no hace más que confirmar, la coherencia y verosimilitud del agraviado en el sentido que fue interceptado por un vehículo, y que la fémina que abordó su vehículo como pasajera, bajó del mismo para fugar en el vehículo conducido por el acusado.

- 5.30. No resulta creíble la versión que da el acusado, en el sentido que habría hecho una carrera a dos señoras cobrándole por tal servicio la suma de ocho nuevos soles; por cuanto al momento de efectuársele el registro personal no se le ha encontrado ninguna moneda, que es lo normal en una persona que se dedica a prestar servicio de taxi; por el contrario se le encontró en poder de dos billetes de cincuenta nuevos soles (al parecer uno falso), no resultando creíble que justamente al cobrar dicha carrera haya tenido exactamente la suma de cuarenta y dos nuevos soles para darles el vuelto a las señoras que dice haber trasladado hasta un lugar, el cual no ha podido precisar con exactitud, pues, sólo hace referencia a un puente, sin que haya podido observar alguna vivienda a la cual puedan dirigirse las supuestas señoras.
- 5.31. Finalmente debe precisarse que no está en discusión, si existen muchos más vehículos con características similares al vehículo que conducía el acusado, eso no es lo relevante para resolver este caso; lo importante es que el acusado reconoció a su conductor, observó las características del vehículo, esas características se irradiaron a las unidades policiales, y justo se encuentra el vehículo con las características proporcionadas por el agraviado, inmediatamente después de ocurridos los hechos a la altura de una trocha carrozable del Centro Poblado Santa Julia, con las luces apagadas, tal y como lo refirió el efectivo policial G, sin que el acusado pueda justificar –como ya se ha dicho– razonablemente la supuesta carrera que hizo, ni el pago que recibió por esta.
- 5.32. Por las razones antes expuestas, el acusado B debe responder como coautor del delito de robo agravado que se le imputa.

SEXTO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD

- 6.3. En el presente caso no se ha logrado determinar la existencia de causas que justifiquen la conducta del acusado B como para negar la antijuridicidad.
- 6.4. Con respecto a la culpabilidad, debe considerarse que en el momento de los hechos el acusado era persona mayor de edad y ha cometido los mismos en pleno uso de sus facultades mentales, sin que existan elementos de prueba actuados en juicio que demuestren lo contrario; además por la forma y circunstancias como se han producido los hechos ha podido comprender la ilicitud de su conducta; e incluso claramente ha tenido la posibilidad de realizar conducta distinta, en consecuencia al resultar el juicio de tipicidad positivo,

corresponde amparar la pretensión punitiva postulada por el representante del Ministerio Público.

SÉPTIMO: DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA

- 7.5. Para efectos de la determinación judicial de la pena al acusado, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena establecido para el delito de robo agravado previsto en el artículo 189° primer párrafo incisos 2, 3, 4, 5 y 8, que establece que la pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de la libertad.
- 7.2. Conforme al artículo 397° numeral 1 del Código Procesal Penal el Juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una pena por debajo del mínimo legal sin causa justificada.
- 7.6. El representante del Ministerio Público, está solicitando se imponga al acusado B, la pena de trece años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que no registra antecedentes penales.
- 7.7. En el presente caso, se aprecia que en el hecho han concurrido cinco agravantes, situación que permitiría movilizar la pena hacia el extremo medio, y no hacia el mínimo como lo ha propuesto el señor Fiscal; sin embargo, atendiendo al principio de congruencia, aún cuando el acusado debería merecer una pena mayor, este Colegiado no tiene otra opción que amparar el quantum propuesto por el señor fiscal por cuanto se encuentra dentro del marco establecido en la ley; dejando constancia que este Colegiado no advierte ninguna otra circunstancia, que permitan la imposición de una pena menor.
- 7.8. En consecuencia, la pena a imponer al acusado Guevara Ríos es la de trece años de pena privativa de la libertad.

OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL

- 8.4. En cuanto a la reparación civil, según el artículo 93° del Código Penal, comprende tanto la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios.
- 8.5. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, según lo expresado por el señor fiscal en sus alegatos de clausura, el vehículo objeto del robo, ha sido recuperado con posterioridad.
- 8.6. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el delito de robo agravado, es un delito pluriofensivo que no sólo afecta el patrimonio, sino también la libertad e integridad física de las personas – como en el presente caso que se causó lesiones al agraviado A, y es evidente que las víctimas han merecido un tratamiento médico y gastos en la compra de medicinas; además de haber dejado de laborar durante los días de incapacidad física que se le prescribió. Siendo ello así debe ampararse el quantum propuesto por el representante del Ministerio

Público y fijarse en un mil nuevos soles el monto que deberá pagar el acusado por reparación civil a favor del agraviado, monto que este Colegiado lo considera suficiente y proporcional para reparar el daño causado.

NOVENO: EJECUCION PROVISIONAL DE LA CONDENA

Atendiendo a que según el artículo 402° inciso 1 del Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, corresponde disponer la ejecución inmediata de la misma.

DECIMO: IMPOSICION DE COSTAS

Teniendo en cuenta que el acusado Guevara Ríos ha sido vencido en juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500° numeral 1 del Código Procesal Penal corresponde imponerle el pago de las costas del proceso, las mismas que serán liquidadas en ejecución de sentencia si las hubiere.

III. PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos según la sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de los artículos citados y además los artículos IV del Título Preliminar, 12°, 23°, 29°, 45°, 46°, 93°, 188° y 189° primer párrafo incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del Código Penal; artículos 393° a 397°, 399°, 402° y 500° del Código Procesal Penal, el **Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque**, administrando justicia a nombre de la Nación, **FALLA: CONDENANDO** al acusado **B** como **COAUTOR** del delito **CONTRA EL PATRIMONIO** en su figura de **ROBO AGRAVADO** tipificado en el artículo 188° del Código Penal con las agravantes previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 y 8 del primer párrafo del artículo 189° del mismo Cuerpo de Leyes, en agravio de **A** y como tal le impone **TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA** la misma que computada desde la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el primero de agosto de dos mil veinticuatro; **FIJARON** en **UN MIL NUEVOS SOLES** el pago que por concepto de Reparación Civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; **SE DISPONE** la ejecución provisional de la sentencia en el extremo penal oficiándose con dicho fin; **IMPÓNGASE** el pago de las **COSTAS** al sentenciado, las que se calcularán en ejecución de sentencia si las hubiera; **CONSENTIDA O EJECUTORIADA** que fuere la presente resolución inscribese en el Registro Central de Condenas remitiéndose los boletines y testimonios de ley; **REMITASE** copia de la presente resolución al Director del Instituto Nacional Penitenciario para los fines pertinentes y en su oportunidad, archívese lo actuado con

aviso a quien corresponda, **DEVOLVIÉNDOSE** lo actuado al Juzgado de Investigación Preparatoria para que ejecute la sentencia. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.**

Ss.

GUILLERMO PISCOYA

RODRÍGUEZ LLONTOP

BANCES SÁNCHEZ

EXPEDIENTE : 3110-2011-48-1706-JR-PE-01
IMPUTADO : B
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : A
ESP. DE SALA : PEDRO SANTA MARÍA VERGARA
ESP. DE AUDIENCIA: ARACELY ELIZABETH SÁNCHEZ MEOÑO

SENTENCIA NÚMERO 63-2012

Resolución número: **TRECE**

Picsi , Nueve de Agosto
de dos mil doce.

OÍDOS y VISTOS; En mérito al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado **B**, es materia de revisión la sentencia, contenida en la resolución número seis, del nueve de mayo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, que falla condenando al apelante como autor del delito contra el patrimonio en su figura de robo agravado, en agravio de A y le impuso **TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA** computada desde la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el primero de agosto del dos mil veinticuatro y fija en la suma de mil nuevos soles la reparación civil que deberá abonar a favor del agraviado; y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Motivo de Impugnación

Al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado **B** El agraviado menciona que a esta hora aproximadamente tomó una carrera de Chiclayo como colectivo hacia La Pradera, porque esa era la ruta que este brindaba.

Específicamente, en cuanto a la ruta que va desde Chiclayo a la Pradera, el señor dice que fue interceptado en la entrada que va desde la entrada de la ruta a la Pradera, es decir en toda la esquina de la fábrica Café Perú -carretera a Pimentel-, es ahí que dice que fue interceptado por un vehículo tipo modelo tico, pero en ningún momento hace referencia a un modelo exclusivo o precisa que se trataba de un Taxi La Cuzqueña. Además el señor en el Juicio Oral, dice que como fue interceptado intempestivamente por el sujeto que conducía el tico tipo matiz color plomo, inmediatamente miró para su derecha, porque según dijo, lo único que hacemos los que conducimos un vehículo en esos casos, es protegerse físicamente y materialmente con respecto a su vehículo, su reacción fue girar el timón hacia la derecha; a lo cual la defensa se pregunta en qué momento lo reconoció, porque aquí no hace referencia a que el señor haya bajado del

vehículo, solo dice que lo reconoce que como lo interceptó lo quedó mirando. La defensa hace mención que por reglas de la lógica y la experiencia, cuando hay ese tipo de infracciones si se sigue al infractor para llamarle la atención, pero en este caso el señor no lo siguió entonces en que momento como lo vio, lo pudo reconocer físicamente.

La versión del agraviado es incoherente, pues en Juicio Oral cuando se le dice que de lectura a su declaración, el hace referencia a que no puede hacerlo porque no sabe leer, entonces como es que el señor pudo leer para decir según el acta de intervención, que se trataba de un vehículo que decía Taxi La Cuzqueña, modelo Chevrolet. Sí el mismo hace referencia que la capota del vehículo estaba levantada, y las marcas de los vehículos están en la capota, cómo es que pudo verificar la marca del vehículo.

El acta fue redactada en la comisaría, otro cuestionamiento que se hace es cómo es que la policía o el agraviado precisan que su patrocinado se dirigía hacia el Pueblo Joven Santa Julia, si en el lugar en el que fue interceptado hay muchas rutas, se puede ir a la Pradera o salir dando la vuelta por otra fábrica y salir por la vía de evitamiento, entonces como es que precisa dirigiéndose al Pueblo Joven Santa Julia, el acta ha sido manipulada al antojo de la policía.

Con respecto al acta de entrevista, el colegiado le da un desvalor en perjuicio de su patrocinado; pues el Colegiado para sentenciar dice “debemos suponer que como la fémina se bajo del vehículo, lo que hizo el acusado presuntamente es dejar a la fémina para regresar”.

La testigo hace referencia a que vio al imputado sólo, en ningún momento hace referencia a que ha visto a una mujer cuando se reventó la llanta.

Cuando a su patrocinado se le intervino, se dio lectura a su celular, y la defensa también presentó el levantamiento del secreto de comunicaciones., que consta en el cuaderno de pruebas, de donde no se puede determinar que haya tenido un tipo de comunicación, ya sea por mensaje o llamada con esas personas, que se haya coludido con estos señores para poder servir y adelantar al vehículo.

Si los señores tenían un arma de fuego, cuál era la participación de su patrocinado, la de interceptarlo nada más y dejar a la fémina en buen recaudo, no resulta adecuado el razonamiento del Colegiado.

El Acuerdo Plenario N° 02-2005 hace referencia a que toda declaración debe de ser coherente, porque el único testigo presencial es el agraviado y de esa declaración tienen que corroborarse los dichos. Esa declaración no es coherente, por el contrario, contradictoria. El único testigo presencial es el agraviado y de esa declaración tienen que corroborarse los dichos, y aquí no se cumple esto, porque la declaración es poco creíble, porque en su declaración hace referencia a que tenía estudios superiores y por eso tenía breveté, sin embargo en Juicio declaró que no sabía leer, entonces como pudo advertir que se trataba de un vehículo que decía taxi la Cuzqueña.

Ante la insuficiencia probatoria, no debida valoración de las pruebas, la defensa solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su patrocinado.

SEGUNDO.- De la posición del Ministerio Público.

El señor Fiscal sostiene que se debe tener en cuenta el Acuerdo Plenario 02-2005, fundamento diez, en tal sentido, durante el interrogatorio no ha señalado que hubiera alguna situación de odio, resentimiento, que nos pudiera colegir que gratuitamente el agraviado le está imputando un delito.

No tan solo tenemos la declaración del agraviado quien en forma coherente, firme desde un inicio ha reconocido al imputado como partícipe del hecho delictivo en su agravio; sino también la declaración de los efectivos policiales PNP R y G, quienes elaboraron los documentos policiales correspondientes.

No se ha hecho la tacha respecto a estos documentos en su momento oportuno, por lo que han llegado estado de Juicio Oral, cumpliendo con los artículos 120 y 121 del Nuevo Código Procesal Penal.

El acto respecto a la víctima también se encuentra corroborado con el Certificado Médico N° 008535-Lesiones por el perito médico legisla Wilson Emerson Becerra Llempén, que arrojó atención facultativa de tres días por incapacidad médico legal de nueve días.

Respecto de la presencia de la fémina que habría subido al vehículo del acusado, queda corroborado además con el Perito Criminalístico Jhonny B. Díaz de la Cruz en su Informe Pericial N° 905-2011, donde refiere que ha podido corroborar las pisadas correspondientes a zapatillas tanto de elemento masculino como femenino en el lugar donde fuera llevado a cabo la intervención policial.

Considera la Fiscalía que debe confirmarse la resolución emitida por el Colegiado de primera instancia.

TERCERO.- De los medios de prueba actuados en audiencia de apelación.

Se tomó la declaración al sentenciado quien aceptó declarar en audiencia, respondiendo de la siguiente manera:

- 9) El día dos de agosto del dos mil once, se encontraba realizando servicio de taxi. Su última carrera fue a las ocho y treinta de la noche aproximadamente.
- 10) Respecto a la imputación manifiesta que ese día solo estaba haciendo una carrera y lo detienen por el lugar de los hechos.
- 11) A la pregunta ¿Cómo es que el agraviado lo haya reconocido como la persona que participó en el hecho? Respondió que al agraviado si lo conoce, porque trabajaba por la Pradera en un colectivo, en esas circunstancias lo conoció, tenían una relación de transportistas nada más.
- 12) Cuando se le preguntó ¿Los funcionarios policiales que lo intervinieron refieren que lo hacen a raíz de una llamada que se hizo al 105, cuál fue el procedimiento de su intervención? Manifestó que fueron dos o tres patrulleros que llegaron y lo detienen como supuesto sospechoso, y el les manifestó que se encontraba arreglando sus neumáticos. El lugar en el que se le intervino era como trocha, a la izquierda había hectáreas de arroz, la casa más próxima estaba a unos tres

metros, no puede especificar si estaban juntas o no estas casas, porque estaba oscuro.

- 13) Sobre ¿A cuántas personas movilizó en la última carrera? Sostuvo que a dos personas de sexo femenino. Le solicitaron que las dirija a Pedro Ruiz con Luis Gonzáles, tomó la ruta de Pedro Ruiz, luego Angamos, bajó por Lora y Cordero, luego agarró Junín y terminó por la Comisaría del Norte, agarró la Juan Tomis que da a la carretera a Pimentel, y entró a la Pradera al sitio donde le han mencionado.
- 14) ¿Ha ingresado por la ruta que van los colectivos hacia la Pradera, la carretera principal que va hacia el frontis de la Universidad de San Martín, ha ingresado por ahí? Sí.
- 15) ¿Cuánto cobró por la carrera? Ocho soles. Le pagaron con billete de cincuenta, les dio treinta soles en billetes y el resto de vuelto en sencillo que sacó de la gaveta.
- 16) En su sencillera solo guarda monedas, billetes grandes en su cartuchera – billetera.

LECTURA DE PIEZAS PROCESALES: POR PARTE DE LA ABOGADA DEFENSORA

Acta de Intervención Policial. En el punto número uno de esta acta, la utilidad y pertinencia es respecto a la hora que se consignó, en la que fue víctima el presunto agraviado, es decir a las 20 hrs. con 30 minutos. Su patrocinado de acuerdo a la hora en que fue intervenido, estaba arreglando su llanta y fue visto por una testigo.

En el punto dos, última parte donde dice “fue interceptado por un vehículo Chevrolet color plomo con farola Taxi Cuzqueña quien le cerró el paso y los cuatro sujetos que iban a bordo de su vehículo lo encañonaron con un arma de fuego y bajo golpes y amenazas se apoderaron de su vehículo para darse a la fuga, el vehículo (...)” la utilidad consiste en que, resulta anormal el hecho de cómo sabía el agraviado o la policía a donde se dirigía su patrocinado. Esta acta de intervención fue redactada en la comisaría no en el lugar de los hechos in situ.

Acta de entrevista a la señora S, la utilidad es respecto a la hora en que ella vio a su patrocinado, cuando se le pregunta para que narre por los hechos, dice que se encontraba en casa de su tía a las ocho y treinta de la noche vio un carro que se dirigía del camino de San José hacia la universidad, escuchó el sonido de aire de una llanta, en eso vio un auto modelo tico al parecer particular y no ha visto a otras personas. Hace dos observaciones, una respecto a la hora en que vio a su patrocinado, otro, de la dirección en que dice se dirige el auto. Se trata de una testigo del representante del Ministerio Público, la misma que declaró cuando el señor fiscal se constituyó hasta su domicilio, la misma que en Juicio no se presentó.

CUARTO.- De la delimitación del debate

Conforme a la pretensión impugnativa del sentenciado, corresponde a la Sala verificar: Si conforme a las pruebas actuadas en el juicio, el recurrente es o no coautor del delito contra el patrimonio en su figura de ROBO AGRAVADO previsto en los incisos 2,3,4,5 y 8, del Artículo 189 del Código Penal y si es que existen medios probatorios suficientes para tenerlo como tal.

QUINTO.- De la imputación formulada contra el sentenciado recurrente.

3) Conforme a la tesis del Ministerio Público sustentada en la audiencia del juicio oral, al sentenciado recurrente se le imputa que el día dos de agosto del dos mil once, a horas veinte con treinta minutos aproximadamente, en circunstancias que el agraviado A, realizaba servicio de colectivo – taxi en su vehículo Station Wagon de placa de rodaje M1E 629 a cinco personas, entre ellos a una fémina, quienes subieron en las intersecciones de la Avenida Pedro Ruiz y Luis Gonzáles con rumbo a la pradera y cuando doblaba a la altura de Café Perú del Parque Industrial (prolongación Juan Tomis Snack con Av. Que conduce a la Universidad San Martín) un automóvil como Matiz con farola Taxi La Cuzqueña, que estaba con la maletera abierta lo adelantó bruscamente, cerrándole el paso por lo que se vio obligado a bajar la velocidad; en tales circunstancias sus pasajeros le dijeron “ya perdiste concha de tu...”, encañonándolo con un arma de fuego y lesionarlo con la cacha del arma en la cabeza y en el rostro; optando la fémina por bajar del vehículo del agraviado y subir al vehículo que le cerró el paso, el cual era conducido por un sujeto de tez trigueña, cabello medio ondulado corto, cara redonda a quien uno de los asaltantes le dijo “oye superman avanza”, quien efectivamente arrancó con dirección a la pista antigua de la caleta San José. En tanto que los delincuentes que estaban en el vehículo del agraviado, le arrebatan sus llaves, lo quitan del volante y lo ponen en la parte posterior, despojándolo de su celular marca NOKIA número 979835073, su DNI N° 40843602, dejándolo abandonado a la altura del CCPP Santa Julia (por carretera de la caleta San José) atado con cintas adhesivas en las manos y en la boca, llevándose su vehículo. La PNP al ser informados de estos hechos por la central 105, acudió al lugar de los hechos de manera inmediata, es así que mientras el agraviado era auxiliado por el Cap. PNP R en una unidad móvil; otra unidad móvil KF-10168 al mando del SOB PNP G y se constituyó al lugar del robo y toman conocimiento también de los pobladores del lugar, que la unidad comprometida en el asalto había huido con dirección al Pueblo Joven Juan Pablo II, optando por peinar dicha zona y al llegar a una trocha carrozable con dirección al CP Santa Julia advierten la presencia de un vehículo con las mismas características del que cerró el paso al agraviado, además su conductor estaba debajo del carro arreglando una llanta con las luces apagadas, siendo intervenido por la PNP identificándose como B; por lo que la PNP interviniente comunica de este hallazgo al Cap. PNP R, quien se constituyó a dicho lugar con el agraviado, siendo que éste

reconoció plenamente y de manera espontánea e inmediata a dicha unidad, como el vehículo que le cerró el paso: cuyas características son: automóvil con farola, marca Chevrolet, color plomo modelo SPARK LITE de placa de rodaje M2M-627. también reconoció al conductor de este vehículo por sus características físicas.

- 4) Que, estos hechos el Ministerio Público los tipifica en los incisos 2,3,4,5 y 8 del Art.189 del Código Penal que sanciona al que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, con las agravantes de haberlo realizado durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero – medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos, y sobre vehículo automotor.

SEXTO.- Intervención del acusado en calidad de coautor y motivos para desestimar su pretensión.

Teniendo en cuenta que la defensa técnica del recurrente cuestiona la participación de su patrocinado en el delito de ROBO AGRAVADO, señalando que: **A)** El Colegiado de primera instancia no ha valorado adecuadamente las pruebas actuadas en el juicio oral, **B)** En su declaración preliminar, el agraviado no ha mencionado el letrado que diga La Cuzqueña, solo hace referencia a un vehículo matiz color plomo que se encontraba con la maletera abierta; asimismo, si en el juicio oral hace referencia que no sabe leer como pudo haber darse cuenta lo que decía en el cartel, **C)** Lo normal en estos casos es que trate de protegerse físicamente y materialmente el vehículo, por lo que debido a como sucedieron los hechos no pudo identificar a su patrocinado, **D)** No se ha valorado debidamente la declaración de Luz Emerita Sánchez Quispe, quien ha manifestado que vio al sentenciado solo sin hacer referencia a una mujer, y **E)** Tampoco se ha valorado la disposición de levantamiento de secreto de las comunicaciones que se hizo a su patrocinado. Al respecto, estima este Colegiado que, en contrario a lo alegado por la defensa técnica del sentenciado apelante, el órgano de primera instancia, sí ha efectuado una correcta valoración del material probatorio actuado en dicha instancia, por lo siguiente:

- B) De su condición de Coautor:** La coautoría tiene lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Código penal, cuando varias personas cometen un delito en común; señala el autor Percy García Caveró al respecto, que: la teoría del dominio del hecho en esta forma de autoría tiene lugar “*cuando los intervinientes toman la decisión común de realizar el delito y cada uno realiza un aporte esencial en el estadio de ejecución*”, (Lecciones de Derecho Penal, Parte General, ED. Grijley 2008, Pág. 577) y en el caso de autos se ha establecido, fuera de toda duda,

que el acusado forma parte de un plan general que se inicia con los cinco sujetos que se hacen pasar como pasajeros para luego el acusado interceptar el vehículo y favorecer a que lo despojen del mismo, huyendo y dejándolo abandonado al agraviado. ***El rol del acusado fue encargarse de interceptar al vehículo que conducía el agraviado, cerrándole el paso, para que los demás sujetos que se hacían pasar como pasajeros despojen con violencia el vehículo al agraviado,*** constituyendo la conducta del recurrente un aporte indispensable en la ejecución del ilícito, quedando probado por las razones siguientes:

- i) El día dos de agosto del dos mil once, siendo las veinte horas con treinta minutos aproximadamente de la noche, en circunstancias que el agraviado se dirigía haciendo colectivo, desde las avenidas Pedro Ruiz con Luis Gonzáles, llevando a bordo a cinco personas, entre ellos una mujer, que simulaban ser pasajeros, con dirección a la Pradera, en dicho trayecto, fue interceptado por otro vehículo color plomo, que era conducido por el sentenciado, momento en el cual mediante violencia y haciendo uso de armas de fuego redujeron al agraviado y le despojaron del vehículo de placa de rodaje M1E – 629, marca NISSAN, Station Wagon, color plata, de propiedad de J (conforme a la copia de tarjeta de propiedad oralizada en juicio oral y que obra en el folio 10 de la carpeta de medios probatorios), para luego dejarlo abandonado, versión que ha sido corroborada con la declaración firme y coherente del agraviado tanto en el juicio oral como en la declaración preliminar (folio 41-43) que fue introducida al juicio, en el extremo de la pregunta número tres. Asimismo, momentos después, al ser auxiliado por efectivos policiales y realizar el operativo respectivo, se logra intervenir al acusado Edit Genaro Guevara Ríos, en circunstancias que se le había reventado una llanta y procedía al cambio del mismo, siendo reconocido plenamente por el agraviado.
- ii) La declaración del agraviado es tomada como prueba de cargo, puesto que cumple con las siguientes exigencias: ***a) ausencia de incredibilidad subjetiva:*** al no haberse establecido que entre el agraviado y el sentenciado apelante, o sus familiares existan relaciones de enemistad, odio o algún otro sentimiento subalterno que hubiera motivado una falsa imputación; ***b) verosimilitud:*** La versión narrada por el agraviado ha sido corroborada con los medios de prueba actuados en juicio oral, así tenemos: declaración del SOB Brigadier PNP G, quien participó en la intervención el día de los hechos, declaración del Capitán R, efectivo que también intervino el día que ocurrieron los hechos, Informe Pericial N° 905-2011-II DIRTEPOL-OFICRI/IC-CH (folio 1-4), oralizado y explicado por el perito CAP. PNP Jhony Wilder Díaz De La Cruz, en el juicio oral, acta de intervención policial (folio 6-7), acta de registro personal (folio 8), cuatro tomas fotográficas (folio 48-49), Acta de situación vehicular (folio 13), todas actuadas en la audiencia de juicio oral. ***c) persistencia en la incriminación:*** el agraviado, ha mantenido desde el inicio una versión coherente y uniforme

respecto de su imputación contra el sentenciado apelante, como autor del delito en su agravio, confirmando en juicio oral los hechos que dieron inicio a la investigación.

- iii) Asimismo, con el certificado médico legal N° 008535 – L (5), se establece que el agraviado A, con motivo del delito, sufrió lesiones traumáticas recientes de origen contuso, por lo que requirió tres días de atención facultativa por nueve días de incapacidad médico legal, lo mismo que ha sido explicado por el perito LL., en el juicio oral.
- iv) De igual manera, el agraviado ha identificado plenamente al acusado y al vehículo, durante la investigación, e incluso desde el mismo día de la intervención, tal como lo manifiestan los efectivos policiales que participaron el día de los hechos, G y R, lo cual ha sido sostenido también durante la audiencia de juicio oral.
- v) Sobre los argumentos de la defensa técnica del sentenciado apelante, se debe tener en cuenta lo siguiente: **1)** Respecto a la diferencia que existiría en las actas respecto a la hora en que ocurrieron los hechos, debe tenerse en cuenta que conforme suscitaron los hechos delictivos, a la forma y circunstancias, conforme a las emociones y miedo causado en la víctima, es evidente que las mismas no sean dadas con exactitud, sino en aproximaciones, más aún si es dichas actas no han sido impugnadas con los medios técnicos de defensa con los que ha contado en su defensa el sentenciado oportunamente, conforme a las normas del debido proceso. **2)** El agraviado ha brindado su testimonio durante el juicio oral y ha narrado las características tanto del acusado como del vehículo que utilizaron para la comisión del delito, las mismas que no se contradicen con lo manifestado a nivel preliminar, pregunta tres que fue introducida a juicio, **3)** Asimismo, ha hecho referencia que pudo identificar al sentenciado, puesto que su reacción normal era la de reprender al mal conductor, que le obstruía el camino, lo cual constituye una reacción normal de los conductores, conforme a las máximas de experiencia. **4)** Si bien hace referencia a que durante el juicio oral no se encontraba en posibilidad de dar lectura a su declaración preliminar, de acuerdo a su nivel de instrucción, esto no prueba que no sepa leer, más aún si conforme relata se dedica a las labores de chofer y al transporte público, lo que le permite identificar logos de vehículos que se dedican al mismo rubro, por lo que pudo perfectamente identificar el vehículo, **5)** Respecto a la carpeta fiscal 2680-2011, ofrecido como medio probatorio por la defensa del sentenciado, en el cual se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, dichas documentales, no guardan relación con los hechos materia del presente proceso, por lo que resultan irrelevantes para su defensa, **6)** Muy contrario, a lo aludido por la defensa del sentenciado, ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad del acusado, a quien se le intervino de manera sospechosa y conforme han manifestado los efectivos policiales G y R, en sus testimoniales brindadas en

juicio oral, de acuerdo a las características del lugar, estaba cambiando neumático, con las luces apagadas, más aún, si se cuenta con el testimonio de Luz Emerita Sánchez Quispe, quien sostiene que el acusado se dirigía en el vehículo a toda velocidad y que se detuvo con motivo del desperfecto que tuvo su neumático, todo lo cual evidencia su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Público; asimismo, sobre su versión de que se encontraba por el lugar realizando una carrera a dos señoras, esto no ha sido corroborado, puesto que si como refiere que le cancelaron ocho nuevos, no resulta creíble, si es que al momento del registro personal se le encontró billetes de cincuenta nuevos soles, careciendo de lógica que cuente sólo con ese dinero si trabaja desde horas de la mañana y que sólo haya contado con dinero que hubiese entregado como vuelto, más aún si la testigo Sánchez Quispe, también hace referencia a que se encontraba manejando sólo, 7) Finalmente, como hace referencia su defensa que no es el único vehículo con esas características, también es cierto que por el lugar donde fue intervenido, es una zona de poco tráfico vehicular, lo que no hace más que confirmar que su estadía por dicho lugar fue con motivo de su actuar delictivo.

SÉTIMO: De la conclusión de la sala

Siendo así, en criterio de la Sala, durante el juzgamiento sí se ha aportado suficiente material probatorio que acredita la participación del sentenciado apelante en los hechos materia de imputación, habiendo efectuado el A quo una correcta valoración de los medios de prueba aportado en el juicio oral; por lo que se ha quebrantado el principio de presunción de inocencia que alega, encontrándose en consecuencia, arreglada a ley, la sentencia de condena impuesta.

OCTAVO.- De las Costas

Conforme a lo dispuesto por el artículo 504, inciso 02, del código procesal penal, el apelante, por no haber sido estimada su impugnación, íntegramente está obligado al pago de las costas que el juicio de apelación hubiera causado a la parte agraviada en este proceso.

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque **RESUELVE : CONFIRMAR LA SENTENCIA** contenida en la resolución número seis, del nueve de mayo del año dos mil doce, emitida por el Juzgado Penal Colegiado de esta Corte, que condena al apelante como autor del delito contra el patrimonio, en su figura de ROBO AGRAVADO, en agravio de A; como a tal se le impone TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma que computada desde la fecha de su detención el dos de agosto del dos mil once, vencerá el uno de agosto de dos mil veinticuatro; fijaron en mil nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor

del agraviado, confirmándola en lo demás que contiene; **con costas**; devolver la carpeta de apelación al juzgado de origen.

Señores:

BALCAZAR ZELADA

NÚÑEZ JULCA

GARCÍA RUIZ.

ANEXO 2

Definición y operacionalización de la variable e indicadores (sentencia de primera instancia)

OBJETO DE ESTUDIO	VARIABLE	DIMENSIONES	SUB DIMENSIONES	PARÁMETROS (INDICADORES)
S E N T E N C I A	CALIDAD DE LA SENTENCIA En términos de judiciales, una sentencia de calidad es aquella que evidencia poseer un conjunto de características o indicadores establecidos en fuentes que desarrollan su contenido.	PARTE EXPOSITIVA	Introducción	<p>1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ la identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá?. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones, modificaciones o aclaraciones de nombres y otras: medidas provisionales adoptadas durante el proceso, cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
			Postura de las partes	<p>1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
		PARTE CONSIDERATIVA	Motivación de los hechos	<p>1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realiza el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos; se verificó los requisitos requeridos para su validez).Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la</p>

			<p><i>prueba, para saber su significado</i>). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple/No cumple</p>
		Motivación del derecho	<p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple/No cumple</p>
		Motivación de la pena	<p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículo 45 (Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia). (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple/No cumple</p>
			<p>1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones normativas,</p>

			<p>Motivación de la reparación civil</p> <p><i>jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</i></p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
		PARTE RESOLUTIVA	<p>Aplicación del Principio de correlación</p> <p>1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil (éste último, en los casos que se hubiera constituido como parte civil). Si cumple/No cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
			<p>Descripción de la decisión</p> <p>1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/No cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>

Definición y operacionalización de la variable e indicadores (Sentencia de segunda instancia)

OBJETO DE ESTUDIO	VARIABLE	DIMENSIONES	SUB DIMENSIONES	PARÁMETROS (INDICADORES)
SENTENCIA	CALIDAD DE LA SENTENCIA En términos de judiciales, una sentencia de calidad es aquella que evidencia poseer un conjunto de características o indicadores establecidos en fuentes que desarrollan su contenido.	PARTE EXPOSITIVA	Introducción	<ol style="list-style-type: none"> 1. El encabezamiento evidencia: <i>la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ la identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple/No cumple</i> 2. Evidencia el asunto: <i>¿Cuál es el problema sobre, lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple/No cumple</i> 3. Evidencia la individualización del acusado: <i>Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple</i> 4. Evidencia los aspectos del proceso: <i>el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple/No cumple</i> 5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</i>
			Postura de las partes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia el objeto de la impugnación: <i>El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No cumple</i> 2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado el impugnante). <i>Si cumple/No cumple.</i> 3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). <i>Si cumple/No cumple.</i> 4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de este último en los casos que se hubieran constituido en parte civil. <i>Si cumple/No cumple</i> 5. Evidencia claridad: <i>el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple.</i>
		Motivación de los hechos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. <i>(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple/No cumple</i> 2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. <i>(Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No cumple</i> 3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. <i>(El contenido evidencia completitud en la valoración, y no</i> 	

		PARTE CONSIDERATIV A	<p>valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p> <hr/> <p>Motivación del derecho</p> <p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario). (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple.</p> <hr/> <p>Motivación de la pena</p> <p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículo 45 (Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
--	--	-------------------------------------	--

		Motivación de la reparación civil	<p>1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>
	PARTE RESOLUTIVA	Aplicación del Principio de correlación	<p>1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple/No cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple</p> <p>3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/ o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple.</p>
		Descripción de la decisión	<p>1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/No cumple</p> <p>2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple</p>

ANEXO 3

Instrumento de recolección de datos Sentencia de primera instancia

1. PARTE EXPOSITIVA

1.1. Introducción

1. El **encabezamiento** evidencia: *la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/la identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad* **Si cumple**

2. Evidencia el **asunto**: *¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá.* **Si cumple**

3. Evidencia **la individualización del acusado**: *Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad / en algunos casos sobrenombre o apodo.* **Si cumple**

4. Evidencia **los aspectos del proceso**: *el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas provisionales adoptadas durante el proceso, cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros.* **Si cumple**

5. Evidencia **claridad**: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

1.2. Postura de las partes

1. Evidencia **descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación.** **Si cumple/No cumple**

2. Evidencia **la calificación jurídica del fiscal.** **Si cumple**

3. Evidencia **la formulación de, las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil.** *Este último, en los casos que se hayan constituido en parte civil.* **Si cumple**

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple*

2. PARTE CONSIDERATIVA

2.1. Motivación de los hechos

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. *(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple*

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. *(Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos para su validez). Si cumple*

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. *(El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de la pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). Si cumple*

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. *(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple*

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple*

2.2. Motivación del Derecho

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. *(Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple*

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad *(positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple*

3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. *(Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas)*). **Si cumple**

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. *(Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo)*. **Si cumple**

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

2.3. Motivación de la pena

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículos 45 *(Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen)* **y 46 del Código Penal** *(Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia)* . *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa)*. **Si cumple**

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido)*. **Si cumple**

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas)*. **Si cumple**

4. Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del acusado. *(Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado)*. **Si cumple**

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que*

el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple

2.4. Motivación de la reparación civil

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. *(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple*

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. *(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple*

3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. *(En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple*

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple*

3. PARTE RESOLUTIVA

3.1. Aplicación del principio de correlación

1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple

2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal/ y de la parte civil. Este último, en los casos que se hubieran constituido en parte civil). Si cumple

3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. *(El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple*

5. Evidencia **claridad**: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

3.2. Descripción de la decisión

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del (os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la (s) identidad (es) del(os) agraviado(s). Si cumple

5. Evidencia **claridad**: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

Instrumento de recolección de datos

Sentencia de segunda instancia

1. PARTE EXPOSITIVA

1.1. Introducción

1. El encabezamiento evidencia: *la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/la identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. Si cumple*

2. Evidencia el **asunto**: *¿Cuál es el problema sobre, lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple*

3. Evidencia **la individualización del acusado**: *Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad / en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple*

4. Evidencia **los aspectos del proceso**: *el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple*

5. Evidencia **claridad**: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple*

1.2. Postura de las partes

1. Evidencia **el objeto de la impugnación**: *El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple*

2. Evidencia **congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación**. (Precisa, en qué se ha basado el impugnante). **Si cumple**

3. Evidencia **la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s)**. **Si cumple**

4. Evidencia **la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria** (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de éste último en los casos que se hubieran constituido en parte civil. **Si cumple**

5. Evidencia **claridad**: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor*

decodifique las expresiones ofrecidas. **Si cumple**

2. PARTE CONSIDERATIVA

2.1. Motivación de los hechos

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. *(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es)).***Si cumple**

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. *(Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos para su validez).***Si cumple**

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. *(El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de la pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado).* **Si cumple**

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. *(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).***Si cumple**

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

3.1. Motivación del derecho

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. *(Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas).* **Si cumple**

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) *(Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas).* **Si cumple**

4. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. *(Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas).* **Si cumple**

5. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. *(Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo).* **Si cumple**

6. Evidencia **claridad:** *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

2.3 Motivación de la pena

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículos 45 *(Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen)* **y 46 del Código Penal** *(Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia).* *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa).* **Si cumple**

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido).* **Si cumple**

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. *(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas).* **Si cumple**

4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. *(Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado).* **Si cumple**

5. Evidencia **claridad:** *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

2.4. Motivación de la reparación civil

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. *(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas).* **Si cumple**

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. *(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas).* **Si cumple**

3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. *(En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención).* **Si cumple**

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. **Si cumple**

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

3. PARTE RESOLUTIVA

3.1. Aplicación del principio de correlación

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio *(Evidencia completitud).* **Si cumple**

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. *(No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa).* **Si cumple**

3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia *(Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa).* **Si cumple**

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. *(El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento -sentencia).* **Si cumple**

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* **Si cumple**

3.2. Descripción de la decisión

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple

5. Evidencia claridad: *el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.* Si cumple

ANEXO 4

Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de la variable

1. CUESTIONES PREVIAS

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se denomina objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.
2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.
3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la parte expositiva, considerativa y resolutive, respectivamente.
4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.

4.1. En relación a la sentencia de primera instancia:

- 4.1.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción y la postura de las partes.
- 4.1.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil.
- 4.1.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutive son 2: aplicación del principio de correlación y descripción de la decisión.

4.2. En relación a la sentencia de segunda instancia:

- 4.2.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: *introducción y postura de las partes.*
 - 4.2.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: *motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil.*
 - 4.2.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutive son 2: *aplicación del principio de correlación y descripción de la decisión.*
5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, los cuales se registran en el instrumento para recoger los datos que se llama lista de cotejo.
 6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 5 parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia los cuales se registran en la lista de cotejo.
 7. **De los niveles de calificación:** se ha previstos 5 niveles de calidad, los cuales son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta. Se aplica para determinar la calidad de las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio.

8. Calificación:

8.1. De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple

8.2. De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros cumplidos.

8.3. De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub dimensiones, que presenta.

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones

9. Recomendaciones:

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalización de la Variable que se identifica como Anexo 1.

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente.

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa de la tesis.

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de los datos.

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación.

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia.

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente:

Cuadro 1

Calificación aplicable a los parámetros

Texto respectivo de la sentencia	Lista de parámetros	Calificación
		Si cumple (cuando en el texto se cumple)
		No cumple (cuando en el texto no se cumple)

Fundamentos:

- ⤴ El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión : Si cumple
- ⤴ La ausencia de un parámetro se califica con la expresión : No cumple

3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA SUB DIMENSIÓN

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia)

Cuadro 2

Calificación aplicable a cada sub dimensión

Cumplimiento de los parámetros en una sub dimensión	Valor (referencial)	Calificación de calidad
Si se cumple 5 de los 5 parámetros previstos	5	Muy alta
Si se cumple 4 de los 5 parámetros previstos	4	Alta
Si se cumple 3 de los 5 parámetros previstos	3	Mediana
Si se cumple 2 de los 5 parámetros previstos	2	Baja
Si sólo se cumple 1 parámetro previsto o ninguno	1	Muy baja

Fundamentos:

- ⤴ Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del presente documento.
- ⤴ Consiste en agrupar los parámetros cumplidos.
- ⤴ La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros cumplidos.
- ⤴ *Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, se califica con el nivel de: muy baja.*

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS

Dimensión	Sub dimensiones	Calificación					Rangos de calificación de la dimensión	Calificación de la calidad de la dimensión	
		De las sub dimensiones							De la dimensión
		Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta			
		1	2	3	4	5			
Nombre de la dimensión: ...	Nombre de la sub dimensión		X				7	[9 - 10]	Muy Alta
								[7 - 8]	Alta
	Nombre de la sub dimensión					X		[5 - 6]	Mediana
								[3 - 4]	Baja
								[1 - 2]	Muy baja

DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA.

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia).

Cuadro 3

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutive

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión, ... es alta, se deriva de la calidad de las dos sub dimensiones, y, que son baja y muy alta, respectivamente.

Fundamentos:

- ♣ De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutive, cada una, presenta dos sub dimensiones.
- ♣ Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 sub dimensiones es 10.
- ♣ Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte resolutive, es 10.
- ♣ Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2.
- ♣ El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad
- ♣ Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3.

- ♣ La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

[9 - 10] = Los valores pueden ser 9 o 10 = Muy alta

[7 - 8] = Los valores pueden ser 7 u 8 = Alta

[5 - 6] = Los valores pueden ser 5 o 6 = Mediana

[3 - 4] = Los valores pueden ser 3 o 4 = Baja

[1 - 2] = Los valores pueden ser 1 o 2 = Muy baja

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3.

5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA

Se realiza por etapas.

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte considerativa

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia).

Cuadro 4

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa

Cumplimiento de criterios de evaluación	Ponderación	Valor numérico (referencial)	Calificación de calidad
Si se cumple 5 de los 5 parámetros previstos	2x 5	10	Muy alta
Si se cumple 4 de los 5 parámetros previstos	2x 4	8	Alta
Si se cumple 3 de los 5 parámetros previstos	2x 3	6	Mediana
Si se cumple 2 de los 5 parámetros previstos	2x2	4	Baja

Si sólo se cumple 1 parámetro previsto o ninguno	2x 1	2	Muy baja
--	------	---	----------

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los parámetros está duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite hallar los valores que orientan el nivel de calidad.

Fundamentos:

- ✦ Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no.
- ✦ El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para determinar la calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. En éste último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican.
- ✦ *La calidad de la parte expositiva y resolutive emerge de la calidad de sus respectivas sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los parámetros cumplidos conforme al Cuadro 2.*
- ✦ *La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble.*
- ✦ Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; sino: 2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa.
- ✦ Fundamentos que sustentan la doble ponderación:
 - 1) Entre la parte expositiva, considerativa y la resolutive; la parte considerativa es la más compleja en su elaboración,
 - 2) En la parte considerativa, se realiza el análisis de las pretensiones planteadas en el proceso, se examina los hechos, las pruebas y la selección de las normas y principios aplicables al asunto,

Parte considerativa	Nombre de la sub dimensión				X		32	[17 - 24]	Mediana
	Nombre de la sub dimensión				X			[9 - 16]	Baja
	Nombre de la sub dimensión					X		[1 - 8]	Muy baja

Ejemplo: 32, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las 4 sub dimensiones que son de calidad mediana, alta, alta y muy alta, respectivamente.

Fundamentos:

- ⤴ De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte considerativa presenta 4 sub dimensiones que son motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil.
- ⤴ De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de una dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo componen.
- ⤴ Por esta razón si una dimensión tiene 4 sub dimensiones, cuyo valor máximo de cada uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 40.
- ⤴ El número 40, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en dividir 40 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 8.
- ⤴ El número 8 indica, que en cada nivel de calidad hay 8 valores.
- ⤴ Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad.

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 5.

- ▲ La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

- [33 - 40] = Los valores pueden ser 33,34,35,36,37, 38, 39 o 40 = Muy alta
[25 - 32] = Los valores pueden ser 25,26,27,28,29,30,31 o 32 = Alta
[17 - 24] = Los valores pueden ser 17,18,19,20,21,22,23 o 24 = Mediana
[9 - 16] = Los valores pueden ser 9,10,11,12,13,14,15, o 16 = Baja
[1 - 8] = Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 = Muy baja

5.2. Tercera etapa: con respecto a la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 5.

Fundamento:

- La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo número de sub dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, entonces el procedimiento a seguir es el mismo.
- La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1.

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIAS

Se realiza por etapas

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia

Cuadro 6

Calificación aplicable a la sentencia de primera y de segunda instancia

Variable	Dimensión	Sub dimensiones	Calificación de las sub dimensiones					Calificación de las dimensiones	Determinación de la variable: calidad de la sentencia						
			Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta		Muy baja	Baja	Mediana	Alta	Muy alta		
			1	2	3	4	5		[1 - 12]	[13-24]	[25-36]	[37-48]	[49-60]		
Calidad de la sentencia...	Parte expositiva	Introducción			X			7	[9 - 10]	Muy alta					
		Postura de las partes							[7 - 8]	Alta					
									[5 - 6]	Mediana					
						X			[3 - 4]	Baja					
									[1 - 2]	Muy baja					
	Parte considerativa	Motivación de los hechos		2	4	6	8	10	34	[33-40]	Muy alta				
							X			[25-32]	Alta				
		Motivación del derecho			X					[17-24]	Mediana				
		Motivación de la pena						X		[9-16]	Baja				
		Motivación de la reparación								[1-8]	Muy				

	civil					X			baja					
Parte resolutiva	Aplicación del principio de correlación	1	2	3	4	5	9	[9 - 10]	Muy alta					
					X			[7 - 8]	Alta					
								[5 - 6]	Med iana					
	Descripción de la decisión					X		[3 - 4]	Baja					
								[1 - 2]	Muy baja					

Ejemplo: 50, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de rango: alta, muy alta y muy alta, respectivamente.

Fundamentos:

- ✦ De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se determina en función a la calidad de sus partes
- ✦ Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos los procedimientos especificados, de la forma siguiente:

- 1) Recoger los datos de los parámetros.
- 2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y
- 3) Determinar la calidad de las dimensiones.
- 4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. Se realiza al concluir el trabajo de investigación.

Determinación de los niveles de calidad.

- 1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 40 y 10, respectivamente, (Cuadro 3 y 5), el resultado es: 60.
- 2) Para determinar los niveles de calidad se divide 60 (valor máximo) entre 5 (número de niveles) el resultado es: 12.
- 3) El número 12, indica que en cada nivel habrá 12 valores.
- 4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6.

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

[49 - 60] = Los valores pueden ser 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 o 60 = Muy alta

[37 - 48] = Los valores pueden ser 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 o 48 = Alta

[25 - 36] = Los valores pueden ser 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 o 36 = Mediana

[13 - 24] = Los valores pueden ser 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 o 24 = Baja

[1 - 12] = Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 o 12 = Muy baja

6.2. Segunda etapa: con respecto a las sentencia de segunda instancia

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 6.

Fundamento:

- La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub dimensiones que la sentencia de segunda instancia
- La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO

El contenido y suscripción del presente documento denominado: *Declaración de compromiso ético*, evidencia que el presente trabajo se elaboró respetando las normas establecidas en el Reglamento de Investigación versión 8 de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; que contemplan la exigencia de la veracidad de todo trabajo de investigación, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Se trata de una investigación de carácter individual que se deriva de una Línea de Investigación, denominado: “*Análisis de sentencias de procesos culminados en los distritos judiciales del Perú, en función de la mejora continua de la calidad de las decisiones judiciales*”; por lo tanto, cualquier aproximación con otros trabajos, serán necesariamente con aquellas que se desprenden de la misma línea de investigación, no obstante ello, es un trabajo inédito, personalizado, desde la perspectiva de su propio autor donde el objeto de estudio fueron las sentencias expedidas en el expediente judicial N° 3110–2011–48–1706–JR–PE–01, sobre robo agravado.

Asimismo; el acceso y la revisión del proceso judicial permitió conocer los hechos judicializados y la identidad de los operadores de justicia, personal jurisdiccional, partes del proceso, testigos, peritos, etc. , sobre dichos aspectos mi compromiso ético es: no difundir por ningún medio, ni expresarme en términos agraviantes ni difamatorios; sino, netamente académicos, en virtud del no se revelan datos personales.

En síntesis, el trabajo se elaboró bajo los principios de la buena fe, principio de veracidad, de reserva y respeto a la dignidad humana, lo que declaro y suscribo, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad.

Chiclayo, Diciembre del 2016.

ODILO PERALTA FLORES